



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES**



# **La movilización indígena-popular en Bolivia en la defensa y recuperación de sus recursos naturales**

TESIS QUE PRESENTA

**JOSÉ LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ**

PARA OPTAR POR EL GRADO DE  
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

ASESOR  
**DR. GIAN CARLO DELGADO RAMOS**

CIUDAD UNIVERSITARIA, 2014



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

*A la Universidad Nacional Autónoma de México*

*A El Colegio de México*

# Índice

<b>Introducción</b>	<b>1</b>
<b>1. Globalización neoliberal y los imaginarios sociales rebeldes</b>	<b>17</b>
1.1. La experiencia neoliberal	28
1.1.1. El rol de la privatización	35
1.1.2. Un balance	40
1.2. Resistencia a las reformas económicas neoliberales	43
<b>2. Bolivia: El preludeo a la conflagración</b>	<b>51</b>
2.1. La Revolución Nacional de 1952	54
2.2. La transición de la dictadura nacionalista a la democracia neoliberal	57
2.3. Panorama del régimen democrático y la reforma neoliberal	60
2.3.1. El gobierno de la Unidad Democrática Popular (1982-1985)	63
2.3.2. Paz Estenssoro (1985-1989) – Paz Zamora (1989-1993)	65
2.3.3. Sánchez de Lozada (1993-1997) – Bánzer/Quiroga (1997-2002)	70
2.3.4. Sánchez de Lozada (2002-2003) – Mesa Gisbert (2003-2005)	76
2.4. De movimientos obreros, campesinos e indígenas: una respuesta orquestrada desde abajo	79
2.4.1. Movimiento obrero	82
2.4.2. Movimiento campesino-indígena	89
<b>3. Praxis liberatoria y emancipatoria: la Guerra del Agua</b>	<b>101</b>
3.1. Identidad y usos y costumbres.	102
3.2. “Las transnacionales del agua”	107
3.3. El problema del agua en Cochabamba	110
3.3.1. “Contradicción campo-ciudad”	111
3.3.2. Privatización del agua	115
3.4. Acción social	120

3.4.1. Actores involucrados en el conflicto	125
3.4.2. Aguas del Tunari/Bechtel	126
3.4.3. Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida	129
3.4.3.1. Federación Departamental Cochabambina de Regantes	132
3.4.3.2. Federación de Trabajadores Fabriles	136
3.4.3.3. Comité de Defensa del Agua y Foro Cochabambino del Medio Ambiente	137
3.5. Otras movilizaciones	138
3.5.1. Los bloqueos aymaras	138
3.5.2. Cocaleros del Chapare	142
3.6. Consecuencias internacionales	143
3.7. Logros, retos, contradicciones y limitaciones posteriores a la Guerra del Agua	145
<b>4. Política insurgente: la Guerra del Gas</b>	<b>153</b>
4.1. Reservas de gas: Bolivia en el contexto latinoamericano	155
4.1.1. Proyecto <i>Pacific LNG</i>	158
4.2. Gestación de un movimiento social	159
4.3. La Ley de Hidrocarburos y la lucha partidaria legal en el Parlamento	165
4.4. Un epicentro neurálgico: El Alto	167
4.4.1. Juntas vecinales: una peculiar organización barrial	169
4.4.2. Tres exigencias: “gas, constituyente, renuncia”	174
4.5. Gobierno de Carlos Mesa y la “Agenda de octubre”: “encapsulamiento estatal”	180
4.5.1. La ciudad de El Alto vs. Aguas del Illimani	187
4.5.2. La oligarquía cruceña y su demanda autonomista	188
4.5.3. Mayo-junio de 2005: nacionalización y renuncia	192
4.5.4. Después de Carlos Mesa... ¿qué?	198
4.6. Balance crítico: reflexiones en torno al gobierno de Evo Morales	200
<b>A manera de conclusión</b>	<b>209</b>

<b>Anexos</b>	<b>223</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>267</b>
<b>Fuentes electrónicas</b>	<b>278</b>

## Introducción

Desde finales del siglo XX, el mundo ha venido experimentado una reorganización social, es decir, se ha venido profundizando con mucho mayor fuerza que antes la acumulación de capital y por tanto de explotación del trabajo y la naturaleza, sobre todo por parte de los países centrales y empresas transnacionales incrementando la deslocalización de la producción y aumentando el consumo de recursos, productos y servicios. Dicho fenómeno se ha extendido y proyectado especialmente a través de políticas neoliberales (aunque en cierta medida también por proyectos nacionalistas de capitalismo de Estado).

La profundización del modelo neoliberal, aplicado por primera vez en el mundo en los años de 1970, en Chile e Inglaterra, pero que, actualmente en el siglo XXI, se aplica con mayor intensidad y profundidad a pesar de mostrar claros límites, principalmente en los países subdesarrollados y dependientes. Esto no quiere decir que no existan secuelas en los países denominados desarrollados.

El trastrocamiento de identidades, resultado de las dinámicas de individualización, yuxtapuesto a la profundización del modelo neoliberal generó el surgimiento, o resurgimiento, de nuevas identidades, muchas de ellas articuladas en los llamados movimientos sociales. En América Latina se ha dado la reemergencia, después de más de 500 años de sojuzgamiento y explotación, de los movimientos indígenas y populares. Movimientos que están abanderando una diversidad diferente de desarrollo, con una reapropiación de sus recursos naturales, de su dinámica social, cultural, política y económica.

De esta forma, el analizar cómo es que se ha dado esta emergencia y equilibrada, violenta o inestable convivencia de los movimientos con el Estado, en algunos países latinoamericanos del Sur, resulta indispensable para un análisis como el que se pretende realizar: el análisis de las movilizaciones indígenas-populares en Bolivia, en la defensa y recuperación de sus recursos naturales. Situaciones únicas, pero implícitamente diversas, y originales, cada una de ellas con objetivos y formas de accionar totalmente diferentes, pero que tienen en mente diversas maneras de entender el desarrollo, no como algo lineal, sino como un proceso en continuo cambio y transformación.

Bolivia es un caso paradigmático en la conformación de espacios alternativos. El nuevo Estado Plurinacional de Bolivia representa un nuevo reto para las ciencias sociales, principalmente, para las Relaciones Internacionales. Es de hacer notar que la emergencia de nuevos sujetos de la sociedad internacional, como son los movimientos indígenas y populares, específicamente en Bolivia, no es considerada por las teorías dominantes en la disciplina, en este caso el realismo y las posteriores teorías marcadas por este enfoque.

Los enfoques y teorías marcados por la perspectiva realista para estudiar hechos o procesos internacionales son reflexiones a partir del poder mundial y no del análisis de la participación de todos y por todos, que debería de ser la esencia de las Relaciones Internacionales. Dentro de estos análisis, se da una justificación, un entendimiento y una explicación del poder mundial, es decir, una concepción de la dominación a partir del poder, del poder del Estado.

Queda claro, a luz de los hechos, que los enfoques para entender la dinámica internacional fueron rebasados por las nuevas experiencias que se están presentando en el mundo. Cuando miramos los procesos mundiales y las transformaciones que éstos generan en las dinámicas internacionales, nos damos cuenta de que necesitamos un pensamiento alternativo sobre alternativas<sup>1</sup>, porque nuestros lentes y concepciones no son capaces de captar toda la riqueza de las experiencias emancipadoras que ocurren en el mundo, para objeto esta investigación en América Latina y, específicamente, en Bolivia.

Resulta un reto el poder encontrar el aparato teórico-metodológico que ayude a explicar esta nueva realidad internacional, que va más allá de las simples relaciones entre los Estados-nación. Y que representan una nueva y alternativa forma de desarrollo, diferente a las pugnadas por países desarrollados, posteriores a la época de post-guerra. Por tal motivo es preciso para las Relaciones Internacionales analizar desde una perspectiva interdisciplinaria y multidisciplinaria, los cambios sociales, políticos y culturales que han ayudado a enriquecer sociedades otras que dan forma y sustancia a lo internacional.

Desde esta perspectiva, la problemática se transforma; no se trata ya de los tradicionales estudios internacionales, en donde los componentes estatal y económico con sus correspondientes instituciones y normas sigan siendo lo determinante, sino de estudios en

---

<sup>1</sup> Boaventura de Sousa Santos, “La reinención del Estado y el Estado Plurinacional”, en *Pensar el Estado y la sociedad: desafíos actuales*, Buenos Aires, Waldhuter Editores, CLACSO, 2009, p. 196.



donde lo diverso y multifacético socio-cultural y humano, asentados en los planos trazados por la Naturaleza y la historia estén debidamente integrados en la concepción del todo.<sup>2</sup>

Las viejas y al mismo tiempo nuevas sociedades, como entidades creadoras de cultura y civilización, durante mucho tiempo marginadas de la vida y de las preocupaciones del estudio de las Relaciones Internacionales, reaccionan y vuelven por sus fueros reclamándose primarios, activos y prioritarios de tales relaciones.<sup>3</sup> La experiencia social en todo el mundo es mucho más amplia y variada de lo que la tradición científica o filosófica occidental conoce y considera importante.<sup>4</sup>

Para Boaventura de Sousa Santos, combatir este desperdicio de la experiencia social, para hacer visibles las iniciativas y movimientos alternativos y para darles credibilidad, de poco sirve recurrir a la ciencia social tal y como la conocemos<sup>5</sup>, en este caso a los enfoques y teorías tradicionales de la disciplina de las Relaciones Internacionales. A fin de cuentas, estas teorías son responsables por esconder o desacreditar las alternativas. La movilización indígena y popular en Bolivia es parte de esta experiencia social, por tal motivo, es necesario hacerla visible.

De esta forma, la hipótesis sobre la que basamos esta investigación radica en el entendimiento de que las reivindicaciones indígenas y culturales, la reconceptualización, resignificación y reapropiación del espacio y/o territorio, pero sobre todo, la demanda de la reducción de la pobreza, el hartazgo que se tiene sobre el despojo y saqueo de la riqueza natural y económica, son los ejes articuladores en la movilización indígena-popular en Bolivia, en la búsqueda, diseño y construcción de espacios alternativos al modelo neoliberal y democracia occidental que, además, no sólo tienen incidencia a nivel local-nacional, sino incluso en el contexto de acuerdos de cooperación regional alternativos (dígase el ALBA-TCP<sup>6</sup>) y relativamente en los espacios de diálogo y toma de decisiones internacionales.

---

<sup>2</sup> Graciela Arroyo Pichardo, “La diversidad cultural: viejo/nuevo paradigma para el estudio de las relaciones internacionales”, en Cid Capetillo, Ileana, *Diversidad cultural, económica y política en el mundo global*, México, FCPyS-UNAM, 2001, p. 26.

<sup>3</sup> *Ídem*.

<sup>4</sup> Boaventura de Sousa Santos, *Una epistemología del Sur*, México, Siglo XXI Editores, CLACSO, 2009, p. 99.

<sup>5</sup> *Ídem*.

<sup>6</sup> La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) es una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación. Para mayor información puede revisarse el sitio web oficial de dicha organización: <http://www.alba-tcp.org/>.

\* \* \*

A partir de este esclarecimiento, quisiera subrayar el contexto regional en el que se ubican las diversas luchas bolivianas, específicamente, las que se dieron a partir del año 2000 al 2005, en defensa y recuperación de sus recursos naturales. Según apuntan Lucio Oliver y Francesca Savoia, la región latinoamericana se caracterizó al finalizar el siglo XX por combinar la resistencia activa de masas y una cierta recuperación económica, con el surgimiento de fuerzas políticas innovadoras que establecieron una conexión inédita con los movimientos sociales y con una agenda crítica anti-neoliberal de diversos matices.<sup>7</sup>

Un escenario latinoamericano inaugurado desde 1989 con el llamado “caracazo”, que fue una explosión de rechazo a las políticas neoliberales; donde las luchas del *Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* (MST) cumplían casi una década, una ruptura del silencio en 1992 donde se anunciaba que se cumplían 500 años de resistencia indígena, negra y popular; el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994, serían tan sólo el preludio a una década trascendente de recuperación sociopolítica de la iniciativa autónoma de los pueblos, comunidades y sociedad civil. Una década que enarboló la resistencia de las grandes mayorías al neoliberalismo de Estado impuesto por las fuerzas conservadoras transnacionales dos décadas atrás.<sup>8</sup>

Acontecimientos como fueron los levantamientos indígenas-populares en Bolivia, la “Guerra del Agua” en Cochabamba, y la “Guerra del Gas”, en 2000 y 2003, respectivamente, y las luchas del movimiento cocalero en el Chapare boliviano; las insurrecciones indígenas y populares en Ecuador, impulsadas por la CONAIE; las movilizaciones en defensa de sus derechos en Perú y Chile; la rebelión argentina en diciembre del 2001; las movilizaciones campesinas en Paraguay y su rol en la caída del presidente Cubas Grau; los levantamientos populares en Atenco y Oaxaca, la resistencia del Pueblo Mapuche, son claros ejemplos de la resistencia indígena y popular, subalterna y marginada que se desplegó durante la primera década del siglo XXI.

---

<sup>7</sup> Cfr., Lucio Oliver, Francesca Savoia, “El 2010 en América Latina. La compleja y difícil lucha por una nueva hegemonía”, [en línea], *OSAL*, Año XII, No. 29, Buenos Aires, mayo de 2011. Dirección URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal29/osal29.pdf>, [consulta: 09 de enero de 2013].

<sup>8</sup> *Ídem*.

El hecho es que durante la década de 1990 y principios del siglo XXI, emergieron nuevos actores políticos, pues el movimiento obrero había sido desmantelado, desarticulado, durante la década de 1980 con la implementación de las políticas neoliberales. Un nuevo actor pero con propuestas ancestrales que respondían a problemas globales: los movimientos indígenas.<sup>9</sup> A ellos debemos las alternativas que reafirman la importancia de la reciprocidad con la naturaleza para la vida y la subsistencia global, que hoy se expresan en el Bien Vivir<sup>10</sup> (particularmente en la región andina). La mayoría de estas alternativas se contraponen al modelo capitalista del consumismo y a la extracción ilimitada de los recursos de la naturaleza cuyas secuelas más grandes se expresan en la profunda crisis ambiental y climática.<sup>11</sup>

Sin embargo, dentro estos movimientos indígenas, trastocados por las dinámicas capitalistas, se pueden observar cambios importantes en el modo en que muchas comunidades se relacionan con su medio, que, como bien expone Rodríguez Saldaña, “...han sido cambios más de forma que de fondo, manteniendo principios de trabajo que les ha asegurado la continuidad de la comunidad y su identidad”.<sup>12</sup> Un bagaje sindical (formas de organización y protesta) es uno de los principales elementos que modificaron de forma saludable a los sectores indígenas, particularmente en Bolivia.

No obstante, condiciones inducidas políticamente y condiciones políticas asociadas a las políticas de ajuste neoliberal tuvieron como resultado que se adoptaran, por parte de la enorme mayoría de la población económicamente activa, diferentes formas hasta ser sustancialmente reestructurada en muchos países. El hecho es que, más allá de esta reestructuración, las políticas neoliberales generaron, y siguen generando, desigualdades entre los diferentes grupos y clases sociales, lo que ha empujado la unificación de sectores

---

<sup>9</sup> Guillermo Bonfil Batalla argumenta que, la presencia de los pueblos indígenas “no obedece sólo a la escisión indispensable de las sociedades coloniales, ni a la dominación a la que han estado sujetos durante casi cinco siglos; es el resultado en mayor medida aún, de su voluntad de resistencia y sobrevivencia para seguir siendo ellos mismos: sistemas sociales permanentes, creadores de cultura y forjadores de su propia historia.” Véase, Guillermo Bonfil Batalla, *Pensar nuestra cultura*, México, Alianza Editorial, 1991, p. 27.

<sup>10</sup> Algunos académicos lo han conceptualizado como Buen Vivir. Entre ellos Alberto Acosta y Eduardo Gudynas.

<sup>11</sup> Véase, Luis Vittor, “La inspiración latinoamericana: El movimiento indígena y sus alternativas”, [en línea], *América Latina en movimiento*, No. 450-451, Quito, Ecuador, diciembre de 2009. Dirección URL: <http://alainet.org/publica/alai450-1w.pdf>, [consulta: 09 de enero de 2013].

<sup>12</sup> Roberto Rodríguez Saldaña, “Los pueblos indígenas y el uso de sus recursos naturales”, en *Los Derechos de la Naturaleza (Un mundo sin insectos)*, México, Universidad Autónoma de Guerrero, Editora Laguna, H. Congreso del Estado de Guerrero-LIX Legislatura, 2012, p. 257.

subalternos de la sociedad para demandar la reducción de la pobreza y expresar su hartazgo que se tiene sobre el despojo y saqueo de las riquezas naturales y la explotación del trabajo.

Todos estos cambios y situaciones convulsas se despliegan, asimismo, en diversos fenómenos consecuencia de la debilitada integración social. Esto es, se disolvieron los lazos societales y la trama de solidaridades preexistentes trayendo como resultado una sociedad en donde las tradicionales estructuras de “representación colectiva” de los “intereses populares” se encuentran en crisis, es decir, partidos políticos y sindicatos corporativizados. Estas estructuras percibieron cómo su eficacia reivindicativa y su credibilidad social fueron erosionadas por las tendencias desquiciantes del capitalismo neoliberal y por el agotamiento de su credibilidad, destruyendo precisamente las arenas en las cuales tanto unos como otros desarrollan sus iniciativas.<sup>13</sup>

Si uno observa las realidades nacionales a lo largo de toda América Latina durante la implementación de estas políticas de ajuste estructural, nos podemos percatar que las demandas generadas en y de la sociedad, habida cuenta de las injusticias y privaciones provocadas, no sólo por las políticas de ajuste y la recomposición global, sino también por las crisis capitalistas anteriores y por los procesos de conquista y colonización, están originando “un verdadero aluvión de reivindicaciones que el mercado ni desea –ni puede, aunque lo quiera- resolver.”<sup>14</sup> Dichas demandas y/o reivindicaciones por parte de la sociedad ante el Estado, son contenedoras de una inmensa creatividad y originalidad en cuanto a sus formas de manifestación y expresión.

Es de subrayar que la protesta social encuentra en la etapa “democrática” de los Estados latinoamericanos, poniendo énfasis en el caso particular de Bolivia, un clima “tolerante” y “comprensivo” que facilita su reproducción, contrario a lo experimentado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, la misma crisis y el modelo de ajuste neoliberal reducen notoriamente las capacidades estatales para producir las políticas necesarias para contrarrestar o compensar los efectos desintegradores de la crisis.<sup>15</sup> Es por ello que muchos movimientos sociales, particularmente indígenas, pero también urbanos populares y campesinos, encontrarán en las autonomías *de facto* una solución a su situación

---

<sup>13</sup> Atilio Borón, “La sociedad civil después del diluvio neoliberal”, en Sader, Emir; Gentili, Pablo, (comp.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*, Argentina, Eudeba/Editorial Universidad de Buenos Aires, 1999, p. 83.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 86.

<sup>15</sup> *Ídem*.

actual (México); algunos otros buscarán una transformación radical del Estado-nación con la cual poder satisfacer todas sus demandas (Ecuador y Bolivia).

En resumen, la emergencia de la protesta de los movimientos sociales de oposición y resistencia se relacionan con y surgen de los costos económicos del ajuste estructural, pero también es cierto que las reivindicaciones culturales, que son históricas, son un factor clave debido a que las políticas neoliberales no sólo pauperizaron a las sociedades latinoamericanas (poniendo énfasis en el caso boliviano y ecuatoriano), sino que la dinámica de individualización afectó por mucho las identidades colectivas y comunitarias, usos y costumbres de los pueblos, y no sólo en América Latina.

Diversos movimientos desarrollarán una política de revolución social donde se pretendía, y pretende, incluir a todos los sectores de la población. Proyectos no carentes de limitaciones y contradicciones, situación que provoca que diversos movimientos lleven a cabo sus programas de acción a un nivel mucho más reducido, siendo su propia comunidad en algunos casos. Empero, habrá otros movimientos que logren un cambio, si no estructural, en estricto sentido, sí de mayor redistribución de la riqueza, de implementación de políticas tendientes a favorecer al ancho de la sociedad, así como de construcción de una agenda que represente una posibilidad para reconstruir los horizontes emancipatorios.

Es un hecho, lo difícil que resulta, aunque no imposible, poder llevar a cabo cambios en la estructura política, social y económica de cada una de las naciones, lo cual representa para la sociedad, al igual que para los movimientos sociales, crear e imaginar nuevos proyectos que cambien dicha realidad. Al revisar los procesos latinoamericanos, nos damos cuenta que existen diversas experiencias comunitarias que están explorando vías y en un grado u otro cambian su situación.

Por tal motivo, nuestra investigación trata de hacer visibles las experiencias en Bolivia de defensa de identidades indígenas y populares y, hasta cierto punto, nacionales<sup>16</sup> frente al exterior, de la recuperación de sus recursos naturales trayendo consigo la modificación de su estructura estatal con sus respectivas limitaciones y contradicciones,

---

<sup>16</sup> Según René Zavaleta, en su texto titulado “La formación de las clases nacionales”, los indígenas y campesinos en Bolivia representan la nación, son el elemento más diferenciado y original del país, que en última instancia lo define, constituyendo un grupo resistente y persistente, siendo los puntos culturales de referencia que nos permiten hablar de un modo de ser de la nación. Son las clases nacionales que se radicalizan y, defendiéndose, crecen. Véase, Zavaleta, René, “La formación de las clases nacionales”, en *La autodeterminación de las masas*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, CLACSO, 2009, pp. 35-47.

dentro de la dinámica del capital. De esta forma, el trabajo se divide en cuatro capítulos, los cuales se interrelacionan unos con otros, tratando de contextualizar y analizar las movilizaciones indígenas y populares que luchan por un cambio, que atacan el *status quo* del Estado, no solo en demanda de la supresión del modelo de desarrollo neoliberal, sino tratando de modificar las estructuras coloniales, discriminatorias y excluyentes que sustentan al Estado-nación boliviano, enmarcándolas dentro del ámbito local, nacional, regional e internacional.

En el primer capítulo abordamos el proceso de globalización neoliberal, que es entendido la mayoría de las veces como la clave de una nueva prosperidad planetaria, situación que se contrasta con tan sólo revisar la economía mundial de mercado, que se encuentra llena de contradicciones y violencias, en el que se constata un crecimiento del desempleo y número de excluidos o marginados de las sociedades. Así, se aborda de manera sucinta el concepto mismo de “globalización”, de igual forma el proceso de neoliberalización a nivel mundial y, específicamente, en América Latina. Para el primer caso, tratamos de enfocar el fenómeno de globalización a través de una perspectiva que no implica sólo proceder con una crítica epistemológica, sino también modificar, de manera sustancial, los referentes empíricos a los que apunta el concepto, ampliándolos de la esfera estrictamente económica; permitiéndonos enfocar el análisis en aspectos políticos e históricos fundamentales. En el segundo caso, la experiencia neoliberal, respondemos a dos preguntas clave: ¿qué es y cuándo surgió el neoliberalismo? A partir de una revisión sumaria, llegamos a la conclusión de que el neoliberalismo debe ser entendido como la respuesta más profunda y coherente, desde el interior del sistema, para sostener su continuidad, a la crisis en que acabó desembocando su trayectoria y su aspiración capitalista.

Dentro de este mismo capítulo, abordamos de manera más específica el rol que juegan las políticas de privatización, las cuales no sólo ejercen un impacto sobre la economía, sino también sobre la totalidad de la sociedad, sobre el sistema político, la estructura de clase, el mercado doméstico y los sistemas de comunicación; en suma, la democracia, la movilidad social y el desarrollo económico. Finalmente, realizamos un balance de la aplicación de este modelo neoliberal, donde la profundización de la pobreza y la miseria son una de sus principales manifestaciones. A partir de este balance, se

comprende mejor la emergencia de una resistencia a las políticas neoliberales, que en América Latina, se ha definido como una lucha en defensa de la nación, de sus recursos naturales, de su economía, de su soberanía política y como reconstitución del pacto social.

Por su parte, en el segundo capítulo, realizamos un análisis sobre la situación política, económica y social de la historia boliviana a partir de la Revolución Nacional de 1952 hasta el gobierno de Carlos Mesa (2003-2005). Dentro de esta revisión observamos que a pesar de los objetivos enarbolados por la revolución (reforma agraria, voto universal, nacionalización de las minas, entre otros), no se pudieron superar los principales problemas presentes en la sociedad: pobreza, marginación, discriminación y explotación, entre otros. Durante el periodo 1964-1982 se instalaron regímenes militares en Bolivia, los cuales siempre mantuvieron el tipo de Estado nacionalista y el tipo de capitalismo resultante de la Revolución, aunque no sus objetivos sociales iniciales ni su democracia universalizada. Para el final del período de las dictaduras o gobiernos militares en Bolivia se desarrolló una convulsión social extrema y un continuo cambio de gobiernos civiles y militares.

En el estudio del panorama del régimen democrático (1982-2005), entendemos a la democracia boliviana como la instauración de un régimen consecuencia de un proceso de construcción política de acumulación histórica. Por tal motivo, desde el momento de la instauración de la democracia representativa en Bolivia, en 1982 hasta principios del siglo XXI establecemos rasgos de los períodos que conforman dicho proceso. Con ello, no se pretendió dividir el proceso democrático en fases totalmente definidas, sino identificar las principales características de todos y cada uno de los periodos presidenciales. Así, un primer momento abarca desde 1982 a 1985, mientras que un segundo de 1985 al 2005.

Con la reforma neoliberal de la economía boliviana y la transformación de su sistema político autoritario a democrático, la oligarquía nacional creyó, fervientemente, que se estaba impulsando una verdadera modernización económica, política y social. Se pretendía sacar al país de la inopia económica en que se encontraba. No obstante, se empezaron a repetir y ahondar conocidas contradicciones sociales históricas. Los cambios del Estado y la sociedad bolivianos actuaron en dos lógicas distintas, como sucedió en muchos casos latinoamericanos. En tanto que, las reformas dirigidas al Estado se enmarcan en proyectos o modelos diseñados con anticipación y legitimados mediante decisiones del

poder político, la sociedad boliviana se transformó en un plano de notoria autonomía frente a éste y en función de sus propias contradicciones y diferencias.

A partir de este proceso de modernización se crearon diversas contradicciones en el abigarramiento étnico, popular y social. En el ámbito de la sociedad, surgieron movimientos políticos y sociales en defensa de sus recursos naturales, de identidades colectivas e individuales, ancestrales y contemporáneas, de sus hábitos y formas de organización cotidianas, de sus espacios territoriales.

Posteriormente, revisamos sumariamente el desarrollo y conformación, así como la desestructuración, del movimiento obrero boliviano. Un actor que proyectaba y articulaba las fuerzas populares en el país al grado de ser la base social y política de las reformas creadas por la misma Revolución de 1952, y por tanto, el principal articulador de la sociedad civil. Es interesante observar como el movimiento obrero creó una cultura reivindicativa centrada en el salario, los beneficios sociales, la alimentación, la protección familiar, la salud y vivienda, el cuidado familiar, es decir, se enfocó en la conquista de derechos sociales y labores mínimos e indispensables para garantizar la continuidad del trabajo y la vigencia de la dignidad colectiva. El movimiento obrero siempre estuvo liderado por la Central Obrera Bolivia (COB), que fue desarticulada, primero, a partir de una iniciativa estatal y de la clase dominante y, luego, por descomposición interna, particularmente en la década de 1980. A partir de este momento, se inició un ciclo de derrotas en el que las clases subalternas, no sólo los obreros y mineros, no atinaban más que atrincherarse a la evocatoria de antiguos pactos sociales. El movimiento obrero se sintió incapaz de producir un proyecto autónomo de orden social distinto al que había conocido y por ello demandaba el regreso al antiguo horizonte del Estado nacionalista, frente al embate neoliberal.

Sin embargo, toda la experiencia sindical, reflejada en los mecanismos de unificación colectiva, como son la asamblea, la marcha, la movilización, la rebelión, fueron interiorizadas por los mismos sujetos despedidos y relocalizados. Se constató que dichas prácticas también pueden ser ejecutadas mediante técnicas asociativas comunalizadas y en otros espacios distintos al sindicato.

Con esto, nos dimos a la tarea de explorar el desarrollo de los movimientos indígenas y campesinos bolivianos a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX y



principios del XXI. La coyuntura de la cual se partió, para contextualizar este apartado fue la Revolución de 1952. Sin embargo fue indispensable señalar y no perder de vista que la resistencia por parte de los grupos indígenas (llamados durante el siglo XX campesinos) siempre estuvo presente desde que inició la colonización de estos territorios, la cual la mayoría de las veces fue reprimida y diluida por las clases en el poder. Resistencia indígena siempre existió, lo novedoso, o nuevo, son sus formas de articularse y proyectarse ante el Estado y la sociedad. Así, observamos el desarrollo del pensamiento indianista y su repercusión en los sectores indígenas para formular propuestas político-sociales para enfrentar las adversidades que planteaba el aparato de partidos políticos, entre éstas están la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Movimiento Indio Pachakuti (MIP).

En suma, las organizaciones étnicas empiezan a reivindicar no sólo el respeto a su cultura (lengua, costumbres, rituales), sino también la propiedad de un territorio y de sus recursos, y finalmente la administración de ese territorio según sus usos específicos (forma de designación de las autoridades, justicia comunitaria). La introducción de elementos discursivos y conceptos como territorio son una característica esencial de los movimientos del siglo XXI; característica que se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XX y que se expresó hasta principios de este siglo.

Los movimientos indígenas y populares en Bolivia, le dieron un nuevo respiro a un conjunto de instituciones que corresponden al formato estatal preexistente, por un tiempo, mientras se procesaron los cambios mayores que se venían prefigurando ya más o menos por medio de estos ciclos de rebelión, movilización y unificación política de comunidades y sindicatos agrarios frente al patrón de dominación estatal.

En el tercer capítulo, analizamos la movilización indígena y popular, en el departamento de Cochabamba en el año 2000, que buscaba el respeto de sus usos y costumbres en torno a la obtención del agua en la región, la cual pretendía ser privatizada por la empresa transnacional Bechtel, a través de la creación de una empresa subsidiaria, *Aguas del Tunari*. Así fue que la Guerra del Agua, como se conoció a dicho suceso, quedó inscrita en la lucha del pueblo boliviano como un momento inaugural de recuperación de la potencia social contra el saqueo de los recursos naturales y, más allá de ello, como clave central de la lucha por la recuperación de un bien común para la reproducción de la vida

social, cultural y humana. Fue un proceso donde la autoafirmación, la autodeterminación y la lucha emancipativa fueron de elección íntima, personal y colectiva, plena y decidida.

Asimismo, se puede observar la recuperación de un sentido histórico por parte de las comunidades indígenas y populares (del sector rural y urbano) ante los diversos saqueos de sus riquezas en aras de una supuesta modernidad capitalista. La Guerra del Agua es en realidad una chispa que detonó una infinidad de luchas, con diversas demandas y reivindicaciones; asimismo, el inicio de una discusión nacional sobre las formas de propiedad y uso de recursos vitales como el agua, la constitución de un nuevo polo popular, que sin embargo, tardó años en articularse con más amplitud.<sup>17</sup>

La expansión de la protesta se hizo evidente por una impresionante movilización indígena en el altiplano boliviano, a través de un denso movimiento de dirigencias y niveles mayores de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Esta movilización indígena tuvo varios orígenes, entre los cuales se encuentran la privatización del agua, la erradicación de la coca y la usurpación de la tierra por parte de las élites, sobre todo en el oriente del país, así como el régimen normativo e impositivo a la propiedad rural que agredía el tejido comunitario en el altiplano.<sup>18</sup> El proceso de la emergencia indígena, particularmente aymara, fue largo y muy complejo, caracterizado por una búsqueda de respeto a la autonomía *de facto*, así como la construcción de una nación aymara; o vista de manera más general la instauración del *Pachakuti*.<sup>19</sup>

Asimismo, se encuentra la lucha de los cocaleros, que si bien, esta lucha debe entenderse en su particularidad, y en respuesta a la llamada estrategia de guerra contra las drogas patrocinada por Estados Unidos desde mediados de la década de los ochenta, existe una ola de luchas, movilizaciones, prácticas organizativas y horizontes políticos de estos

---

<sup>17</sup> Marxa Chávez, “Sobre los ‘movimientos sociales’ en Bolivia: Autonomía/Autoorganización y su relación con el Estado”, en Vega Camacho, Oscar (comp.), *Sujetos y formas de la transformación política en Bolivia*, La Paz, Bolivia, Ed. Tercera Piel, 2006, p. 29.

<sup>18</sup> Felipe Quispe citado en Gutiérrez Aguilar, Raquel, *Los Ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005)*, México, Sísifo ediciones, Bajo Tierra Ediciones, ICSH, BUAP, 2009, p. 131.

<sup>19</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar después de un exhaustivo análisis sobre todo lo acontecido con los levamientos y bloqueos aymaras, concluye: “entiendo la noción de *Pachakuti* como, efectivamente, la ambición, el anhelo, la búsqueda de una inversión del orden fundamental de las cosas. Básicamente, como una inversión del orden político donde lo que estaba adentro, en las comunidades, como su lógica más íntima –y, por supuesto, abajo-, ahora queda colocado como lo visible, lo válido, lo legítimo, ‘lo de afuera’ y ‘arriba’: se trata pues de un trastocamiento general del modo de convivir, no sólo de una modificación en quienes ejercen el gobierno o el mando.” Véase, Gutiérrez Aguilar, Raquel, *Los Ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 153.

actores sociales a lo largo de la Guerra del Agua, que aunque apoyaban la no privatización de este recurso, más bien, buscaban enlazarse y reforzar la lucha por el agua, calculando sus tiempos y posibilidades de impulsar y negociar de mejor manera su propia causa: la defensa de la coca.

Igualmente, realizamos un examen de la tendencia neoliberal de liberalizar, privatizar y desnacionalizar los sectores estratégicos, en este caso los usos del agua, los cuales son permeados por la lógica del mercado, inscritos en un proceso de privatización y desnacionalización, impulsado por los países del centro, particularmente Estados Unidos con ayuda de agencias gubernamentales, de cooperación internacional y empresas transnacionales en el negocio del agua. A partir de este punto, revisamos la problemática, contradicciones y limitaciones de los servicios de obtención, almacenamiento y distribución del agua en la región cochabambina, para poder entender y vislumbrar la respuesta social ante estos hechos.

Después de explorar el proceso de privatización del agua, las acciones sociales en defensa de la misma y la respuesta del gobierno ante la emergencia social, así como las consecuencias internacionales que tuvieron estas movilizaciones, intentamos visibilizar los logros, retos, contradicciones y limitaciones de todo este proceso de rearticulación social, después de un largo periodo de destrucción y erosión del tejido social y laboral.

Dentro del cuarto capítulo, examinamos el acontecimiento denominado la Guerra del Gas. Entre agosto y septiembre de 2003, el gobierno de Sánchez de Lozada llegó a un acuerdo con el gobierno mexicano del entonces presidente Vicente Fox para exportar un gran volumen de gas para la producción de energía eléctrica en México y Estados Unidos. Sin embargo, ese no fue el detonante del conflicto. La fuerte disputa entre los bolivianos y los chilenos por el territorio robado, fue la chispa que avivó la denominada Guerra del Gas; puesto que el gas boliviano a ser exportado en México debería salir al mar por los puertos chilenos de Arica e Iquique, que en el siglo XIX pertenecieron a Bolivia y que fueron anexados por Chile, durante la confrontación militar conocida como “Guerra del Pacífico” en 1879.

Con la Guerra del Gas, la lucha boliviana iluminó una posibilidad en el espectro de resistencias continentales contra la depredación y el despojo. La compleja articulación de fuerzas sociales compuesta por comunarios aymaras de la CSUTCB, vecinos de los barrios

de El Alto, coccaleros partidarios del MAS, mineros de las empresas en ese momento privatizadas y población en general organizada en la Coordinadora de Defensa del Gas, logró la renuncia del entonces presidente Sánchez de Lozada. Por tal motivo, aspiramos a analizar el mundo indígena, originario y popular, su peculiar organización para poder entender su accionar ante la respuesta violenta que desplegó el Estado durante el tiempo que duró la Guerra del Gas.

Por su parte, Adolfo Gilly tiende a bien apuntar que,

[...] el movimiento insurreccional de septiembre-octubre de 2003 en Bolivia aparece, en sus formas, sus protagonistas y sus contenidos, como un producto de las transformaciones impuestas por la reestructuración neoliberal de fines del siglo XX en la sociedad, en la economía y, sobre todo, en la vida, los territorios y las relaciones de las clases subalternas. Es un movimiento nuevo, con actores antes inexistentes, con una capacidad fresca para unir las demandas más inmediatas a las propuestas nacionales más generales –gas, agua, hidrocarburos, coca, república- y con métodos de organización y de enfrentamiento de antigua estirpe pero también nutridos por cuanto las nuevas tecnologías han puesto a su alcance.<sup>20</sup>

De esta forma, más que analizar la insurrección del altiplano en 2003 por comparación con las revoluciones del pasado, se procedió a analizarla en relación con las transformaciones de y en la sociedad y de las formas de dominación del capital.

Posteriormente, observamos el gobierno de Carlos Mesa (el movimiento autonomista cruceño, la nacionalización de los hidrocarburos) y la llamada “agenda de octubre”, que derivó en un encapsulamiento estatal de la emergencia social y su demanda de transformación radical de lo existente. Sin embargo, para el 2005, la movilización social y política adquirió un carácter más denso que el de un movimiento social. Se trató de un conjunto significativo de estructuras políticas y sociales indígenas y populares para cuestionar las políticas y estructuras del Estado, a sus gobernantes y a los modos de reproducir, en nuevas condiciones, la desigualdad entre pueblos y culturas. El incumplimiento de la “agenda de octubre”, por parte del Presidente Carlos Mesa, provocó, nuevamente, en la sociedad sentimientos de inconformidad ante las promesas de las fuerzas políticas en el poder. Nuevas movilizaciones, la renuncia de un presidente, elecciones presidenciales, en las cuales Evo Morales sería elegido, convirtiéndose así en el primer presidente indígena, todos estos sucesos caracterizaron el escenario nacional a finales del 2005.

---

<sup>20</sup> Adolfo Gilly, *Historias clandestinas*, México, La Jornada Ediciones, 2009, p. 25.

Inmediatamente después, en el último apartado de este capítulo, abordamos de manera sumaria algunos aspectos del gobierno de Evo Morales de cara a los objetivos de la movilización social, tratando de generar algunas reflexiones al respecto. Entendemos que dicho suceso es una consecuencia lógica de toda una etapa de movilización y protesta indígena-popular, pero el pretender analizar todos y cada uno de los sucesos acaecidos desde la llegada al poder de Morales hasta el día de hoy resultaría imposible. Sin embargo, tratamos a bien destacar la diferencia que existe entre los procesos que se están llevando a cabo por parte del aparato estatal boliviano y los objetivos que enarbolaron, y enarbolan, los miles de indígenas, campesinos, obreros y sectores populares en aras de la transformación radical de la realidad boliviana.

Finalmente, damos paso a nuestras conclusiones las cuales pretenden abordar los principales logros emanados de la movilización social: una fuerte crítica y trastrocamiento a las estructuras estatales de poder y al modelo económico, resultados de la defensa, por parte de los sectores más pobres del país, de los recursos naturales –agua y gas- ante la inminente privatización. No obstante, pese a estos logros es evidente que Bolivia sigue dependiendo de los recursos naturales o mejor dicho del extractivismo, lo cual devela las contradicciones en el propio esquema de desarrollo real –no discursivo- del gobierno. Prueba de ello es el hecho de que Bolivia está explotando, además de gas, litio en el departamento de Potosí, específicamente, en el Salar de Uyuni. Dicha situación conlleva a facilitar las acciones de las corporaciones transnacionales, marginando y debilitando el sector ambiental –es decir, la aplicación de normas ambientales-, y suprimiendo toda la experiencia de lucha durante el 2000 y 2005, en aras de un supuesto desarrollo del departamento de Potosí y del país.<sup>21</sup>

De ahí que sigan pendientes las respuestas a los cuestionamientos que sólo la población boliviana será capaz de responder: ¿Cómo hacer y cómo lograr implementar este diseño de un espacio alternativo emanado de la lucha social? ¿Cómo insertarlo, en lo concreto, dentro del proyecto de nación basado en otra visión de desarrollo, cuando Bolivia sigue dependiendo profundamente de los recursos naturales? ¿Realmente es suficiente la

---

<sup>21</sup> En el año de 2009 se inició la construcción de una planta piloto estatal “La Planta Industrial de Litio en el Río Grande de Lípez”, lo que está generando, a decir de Ribera Arismendi, una justificación para otros proyectos en la región, como la instalación del complejo geotérmico de Laguna Colorada, entre otros. Véase, Ribera Arismendi, Marco Octavio, “Análisis general del Caso Uyuni-Litio”, [en línea], junio de 2011. Disponible en: <http://www.lidema.org.bo/documentosPIMA/ECASO%20COCOON%20NEBE%20PROJECT%20LITIO.pdf>, [consulta: 18 de enero de 2014].

creación de una nueva Constitución Política donde se reconoce al Estado como Plurinacional? Y finalmente, ¿es que es necesario y preciso que se siga profundizando en las experiencias del proceso iniciado a partir del año 2000 para buscar los caminos por los cuales seguir transitando en la transformación de un mundo mejor? Las respuestas a estos y otros cuestionamientos serán la clave para que no sólo Bolivia, sino toda América Latina, sigan avanzando en la construcción de sociedades más equitativas y justas.

# 1. Globalización neoliberal y los imaginarios sociales rebeldes

*Se instaló en nosotros una sensación de pérdida irreparable  
tanto más extraña cuando no sabemos con certeza qué es lo que estamos  
en vías de perder; admitimos también, en otros momentos, que esa sensación  
de pérdida sea quizá la cortina de humo atrás de la cual se esconden  
las nuevas riquezas de nuestra vida individual y colectiva.  
Pero nuevamente vuelve ahí la perplejidad de no saber  
lo que abundará en nuestra nueva opulencia.*  
Boaventura de Sousa Santos

Víctor Flores Olea considera que existe un amplio movimiento ideológico de propaganda que ha postulado que la globalización es la clave de una nueva prosperidad planetaria, de una “nueva civilización”<sup>22</sup>, sin embargo, como argumenta el autor, apenas se penetra la costra más superficial de la economía mundial de mercado, se percibe un mundo lleno de contradicciones y violencias, en el que se han propiciado injusticias sin cuento: una exorbitante concentración de la riqueza de ciertos sectores y miseria en el resto del planeta, hecho que se constata en el creciente desempleo y número de excluidos o marginados de las sociedades.

A pesar de ello, se insiste que la globalización es un fenómeno rebosante de esperanzas, asimismo, se nos dice “que no hay alternativa a la globalización, a cuyas exigencias todos los gobiernos deben someterse.”<sup>23</sup> Que en esta nueva etapa de la historia no hay razón para los conflictos ideológicos y las contradicciones materiales, como llegaría a argumentar Francis Fukuyama, en su libro *El fin de la historia y el último hombre*.

Este “discurso, eufórico y determinista, se basa en un conjunto reducido de proposiciones simples que se asumen como verdades autoevidentes; el cuestionamiento de las mismas es considerado la mejor prueba de la ignorancia, estupidez incluso, de quien aventura sus dudas.”<sup>24</sup> La existencia de movimientos, léase obreros, indígenas, campesinos, populares y urbanos, que cuestionan dicho *status quo* son considerados un peligro para la estabilidad no sólo del sistema, sino, supuestamente, de toda la humanidad.

---

<sup>22</sup> Cfr. Víctor Flores Olea, “La Globalización y sus estragos”, en *Tiempos de abandono y esperanza*, México, Siglo XXI Editores/CEIICH-UNA, 2004, pp. 72-118.

<sup>23</sup> Immanuel Wallerstein, *Análisis de sistemas-mundo: una introducción*, México, Siglo XXI Editores, 2005, p. 9. Esto lo argumenta Wallerstein al tomar el eslogan de la señora Thatcher, primer ministro de Gran Bretaña entre 1979 y 1990: TINA (“There is No Alternative”, en español: “No Hay Ninguna Alternativa”).

<sup>24</sup> Carlos M. Vilas, “Seis ideas falsas sobre la globalización. Argumentos desde América Latina para refutar una ideología”, en Saxe-Fernández, John (coord.), *Globalización: una crítica a un paradigma*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Económicas/Dirección General de Apoyo al personal académico/Plaza y Janés Editores, 1999, p. 70.

Es así como amplios sectores de la sociedad, particularmente empresarios, algunos intelectuales y funcionarios públicos, coinciden en que hay situaciones inevitables a causa de la globalización, predominando la idea de que ésta es algo extraordinario, hasta poderosa, que, supuestamente, obliga a actuar a los países de modo que no les deja otras alternativas. Pero ¿qué es realmente la *globalización*? ¿A qué se refiere esta supuesta situación extraordinaria y poderosa que obliga a actuar a los países de una forma u otra?

Sabemos que existen cientos de libros que hablan sobre este tema, desde hace casi tres décadas, o más; sin embargo, no es el propósito de esta investigación el realizar un análisis exhaustivo sobre todas y cada una de las visiones sobre la globalización. El incluir este tema como inicio de este trabajo, responde a la necesidad de ofrecer una contextualización a las movilizaciones sociales, en este caso, la movilización indígena-popular en Bolivia.

Para ello, hemos decidido realizar una serie de precisiones conceptuales. Especificar el aparato teórico que utilizaremos en la explicación de este proceso, la globalización y el neoliberalismo, como contextualización de las movilizaciones sociales. En este tenor, hemos encontrado el marco de referencia que más se adecua a esta investigación, referente a la explicación de globalización. Éste reside en la explicación que da John Saxe-Fernández sobre este fenómeno. Para él, existen dos perspectivas para analizarla:

[...] primero, la de la globalización como categoría científica, es decir, como un concepto cuyo referente histórico y empírico está centrado en el largo proceso multisectorial de la internacionalización económica que se observa en el periodo posrenacentista, y que adquirió gran fuerza después de la segunda mitad del siglo XIX como resultado de la segunda revolución industrial y la multiplicación de grandes unidades empresariales de base nacional que, con los antecedentes de las compañías mercantiles de siglos anteriores, empezaron a operar internacionalmente. [...]

Una segunda perspectiva en torno a la globalización es la de la sociología del conocimiento. Desde este ángulo se enfoca la atención crítica sobre el “discurso globalista” que se ha instalado como un oferta de moda, eufórica y determinista, acrítica y superficialmente aceptada por grandes públicos empresariales, políticos y académicos. Por ello me referiré a esta dimensión como la “versión pop” del globalismo.<sup>25</sup>

La perspectiva que tomaremos para contextualizar la presente investigación será la de la categoría científica, con base en el análisis histórico. Puesto que, al enfocar el fenómeno de la globalización desde esta perspectiva implica “no sólo proceder con una crítica

---

<sup>25</sup> Cfr. John Saxe-Fernández, “Globalización e imperialismo”, en Saxe-Fernández, John (coord.), *Globalización: una crítica a un paradigma*, México, UNAM/Instituto de Investigaciones Económicas/Dirección General de Apoyo al personal académico/Plaza y Janés Editores, 1999, pp. 9-10.



epistemológica, sino también modificar, de manera sustancial, los referentes empíricos a los que apunta el concepto, ampliándolos de la esfera estrictamente económica.”<sup>26</sup> Enfocándonos, también, en aspectos políticos e históricos fundamentales, como son los relacionados con la formación del Estado-nación, los diversos tipos de enfrentamientos actuales e históricos entre el Estado y la sociedad, entre dos o más Estados, y el papel que ha jugado la explotación de los recursos naturales en el desarrollo de capitalismo mundial, entre otros.

Si bien, hemos decidido utilizar esta categoría de globalización para poder contextualizar nuestra investigación, no está de más indicar a grandes rasgos lo que engloba la “versión pop” del globalismo. Dentro de este estudio de la globalización como ideología se permite “encarar al extremismo del discurso globalista sintetizado en una ‘sabiduría convencional’ cimentada y fomentada por poderosas fuerzas e intereses, habiéndosele instalado entonces como un paradigma montado sobre varias falacias, mitos o *slogans*”<sup>27</sup>, postulando a la globalización, como un fenómeno rebosante de esperanzas, homogeneizador de la sociedad, conductor hacia la democracia, el progreso y, un supuesto, bienestar universal.

Así, vista a la *globalidad*<sup>28</sup> desde esa perspectiva, ésta se muestra como el resultado de las grandes transformaciones tecnológicas y de la expansión del mercado, es decir, se tiene la creencia de que este poderoso mercado global está haciendo obsoletas las fronteras nacionales, donde las empresas transnacionales son el actor fundamental de las nuevas relaciones económicas internacionales. Aunque la realidad demuestre lo contrario.

Los datos y las estadísticas muestran [...] que los principales componentes de la economía internacional siguen siendo economías nacionales en las que se profundizan las contradicciones de clase, género y etnia y, además, que lo que se experimenta en la actualidad no representa un hecho sin precedentes, desvinculado de lo que se ha registrado históricamente, en especial a partir de la mencionada segunda revolución industrial de mediados del siglo XIX, a saber: que el comercio y la inversión continúan generando crecientes contradicciones y al mismo tiempo interconexiones de economías que siguen siendo preponderantemente nacionales, tratándose de un proceso que conlleva aumentos en la participación de más y más naciones y actores sociales, políticos, étnicos y económicos afectados por inequitativas relaciones nacionales e internacionales de dominación del mercado y de inversión. Aumenta el número de economías participantes en las transacciones económicas internacionales, pero esa participación ocurre en el marco de una

---

<sup>26</sup> *Ibidem*, pp. 42-43.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 10.

<sup>28</sup> Término que emplea para referirse a la versión pop de la que habla John Saxe-Fernández.

hiperconcentración de poder económico y de una profunda redistribución regresiva, es decir, de la explotación entre y dentro de las naciones [...].<sup>29</sup>

En resumen, podemos decir que el globalismo pop es “un discurso justificante del *status quo* que cuenta con una elaborada y proliferante estructura conceptual fundamentada más en pilares axiomático-deductivos que científicos o históricos.”<sup>30</sup> Por tal motivo, podemos argumentar que esta concepción es una construcción ideológica, no una descripción de un nuevo entorno económico, donde se da como un hecho que el proceso de globalización representa un nuevo estadio del desarrollo del capitalismo, dando por hecho a la internacionalización económica como un proceso nuevo.

Al revisar esta perspectiva de la globalización, que justifica el *status quo* del sistema, nos damos cuenta que esta visión no permite observar las contradicciones y limitaciones de dicho proceso globalizador; contradicciones y limitaciones que fungen como generadoras de una infinidad de inconformidades de la sociedad hacia el mismo proceso, pero, también, hacia los diversos actores que participan en su implementación y reproducción, empresas transnacionales y, por supuesto, Estados nacionales. De esta forma, consideramos dar cuenta de lo que implica la concepción científica con base histórica, la cual, sí permite observar la complejidad de contradicciones y limitaciones (asimismo, beneficios), del proceso de globalización.

Dentro de esta categoría se enmarcan varios autores que tomaré como base para la contextualización de este trabajo, Víctor Flores Olea, Carlos Vilas, Pablo González Casanova, John Saxe-Fernández y James Petras. Aquí, se considera a la globalización como

---

<sup>29</sup> John Saxe-Fernández, “Globalización e imperialismo”..., *op. cit.*, p. 13.

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 15. Saxe-Fernández hace varias preguntas al respecto: “¿Cuáles son, en todo caso, los elementos centrales del globalismo pop y cuáles sus debilidades? [...] pueden discernirse cuatro axiomas sobre los que se construye el ‘paradigma globalista’: en primer término asume que el dominio en las relaciones internas y externas se deriva de la institucionalización del poder. Es decir, que ‘el poder es un atributo de una posición dentro de una organización a la que se pertenece sin opción, en este caso el sistema internacional’. En segundo lugar se esconde la naturaleza explotativa y asimétrica del caldo de cultivo imperialista en que ocurre la internacionalización económica y se da como un hecho que la posición de un actor en el sistema interestatal está determinada por una dinámica derivada de una teorización del mercado que, supuestamente, se rige por una tendencia homeostática, es decir, que tiende al equilibrio por medio de fuerzas automáticas y autoregulación. En tercer lugar, el paradigma globalista tiene como uno de sus principales artículos de fe el supuesto de que ‘la totalidad social es una totalidad expresiva’, es decir, que las partes del todo expresan la naturaleza esencial del todo. [...] Finalmente, los argumentos son desarrollados por medio de un razonamiento deductivo o axiomático: ‘...los atributos de los actores se deducen de postulados que presumen una organización sistémica particular.’ Véase, John Saxe-Fernández, “Globalización e imperialismo”..., *op. cit.*, pp. 19-20.

un “fenómeno íntimamente vinculado con el desarrollo capitalista, intrínsecamente expansivo y que tiene en la experiencia colonial e imperial una de sus más claras expresiones históricas y contemporáneas. [...] Si por globalización entendemos la internacionalización económica, es decir, la existencia de una economía internacional relativamente abierta y con grandes y crecientes flujos comerciales y de inversión de capital entre las naciones.”<sup>31</sup> Entonces no es un fenómeno nuevo, inédito, ni irreversible, como lo considera la otra categoría.

Con esto se plantea que, “el presente estadio del capitalismo no muestra rupturas fundamentales con las experiencias del pasado en lo que se refiere al asimétrico contexto de poder internacional y nacional en cuyo contexto ocurren los flujos comerciales, de inversión, y la transferencia de tecnología y de esquemas productivos. Es un caldo de cultivo de relaciones profundamente leoninas en el orden económico-estratégico, conocido en la literatura como ‘imperialismo’<sup>32</sup>, signado por la inequidad, el conflicto, la dominación, la apropiación del excedente y las contradicciones interestatales, de clase y étnica, de género y de mercados. La internacionalización económica ha ocurrido en el contexto de las variables independientes y las fuerzas y contradicciones que emanan del poder del capital.”<sup>33</sup>

La globalización es, también, un proceso de dominación y apropiación del mundo. Dominación de las relaciones sociales, políticas y económicas; apropiación de recursos naturales y riquezas económicas. Donde la combinación de formas muy antiguas de depredación, reparto y parasitismo, que hoy son vistas como fenómenos de privatización,

---

<sup>31</sup> *Ibidem*, p. 9. “Es igualmente cierto que estos flujos de bienes, inversiones, producción y tecnología tienden a ajustarse a pautas de especialización y de división internacional del trabajo, así como que el peso del comercio y de la inversión se va modificando a favor de esta última, un hecho especialmente notorio a partir de la década de los ochenta, cuando la inversión extranjera directa (IED) profundiza su papel como eje organizativo de la estrategia capitalista.” Véase, John Saxe-Fernández, “Globalización e imperialismo”..., *op. cit.*, pp. 9-10.

<sup>32</sup> A nivel internacional podemos encontrar autores como Lennin. En torno a América Latina, José Martí, Paul Groussac, Salvador Mendieta y Maximo Soto, Theotonio Dos Santos. Muchos de los autores que trataron el tema de imperialismo en América Latina expresaban un gran abanico de interpretaciones, en reivindicaciones de los valores del *hispanoamericanismo* o, alternativamente, *latinoamericanismo*; en críticas al *panamericanismo*, en denuncias de la expansión imperialista, especialmente en el Caribe y Centroamérica; en expresiones del nacionalismo continental y regional, en la invención del concepto de *Indoamérica*, o en posiciones de izquierda, socialistas, comunistas y anarquistas. Véase, Pita González, Alexandra; Marichal Salinas, Carlos (coord.), *Pensar el Antiimperialismo. Ensayos de historia intelectual latinoamericana, 1990-1930*, México, D.F., El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, Universidad de Colima, 2012, pp. 352.

<sup>33</sup> John Saxe-Fernández, “Globalización e imperialismo”..., *op. cit.*, p. 11.

desnacionalización, desregulación, entre otras, son pieza clave en dicho proceso. Asimismo, estas formas generan procesos macrosociales de explotación de la sociedad en general, a través de privaciones, marginaciones, exclusiones y depauperaciones.<sup>34</sup>

La globalización contemporánea<sup>35</sup> debe ser entendida como el resultado de un largo proceso histórico, comenzando por las conquistas coloniales de los siglos XV y XVI, seguido de las invasiones imperialistas, resultado de la hegemonía del capital concentrado, empresas transnacionales y centros de decisión financiera como el FMI y Banco Mundial, y de las transformaciones tecnológicas que ha vivido el mundo.<sup>36</sup> Siendo el Estado, a lo largo de todos estos procesos, una figura del uso del poder para llevar a la práctica una diversidad de políticas tendientes a implementar y validar este sistema. Una explicación que engloba todo lo hasta aquí dicho sobre la categoría científica con base histórica del proceso de globalización, la ofrece Carlos Vilas, quien argumenta:

[...] la globalización es un proceso, o mejor aún, un conjunto de procesos, que vienen desarrollándose con aceleraciones y desaceleraciones a lo largo de los últimos cinco siglos. Estos procesos tienen dinámicas y ritmos desiguales, y su efecto conjunto es profundamente diferenciador tanto dentro de los espacios económicos nacionales y regionales, como entre las regiones del mundo. Dadas ciertas condiciones ligadas a un conjunto amplio de factores socioeconómicos, culturales y políticos, la globalización puede redundar en oportunidades de mayor bienestar social, progreso técnico y desarrollo económico, pero en otras condiciones puede generar efectos exactamente opuestos y verdaderos catástrofes. La globalización es una dimensión del proceso multiseccular de expansión del capitalismo desde sus orígenes mercantiles en algunas ciudades de Europa en los siglos XIV y XV. Como tal, es parte integral de un modo de organización económica y social profundamente desigualador, basado en la explotación de los seres humanos y la depredación de la naturaleza: un modo de organización social y económica que asocia el

---

<sup>34</sup> Véase, Pablo González Casanova citado en John Saxe-Fernández, “Globalización e imperialismo”..., *op. cit.*, p. 12.

<sup>35</sup> Por su parte, James Petras considera: “La globalización se inició en el siglo XV con el crecimiento del capitalismo y su expansión en ultramar: la conquista y explotación de Asia, África y Latinoamérica y el establecimiento de colonias blancas en Norteamérica y Australia fueron, todos ellos, ejemplos de ‘globalización’. En otras palabras, *la globalización estuvo, desde el principio, asociada con el imperialismo*: las red de vinculación mundial se basó en la acumulación europea: explotación del Tercer Mundo para acumulación en el primero. Los orígenes imperiales de la globalización definen el impulso, la naturaleza de las redes y la dinámica del proceso. [...]”

“[...] la globalización no es un fenómeno nuevo: es un nuevo nombre que condensa diversos procesos socio-políticos y económicos. Los orígenes históricos imperiales han permanecido enraizados en una matriz en la que nuevos estados y actores compiten por lograr tener un acceso privilegiando a las redes y apoyo estatal. Las actuales agencias principales, las corporaciones multinacionales, cumplen los roles antes desempeñados por las compañías de comercio: integran y se apropian de los recursos y explotan la mano de obra barata. [...]” Véase, James Petras, “El rol de las corporaciones multinacionales y del Estado nacional en el proceso de globalización”, en *Neoliberalismo en América Latina. La izquierda devuelve el golpe*, Argentina, Homo Sapiens Ediciones, 1997, pp. 65-66.

<sup>36</sup> Véase, Víctor Flores Olea, “La Globalización y sus estragos”..., *op. cit.*, pp. 77-78.

progreso de algunos con la desventura de muchos; el éxito con los quebrantos; la abundancia con el empobrecimiento.<sup>37</sup>

Dentro de esta línea de análisis, Vilas expone seis preposiciones, que constituyen el núcleo de lo que se puede llamar la *ideología de la globalización*. Una ideología conservadora que encubre la realidad para inhibir la voluntad de cambiarla, que la presenta como producto de la dinámica socio-histórica, siendo en realidad producto de particulares decisiones en función de objetivos e intereses específicos que tienden a preservar y consolidar la configuración de poder existente en las relaciones internacionales. Sin embargo, las afirmaciones que integran esta ideología conservadora no se encuentran avaladas ni por la historia ni por la observación del presente, sino todo lo contrario, al contrastarlas con la realidad la mayoría de éstas resultan desvirtuadas, dando por hecho, que dichas afirmaciones se enmarcan en la preservación y protección de intereses particulares.<sup>38</sup>

Entre las preposiciones se encuentran las siguientes<sup>39</sup>:

- 1) La globalización es un fenómeno nuevo.
- 2) La globalización se trata de un proceso homogéneo.
- 3) La globalización es un proceso homogeneizador.
- 4) La globalización conduce al progreso y al bienestar universal.
- 5) La globalización de la economía conduce a la globalización de la democracia.
- 6) La globalización acarrea la desaparición progresiva del Estado, o al menos una pérdida de importancia del mismo.

Es interesante como Carlos Vilas refuta cada una de estas premisas, a partir de la experiencia de América Latina. Aunque no es el propósito de esta investigación reproducir cada una de estas tesis, consideramos que este trabajo hace una síntesis sobre las críticas que se han llevado en torno a la globalización; por lo cual hemos optado por puntualizar las ideas claves, y tomar los rasgos más importantes según nuestra perspectiva, que ayudan a cumplir los objetivos de dicha investigación.

---

<sup>37</sup> Carlos Vilas, "Seis ideas falsas sobre la Globalización...", *op. cit.*, p. 71.

<sup>38</sup> *Ídem*.

<sup>39</sup> Todos y cada uno de estos puntos fueron obtenidos de Vilas, Carlos M., "Seis ideas falsas sobre la Globalización...", *op. cit.*, p. 70.

En el primer punto, sobre que la globalización es un fenómeno nuevo,<sup>40</sup> se destaca que esta idea muestra muy poco conocimiento sobre la historia económica del capitalismo, desconociendo que la globalización es un proceso de desarrollo multiseccular, que se originó en Europa en los siglos XV y XVI, como dimensión dinámica del capitalismo y como efecto de la vocación expansiva de éste.

Con esto, entonces la pregunta sería, ¿de dónde proviene la idea de su novedad contemporánea? Parte de una contraposición ahistórica entre el dinamismo presente y la aparente falta de movimiento de la economía mundial en el periodo anterior a la década de 1980, donde se sitúa, por muchos defensores de esta primera preposición, el inicio del proceso globalizador; como si la explotación y exportación de los recursos naturales, materias primas, desde el siglo XV en América no reflejaran el dinamismo de la economía, y, más bien, representarían un estancamiento de la misma.

En cuanto a la idea de que la globalización se trata de un proceso homogéneo, ésta vista desde una perspectiva de historia larga, “resulta ser un *proceso de desenvolvimiento desigual*.”<sup>41</sup> Este desarrollo desigual se da en sus diferentes niveles o dimensiones, en la actualidad se encuentra mucho más desarrollado el aspecto financiero, que era el complemento necesario de la economía real, que la producción o el comercio, los cuales sí benefician directamente a los diversos sectores de la sociedad, y no solamente a aquellos que tienen los medios para realizar inversiones, léase compañías de seguros e inversores individuales que movilizan productos financieros como *swaps* y derivados.

En lo referente a la idea de que la globalización es un proceso homogeneizador,<sup>42</sup> es decir, que conduce a la homogeneización de la economía mundial, abarcando en algún momento los planos social y político, superando a la larga las diferencias entre desarrollo y subdesarrollo, ésta fue refutada desde la década de 1940, por economistas como Raúl Prebisch, en el marco de la recién creada CEPAL, al introducir los conceptos de centro-

---

<sup>40</sup> Véase, Carlos Vilas, “Seis ideas falsas sobre la Globalización...”, *op. cit.*, p. 73.

<sup>41</sup> *Ibidem*, p. 75 De esta forma, Carlos Vilas menciona que debe “señalarse que la expansión mundial del capital se lleva a cabo combinando elementos de progreso y novedad con ingredientes de retroceso y primitivismo. Cabe recordar por ejemplo la reintroducción de la esclavitud como centro del sistema de plantaciones capitalistas en los siglos XVIII y XIX, o la conjugación de servidumbre laboral y capitalismo mercantil persistente bien entrado nuestro siglo. La etapa actual de la globalización conjuga tecnologías informáticas de punta con condiciones laborales decimonónicas. La globalización ilustra así la pertinencia de la tesis del carácter ‘desigual y combinado’ del desarrollo capitalista.” Véase, Carlos Vilas, “Seis ideas falsas sobre la globalización...”, *op. cit.*, p. 78.

<sup>42</sup> Véase, Carlos Vilas, “Seis ideas falsas sobre la globalización...”, *op. cit.*, p. 79-83.

periferia; y, posteriormente, denunciado por teóricos como Ruy Mauro Marini,<sup>43</sup> Theotonio Dos Santos<sup>44</sup>, entre otros. Un argumento expuesto por estos autores es:

[...] frente al parámetro del modo de producción capitalista puro, la economía latinoamericana presenta peculiaridades, que se dan a veces como insuficiencias y otras – no siempre distinguibles fácilmente de las primeras- como deformaciones. No es por tanto accidental la recurrencia en los estudios sobre América Latina de la noción de “precapitalismo”. Lo que habría que decir es que, aun cuando se trate realmente de un desarrollo insuficiente de las relaciones capitalistas, esa noción se refiere a aspectos de una realidad que, por su estructura global y su funcionamiento, no podrá desarrollarse de la misma forma como se han desarrollado las economías capitalistas llamadas avanzadas. Es por lo que, más que un precapitalismo, lo que se tiene es un capitalismo *sui generis*, que sólo cobra sentido si lo contemplamos en la perspectiva del sistema en su conjunto, tanto a nivel nacional como, y principalmente, a nivel internacional.<sup>45</sup>

La idea de que la globalización conduce al progreso y al bienestar universal, se contraponen con la persistencia de las disparidades socioeconómicas y educativas en la mayoría de los países de América Latina, y en el resto del mundo. Existe un crecimiento de la pobreza, cifras record de desempleo y subempleo (empleo informal), así como la poca capacidad de las universidades públicas para los millones de jóvenes que buscan una opción educativa, los grandes grupos humanos han sido segregados del avance de la tecnología y de la prosperidad contemporánea, que es para los pocos, puesto que estas nuevas economías privilegian al consumo, al equilibrio macroeconómico y a la estabilidad del capital financiero por encima de la producción y el trabajo, de la calidad de vida y de la satisfacción de las necesidades básicas.

Existen seis factores que conducen al crecimiento de la pobreza, según observa Vilas,<sup>46</sup> principalmente en la región de América Latina, y que representan un sesgo predominante en el proceso de globalización:

- i. el cambio en la relación empleo/producto;
- ii. las políticas estatales que fomentan la llamada “flexibilización” laboral, es decir, la pérdida de las condiciones institucionales de seguridad laboral de casi un siglo de luchas y negociaciones sindicales;

---

<sup>43</sup> Véase, Ruy Mauro Marini, *Dialéctica de la dependencia*, México, Era, 1977, 101 pp.

<sup>44</sup> Se puede consultar el libro de Theotonio Dos Santos, *Imperialismo y dependencia*, México, Era, 1982, 491 pp.

<sup>45</sup> Ruy Mauro Marini, *op. cit.*, p. 14.

<sup>46</sup> Véase, Carlos Vilas, “Seis ideas falsas sobre la globalización...”, *op. cit.*, pp. 84-86.

- iii. el deterioro de los salarios reales;
- iv. la presencia de un fenómeno de exclusión social, en la medida en que la población en condiciones de pobreza crece más rápido que la población total;
- v. la reducción de los niveles de empleo y deterioro de las condiciones de trabajo, a partir de las políticas estatales de privatización y de desregulación; y
- vi. el acelerado deterioro ambiental tolerado o estimulado por los Estados, en beneficio de corporaciones nacionales y transnacionales.<sup>47</sup>

Con esto podemos sostener que, el progreso y bienestar universal a que hace referencia esta idea, alude a la sofisticación de las condiciones de vida y de las posibilidades que brinda el consumo suntuario en el sector más rico de la población de los países más atrasados; quien accede a este tipo de consumo es síntoma, supuestamente, del progreso y crecimiento económico, no importando que los servicios de salud, por ejemplo, sean de mala calidad y no alcancen a cubrir a la sociedad en general.

Por su parte, en la idea sobre que la globalización de la economía conduce a la globalización de la democracia, Vilas afirma que: “La idea de una funcionalidad de la globalización económica con la democracia es típica de una concepción vulgar de una y otra, notoriamente auspiciada, difundida y financiada por algunos *think tanks* del *establishment* político conservador de Estados Unidos, como el National Endowment for Democracy, y recogida por agencias financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y, más recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo.”<sup>48</sup>

Sin embargo, dicha democracia, a lo que él denomina “democracia de mercado”, es decir, “regímenes políticos donde el ingrediente democrático viene dado por la promoción y consolidación de una economía de mercado en su versión neoliberal”,<sup>49</sup> más que fomentar una serie de derechos y garantías sociales y colectivos y, en su defecto, individuales, lo hace en beneficio de la libre expansión del capital y de las empresas transnacionales, en

---

<sup>47</sup> Todos y cada uno de estos puntos fueron obtenidos de Carlos Vilas, “Seis ideas falsas sobre la globalización...”, *op. cit.*, pp. 84-86.

<sup>48</sup> Carlos Vilas, “Seis ideas falsas sobre la globalización...”, *op. cit.*, p. 88.

<sup>49</sup> *Ídem.*



deterioro de dichas garantías y derechos que protege a la población de las actividades de estos actores.

Finalmente, en la idea de que la globalización acarrea la desaparición progresiva del Estado, o al menos una pérdida de importancia del mismo, se revela el parentesco directo entre la ideología de la globalización, su “versión pop”, y el neoliberalismo,<sup>50</sup> siendo el carácter y contenido de esta relación, sus alcances y limitaciones, sus medios y objetivos, y sus contradicciones definidos en última instancia por los actores que impulsa a unos y a otros. Es decir,

En los últimos 500 años el mundo ha presenciado el paso del estatismo mercantilista al liberalismo de los “burgueses conquistadores”, retornando luego al intervencionismo imperialista de fines del siglo XIX, pasando al “libreempresismo” de la década de los veinte que condujo a la crisis de 1929, para regresar al intervencionismo keynesiano y socialdemócrata y ahora redescubrir las virtudes del mercado.<sup>51</sup>

Sin embargo, lo trascendental es cuestionar qué tipo de relación está desarrollándose y consolidándose entre el Estado y el mercado; puesto que el Estado, en diferentes momentos de la historia ha cambiado sus modalidades, alcances y estilos de articulación con el mercado. Actualmente, dicha relación está en la lógica de una mayor apertura externa y una integración más amplia a las corrientes transnacionales de capital.

En cuanto al papel del Estado en América Latina, existe una caracterización muy peculiar:

La etapa actual de la globalización en clave financiera y neoliberal ofrece ante todo una reorientación en el sentido de la gestión del Estado. Esta reorientación tiene lugar respecto de actores e intereses; cambia el referente social y político de la gestión estatal, y con ese cambio tiene lugar el de las modalidades de la intervención estatal. Un elemento importante de esta reorientación en América Latina y el Caribe deriva de la crisis de inicios de la década pasada y del modo en que fue manejada por los estados de la región: el Estado se hizo cargo de la deuda externa privada de las empresas y la convirtió en deuda pública. El recurso ulterior a mayor endeudamiento externo agravó la subordinación de los estados nacionales respecto de los mercados financieros donde se contrae la deuda y en los que cotiza. En este nuevo escenario, se incrementa la capacidad de decisión y el poder político de las agencias estatales más directamente vinculadas a esos mercados: bancos centrales, ministerios o secretarías de finanzas, entre otros. En contraste, se reduce la gravitación

---

<sup>50</sup> *Ibidem*, p. 90. Carlos Vilas argumenta que la idea de “la desaparición del Estado es vieja en la teoría política; en los tiempos modernos la retomaron el anarquismo y el socialismo marxista, aunque con enfoques diferentes; hoy reaparece en la ideología neoliberal y en las versiones *light* del globalismo [...]. Hay incluso una exageración culturalista de esta idea falsa: la que afirma que hemos dejado atrás a la política, y que la nuestra sería una época “pos-política”. Véase, Carlos Vilas, “Seis ideas falsas sobre la globalización...”, *op. cit.*, p. 90.

<sup>51</sup> Carlos Vilas, “Seis ideas falsas sobre la globalización...”, *op. cit.*, p. 91.

institucional de las agencias más ligadas a los actores en retroceso: secretarías o ministerios del trabajo y de industria; organismos estatales de bienestar y seguridad social, etcétera.<sup>52</sup>

Finalmente, podemos argumentar que dentro de este proceso de globalización, “que es complejo y multidimensional, se están destacando aquellos vectores que actúan *de arriba, por arriba y para arriba*, como si este proceso también fuese unidireccional.”<sup>53</sup> Por tal motivo, el significado y la importancia que tienen los movimientos sociales radica en la capacidad para inventar, “en las circunstancias *de abajo, por abajo y para los de abajo*, nuevos pactos, nuevas relaciones, nuevos derechos en los intersticios y brechas de ese complejo proceso de reorganización social.”<sup>54</sup> Ello desde luego, como resultado de un ejercicio colectivo, no libre de contradicciones, de reflexión, análisis y diálogo.

### **1.1. La experiencia neoliberal<sup>55</sup>**

Para poder analizar el proceso del llamado ajuste estructural en América Latina (la implantación e implementación de políticas neoliberales), es necesario responder a dos preguntas clave: ¿qué es y cuándo surgió el neoliberalismo?

En primer lugar, se puede argumentar que el neoliberalismo es una doctrina que sostiene que el mercado y no el Estado debe ser el único distribuidor de la riqueza (salarios y capital); defiende la desregulación total, la eliminación de todas las barreras tarifarias, el libre flujo de productos, trabajo y capital en menosprecio de las regulaciones laborales, culturales y ambientales, etc.<sup>56</sup>

El neoliberalismo se puede entender como la respuesta más profunda y coherente, desde el interior del sistema, para sostener su continuidad, a la crisis en que acabó

---

<sup>52</sup> *Ibidem*, p. 93.

<sup>53</sup> Carlos Walter Porto Gonçalves, “De los movimientos sociales y de la invención de derechos”, en *Geografías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad*, México, Editores Siglo XXI, 2001, p. 81.

<sup>54</sup> *Ídem*.

<sup>55</sup> Para un mayor análisis de lo que ha implicado el neoliberalismo a nivel mundial, se puede revisar los textos de Perry Anderson, “Neoliberalismo: un balance provisorio”; y David Harvey, “El neoliberalismo como destrucción creativa”.

<sup>56</sup> Véase, James Petras, “Los fundamentos del neoliberalismo”, en Petras, James, *Neoliberalismo en América Latina. La izquierda devuelve el golpe...*, op. cit., p. 10.

desembocando su trayectoria y su aspiración capitalista.<sup>57</sup> De esta forma, el neoliberalismo es mucho más que una estrategia económica y una forma específica de conducir los procesos económicos:

[...] involucra consecuencias nacionales y sociales muy profundas, y conlleva valores morales y conductas individuales y colectivas que se promueven y justifican al amparo de esa concepción económica. Se explica así que en el curso de su aplicación se impongan crecientemente conductas de individualismo y competitividad por sobre los valores de la solidaridad y el compromiso social. Se distorsionan consecuentemente los criterios de evaluación de los resultados económicos: no se los juzga en función de cómo contribuyen a los grandes desafíos de nuestras sociedades –en especial, la defensa y profundización de la democracia y la erradicación de la pobreza– sino en función de la eficacia del mercado y el nivel de las tasas de ganancias. De ahí que, según la idea predominante, la economía puede ir bien aunque le está yendo mal a la mayoría de la población; o que importen más los ‘equilibrios macroeconómicos’ que la condición esencial de vida de todos.<sup>58</sup>

Los ejes básicos de referencia del neoliberalismo se pueden resumir en<sup>59</sup>:

- a) constituir a las exportaciones en la fuente fundamental de crecimiento de una nueva estrategia económica;
- b) reducir drásticamente el ámbito de acción del Estado y propiciar la privatización de toda suerte de actividades productivas y servicios, entregando al mercado la función casi exclusiva de asignación de los recursos; y
- c) con referencia a la política económica de corto plazo, jerarquizar por encima de todo, otro objetivo, el mantenimiento de los “equilibrios macro-económicos” según se expresan en las cuentas fiscales y externas y en las presiones inflacionarias.

Ahora bien, ¿cuándo surge el neoliberalismo? Una primera aproximación es la ofrecida por Perry Anderson, quien considera que el neoliberalismo nació después de la Segunda Guerra Mundial, en una región de Europa y de América del Norte donde imperaba el capitalismo. Según Anderson se trató de una reacción teórica y política vehemente contra el Estado intervencionista y de bienestar. Y agrega:

Su texto de origen es *Camino de Servidumbre*, de Friedrich Hayek, escrito en 1944. Se trata de un ataque apasionado contra cualquier limitación de los mecanismos del mercado por

---

<sup>57</sup> Pedro Vuskovic, “¿En lugar del neoliberalismo?”, en Garza Toledo, Enrique de la, *Democracia y política económica alternativa*, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades/UNAM, La Jornada Ediciones, 1994, pp. 326-327.

<sup>58</sup> *Ibidem*, p. 326.

<sup>59</sup> Estos tres ejes fueron obtenidos de Pedro Vuskovic, “¿En lugar del neoliberalismo?”..., *op. cit.*, p. 327.

parte del Estado, denunciada como una amenaza letal a la libertad, no solamente económica sino también política. [...] Tres años después, en 1947, cuando las bases del Estado de Bienestar en la Europa de posguerra efectivamente se constituían, no sólo en Inglaterra sino también en otros países, Hayek convocó a quienes compartían su orientación ideológica a una reunión en la pequeña estación de Mont Pèlerin, en Suiza. Entre los célebres participantes estaban no solamente adversarios firmes del Estado de Bienestar europeo, sino también enemigos férreos del *New Deal* norteamericano.<sup>60</sup>

Los propósitos de esta reunión eran combatir el keynesianismo y el solidarismo reinantes; y de esta forma, preparar las bases de otro tipo de capitalismo, duro y libre de reglas, para el futuro. Sin embargo, las condiciones para este trabajo no eran del todo favorables, debido a que el capitalismo avanzado, como lo denomina Anderson, estaba entrando en una larga fase de auge sin precedentes –su edad de oro–, presentando el crecimiento más rápido de su historia durante las décadas de 1950 y 1960.<sup>61</sup>

Con la llegada de la gran crisis del modelo económico de posguerra, en 1973, caracterizada por una larga y profunda recesión, combinando, por primera vez, bajas tasas de crecimiento con altas tasas de inflación, las ideas neoliberales pasaron entonces a ganar terreno. Las raíces de la crisis, afirmaban Hayek y sus colegas, estaban localizadas en el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y, de manera más general del movimiento obrero en tanto que había socavado las bases de la acumulación privada con sus presiones reivindicativas sobre los salarios y con su presión parasitaria para que el Estado aumentase cada vez más los gastos sociales.<sup>62</sup>

El remedio, entonces era claro, mantener un Estado fuerte, en cuanto a su capacidad de poder de quebrar el poder de los sindicatos, pero limitado, en lo referido a los gastos sociales e intervenciones económicas. La meta de cualquier gobierno debería ser la estabilidad monetaria, lograda a través de una disciplina presupuestaria, contención de gasto social, restauración de una tasa de desempleo, reformas fiscales, especialmente para incentivar a los agentes económicos transnacionales. Así, después de realizar todas y cada

---

<sup>60</sup> Perry Anderson, “Neoliberalismo: un balance provisorio”, en Sader, Emir; Gentili, Pablo (comp.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*, Argentina, Eudeba/Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1999, p. 15. Perry Anderson comenta que en la selecta asistencia se encontraban, entre otros, Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Eukpen, Walter Lippman, Michael Polanyi y Salvador de Madariaga.

<sup>61</sup> Cfr., Perry Anderson, “Neoliberalismo: un balance provisorio”..., *op. cit.*, p. 16.

<sup>62</sup> Cfr., *idem*.

una de estas medidas (particularmente la estabilidad monetaria) el crecimiento retornaría en dichos Estados.

Surgió la oportunidad de poner en práctica la primera experiencia neoliberal sistemática del mundo, una experiencia piloto que fue aplicada posteriormente en los países del centro: Chile bajo la dictadura de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Los programas aplicados al inicio de este periodo abarcaban desde la desregulación, desempleo masivo, represión sindical, redistribución de la renta en favor de los ricos, privatización de los bienes públicos hasta la abolición de la democracia y la instalación de una de las más crueles dictaduras de posguerra. Bajo la inspiración teórica de Friedman, que también asistió a la reunión Mont Pèlerin, la economía chilena de este régimen creció a un ritmo bastante rápido a diferencia de las economías de los países del centro, que adoptaron el régimen neoliberal durante la década de 1980.<sup>63</sup>

Una segunda experiencia piloto, también latinoamericana, fue el caso de Bolivia, donde se proporcionó la experiencia para el neoliberalismo del Este pos-soviético. Así, “en 1985, Jeffrey Sachs perfeccionó su tratamiento de shock, aplicado más tarde en Polonia y Rusia, pero preparado originariamente para el gobierno de Banzer, y después aplicado imperturbablemente por Víctor Paz Estenssoro, sorprendentemente cuando fue electo presidente en lugar de Banzer. En Bolivia, la puesta en marcha de la experiencia neoliberal no tenía urgente necesidad de quebrar a un movimiento obrero poderoso, como en Chile, sino de parar la hiperinflación. Por otro lado, el régimen que adoptó el plan Sachs no era una dictadura, sino el heredero del partido populista que había hecho la revolución social de 1952. En otras palabras, América Latina también inició una variante neoliberal ‘progresista’, difundida más tarde en el Sur de Europa, en los años del eurosocialismo.”<sup>64</sup>

Con estas dos experiencias, sería arriesgado concluir, como bien apunta Anderson<sup>65</sup>, que en América Latina, sólo los regímenes autoritarios pueden imponer con éxito las políticas neoliberales. El caso de Bolivia, donde todos los gobiernos electos después de 1985, tanto el de Paz Zamora como el de Sánchez de Losada, continuaron con la misma línea, está ahí para comprobarlo. La era de la democracia que llegó a Bolivia a partir de 1982, será el punto de partida para la aplicación de las políticas neoliberales. Esta

---

<sup>63</sup> Véase, Perry Anderson, “Neoliberalismo: un balance provisorio”..., *op. cit.*, p. 24.

<sup>64</sup> *Ibidem*, pp. 24-25.

<sup>65</sup> *Ibidem*, p. 25.

experiencia demostrará que la dictadura militar no fue el único mecanismo para que el pueblo aceptará estas políticas, sino que existió un equivalente funcional: la hiperinflación.

Dicho análisis contrasta con el de James Petras, pues él considera que la implantación del neoliberalismo, particularmente, en América Latina fue producto de la dictadura militar apoyada por el gobierno de Estados Unidos, las agencias internacionales de préstamo, los bancos privados y una minoritaria élite económica y tecnocrática dentro de América Latina. Si bien, podemos estar de acuerdo en que este proceso neoliberal fue apoyado a nivel nacional e internacional como argumenta Petras, no podemos coincidir en que la dictadura militar fue el único medio para hacerlo posible. Como se dijo, la experiencia boliviana demuestra lo contrario.

De esta forma y con las experiencias chilena y boliviana, al final de la década de 1970 y principios de la de 1980 se ponen en práctica programas neoliberales en países del centro. Inglaterra, bajo el gobierno de Margaret Hilda Thatcher, Baronesa Thatcher de Kesteven, y en Estados Unidos, con Ronald Wilson Reagan. A partir de ese momento, la ola de derechización fue ganando sustento político aunado al que le garantizaba la crisis económica de finales de la década 1970. En 1982, Kohl derrotó al régimen social-liberal de Helmut Schmidt en Alemania, y también se alinearon a la ideología neoliberal. En 1983, en Dinamarca, Estado modelo del Bienestar escandinavo, cayó bajo el control de la coalición de derecha, el gobierno de Schluter. En seguida, casi todos los países el norte de Europa Occidental, con excepción de Suecia y de Austria, también viraron hacia o más hacia la derecha y al neoliberalismo.<sup>66</sup>

Todas las medidas implementadas habían sido concebidas como medios para alcanzar un fin histórico: la reanimación del capitalismo avanzado mundial, restaurando altas tasas de crecimiento supuestamente estables, como existían antes de la crisis de los años 1970. En este aspecto el cuadro se mostró sumamente decepcionante. Entre los años de 1970 y 1980 no hubo ningún cambio significativo en la tasa media de crecimiento, muy

---

<sup>66</sup> *Ibidem*, p. 17. “Si bien en un comienzo sólo los gobiernos de derecha se atrevieron a poner en práctica políticas neoliberales, poco tiempo después siguieron este rumbo inclusive aquellos gobiernos que se autoproclamaban a la izquierda en el mapa político. En los países del capitalismo avanzado, el neoliberalismo había tenido su origen a partir de una crítica implacable a los regímenes socialdemócratas. Sin embargo, y con excepción de Suecia y Austria, hacia fines de los años de 1980, la propia socialdemocracia europea fue incorporando a su programa las ideas e iniciativas que defendían e impulsaban los gobiernos neoliberales.” Para profundizar en cada una de las acciones de cada gobierno se puede revisar a Perry Anderson, quien hace una síntesis del modelo inglés, norteamericano y algunos gobiernos de derecha del continente europeo.

baja en los países de la OCDE en comparación con los ritmos presentados durante la larga onda expansiva en los años de 1950 y 1960.<sup>67</sup>

A pesar de esta profunda recesión a la cual entraron los países del centro en 1991, por extraño que parezca, el neoliberalismo ganó un segundo aliento. En Inglaterra con John Roy Major; en Italia, con Berlusconi; y en Suecia, la socialdemocracia, que había resistido el embate neoliberal en los años 1980, fue derrotada por un frente unido de la derecha en 1991. El socialismo francés salió desgastado de las elecciones de 1993 lo que se explica, por el efecto que tuvo la caída del comunismo en Europa Oriental y en la Unión Soviética en los años de 1989 a 1991. La victoria de Occidente en la Guerra Fría con el colapso de su adversario comunista no fue el triunfo de cualquier capitalismo, sino el de un tipo específico liderado y simbolizado por Reagan y Thatcher en los años de 1980.<sup>68</sup>

En cuanto a la experiencia en la periférica, particularmente en América Latina, también existe una segunda generación de gobiernos que apoyaron las políticas neoliberales.<sup>69</sup> Carlos Andrés Pérez en Venezuela; Carlos Menem, en Argentina; Fernando Collor, en Brasil; Alberto Fujimori, en Perú; Jaime Paz Zamora, en Bolivia; Luis La Calle, en Uruguay; y Carlos Salinas, en México, por mencionar algunos. Esto fue posible, según la hipótesis de Petras y Morley, porque la reproducción de los regímenes neoliberales se basa en la capacidad que tienen sus practicantes de distorsionar el proceso electoral por medio de un engaño consciente y donde se profundiza la brecha existente entre las preferencias de los votantes y las prácticas de la clase política, entre los procesos electorales y los resultados políticos.<sup>70</sup>

Una de las características de dicho periodo en América Latina fue la radicalización de las políticas implementadas durante la década de 1980: aceleradas formulas de privatización, mayores restricciones a las actividades sindicales, reducción de salarios y

---

<sup>67</sup> Véase, Perry Anderson, “Neoliberalismo: un balance provisorio”..., *op. cit.*, p. 20.

<sup>68</sup> *Ibidem*, p. 22.

<sup>69</sup> James Petras y Morris Morley realizan una clasificación de los regímenes políticos neoliberales en América Latina, dentro de los regímenes de la primera ola encontramos los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García, en Perú; Raúl Alfonsín, en Argentina; Miguel de la Madrid, en México; Julio Sanguinetti, en Uruguay; José Sarney, en Brasil. Para estos autores, esta primera ola comienza durante la década de 1980, coincidiendo, según ellos, con las transiciones negociadas de las dictaduras militares a los gobiernos civiles. Véase, James Petras; Morris Morley, “Ciclos políticos neoliberales: los ‘ajustes’ latinoamericanos a la pobreza y la riqueza en la era del libre mercado”, en Petras, James, *Neoliberalismo en América Latina. La izquierda devuelve el golpe*, Argentina, Homo Sapiens Ediciones, 1997, p. 144.

<sup>70</sup> Véase, James Petras; Morris Morley, “Ciclos políticos neoliberales: los ‘ajustes’ latinoamericanos a la pobreza y la riqueza en la era del libre mercado”..., *op. cit.*, pp. 146-147.

empleos para crear un ejército laboral de reserva de mano de obra barata.<sup>71</sup> Pero, la peculiaridad de este momento fue la creación de una base doctrinaria de dichas políticas denominada Consenso de Washington.

El economista inglés John Williamson fue el arquitecto de dicho decálogo. Williamson consideraba que las posturas sobre la política económica en Latinoamérica estaban cambiando radicalmente en todo el continente. Para comprobarlo, el Instituto de Economía Internacional (IEI) decidió convocar una Conferencia para que autores de diez naciones latinoamericanas detallaran lo que estaba sucediendo en sus respectivos países.<sup>72</sup> A partir de esto, surge el Consenso de Washington, el cual se organiza en torno a diez puntos, que son instrumentos de política económica que Estados Unidos consideraba importantes (para América Latina). Estos objetivos económicos estándar, como baja inflación, balanza de pagos viable, reforma fiscal y disciplina presupuestaria, deberían determinar la disposición de tales instrumentos de política económica.<sup>73</sup>

Los diez puntos son los siguientes<sup>74</sup>:

- 1) Disciplina presupuestaria.
- 2) Reorientación del gasto público hacia áreas de alto rendimiento económico y potencial.
- 3) Reforma fiscal.
- 4) Liberalización de las tasas de interés.
- 5) Tipo de cambio competitivo.
- 6) Liberalización comercial.
- 7) Política de apertura para la inversión extranjera directa.
- 8) Política de privatizaciones.

---

<sup>71</sup> Cfr., *ibídem*, p. 147.

<sup>72</sup> Cfr., Ramón Casilda, *América Latina: del Consenso de Washington a la agenda del Desarrollo de Barcelona*, [en línea], Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, 2005, Dirección URL: <http://www.cibera.de/fultext/7/7325/Casilda%20pdf.pdf>, [consulta: 27 de febrero de 2011].

<sup>73</sup> *Idem*.

<sup>74</sup> Los diez puntos fueron tomados de Ma. Guadalupe Huerta Moreno, “La política económica del Consenso de Washington y las reformas del Estado y administración pública en México: entre el límite y la contradicción”, [en línea], *IC Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública*, España, 2-5 de noviembre de 2004. Dirección URL: <http://www.iiij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/CLAD/CLAD%20IX/documentos/huerta.pdf>, [consulta: 27 de febrero de 2011].



- 9) Política desreguladora.
- 10) Garantías a los derechos de propiedad.

Por su parte, Vilas<sup>75</sup> considera que el Consenso de Washington se asentó sobre tres premisas básicas:

- 1) la reactivación económica de América y su crecimiento sostenido dependen de un fluido ingreso de inversiones extranjeras;
- 2) para atraer esas inversiones los gobiernos deben dar la más amplia libertad posible a los mercados, absteniéndose de intervenciones estatales puesto que éstas distorsionan los incentivos, desvían recursos e introducen irracionalidad; y
- 3) los gobiernos deben ejecutar amplias reformas político-industriales de 'libre mercado', eliminando controles, restricciones, subsidios y regulaciones.

A partir de esta base doctrinaria, particularmente en América Latina pero no exclusivamente, los regímenes neoliberales seguirán reproduciéndose,<sup>76</sup> implementando medidas nuevas o radicalizándolas; erosionando aún más el estándar de vida de las sociedades y provocando un aumento en el rechazo social. Tal fenómeno, que fue visible desde los inicios de dicha implantación, esencialmente expresado en movilizaciones sociales de diversa índole, lograría cambios significativos como el arribo de gobiernos progresistas, la cancelación de proyectos tendientes a privatizar diversos recursos de la naturaleza y la modificación de legislaturas. Y, aunque, este proceso de resistencia no es exclusivo de América Latina, las diferentes experiencias de lucha a lo largo y ancho del mundo encontrarán una serie de obstáculos que frenarán la consecución de objetivos.

### **1.1.1. El rol de la privatización**

Como bien se apuntó en el apartado anterior, la aplicación de políticas neoliberales engloba toda una serie de aspectos que modifican, en cierta forma, cuestiones políticas, económicas,

---

<sup>75</sup> Carlos M. Vilas, "La revalorización del Estado después del 'Consenso de Washington'. ¿Hacia atrás o hacia adelante?", en *Estado, democracia y populismo en América Latina*, Colombia, CLACSO, 2008, p. 150.

<sup>76</sup> En América Latina llegaron los gobiernos de Alberto Fujimori, en Perú; y Carlos Menem, en Argentina (ambos reelectos para segundas presidencias); Ernesto Zedillo, en México; Rafael Caldera, en Venezuela; Gonzalo Sánchez de Losada, en Bolivia; y Fernando Henrique Cardoso, en Brasil.

sociales y culturales. Sin embargo, para los objetivos de esta investigación, donde en el capítulo tercero abordamos la privatización del agua, consideramos de suma importancia realizar un apartado donde analicemos este aspecto – las privatizaciones-, particularmente el rol que ha jugado en la región latinoamericana.

Una primera cuestión que podemos tratar es el por qué surgió la empresa pública, para entender la función y las implicaciones de los procesos de privatización. La propiedad pública se originó casi siempre como resultado de las luchas populares contra los modelos exportadores liberales del siglo XIX y principios del siglo XX.<sup>77</sup> En América Latina, el desarrollo de estas empresas coincide con cuatro procesos particulares: 1) la industrialización; 2) los aumentos de las demandas sociales de servicios básicos; 3) el desarrollo de las industrias básicas, y; 4) el crecimiento de un mercado interno.<sup>78</sup>

Algunos elementos fundamentales del surgimiento del sector público pueden resumirse en los siguientes argumentos: primero, la aparición de las empresas públicas a partir de la nacionalización de las firmas extranjeras, mayoritariamente privadas. Dicha aparición es causada por la crisis y la incapacidad de los inversores de mantener o modernizar sus plantas o por desplazamiento de las propiedades de inversión a otras regiones o sectores económicos, permitiendo de ese modo el deterioro de servicios vitales.<sup>79</sup>

Un segundo elemento radica en las empresas privadas de servicios públicos, como son el agua, el gas y el transporte, que se negaban o eran incapaces de proporcionar servicios adecuados, o de ampliar los servicios prestados a una población en crecimiento, forzando al Estado a intervenir para llegar a regiones consideradas no redituables, para

---

<sup>77</sup> Cfr., James Petras; Steve Vieux, “Los peligros de la privatización”, en Petras, James, *Neoliberalismo en América Latina. La izquierda devuelve el golpe...*, *op. cit.*, p. 128. Los autores ejemplifican este argumento diciendo que en algunas ocasiones la ausencia de agua potable, de un sistema de transporte que fuera barato, la ausencia de inversiones privadas en los sectores estratégicos, eléctricos y energéticos, condujo a demandas públicas de intervención estatal para evitar epidemias, y para proporcionar la infraestructura necesaria para facilitar el comercio y las manufacturas.

<sup>78</sup> James Petras; Steve Vieux, “Los peligros de la privatización”..., *op. cit.*, p. 129. “Las empresas públicas fueron elementos esenciales para el desarrollo de la industria privada. El sector privado no podía o no quería financiar en la escala necesaria (y producir a nivel de costo) para satisfacer las crecientes necesidades de las nuevas clases productivas. Emergió una coalición de fuerzas nacionalistas industriales, que incluía a los sectores trabajador y medio de la clase burguesa, y que respaldó las inversiones públicas en gran escala y a largo plazo que proporcionaba energía a bajo costo y redes de transporte esenciales para la producción y la distribución.” Véase, James Petras; Steve Vieux, “Los peligros de la privatización”..., *op. cit.*, p. 129.

<sup>79</sup> Cfr., James Petras; Steve Vieux, “Los peligros de la privatización”..., *op. cit.*, p. 130.

proporcionar servicios a bajo costo y, de esta forma, estimular la producción de potenciales productores o consumidores.<sup>80</sup>

Un tercer elemento hace referencia a la emergencia de las empresas públicas en industrias estratégicas importantes para la seguridad nacional, de conservación o porque eran esenciales para suministrar ganancias de exportación para financiar un amplio aspecto de programas de envergadura para el desarrollo o, mejor aún, el crecimiento económico.<sup>81</sup>

Para Petras y Vieux, la propiedad pública a veces reemplazó a la actividad privada por razones pragmáticas antes que ideológicas, esto ocurrió en América Latina. Sin embargo, dicho sector pronto entró en crisis. Dos conjuntos de factores contribuyeron a esta crisis. Por un lado se encuentran los factores situados afuera de la organización formal de las empresas públicas; por el otro, están los factores que se refieren a la estructura interna y al funcionamiento de las empresas.<sup>82</sup>

Es claro que este proceso de crisis en los sectores públicos es un proceso mucho más complejo, por tal motivo no quisimos entrar de fondo a dicho análisis, pues consideramos que eso es parte de otra investigación; sin embargo, bien podemos apuntar que “las fuerzas políticas, económicas y sociales, tanto internas como externas, actuaron en tándem para generar la crisis del sector público. En la crisis misma estaba implícita la posibilidad de reformar el sector público, haciéndolo más sensible a la mayoría del pueblo o de desmantelarlo y de entregar sus recursos al sector privado minoritario.”<sup>83</sup> Siendo esta última, el camino elegido por muchos pues permitiría redinamizar la acumulación de capital a favor de un grupo de poder específico.

Es en ese sentido que David Harvey argumenta que la privatización es una de las características emblemáticas del proyecto neoliberal: su principal objetivo ha sido abrir nuevos campos para la acumulación de capital en terrenos que anteriormente eran relativamente considerados como fuera de límites para los cálculos de rentabilidad. Servicios públicos de todo tipo (agua, telecomunicaciones, transporte), suministro de asistencia social (viviendas sociales, educación, atención sanitaria, pensiones), instituciones

---

<sup>80</sup> *Ídem*.

<sup>81</sup> *Ibidem*, p. 131. Ejemplo de esto es, el petróleo, los minerales, la potencia hidroeléctrica, etc., que han proporcionado, a lo largo del tiempo y en muchas regiones, ganancias para financiar o subsidiar amplias inversiones privadas domésticas en las industrias locales.

<sup>82</sup> James Petras; Steve Vieux, “Los peligros de la privatización”..., *op. cit.*, p. 131.

<sup>83</sup> *Ibidem*, p. 135.

públicas (tales como universidades, laboratorios de investigación, prisiones), e incluso la guerra.<sup>84</sup>

En torno a la privatización en la periferia, ésta no es una decisión económica aislada, sino que más bien está relacionada con fuerzas políticas mayores que actúan por medio de aparatos coercitivos locales; entonces, ésta no es producto de la racionalidad del mercado.<sup>85</sup> El meollo de este proceso, particular pero no exclusivamente en América Latina, es que la privatización sirve como mecanismo de realización de excedentes, ello tanto por capitales locales como internacionales. La lógica en América Latina fue (y sigue siendo) la Inversión Extranjera Directa (IED), es decir, privatización y desnacionalización.

Esta desnacionalización provoca que las ganancias que se generan por parte de las empresas privatizadas, se las adjudiquen empresas extranjeras, las cuales transfieren el grueso al exterior, imposibilitando un derrame económico en el espacio donde las obtiene.<sup>86</sup> Con esto, los procesos privatizadores en la periferia -pero no exclusivamente-, deben ser entendidos como parte de una estrategia global que busca la acumulación de capital por sobre los intereses y bienestar de la sociedad. De igual forma pueden ser entendidos como “un movimiento de *contrarreforma* en contra de las *continuidades históricas* y parte de un esfuerzo general destinado a subvertir el orden social existente asociado con el *welfare state*, la economía mixta, y los movimientos sociales basados en la cuestión de clase.”<sup>87</sup>

La privatización como acto político refleja, entonces, ciertas cuestiones: “que no tiene poco o ningún ‘valor intrínseco’ como estrategia económica nacional y que sin duda no contribuye en nada a la creación de *nuevas* fuerzas productivas.”<sup>88</sup> Siendo ésta carente de una base social estable necesaria para sostener una oposición política concertada. Un claro ejemplo de esto es la privatización que se realizó con el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA), en Cochabamba, Bolivia, es decir, una privatización que implicó la transferencia de la empresa pública, financiada por los contribuyentes, a una

---

<sup>84</sup> David Harvey, “El neoliberalismo como destrucción creativa”, [en línea], *Rebelión*, 08 de abril de 2008. Dirección URL: <http://www.rebelion.org/noticias/2008/4/65709.pdf>, [consulta: 17 de julio de 2012].

<sup>85</sup> James Petras; Steve Vieux, “Los peligros de la privatización”..., *op. cit.*, p. 125.

<sup>86</sup> Para mayor análisis sobre este proceso, se puede consultar, Gian Carlo Delgado Ramos, *Imperialismo tecnológico y desarrollo en América Latina*, Panamá, Ruth Casa Editorial, Editorial Científico-Técnica, 2011, 226 pp.

<sup>87</sup> James Petras; Steve Vieux, “Los peligros de la privatización”..., *op. cit.*, p. 128.

<sup>88</sup> *Ibidem*, p. 126.

transnacional. Dicho suceso sería una de las chispas que encenderá toda la movilización que se verá a lo largo de principios del siglo XXI y de lo cual hablamos más adelante.

Al tomar en cuenta los aspectos que alentaron las crisis en los sectores públicos, podemos darnos cuenta que la justificación de la privatización se relaciona más estrechamente con la interpretación doctrinal que con las realidades contemporáneas.

Los argumentos puramente económicos sobre la racionalidad del mercado y sobre la elección racional tienen poco poder explicativo histórico y sociológico en cuanto a la identificación del encuadre político en el que se formulan e implementan las decisiones macroeconómicas. [...] Paradójicamente, el mismo *doctrinarianismo* de los ideólogos del libre mercado se manifiesta en sus esfuerzos por explicar el desarrollo de las empresas públicas. Imputan los orígenes de la empresa pública a la ideología, olvidando las experiencias históricas y las circunstancias a partir de las cuales surgió el sector público.<sup>89</sup>

En cuanto a las estrategias de privatización, podemos citar tres: i) resultado de la convicción ideológica, como en el caso de las dictaduras del Cono Sur a mediados de la década de 1970; ii) resultado del deseo de ganar el favor y demostrar obediencia a las agencias de préstamo internacionales, como ocurrió en el caso de muchos regímenes electorales latinoamericanos de la década de 1980 y más tarde en el caso de Europa del Este y en las repúblicas de la ex-URSS; y iii) una preferencia decidida de una nueva clase política de capitalistas orientada a la exportación y vinculados con los circuitos internacionales con el objeto de expandir sus imperios y atraer a socios inversionistas foráneos.<sup>90</sup>

Sin embargo, a pesar de cualquier estrategia empleada para recurrir a la privatización, el punto importante de todo proceso se arraigó en el autoritarismo. Y es que, por un lado, la privatización nunca fue parte de una consulta pública y, por el otro, la decisión de privatizar “tampoco fue resultado de la *demostrada* eficiencia económica del sector privado, sino que más bien fue resultado de políticas conducidas de la doctrina por economistas y generales convencidos de sus verdades económicas.”<sup>91</sup>

Las políticas de privatización no sólo ejercieron, y aún ejercen, un impacto sobre la economía, sino también sobre la totalidad de la sociedad, sobre el sistema político, la estructura de clase, el mercado doméstico y los sistemas de comunicación; en suma, la democracia, la movilidad social y el desarrollo económico. Finalmente, cabe recordar lo

---

<sup>89</sup> *Ibidem*, p. 129.

<sup>90</sup> *Ibidem*, p. 135.

<sup>91</sup> *Ibidem*, p. 136.

siguiente: “la privatización fue un proceso de elite, internacional y altamente politizado, en contraste con el proceso de construcción de las empresas públicas, que fue popular, nacional y pragmático,”<sup>92</sup> principalmente en América Latina.

### **1.1.2. Un balance**

El proceso de neoliberalización implementado desde la década de 1970, fue un proceso entrecortado e irregular desde el punto de vista geográfico; asimismo, fuertemente influenciado por estructuras de clase y otras fuerzas sociales que se mueven a favor o en contra de sus propuestas centrales dentro de las formaciones estatales particulares e incluso dentro de sectores en particular.<sup>93</sup> Por tal motivo su éxito o fracaso depende del visor desde el cual se observe. Así, el neoliberalismo será un inmenso éxito visto desde las clases altas, debido a que se ha restaurado la posición de clase de las élites gobernantes, se han creado condiciones para la formación de la clase capitalista, o se ha presenciado un masivo reordenamiento interno de las estructuras de clase beneficiando a grupos particulares. Pero, si se observa desde el sistema óptico de la inmensa mayoría de la población, el neoliberalismo es un fracaso. No se ha conseguido ninguna revitalización básica del capitalismo de los países del centro, sino todo lo contrario, se han creado sociedades marcadamente más desiguales y fragmentadas, aunque no tan desestatizadas como se lo habían propuesto, una mayor marginación de masas y ruptura del tejido social, una disgregación de los mecanismos de integración, una capitulación de la soberanía nacional, de degradación de la política; todo particularmente exacerbándose en la periferia. No obstante las contradicciones son observables incluso hacia adentro del corazón mismo de las economías centrales: Estados Unidos.

Así entonces, en América Latina se deterioró la situación laboral, aumentaron las tasas de desempleo, cayeron los salarios, se incrementó la informalidad y la precarización del trabajo entrando en crisis las formas tradicionales de organización sindical y

---

<sup>92</sup> *Ídem.*

<sup>93</sup> *Cfr.*, David Harvey, “El neoliberalismo como destrucción creativa”..., *op. cit.* [consulta: 17 de julio de 2012].

negociación colectiva.<sup>94</sup> No obstante, estos procesos no serán reducidos a la región latinoamericana, o a toda la periferia, sino que, con el paso del tiempo, como se ha dicho, se presentarán situaciones similares en los países del centro.

Göran Therborn argumenta que el neoliberalismo se agotó como proyecto ideológico y político definido de forma estricta.

La posibilidad misma de su continuidad se vincula no tanto al carácter unitario de su proyecto político y sí a sus lazos de articulación con el gigantesco proceso de cambio estructural producido en el mundo capitalista. Es decir, con las transformaciones ocurridas en el triángulo institucional del capitalismo (Empresas, Mercados y Estados), y con las variaciones en el tamaño relativo de cada una de estas tres esferas.<sup>95</sup>

Así, a pesar de que este proyecto esté agotado ideológica y políticamente su continuidad depende de los diferentes lazos entre las empresas, los mercados y los Estados. Al parecer, el papel de las empresas dominantes ha declinado junto con su poder de mercado individual. El poder de los Estados en regular sus economías también ha declinado en función del surgimiento, por primera vez, de un mercado genuinamente global. Por tal motivo, es obvio que este cambio cree las condiciones más propicias para la afirmación del neoliberalismo en ciertas regiones del mundo.<sup>96</sup>

James Petras argumenta que, contrariamente a los principios declarados por los defensores del libre mercado, las políticas de los regímenes neoliberales violan frecuentemente la doctrina. Es decir, la intervención estatal no disminuyó; lo que cambió en realidad fue el tipo y la dirección de la intervención estatal. Así, el Estado, en vez de intervenir para nacionalizar, intervino para privatizar. Mientras que los bancos privados acumulaban deudas, el Estado intervenía para “socializar” las deudas, convirtiéndolas de privadas a públicas. En resumen, la acción estatal tampoco se limitó a un impulso inicial: el Estado siguió interviniendo, definiendo los términos de las inversiones privadas, las apropiaciones extranjeras de las empresas locales, etc.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Cfr., Alfredo Calcagno, “El ajuste estructural, costo social y modalidades de desarrollo en América Latina”, en Sader, Emir (comp.), *El ajuste estructural en América Latina costos sociales y alternativas*, Buenos Aires, CLACSO, 2001, p. 80. Alfredo Calcagno hace toda una revisión de las tasas de desempleo, pobreza, educación, salud, salarios, etc., comparando diferentes cifras de diferentes períodos.

<sup>95</sup> Göran Therborn, “La trama del neoliberalismo: mercado, crisis y exclusión social”, en Sader, Emir; Gentili, Pablo (comp.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social... op. cit.*, p. 93.

<sup>96</sup> Véase, Perry Anderson, “La trama del neoliberalismo: mercado, crisis y exclusión social en Sader, Emir; Gentili, Pablo (comp.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social... op. cit.*, pp. 98-99.

<sup>97</sup> Cfr., James Petras, “Los fundamentos del neoliberalismo”..., *op. cit.*, pp. 17-18.

Asimismo, no se produjo una desregulación, se implantó un nuevo “régimen regulador”, cuyos componentes y políticas difieren de las versiones anteriores. El nuevo régimen regulador internacional está constituido por banqueros internacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, funcionarios jerárquicos del gobierno de Estados Unidos y las elites exportadoras y tecnocráticas de Latinoamérica.<sup>98</sup>

Otro problema fundamental del neoliberalismo es que “no es capaz de crear una política estable predecible con algún despegue previsible hacia el crecimiento sostenido y beneficios incrementados que pueda permitir una consolidación a largo plazo.”<sup>99</sup> Por tal motivo, las respuestas básicas que deben responder los partidarios de dicho modelo es, por un lado, ¿por qué el neoliberalismo entra en una crisis más profunda con cada nueva oleada de ajustes en vez de producir un despegue económico y prosperidad?; y por el otro, ¿por qué seguir implementado nuevas oleadas de ajustes estructurales, si dichas políticas están derivando en resultados contrarios a los esperados?

Con todo, un hecho es claro, y es que aunque los regímenes que favorecen la tendencia neoliberal han revelado una pavorosa capacidad de reproducirse, “eso invariablemente ha conducido a una mayor radicalización de las medidas de ‘ajuste’ y ‘estabilización’ acompañadas de un lento pero seguro aumento y vinculación de los movimientos de oposición sociopolítica que cuestionan su dominio y su ‘modelo’.”<sup>100</sup>

El impacto de las reformas neoliberales se ha manifestado en la profundización de la pobreza y la miseria, el aumento de las tasas de desempleo, el surgimiento de nuevos conflictos sociales, la desestructuración del Estado y debilitamiento de los escasos niveles de democracia. Todos estos factores coadyuvan, en cierta forma, a la emergencia de una resistencia a las políticas neoliberales. Para América Latina, dicha resistencia se ha definido como una lucha en defensa de la nación, de sus recursos naturales, de su economía, de su soberanía política y como reconstitución del pacto social.<sup>101</sup>

También otras regiones del mundo son marcadas por la resistencia social, cuyos momentos más cruciales estuvieron en las movilizaciones de Seattle en noviembre de 1990,

---

<sup>98</sup> *Ibidem*, p. 27.

<sup>99</sup> James Petras, Morris Morley, “Ciclos políticos neoliberales: los ‘ajustes’ latinoamericanos a la pobreza y la riqueza en la era del libre mercado”, en Petras, James, *Neoliberalismo en América Latina...*, *op. cit.*, p. 161.

<sup>100</sup> *Ídem*.

<sup>101</sup> *Cfr.*, Miguel Ángel Urrego Ardilla; Javier Torres Parés (editores), *La Nación en América Latina. De su invención a la globalización neoliberal*, México, Instituto de Investigaciones Históricas/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2006, p. 10.



de Praga en el año 2000 y Génova en 2001; y, actualmente, los movimientos en Europa (España, Francia, Grecia, etc.), por ejemplo.

## 1.2. Resistencia a las reformas económicas neoliberales

Paralelamente a la consolidación del neoliberalismo se produce la emergencia de movimientos sociales en la mayor parte de la periferia, aunque no exclusivamente; algunas veces acompañados de grandes movilizaciones de masas o de la acción de grupos radicales. La emergencia de esta movilización social plantea reconstruir el “contrato social”, que fundamentó las naciones a lo largo del siglo XX, y que corresponde a la confluencia de varios procesos políticos, económicos y culturales que nada tienen que ver con un retorno al pasado como reacción a la globalización.<sup>102</sup>

A finales del siglo XX, Perry Anderson se cuestionaba acerca del impacto que iba a tener la implantación del neoliberalismo en la sociedad latinoamericana; si estas políticas iban a encontrar más o menos resistencia que la que encontraron en Europa Occidental y en la antigua URSS. “¿Será el populismo –o el laborismo- latinoamericano un obstáculo más fácil o más difícil para la realización de los planes neoliberales que la socialdemocracia reformista o el comunismo?”<sup>103</sup>

Aunque ya habían existido algunas situaciones en donde diversos sectores de las sociedades luchaban en contra de las políticas neoliberales<sup>104</sup> incorporando (auto)críticas fundamentales a la izquierda tradicional (levantamientos indígenas; la acción masiva de los trabajadores en toda la región latinoamericana en marzo y abril de 1995;<sup>105</sup> algunas

---

<sup>102</sup> Cfr., Pablo Dávalos, “Movimientos sociales y la razón liberal: los límites de la historia”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *Observatorio Social de América Latina*, Año VII, No. 20, 2006. Dirección URL: <http://www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal20/davalos.pdf>, [consulta: 16 de julio de 2012].

<sup>103</sup> Perry Anderson, “Neoliberalismo: un balance provisorio”..., *op. cit.*, p. 26.

<sup>104</sup> En el contexto contemporáneo de deuda y ajuste, el primer estallido de revuelta callejera registrado fue en Perú en 1976. En años siguientes hubo estallidos esporádicos en diversos países de África y Asia, y después una verdadera ola de revueltas durante los años de crisis, 1982-1983, especialmente en Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Perú). Una segunda oleada de revueltas conmocionó a Latinoamérica durante los años 1985-1986, seguida de estallidos esporádicos en otras partes del mundo y después en Venezuela, una serie de estallidos que dejaron como saldo más de 300 muertos. Véase, Petras, James; Veltmeyer, Henry, “Estructura social y cambio en Latinoamérica” en Petras, James, *Neoliberalismo en América Latina. La izquierda devuelve el golpe...*, *op. cit.*, p. 100.

<sup>105</sup> Algunos países donde se llevó a cabo fue Bolivia, Argentina, Venezuela, Chile, Ecuador, Uruguay, Nicaragua y México. James Petras pone como ejemplo lo acaecido en Bolivia: “estas acciones masivas incluyeron la declaración de una huelga general, orquestada por la poderosa Confederación del Trabajo

situaciones en las zonas rurales, como el desarrollo de numerosas acciones de productores y trabajadores organizadas con el objetivo de la resistencia y la protesta política,<sup>106</sup> etc.), será hasta principios del siglo XXI, cuando en el departamento de Cochabamba, Bolivia, ocurra una situación extremadamente violenta del Estado contra los movimientos indígenas y populares que dio un resultado diferente al que esperaba la oligarquía boliviana, es decir, en lugar de diseminar y, hasta, desaparecer la movilización social, ésta se unificó y atrajo a otros sectores con demandas históricas diferentes (cocaleros, aymaras, etc.). Ello desembocó en la expulsión de una transnacional y en la modificación de la ley que privatizaba el agua. Dicho suceso es uno de los objetos centrales de esta investigación.

James Petras considera que, con el propósito de evaluar las fuerzas sociales y políticas que se generan como resistencia a las reformas económicas neoliberales es importante examinar la estructura subyacente de las relaciones de clase, ello porque, los cambios de esta estructura han sido significativos con la aplicación de estas políticas.<sup>107</sup> Para el autor, como para muchos otros enmarcados en la teoría marxista, el elemento más importante de esta estructura de clase es la *relación capital-trabajo*, que abarca tanto a aquellos que son dueños y controlan los medios de producción como a los que han sido desposeídos de todo medio de producción salvo la capacidad de ofrecer su fuerza de trabajo a cambio de un salario.<sup>108</sup>

En cualquier caso, el núcleo de la clase capitalista, en cada uno de los países de la región latinoamericana, está compuesto por individuos conectados con los grandes grupos económicos, un complejo conglomerado de bancarios, industriales y agro-exportadores. Y

---

Boliviana (COB). A pesar del ‘entendimiento’ al que llegaron la COB y el gobierno el 29 de abril, que condujo entre otras cosas a la finalización de la huelga de maestros de 50 días de duración que había obligado al gobierno a arrestar a cientos de líderes sindicales y a declarar el estado de sitio, las organizaciones de trabajadores afiliados afirmaron su compromiso de ‘continuar la lucha en contra de las políticas neoliberales (NICANET 15/5/95)’.” Véase, Petras, James; Veltmeyer, Henry, “Estructura social y cambio en Latinoamérica”..., *op. cit.*, p. 102.

<sup>106</sup> El tema central dentro de estas acciones ha sido su forma de lucha, que es apropiada a sus condiciones y para la cual generan recursos y respaldo de otras clases. Ejemplo de ello es la creación de la Federación de Regantes en Cochabamba.

<sup>107</sup> Cfr., James Petras; Henry Veltmeyer, “Estructura social y cambio en Latinoamérica”..., *op. cit.*, pp. 83-84.

<sup>108</sup> Aunque en regiones de América Latina esto no siempre sea así, pues en algunas comunidades indígenas, sus integrantes no cambian su capacidad de trabajo por un salario, sino que ocupan esta capacidad para autosobrevivir. Lo que queda claro, es que aun así tales comunidades están subordinadas a la lógica del capital.

que dicho grupo puede identificarse de forma sencilla, pues han sido los favorecidos con las reformas de libre comercio.<sup>109</sup>

Por otro lado la clase trabajadora o las masas marginadas, como lo menciona Atilio Borón, “abarca la enorme mayoría de la población económicamente activa, pero adopta diferentes formas y en muchos países ha sido sustancialmente reestructurada como resultado de condiciones inducidas políticamente y de condiciones políticas”<sup>110</sup> asociadas a las políticas de ajuste estructural. Petras habla de los sectores formal e informal del campesinado y proletariado rural. Más allá de la clasificación que pueda darse a las masas marginadas, el hecho es que las políticas neoliberales han generado desigualdades entre los diferentes grupos y clases sociales, lo que ha empujado la unificación de sectores subalternos de la sociedad para demandar la reducción de la pobreza y expresar el hartazgo que se tiene sobre el despojo y saqueo de las riquezas naturales y la explotación del trabajo.

Por otra parte, además de estos dos universos distintos de los que habla Borón, y que bien explica James Petras, se presentaron diversos fenómenos consecuencia de la debilitada integración social. Es decir, se disolvieron los lazos societales y la trama de solidaridades preexistentes trayendo como resultado una sociedad en donde las tradicionales estructuras de representación colectiva de los intereses populares se encuentran en crisis, es decir, partidos políticos y sindicatos. Estas estructuras percibieron cómo su eficacia reivindicativa y su credibilidad social fueron erosionadas por las tendencias desquiciantes del capitalismo neoliberal en tanto que destruyó precisamente las arenas en las cuales tanto unos como otros desarrollan sus iniciativas.<sup>111</sup> Este fenómeno, es visible en el caso estudiado dentro de este trabajo: durante la denominada “Guerra del Agua” acaecida en Cochabamba, los diferentes sectores ya no acudieron a las instancias o estructuras existentes (sindicatos y otras organizaciones creadas por el Estado boliviano)

---

<sup>109</sup> Cfr., James Petras; Henry Veltmeyer, “Estructura social y cambio en Latinoamérica”..., *op. cit.*, p. 84. Asimismo, considera Petras, existe, además de la clase de capitalistas endógenos, en cada país, capitalistas transnacionales conectadas con instituciones de capital tales como el FMI; y que forma una poderosa facción de la clase capitalista en general, con recursos y conexiones que constituyen un factor significativo de la dinámica interna y política de la lucha de clases. Véase, Petras, James, “Estructura social y cambio en Latinoamérica”..., *op. cit.*, pp. 84-85.

<sup>110</sup> James Petras; Henry Veltmeyer, “Estructura social y cambio en Latinoamérica”..., *op. cit.*, p. 89. Para profundizar en el análisis del impacto que tuvieron estas políticas de ajuste estructural durante la década de 1990, se puede revisar el artículo de James Petras, “Estructura social y cambio en Latinoamérica”, donde se hace una revisión comparativa de la estructura social en América Latina antes y después de la implementación del neoliberalismo.

<sup>111</sup> Atilio Borón, “La sociedad civil después del diluvio neoliberal”..., *op. cit.*, p. 83.

para la solución de los llamados tarifazos y problemas en la obtención y distribución de agua, sino que crearon nuevos mecanismos y/o espacios para buscar soluciones a sus problemas, como lo es la *Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida*.

Si uno observa las realidades nacionales a lo largo de toda América Latina durante la implementación de estas políticas de ajuste estructural, nos podemos percatar que las demandas generadas en y de la sociedad, habida cuenta de las injusticias y privaciones provocadas, no sólo por las políticas de ajuste y la recomposición global, sino también por las crisis capitalistas anteriores y por los procesos de conquista y colonización, están originando “un verdadero aluvión de reivindicaciones que el mercado ni desea –ni puede, aunque lo quiera- resolver.”<sup>112</sup> Dichas demandas y/o reivindicaciones por parte de la sociedad ante el Estado son contenedoras de una inmensa creatividad y originalidad en cuanto a sus formas de manifestación y expresión. Es de subrayar que la protesta social encuentra en la etapa “democrática” de los Estados latinoamericanos un clima “tolerante” y “comprensivo” que facilita su reproducción, contrario a lo experimentado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, la misma crisis y el modelo de ajuste neoliberal reducen notoriamente las capacidades estatales para producir las políticas necesarias para contrarrestar o compensar los efectos desintegradores de la crisis.<sup>113</sup> Es por ello que muchos movimientos sociales, particularmente indígenas, pero también urbanos populares y campesinos, encontrarán en las autonomías *de facto* una solución a su situación actual.

Este nuevo escenario vendrá a desmitificar lo que pensaban algunos autores latinoamericanos a finales de la década de 1990 a cerca de la existencia del riesgo de una reinstalación de una dictadura militar de nuevo tipo, basada en un fundamentalismo nacional-populista que se posesionaría de las grandes masas pauperizadas por el ajuste y condenadas a la marginalidad por las democracias capitalistas “realmente existentes” de América Latina.

Los levantamientos indígenas-populares en Bolivia: la “Guerra del Agua” en Cochabamba, y la “Guerra del Gas”, en 2000 y 2003, respectivamente, y las luchas del movimiento cocalero en el Chapare boliviano; las insurrecciones indígenas y populares en Ecuador, impulsadas por la CONAIE; las movilizaciones en defensa de sus derechos en

---

<sup>112</sup> *Ibidem*, p. 86.

<sup>113</sup> *Ídem*.

Perú y Chile; la rebelión argentina en diciembre del 2001 ante la quiebra de la economía de ese país; las movilizaciones campesinas en Paraguay y su rol en la caída del presidente Cubas Grau; los levantamientos populares en Atenco y Oaxaca, pusieron en jaque en un grado u otro a los diversos gobiernos neoliberales, lográndose instalar en algunos países latinoamericanos gobiernos progresistas.

Borón considera que era esencial constituir una genuina alternativa de recambio al neoliberalismo dominante e insistía que esa tarea sólo podría realizarla un conjunto plural de fuerzas que sea capaz de reconciliar los ideales fundamentales de justicia, libertad, democracia e igualdad con las necesidades prácticas de reconstrucción económica y social.<sup>114</sup>

Ante esto, y ante los procesos vistos a lo largo de la primera década del siglo XXI, Lucio Oliver argumenta que se generaron nuevas fuerzas políticas dominantes, las cuales han expresado tanto la acción y la voluntad de individuos asociados como la confluencia de sectores, grupos, comunidades y/o clases sociales ubicados en determinados campos sociales y políticos en que se organizan las relaciones de poder en las sociedades. Asimismo, la heterogeneidad de las sociedad y la diversidad de individuos y clases confluyó en determinadas relaciones y campos de fuerzas, establecidas histórica y políticamente, que definen quién manda, quién dirige, cómo lo hace, qué adhesiones sociales, políticas y culturales tiene y hasta dónde llega su poder.<sup>115</sup>

A pesar de estos nuevos procesos, en algunos países latinoamericanos (México, Colombia), la fórmula de campañas electorales populistas y regímenes de libre mercado de la política neoliberal triunfó, ello a pesar de la existencia de movimientos sociales que confrontaban las políticas neoliberales.

Por otra parte, considerando que la resistencia popular y la oposición cobran múltiples formas, para Petras, resulta claro que estas dinámicas derivan de condiciones de clase productiva, es decir, explotación y marginalidad, y no de políticas localizadas de género y de identidad étnica. Argumento que será contrapuesto con la realidad emergente a principios del siglo XXI. En Bolivia se llevarán diferentes sucesos de resistencia a las

---

<sup>114</sup> *Ibidem*, p. 87.

<sup>115</sup> Lucio Oliver, “Discutir la coyuntura en América Latina”, *Política y cultura*, núm. 37, Distrito Federal, 2012, p. 122. Dirección URL: <http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?;Cve=26723182006>, [consulta: 08 de febrero de 2013].

políticas neoliberales a partir de reivindicaciones culturales e identitarias, étnicas y nacionales.

Entonces, la emergencia de la protesta de los movimientos sociales de oposición y resistencia se relacionan con y surgen de los costos económicos del ajuste estructural, pero también es cierto que las reivindicaciones culturales, que son históricas, serán un factor clave debido a que las políticas neoliberales no sólo pauperizaron a las sociedades latinoamericanas (poniendo énfasis en el caso boliviano y ecuatoriano), sino que la dinámica de individualización afectó por mucho las identidades colectivas y comunitarias, usos y costumbres de los pueblos, y no sólo en América Latina.

Diversos movimientos desarrollarán una política de revolución social donde se pretendía, y pretende, incluir a todos los sectores de la población. Proyectos no carentes de limitaciones y contradicciones, situación que provoca que diversos movimientos lleven a cabo sus programas de acción a un nivel mucho más reducido, siendo su propia comunidad en algunos casos. Empero, habrá otros movimientos que logren un cambio, si no estructural, en estricto sentido, sí de mayor redistribución de la riqueza, de implementación de políticas tendientes a favorecer al ancho de la sociedad, así como de construcción de una agenda que represente una posibilidad para reconstruir los horizontes emancipatorios.<sup>116</sup>

[...] a partir de 1998, los vientos cambiaron en dirección opuesta con la elección de Chávez en Venezuela, seguido por el lanzamiento de los Foros Sociales Mundiales en Porto Alegre en 2001, la victoria electoral de Lula en 2002, y otras conquistas para la izquierda y el centro-izquierda en Argentina, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y finalmente Paraguay. MECOSUR se amplió para incorporar a Venezuela, Bolivia y Ecuador, mientras la Alternativa Bolivariana para las Américas –ALBA– propició una nueva agrupación de izquierdas del eje andino-caribeño.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> David Harvey considera que los movimientos han producido una abundancia de ideas respecto a alternativas. Algunos tratan de desvincularse total o parcialmente de los poderes abrumadores del neoliberalismo y del neoconservadurismo. Otros buscan justicia social y medioambiental globales mediante la reforma o disolución de poderosas instituciones tales como el FMI y la OMC, y el Banco Mundial. Otras destacan una recuperación de los bienes comunes, mostrando con ello profundas continuidades con luchas de hace tiempo, así como con luchas libradas a lo largo de la amarga historia del colonialismo y el imperialismo. Algunas conciben una multitud en movimiento, o un movimiento dentro de la sociedad civil global, para enfrentar a los poderes dispersos y descentrados del orden neoliberal, mientras otros buscan de un modo más modesto experimentos locales con nuevos sistemas de producción y consumo animados por diferentes tipos de relaciones sociales y prácticas ecológicas. También existen las que confían en estructuras más convencionales de partidos políticos con el objetivo de obtener el poder del Estado como un paso hacia la reforma global del orden económico. Véase, David Harvey, “El neoliberalismo como destrucción...”, *op. cit.* [consulta: 17 de julio de 2012].

<sup>117</sup> Emir Sader, “América Latina ¿El eslabón más débil? El neoliberalismo en América Latina”, *Rebelión*, p. 13. Dirección: <http://www.rebelion.org/docs/78055.pdf>. [consulta: 18 de julio de 2012].

Es un hecho, lo difícil que resulta, aunque no imposible, poder llevar a cabo cambios en la estructura política, social y económica de cada una de las naciones, lo cual representa para la sociedad, al igual que para los movimientos sociales, crear e imaginar nuevos proyectos que cambien dicha realidad. Al revisar los procesos latinoamericanos, nos damos cuenta que existen diversas experiencias comunitarias que están explorando vías y en un grado u otro cambiando su situación.





## 2. Bolivia: el preludeo a la conflagración

Cuentan que hace un siglo el dictador Mariano Melgarejo obligó al embajador de Inglaterra a beber un barril entero de chocolate, en castigo por haber despreciado un vaso de chicha. El embajador fue paseado en burro, montado al revés, por la calle principal de La Paz. Y fue devuelto a Londres. Dicen entonces que la reina Victoria, enfurecida, pidió un mapa de América del Sur, dibujó una cruz de tiza sobre Bolivia y sentenció: «Bolivia no existe». Para el mundo, en efecto, Bolivia no existía ni existió después: el saqueo de plata y, posteriormente, el despojo del estaño no han sido más que el ejercicio de un derecho natural de los países ricos.  
Eduardo Galeano, *Las venas abiertas de América Latina*

Bolivia, un país construido por oligarquías señoriales y liberales, a través de un conjunto de instituciones económicas, políticas, sociales y, hasta, ideológicas, que expropiaron los territorios de pueblos y culturas no occidentales, tiene una larga historia de dominación, pero también de luchas y presencia popular conflictiva, subordinada, rebelde y, en ciertas ocasiones, autónomas.<sup>118</sup>

Bolivia como cualquier otro país periférico llegó a ser un país agobiado en lo económico por la recesión, la deuda externa y la inflación; en lo político por la inestabilidad gubernamental; y en lo social por la pobreza, la exclusión y marginación. Difícilmente durante los siglos XIX y XX se pudieron conciliar espacios de nación y Estado, una concepción de progreso, crecimiento económico y desarrollo, así como la homogeneización de su población, supuestamente buscada por las élites bolivianas a pesar de todas las políticas implementadas por los diferentes gobiernos.

A finales de la década de 1980 y principios de 1990, se esperaba, particularmente por parte de la oligarquía boliviana, que la modernización (a partir de la implementación de políticas neoliberales) del país pusiera punto final a un largo periodo de rupturas sucesivas inaugurado desde el siglo XIX con la independencia política. La experiencia del periodo anterior, la del Estado originado con la Revolución Nacional en 1952, encabezada por el MNR, no pudo superar los principales problemas presentes en la sociedad: pobreza, marginación, discriminación, explotación, etc.

Para la oligarquía boliviana, la reforma neoliberal de su economía y la transformación de su sistema político autoritario a democrático, fueron los ejes que impulsaban este proceso de supuesta modernización en tanto que estimularían los cambios

---

<sup>118</sup> Álvaro García Linera; Raquel Gutiérrez; Raúl Prada; Luis Tapia, *El retorno de la Bolivia plebeya*, Bolivia, Muela del Diablo, 2007, p. 18.

tanto en la sociedad boliviana como en el Estado que en principio la representa. Se empezarán a repetir y ahondar conocidas contradicciones sociales históricas, léase diferencias étnicas y regionales, por no mencionar diferentes sistemas de producción y reproducción de la vida social, económica y política de los diferentes grupos sociales existentes en el país andino.

Lo que se pretendía, supuestamente, era sacar al país de la inopia económica en que se encontraba. Así, en 1985, se reformó radicalmente la economía del país. Mientras que el sistema político se había transformado tres años antes, pasando de gobiernos dictatoriales a gobiernos elegidos democráticamente.

[...] Con esta reforma [neoliberal], se canceló un modelo económico cimentado en los cambios que produjo la Revolución Nacional y que estuvo vigente desde los años 50. Con el tiempo, ese modelo resultó inadecuado para sortear la crisis económica, combatir la inflación, reestructurar la deuda externa y promover la reactivación productiva. El carácter neoliberal de la reforma económica ha modificado drásticamente el papel gestor y empresarial del estado (*sic*), creando un nuevo contexto para la iniciativa privada, caracterizado principalmente por el libre juego de las fuerzas del mercado y la privatización de las empresas estatales.<sup>119</sup>

Los cambios del Estado y la sociedad bolivianos actuaron sin embargo en dos lógicas distintas, como sucedió en muchos casos latinoamericanos. En tanto que, las reformas dirigidas al Estado se enmarcan en proyectos o modelos diseñados con anticipación y legitimados mediante decisiones del poder político, la sociedad boliviana se transformó en un plano de notoria autonomía frente a éste y en función de sus propias contradicciones y diferencias.<sup>120</sup> Con estos nuevos cambios, se potenció y profundizó el renacimiento de hábitos, valores y símbolos históricos que representaban y representan la pluralidad cultural del país y donde se reivindicaron territorios como espacios de socialización y reproducción de la vida. Ello fue y sigue siendo una constante en la resistencia social ante las diferentes políticas implementadas “desde arriba”.

De esta forma, considerar el concepto de sociedad abigarrada, desarrollado por René Zavaleta, para describir a la sociedad boliviana, no sólo en este proceso neoliberal, sino como característica endémica de la región latinoamericana resulta esencial a todas luces.

---

<sup>119</sup> Mario Miranda Pacheco, *Bolivia en la hora de su modernización*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, p. 14.

<sup>120</sup> *Ibidem*, p. 15.

Si se dice que Bolivia es una formación abigarrada es porque en ella se han superpuesto las épocas económicas (las del uso taxonómico común) sin combinarse demasiado, como si el feudalismo perteneciera a una cultural y el capitalismo a otra, y ocurrieran sin embargo en el mismo escenario; o como si hubiera un país en el feudalismo y otro en el capitalismo, superpuestos y no combinados.<sup>121</sup>

Zavaleta hace mención de una sociedad compleja, heterogénea, híbrida, formada en innumerables contingencias étnicas y clasistas, políticas y económicas, religiosas, migratorias y de otra índole.<sup>122</sup> Explica que cada valle es una patria, en un compuesto en el que cada pueblo viste, canta, come y produce de un modo particular y todos hablan lenguas y acentos diferentes sin que unos ni otros puedan llamarse por un instante la lengua universal de todos.<sup>123</sup> Se trata de una realidad que por tanto genera procesos altamente complejos de articulación social.

Dentro de este proceso de modernización se han creado diversas contradicciones en el abigarramiento étnico, popular y social: han despertado nuevos actores; las clases sociales asumen nuevos perfiles y surge un nuevo estilo de lucha de clases, incomprendible para el análisis dogmático y tradicional; todo al tiempo que los hitos demarcatorios de la sociedad premoderna pierden solidez y se disuelven en la plasmación incontenible de una nueva realidad.<sup>124</sup> Se trata de una realidad que presentará nuevos y diversos problemas en la clase política, mostrando carencias y limitaciones. En los partidos políticos se generó una crisis de intermediación, y, en la élite del poder, se desarrolló un reciclaje de pautas de comportamiento ajenas a la denominada democracia. En el ámbito de la sociedad, surgieron movimientos políticos y sociales en defensa de sus recursos naturales, de identidades colectivas e individuales, ancestrales y contemporáneas, de sus hábitos y formas de organización cotidianas, de sus espacios territoriales.

Para poder comprender esta resistencia y defensa por parte de los diversos sectores de la sociedad boliviana, procederemos a analizar de modo panorámico la situación política, económica y social previa a este ascenso de la movilización indígena-popular de principios del siglo XXI. Análisis necesario para poder comprender y contextualizar la crisis o pérdida de representación y legitimidad de los partidos políticos y la clase

---

<sup>121</sup> René Zavaleta, "Las masas en noviembre", en *La autodeterminación de las masas...*, op. cit., p. 214.

<sup>122</sup> Mario Miranda Pacheco, *Bolivia en la hora de su modernización...*, op. cit., p. 16.

<sup>123</sup> René Zavaleta, "Las masas en noviembre", en *La autodeterminación de las masas...*, op. cit., p. 214

<sup>124</sup> Cfr. Mario Miranda Pacheco, *Bolivia en la hora de su modernización...*, op. cit., p. 17.

gobernante, así como de los propios sindicatos mineros, que se proyectará en nuevas y novedosas formas de organización social.

## 2.1. La Revolución Nacional de 1952

En el año de 1941 se constituyó el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), desarrollando una propuesta nacionalista y policlasista, que lo ayudó a ganar las elecciones de 1951, elecciones enmarcadas en un sistema electoral discriminatorio. Sólo los sectores masculinos alfabetos con propiedades y rentas de probada solvencia podían participar.<sup>125</sup>

La inconformidad de las viejas oligarquías que veían su cuota de poder erosionada motivó la organización de una Junta Militar, presidida por el general Hugo Ballivian, que declaró nulas las elecciones y asumió el poder. Resultado de esta acción fue el levantamiento popular del 9 abril de 1952, apoyado por trabajadores mineros, durante tres días de lucha en las calles de La Paz y donde se vencieron a los regimientos de la Junta Militar. Así, el MNR pudo ascender, finalmente, al poder; Víctor Paz Estenssoro retornaría del exilio en Buenos Aires, y asumiría la presidencia;<sup>126</sup> mientras Hernán Siles Zuazo, lo haría como vicepresidente.

Según Mario Torrico, “la Revolución Nacional fue llevada a cabo por una alianza plurisocial dirigida por el MNR en la que confluyeron múltiples sectores de la sociedad boliviana motivados por diversas metas. Los sectores campesinos apoyaron el proceso revolucionario demandando una reforma agraria y la eliminación del sistema de haciendas, las clases medias y sectores profesionales pretendían una ampliación del poder para integrarse en ése, los obreros mineros como el sector más activo políticamente demandaban principalmente, el reconocimiento del derecho a votar, la nacionalización de las minas y una importante participación en el gobierno, y distintos grupos de izquierda marxista veían en el proceso revolucionario la oportunidad para instaurar el socialismo en Bolivia.”<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> Mario Alejandro Torrico Terán, *La economía política del periodo democrático y neoliberal en Bolivia en el orden mundial*, Tesis de Maestría, FLACSO, México, 2006, p. 49.

<sup>126</sup> Cristine Koehler Zanella; Pâmela Marconatto Marques; Ricardo Antônio Silva Seitenfus, “Bolivia en el péndulo de la historia”, en *Nueva Sociedad*, No. 209, mayo-junio de 2007, pp. 132-133. Dirección URL: [www.nuso.org](http://www.nuso.org), [consulta: 11 de septiembre de 2012].

<sup>127</sup> Mario Alejandro Torrico Terán, *La economía política del periodo democrático y neoliberal en Bolivia en el orden mundial... op. cit.*, pp. 49-50. Inspirada, según Xavier Albó, en las revoluciones mexicana y rusa, y el nazismo alemán.

A partir de entonces, Paz Estenssoro intentó atender las múltiples reivindicaciones de una población consciente de su fuerza ante el gobierno razón por la cual éste efectuó reformas importantes en lo social y económico. Se buscaba, según Miguel Villarroel, modernizar al país dentro del marco de “los avances y progresos más importantes de la humanidad hasta mitades del siglo XX. El objetivo más importante era, sin duda, la construcción de un estado (*sic*) nacional que represente, regule y abarque a todos los habitantes y llegue a todos los rincones patrios”.<sup>128</sup>

A pesar de esto, no se logró mejorar la calidad de vida de las clases populares en el largo plazo, debido a que muchas medidas fueron tomadas en lo inmediato, buscando soluciones para satisfacer las principales demandas de los diferentes sectores que participaron en el movimiento armado; en lugar de buscar soluciones sólidas a los problemas estructurales del país.

Una primera reforma fue la ampliación de los derechos de la ciudadanía, es decir, la institucionalización del sufragio universal. Se pone fin a un sistema electoral que excluía a las mujeres y a más de 70% de la población masculina por ser analfabeta o no poseer los requisitos mínimos de propiedad agraria exigidos.<sup>129</sup>

La Reforma Agraria de 1953, bajo el lema “la tierra para quien la trabaja”, fue una segunda reforma emprendida por este nuevo gobierno nacionalista. Se pretendía redistribuir la tierra de las propiedades consideradas improductivas a los campesinos para que éstos las trabajaran, originando la destrucción del régimen de hacienda, en buena parte de la región andina, más poblada y empobrecida., No existió sin embargo apoyo por parte del gobierno, ni políticas públicas que impulsaran y consolidaran un desarrollo rural.<sup>130</sup> Aun así, la mayoría de la población aymara y quechua quedó organizada en sindicatos campesinos.

Finalmente, se llevó a cabo la nacionalización de las minas más importantes de estaño.<sup>131</sup> Recordemos que este mineral, para esa época, representaba casi la totalidad de

---

<sup>128</sup> Miguel Villarroel Nikitenko, “La acción colectiva en Bolivia. Cambio y transformación de los conflictos sociales 1970-1998”, en Levy, Bettina (comp.), *Conflicto y crisis en el capitalismo latinoamericano: lecturas políticas*, Buenos Aires, CLACSO, 2002, p. 141. Según Miguel Villarroel, una de las características de las relaciones entre el Estado y la sociedad durante este periodo fue su carácter clientelar burocrático, el cual operaba como un sistema de redes de influencia que compiten y disputan el control sobre el flujo de prebendas en el Estado.

<sup>129</sup> Cristine Koehler Zanella; Pâmela Marconatto Marques; Ricardo Antônio Silva Seitenfus, “Bolivia en el péndulo de la historia”... *op. cit.*, p. 134.

<sup>130</sup> *Ídem.*

<sup>131</sup> *Ídem.*

las exportaciones del país. Para ello se crearon empresas estatales: la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). La simple gestión eficiente de la COMIBOL “no sería la solución para todos los problemas económicos. La buena administración de los recursos de la Comibol, sin embargo, permitiría mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mineros en el corto plazo.”<sup>132</sup>

Aunado a estas reformas, también existieron otras acciones y cambios importantes, como fueron la destrucción del ejército y creación de milicias populares, una reforma educativa y urbana, entre otras. Se desarrolló así, según Villarroel, un carácter notoriamente patrimonialista corporativista<sup>133</sup> puesto que todos los procesos económicos y sociales estaban fuertemente controlados por el Estado. Igualmente, se pretendía la construcción de una identidad nacional, cultural y políticamente homogeneizadora.

Sin embargo y pese a todas las medidas implementadas por el gobierno para estabilizar el país y al mismo tiempo para satisfacer todas las demandas de los sectores de la sociedad, la crisis económica de mediados de los cincuenta hizo que el gobierno del MNR, bajo el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), adoptará medidas económicas que afectaron directamente a los trabajadores, provocándose así serias tensiones con la Central Obrera Boliviana (COB).<sup>134</sup> A esto deben sumarse las pugnas internas al interior del MNR que provocaron su fraccionamiento y debilitaron al gobierno. Además, según Alejandro Torrico, dichas pugnas posibilitaron el golpe de Estado de 1964 que inauguró dieciocho años de gobiernos militares.

Aun así, los gobiernos militares, de 1964 a 1982, no se atrevieron a modificar las estructuras económicas y políticas inauguradas en 1952, siendo una característica de este periodo el constante enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la COB,<sup>135</sup> y donde los campesinos fueron tomados como aliados de los militares y base social de las dictaduras, a través del Pacto Militar Campesino (PMC) del cual se hablará más adelante.

---

<sup>132</sup> Cristine Koehler Zanella; Pâmela Marconatto Marques; Ricardo Antônio Silva Seitenfus, “Bolivia en el péndulo de la historia”... *op. cit.*, p. 135.

<sup>133</sup> Véase, Villarroel Nikitenko, Miguel, “La acción colectiva en Bolivia. Cambio y transformación de los conflictos sociales 1970-1998”... *op. cit.*, p. 141.

<sup>134</sup> Mario Alejandro Torrico Terán, *La economía política del periodo democrático y neoliberal en Bolivia...*, *op. cit.*, p. 53.

<sup>135</sup> Cfr., Humberto Vargas R.; Eduardo Córdova, E., “Bolivia: un país de re-configuraciones por una cultura de pactos políticos y de conflictos”, en Seoane, José (comp.), *Movimientos sociales y conflicto en América Latina*, Buenos Aires, Argentina, CLACSO, ASDI, 2003, p. 87.

## 2.2. La transición de la dictadura nacionalista a la democracia neoliberal

Desde 1964 hasta 1982 se instalaron regímenes militares en Bolivia, los cuales siempre mantuvieron el tipo de Estado nacionalista y el tipo de capitalismo resultante de la Revolución de 1952, aunque no sus objetivos sociales iniciales ni su democracia universalizada.

René Barrientos fue el fundador de esta era dictatorial en Bolivia. Sus políticas un tanto nacionalistas (la multiplicación de escuelas rurales y programas de colonización), convergieron con la represión a ciertos sectores de la sociedad; ejemplo de ello fue la masacre a los mineros en la Noche de San Juan de las minas y la derrota de la guerrilla del Ché. De esta forma se inició un forcejeo y permanente zigzag de elecciones, gobiernos constitucionales efímeros, golpes y contragolpes, hasta el 10 de octubre de 1982 cuando da inició la etapa democrática,<sup>136</sup> al menos en el ámbito político-electoral.

Las diferentes administraciones implementaron acciones diversas en la búsqueda de una consolidación gubernamental: habría desde un gobierno militar (Alfredo Ovando) que se autodenominaba nacionalista y revolucionario, que expropió los bienes de la compañía petrolera Gulf signándole al Estado un rol central en el desarrollo,<sup>137</sup> que tipificó a la dependencia como el principal factor de atraso y subdesarrollo; hasta un gobierno (General Hubo Bánzer Suárez, 1971-1978) que mantenía el discurso nacionalista, pero esta vez referido a la amenaza del comunismo y no del imperialismo, que defendía la idea de hacer del Estado el actor central de la economía aunque ahora como un instrumento que garantizara, estimulara y complementara la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

A pesar de la implementación de las políticas por los diferentes gobiernos militares, con las diversas perspectivas ideológicas, Bolivia no estuvo exenta de la crisis a finales de

---

<sup>136</sup> Álbo, Xavier, “25 años de democracia, participación campesino indígena y cambios reales en la sociedad” en *25 años construyendo democracia*, La Paz, Vicepresidencia de la República, AECID, 2008, pp. 43-44. Dirección URL: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/06275.pdf>. [consulta: 16 de mayo de 2013].

<sup>137</sup> Este gobierno concebía al desarrollo como un proceso de crecimiento económico y transformaciones estructurales basadas en la expansión del mercado interno y el control estatal directo de los recursos naturales y de los sectores estratégicos de la economía.

la década de 1970 y principios de la de 1980. Así para 1977, afirma Laserna<sup>138</sup>, el peso boliviano se encontraba ya altamente sobrevaluado y una parte creciente de las exportaciones era absorbida por el servicio de la deuda. Las tasas de interés habían aumentado rápidamente y se habían adquirido créditos a plazos de amortización cada vez más cortos. El gasto fiscal había crecido persistentemente, al igual que el empleo público, sin que la base ni los rendimientos tributarios mejoraran significativamente. Se empezó a incubar una inflación penosamente escondida con recursos externos, cada vez más caros y difíciles de obtener. A esto debe sumarse ciertos factores externos como fueron la intervención de Estados Unidos en el mercado del estaño y la baja de precios de este mineral, que a decir de Rolando Jordán Pozo las condiciones del mercado del estaño se empezaron a deteriorar desde 1980 colapsando en octubre de 1985<sup>139</sup>, dos meses después del Decreto 21060.

Aunado a esta crisis económica, se presenta una agravada situación interna, caracterizada por un proceso de movilización social contra la dictadura. Movilización política contra el sistema, y social, contra las medidas económicas.<sup>140</sup> De esta forma, la dictadura se vio obligada a convocar a elecciones generales en 1977 para 1980, celebrándose dos años antes ante la fuerte presión social. Según Jesús González, la intención del General Bánzer al convocar estas elecciones era para constitucionalizar el régimen militar, organizando un proceso controlado de transición; pero para ello debía mantener al margen a las opciones opositoras más fuertes, como era la Central Obrera Boliviana.

El período final de las dictaduras o gobiernos militares en Bolivia se caracteriza por una convulsión social extrema y un continuo cambio de gobiernos civiles y militares. Entre

---

<sup>138</sup> Roberto Laserna, “La democracia en Bolivia: problemas y perspectivas” en González Casanova, Pablo; Roitman Rosenmann, Marcos (coord.), *La democracia en América Latina. Actualidad y perspectivas*, México, CEIICH-UNAM, 1995, p. 232.

<sup>139</sup> Jordán Pozo, Rolando, “Colapso de la minería tradicional y surgimiento de la nueva minería”, en *Bolivia en la hora de su modernización... op. cit.*, p. 68. Asimismo, Jordán Pozo menciona que debe tenerse en cuenta, dentro de este mismo período, el surgimiento de una nueva minería desarrollada en Australia, Brasil, Indonesia, Canadá y R. P. China, que pudieron invertir en modernización y ampliación de escalas, durante los períodos de altos precios. Por tal motivo, después de una estabilización en el consumo mundial del estaño, a pesar de los bajos precios, Bolivia se enfrentó a un mercado con alta competitividad, transparencia y tendencias hacia un nuevo precio de equilibrio, en alrededor de 3U\$/libra.

<sup>140</sup> Jesús González Pazos, “Bolivia. La construcción de un país indígena”, en *Bolivia. La construcción de un país indígena*, Icaria, 2007, p. 66.



1978 y 1982 Bolivia vivió tres elecciones nacionales, sufrió diez cambios de gobierno y cuatro por golpes militares.<sup>141</sup>

Políticamente, este período supondrá la ruptura definitiva con las características que habían definido el nacionalismo revolucionario que se inició con la revolución del 52. Ahora se dará paso a un nuevo y más complejo sistema político que, en vez de basarse en un partido populista de masas sostenido en el apoyo campesino (MNR), se caracterizará por una multitud de partidos que se apoyarán en complejas combinaciones de votantes urbanos y rurales. Este sistema dirigirá, en años posteriores, el proceso de implantación del sistema neoliberal que regirá Bolivia en los años siguientes y hasta 2006.<sup>142</sup>

La pérdida total de los apoyos civiles, las cotas inaceptables para la comunidad internacional por acciones del último gobierno militar del General Luís García Meza, que tenía una relación directa con el fascismo internacional y con las redes del narcotráfico; así

---

<sup>141</sup> En julio de 1978 el candidato oficial, general Juan Pereda, no logra suficiente respaldo electoral y el gobierno intenta imponer su voluntad mediante el fraude. El rechazo es tan grande que las elecciones son anuladas. El general Pereda intenta salvar al régimen expulsando a su protector, Bánzer Suárez, y asumiendo la presidencia. Para el mes de noviembre, un golpe de Estado pone en la presidencia al general David Padilla, quien promete presidir elecciones limpias. Para el año de 1979, en el mes de julio se realizan elecciones dando el triunfo relativo a una coalición de centro izquierda presidida por Hernán Siles, que gobernara el país entre 1956 y 1960. Obtienen elevada votación el MNR de Paz Estenssoro, Acción Democrática Nacionalista (ADN) del General Bánzer, y el Partido Socialista-1 de Marcelo Quiroga. En agosto, aferrados a sus posiciones, los partidos políticos se niegan a culminar el proceso y entregan la presidencia con carácter interino al senador Wálter Guevara (MNR). En noviembre, tres meses después, un golpe militar logra ser rechazado por el movimiento popular a pesar de la intensa represión desatada en su contra, y el Parlamento encomienda un nuevo interinato presidencial, esta vez a la diputada Lidia Gueiler (MNR). La Presidencia intenta poner en marcha una política de ajustes económicos que es repudiada por obreros y campesinos con masivas huelgas y bloqueos. En julio de 1980, nuevamente se realizan elecciones nacionales, repitiéndose el triunfo relativo de Hernán Siles, pero acortándose la diferencia que lo separa del candidato de centro-derecha Víctor Paz Estenssoro. El General Bánzer se presenta por segunda vez en las elecciones y obtiene el tercer lugar. Ante la posibilidad de que se forme un gobierno de izquierda con el apoyo del socialista Quiroga Santa Cruz, un grupo de militares pone en la presidencia al general García Meza desatando una sañuda persecución a dirigentes políticos y laborales. El nuevo gobierno es acusado de proteger a narcotraficantes y organizaciones fascistas de terrorismo y es internacionalmente aislado. Militantes de ADN se integran al nuevo gobierno. En enero de 1981, dirigentes del MIR son asesinados cuando celebraban una reunión clandestina en La Paz; para agosto, una rebelión civil-militar es reprimida en Santa Cruz pero García Meza se ve obligado a renunciar entregando el mando a los comandantes militares. La resistencia se acentúa y también el deterioro de la economía. Sólo la dictadura militar argentina y la banca privada internacional facilitan recursos financieros al gobierno. En agosto de 1982, la crisis económica se hace cada vez más intolerable y los militares, asediados por las fuerzas populares, se ven obligados a ensayar cambios. Finalmente admitirán su fracaso aceptando los resultados electorales de 1980 y la formación de un Congreso que constitucionalice al país; para el mes de octubre, asumen el gobierno Hernán Siles, que encabeza una fracción del MNR, y Jaime Paz Zamora (MIR), excluyendo del gobierno a las fuerzas de oposición que tienen mayoría en las cámaras legislativas (MNR y ADN). Así para, agosto de 1985, obligado a renunciar a un año de mandato, en medio de huelgas, paros y bloqueos, sin recursos fiscales y con una inflación proyectada en 20 000%, el Presidente entrega el mando a su sucesor, Víctor Paz Estenssoro (MNR). En las elecciones había obtenido la primera votación el general Bánzer (ADN), pero en el Congreso Víctor Paz logró la mayoría con el respaldo de los partidos más pequeños. Sin embargo, poco después Paz Estenssoro logra formar coalición con Bánzer y pone en marcha una vigorosa política de ajustes económicos. Véase, Roberto Laserna, "La democracia en Bolivia: problemas y perspectivas"..., *op. cit.*, pp. 257-258.

<sup>142</sup> Jesus González Pazos, "Bolivia. La construcción de un país indígena"..., *op. cit.*, pp. 67-68.

como la profunda crisis económica, convirtió a la dictadura en un anacronismo que no servía para mantener el sistema político y económico en función de un esquema relativamente estable apto para la fluida acumulación de capital. Así, la “única salida” fue la adopción de la democracia representativa a partir de 1982.

### **2.3. Panorama del régimen democrático<sup>143</sup> y la reforma neoliberal**

La democracia que se instaura en el régimen político boliviano debe ser entendida como un proceso de construcción política de acumulación histórica.

[...] hay que pensar la democracia en Bolivia como un proceso de instauración de un régimen político, que es producto de un proceso más amplio de articulación de varias líneas de causalidad, en las que hay una diversidad de culturas democráticas, es decir, una diversidad de culturas políticas que han hecho posible la democratización del país, porque hubo sujetos políticos que, desde distintas matrices y espacios políticos, se constituyeron para hacer posible este tipo de cambio político.<sup>144</sup>

Los antecedentes más remotos se pueden encontrar en la instauración de un régimen representativo de partidos políticos y de democratización orquestado a partir de la Revolución de 1952, siendo el sufragio universal la principal característica de dicho periodo. A partir de entonces, se desarrollarán diferentes procesos, en espacios e instituciones políticos y de la sociedad, que influirán en la búsqueda y promoción de un régimen político democrático. Dichos procesos son la constitución de sujetos colectivos organizados de manera corporativa, como es la Central Obrera Boliviana (COB); la presencia de otras culturas políticas organizadas a través de sujetos comunitarios, y combinadas en el seno de los sindicatos campesinos y, finalmente, la conformación de partidos políticos indianistas.

Es interesante observar que las principales fuerzas políticas que hacen posible la crisis de la dictadura y la transición a la democracia, son influenciadas por la capacidad de la COB de articulación de la representación, la organización y la coordinación de las

---

<sup>143</sup> Para abordar un análisis mucho más específico sobre ello, puede revisar los textos de Luis Tapia, “Las olas de expansión y contracción de la democracia en Bolivia”; María Teresa Zagada C., “La democracia ante el desafío de su profundización”, en *Bolivia, 25 años construyendo Democracia. Visiones sobre el proceso democrático en Bolivia 1982-2007*, La Paz, Vicepresidencia de la República de Bolivia, 2008. Dirección URL: [http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/libro\\_25\\_anos.pdf](http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/libro_25_anos.pdf).

<sup>144</sup> Luis Tapia, “Las olas de expansión y contracción de la democracia en Bolivia”..., *op. cit.*, p. 12. [consulta: 12 de agosto de 2012].

acciones políticas. Dicho sea de paso, las fuerzas que se movilizaron no poseían una cultura política liberal, sino que, realmente, estaban convencidos de la necesidad de que el Estado reconociera los derechos políticos para que la gente pudiera organizarse libremente para defender sus derechos y para participar en los diferentes niveles y espacios del gobierno.<sup>145</sup>

Desde el momento de la instauración de la democracia representativa en Bolivia, en 1982 hasta principios del siglo XXI es posible establecer rasgos de los períodos que conforman dicho proceso. Con ello, no se pretende dividir el proceso democrático en fases totalmente definidas, sino identificar las principales características de todos y cada uno de los periodos presidenciales. Así, un primer momento abarca desde 1982 a 1985, mientras que un segundo de 1985 al 2005.<sup>146</sup> Esta división no debe ser interpretada de manera arbitraria, sino todo lo contrario, se debe concebir esta escisión a partir de la implementación de la política económica neoliberal, que determinará las formas de acción y actuación de los diferentes gobiernos en todos los ámbitos de la realidad boliviana.

Durante los tres años que abarca el primer momento, 1982-1985, existe una inestabilidad política (similar a la existente durante el periodo de las dictaduras), caracterizada por una gran cantidad de conflictos y protestas, no queriendo decir que después no existieron, sin embargo, éstas, dentro de este periodo, pusieron en juego el sistema democrático recientemente inaugurado. Además se presentaron problemas en la esfera de lo político-institucional (un bloqueo parlamentario a las iniciativas del ejecutivo), y en la esfera de lo económico (la más alta de las inflaciones en el país), la característica esencial es que no se contaba con una política económica definida. A partir de la llegada de Víctor Paz Estenssoro, en 1985, se implementará cierta política económica neoliberal. Este

---

<sup>145</sup> *Ibidem*, pp. 12-14. [consulta: 12 de agosto de 2012]. Luis Tapia menciona que en el período que va desde los últimos años de la década de los setenta hasta 1982 es de lucha por la instauración de derechos políticos, en el sentido de libertad política para todas y todos los bolivianos. En este sentido, una de las principales demandas u objetivos es el reconocimiento del derecho a la libertad de organización sindical y, luego del derecho a la organización y la acción de los partidos políticos.

<sup>146</sup> Son varios autores, principalmente, bolivianos que hacen este corte del proceso democrático en Bolivia: Luis Tapia y María Teresa Zegada por mencionar algunos. Sin embargo, específicamente, estos dos autores cierran el segundo periodo en el año 2000; por una razón muy clara, y es que, se acontece la llamada “Guerra del Agua” en Cochabamba que será el chispazo que detonará una serie de movilizaciones de diferentes sectores de la sociedad boliviana en la búsqueda de reivindicaciones culturales, económicas y sociales, en lo local, regional y nacional. A pesar de ello, en esta investigación se considera hasta el 2005 porque consideramos que a pesar de que existe esta convulsión social, el neoliberalismo no dejó de existir, y con ello la aplicación e implementación de políticas de dicho corte. Abarcamos hasta el año 2005, puesto que para el siguiente año, 2006, iniciará un gobierno encabezado por un partido político (MAS) surgido, y que se consolidó con las movilizaciones sociales; el cual pretendía realizar diversas reformas tendientes a las mejoras de la sociedad.

proceso pretendía impregnarse en todos y cada uno de los ámbitos de la vida política, económica y socio-cultural del país. Fue, y hasta cierto punto sigue siendo, la línea de acción de todos los gobiernos bolivianos posteriores. Este segundo momento, 1985-2005, se puede subdividir en tres periodos, agrupando dos administraciones presidenciales en cada uno; esto obedece a que las diferentes coyunturas políticas que recaen en cada uno de estos periodos tienen rasgos comunes que permiten agruparlas de tal modo.

Por su parte, María Teresa Zegada considera que el periodo inaugurado a partir de 1985 hasta por lo menos el año 2000, se caracteriza por la “consolidación institucional. Se dio entonces prioridad a la articulación democrática con una gobernabilidad entendida como la consecución de pactos interpartidarios para lograr estabilidad y aplicar planes y políticas”<sup>147</sup> de corte neoliberal. Puede pues denominarse a este periodo como democracia pactada. Siendo las características principales: la implantación de un sistema basado únicamente en los partidos políticos donde el clientelismo y la corrupción eran sus valores; y eliminando toda participación de la población para acceder a la representación popular a pesar de que ya se había logrado a finales de la década de 1970 y principios de 1980. Existe una relación de los diferentes partidos políticos para generar una “opción” de gobierno nacional, y los pactos entre la elite política con distintos fines, sin ninguna participación de los movimientos sociales o sindicatos. Véase las Tablas 1 y 1.1.

**Tabla 1. Relación de los gobiernos nacionales con los partidos políticos**

1985-1989	MNR; presidente Víctor Paz Estenssoro
1989-1993	MIR, con ADN y CONDEPA (Conciencia de Patria); presidente Jaime Paz Zamora
1993-1997	MNR, con MRTKL (Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación), MBL (Movimiento Bolivia Libre) y UCS (Unidad Cívica Solidaridad); presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
1997-2002	ADN-MIR, con UCS, CONDEPA, PDC (Partido Demócrata Cristiano), KDN (Katarismo Nacional Democrático) y NFR (Nueva Fuerza Republicana); presidente Hugo Bánzer (1997-2001), al que por enfermedad sucede el vicepresidente Jorge Quiroga.
2002-2003	MNR-ADN-MIR-NFR-MBL-UCS; presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Se ve obligado a renunciar.
2003-2005	Vicepresidente del periodo anterior, Carlos Mesa. Gobierna con ministros independientes.

Jesus González Pazos, “Bolivia. La construcción de un país indígena”, en *Bolivia. La construcción de un país indígena*, Barcelona, Icaria, 2007, p. 77.

<sup>147</sup> María Teresa Zegada C., “La democracia ante el desafío de su profundización”... *op. cit.*, p. 29. [consulta: 12 de agosto de 2012].

**Tabla 1.1. Pactos entre la elite política**

Años de realización y vigencia del Pacto	Nombre	Participantes
1985-1989	Pacto por la Democracia	MNR – ADN
1989-1993	Acuerdo Patriótico	MIR y ADN – PDC
Junio de 1991	Reforma del Sistema Electoral	Partidos políticos con representación parlamentaria
Julio de 1992	Acuerdo por la Modernización del Estado y el Fortalecimiento de la Democracia	Partidos políticos con representación parlamentaria
1993-1997	Pacto por la Gobernabilidad	MNR – MRTK, MBL (Movimiento Bolivia Libre) y UCS (Unión Cívica Solidaria)
1997-2002	Compromiso por Bolivia	ADN –NFR, MIR, UCS, PDC y CONDEPA (Conciencia de Patria)
Junio de 2001	Acta de Entendimiento	Algunos partidos políticos

Hugo José Suárez, *Bolivia. País rebelde (2000-2006)*, México, El Colegio de Michoacán, 2007, p. 99.

En los siguientes subapartados analizaremos con más detalle cada uno de las políticas, decisiones y acciones de los diversos gobiernos nacionales.

### **2.3.1. El gobierno de la Unidad Democrática Popular (1982-1985)**

El primer momento recorre los años que van de 1982 a 1985, periodo cuando se logra articular el primer gobierno democrático del frente de la Unidad Democrática Popular (UDP) que agrupa a sectores progresistas ex-MNR, MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), Partido Comunista, kataristas, sindicalistas, dirigido por Hernán Siles Zuazo.

Una primera característica es que, en esta alianza concurren formaciones partidarias que pugnaban por reeditar en gran medida los ejes centrales del nacionalismo revolucionario. Sin embargo, “el gobierno de Siles Zuazo, electoralmente minoritario y con mayoría opositora en el Parlamento, procuró cumplir con dicho programa y se sumergió muy pronto en un caótico proceso de confrontación con los sectores empresariales.”<sup>148</sup>

<sup>148</sup> Vicente Palermo, “Programas de ajuste y estrategias políticas: Las experiencias recientes de la Argentina y Bolivia”, en *Desarrollo Económico*, No. 199, Vol. 30, Instituto de Desarrollo Económico y Social, octubre-diciembre de 1990, p. 338. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/3466770>, [consulta: 17 de agosto de 2012]

Situación que se reflejaría tiempo después en la incapacidad del Estado, en su debilidad institucional y política para emprender diversas reformas.

En segundo lugar, se observa una amplia participación social y de articulación predominante de la democracia con la libertad de expresión y los derechos humanos. “Esta corta experiencia democrática permitió constatar una de las paradojas de la democracia en Bolivia: que los movimientos sociales son la fortaleza y, al mismo tiempo la debilidad del sistema.”<sup>149</sup> A pesar del estado de convulsión que se vivía en estos años, no se produjo ningún intento de golpe de Estado.

Finalmente, una tercera característica, sino es que la característica esencial de este periodo era que no se contaba con una política económica definida. Al respecto Larsena considera que lo que en realidad hubo fue un conjunto de intentos de política que fracasaron continuamente. Aunado a ello, debe considerarse que el “gobierno de la UDP enfrentó la peor crisis económica de la historia boliviana (y una de las peores a nivel mundial) [hasta ese momento] producto del abultado déficit fiscal, del deterioro de los precios internacionales de materias primas y del incremento del servicio de la deuda externa, todo lo cual derivó en el peor proceso hiperinflacionario no provocado por efecto de guerra de la historia mundial.”<sup>150</sup>

A continuación describimos a grandes rasgos la situación económica boliviana prevaleciente en este periodo. Como consecuencia de la crisis económica se disminuyó el consumo, el ahorro y la inversión. A esto se sumó el agotamiento de las reservas mineras y petroleras, el declive absoluto de la producción del estaño por el desplome de su cotización dejando, en esos años, de ser el sector estratégico de la economía monoexportadora de Bolivia. Asimismo la producción agropecuaria registró una disminución de 11% en 1983 y 1984.<sup>151</sup>

El sector público estaba prácticamente en bancarrota y la economía del sector privado en una grave depresión. La deuda externa alcanzó en 1983 niveles que suponían el 80% de todo el Producto Interno Bruto. El gasto del gobierno también se hizo incontrolable

---

<sup>149</sup> Véase, María Teresa Zegada C., “La democracia ante el desafío de su profundización”..., *op. cit.* [consulta: 12 de agosto de 2012]. Teresa Zegada menciona que, en este periodo se registraron los índices más altos de conflictividad social, con un promedio de 54 conflictos por mes, protagonizados por sectores medios y de trabajadores, los cuales demandaban solución a problemas de tipo económico.

<sup>150</sup> Mario Alejandro Torrico Terán, *La economía política del periodo democrático y neoliberal en Bolivia en el orden mundial...*, *op. cit.*, p. 54.

<sup>151</sup> Roberto Laserna, “La democracia en Bolivia: problemas y perspectivas”..., *op. cit.*, p. 233.

a pesar de que los ingresos fiscales estuvieron en continua disminución y, para dar solución a esta situación, se aumentó la emisión de papel moneda lo que provocó hiperinflación incontrolada donde los precios subían un 50% mensual. Mientras en la década de los setenta la inflación se había situado, por término medio sobre el 16%, y en 1982 era del 123% anual, en 1984 se alcanzaba un 2.177% anual y, durante el primer semestre de 1985, el increíble índice de 8.170% anual.<sup>152</sup>

A pesar de que, Siles Zuazo procuraba el apoyo de la COB, la cual experimentaba una grave fragmentación, no se pudo conseguir un sustento efectivo, sino todo lo contrario. Ello lo empujó a un juego de presiones acumulativas que no hicieron más que evidenciar la creciente impotencia gubernamental. Ante esto debe sumarse que, los diferentes planes de estabilización fracasaron por diferentes acontecimientos mundiales, esencialmente la continua caída de los ingresos de exportación y la incapacidad para controlar la presión sindical. Consecuencia de ello fue el rápido desprestigio de la UDP, de ahí que el gobierno de Siles Zuazo tuviera que convocar a elecciones generales para julio de 1985, viendo así reducida su permanencia en el poder a menos de tres años de los cuatro establecidos constitucionalmente.

Luis Tapia considera que la mayoría de los problemas existentes durante la gestión de la UDP se debieron a que el gobierno gestionó el estado existente y no lo reformó. No se pudo sostener por mucho tiempo el gobierno de unas masas que fueron antigubernamentales, anteriormente, y que buscaban no sólo administración sino transformación. Este desfase creciente fue aprovechado por la derecha para remonopolizar el poder e imponer su proyecto económico: el neoliberalismo.<sup>153</sup>

### **2.3.2. Paz Estenssoro (1985-1989) – Paz Zamora (1989-1993)**

Con la llegada al poder de estos gobiernos se inicia una nueva etapa caracterizada en lo económico y, posteriormente, en lo político y social por las medidas neoliberales destinadas a parar en un primer momento el proceso inflacionario. Esta aplicación tendrá ritmos diversos, es decir, la profundización y abarcamiento en los diferentes ámbitos de la vida

---

<sup>152</sup> Véase, Jesus González Pazos, “Bolivia. La construcción de un país indígena”..., *op. cit.*, pp. 68-69.

<sup>153</sup> Luis Tapia, “La densidad de las síntesis”, *El retorno de la Bolivia plebeya*, Bolivia, Muela del Diablo, 2007, p. 63.

política, económica y socio-cultural se desarrollarán en distintos momentos durante todo el periodo que corre de 1985 a 2005. A partir de este momento, con la llegada del gobierno encabezado por Evo Morales se inicia una nueva etapa en la vida de los bolivianos y, aunque es cierto que el neoliberalismo no dejó de existir, si se observa desde entonces un intento por revertir los efectos provocados por éste, todo como parte de un proceso largo, complejo y no exento de contradicciones.

Antes de analizar las características de este primer periodo, debemos apuntar que en la elección presidencial de 1985, donde resultó victorioso Víctor Paz Estenssoro, el impulsor de la Revolución de 1952, se exhibió el más amplio abanico de opciones electorales presentándose, según observa Torrico,<sup>154</sup> dieciocho candidaturas que desplegaban posiciones que iban desde el trotskismo hasta el libre mercado.

Las elecciones de julio de 1985 habían dado la victoria (primera minoría) a Banzer (Acción Democrática Nacionalista, ADN), pero secundado muy de cerca por Paz Estenssoro (Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR). Entre ambos alcanzaban el 52% de los votos, mientras que las distintas fuerzas de la izquierda vieron reducido su apoyo electoral a menos de la cuarta parte del que habían obtenido en 1980. Dado que la diferencia de votos entre ADN y MNR era muy ligera, y que Paz aventajaba a Bánzer en el número de parlamentarios, la cuestión debía dirigirse en el Congreso. Por acuerdo parlamentario entre ambos partidos, Víctor Paz Estenssoro accedió a la presidencia.<sup>155</sup>

Una de las características de este periodo fue la ruptura con el Estado “benefactor” de 1952 y la instauración del neoliberalismo. A sabiendas de que la aplicación de estas políticas tuvieron diversos efectos en los ámbitos de la vida nacional, el análisis de las consecuencias dentro de la sociedad se verán más adelante puesto que se pretende exponer al mismo tiempo la respuesta orquestada desde abajo para las soluciones aplicadas desde arriba. Lo

---

<sup>154</sup> Mario Alejandro Torrico Terán, *La economía política del periodo democrático y neoliberal en Bolivia en el orden mundial...*, *op. cit.*, p. 61.

<sup>155</sup> Palermo, Vicente, “Programas de ajuste y estrategias políticas: Las experiencias recientes de la Argentina y Bolivia”..., *op. cit.* [consulta: 17 de agosto de 2012]. Según Conaghan, Catherine M.; Malloy, James M.; Wolfson, Leandro, “[...] El sistema electoral boliviano [...] allí las elecciones legislativas y presidenciales son simultáneas, pero el multipartidismo extremo y la falta de una segunda ronda presidencial complican los resultados, ya que si no hay ningún candidato con mayoría propia, la decisión queda a cargo del Congreso. El candidato triunfante será aquel capaz de edificar en éste una coalición que vote por él, la cual no necesariamente permanecerá intacta y le asegurará la mayoría a o largo de todo su mandato. Así pues, las elecciones no siempre producen gobiernos dueños de la materia prima para gobernar.” Véase, Conaghan, Catherine M.; Malloy, James M.; Wolfson, Leandro, “Democracia y neoliberalismo en Perú, Ecuador y Bolivia”, en *Desarrollo Económico*, No. 144, Vol. 36, Instituto de Desarrollo Económico y Social, enero-marzo de 1997, p. 875. Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/3467130>, [consulta: 17 de agosto de 2012].



que interesa aquí es observar las soluciones que se adoptaron para aliviar los ya mencionados diversos problemas provocados por la crisis.

Víctor Paz Estenssoro<sup>156</sup> fue quien implementó el 29 de agosto de 1985 y por primera vez la política económica neoliberal a través de la promulgación del Decreto Supremo 21060, denominado Nuevo Plan Económico, no para quebrar un movimiento obrero poderoso, como en el caso de Chile, sino para parar la hiperinflación. Con dicha aplicación se redujo bruscamente el gasto fiscal y se liberalizaron los mercados de bienes, moneda y trabajo, lográndose detener, casi de inmediato, el proceso inflacionario.<sup>157</sup> Este Nuevo Plan Económico:

[...] supone la devaluación de la moneda y la implantación de una tasa de cambio de divisas libre y flotante; igualmente, se eliminaron las políticas de precio del sector público, se liberalizaron los controles sobre los precios y salarios, se crearon nuevos impuestos y se realizó una recaudación fiscal más efectiva, así como una disminución drástica del gasto público. Aunque la consecuencia directa de todas estas medidas fue una recesión económica importante, se consiguió frenar totalmente la hiperinflación que, en dos años, pasó desde las cifras superiores al 8.000% anuales a niveles del 11%, y el déficit fiscal se redujo del 27.4% del PIB en 1984 al 2.7% en 1986.<sup>158</sup>

Algunos de los resultados que trajo casi inmediatamente la aplicación de estas políticas pueden resumirse en lo que expone Laserna: la reducción del déficit contrajo la masa monetaria y, al mismo tiempo, el reajuste de precios de los hidrocarburos aumentó los recursos fiscales de modo que se hizo posible unificar los tipos de cambio e inducir una rápida modificación en las expectativas de productores y consumidores. Por otra parte, los elevados costos sociales de ajuste, entre los cuales se cuenta el despido de cerca de un 10% de los empleados públicos y el cierre de varias empresas imposibilitadas para competir sin subvenciones y soportes fiscales, fueron relativamente aliviados con exitosos programas de empleo eventual y de inversión social.<sup>159</sup>

---

<sup>156</sup> Según Guillermo Bedregal, el Plan 21060 era toda una estrategia de largo alcance, de sustancias innovadoras y revolucionarias, donde Víctor Paz Estenssoro rescata la cualidad ontológica de una política realista que se la puede denominar como sea, pero que tuvo, según Bedregal, la virtud vigorosa, seria y, ante todo, con capacidad de frenar la hecatombe. Todo el hueso mismo de la crisis. Aunque no se consideró todos los costos sociales que traería esto. Para mayor referencia sobre lo que pensaba Víctor Paz Estenssoro, se puede consultar Bedregal, Guillermo, *Víctor Paz Estenssoro, el político. Una semblanza crítica*, México, FCE, 1999, 713 pp.

<sup>157</sup> Roberto Laserna, “La democracia en Bolivia: problemas y perspectivas”..., *op. cit.*, p. 234.

<sup>158</sup> Jesus González Pazos, “Bolivia. La construcción de un país indígena”..., *op. cit.*, pp. 71-72.

<sup>159</sup> Roberto Laserna, “La democracia en Bolivia: problemas y perspectivas”..., *op. cit.*, p. 234.

Sin embargo, a pesar de todas estas cifras en aumento, el crecimiento fue lento y la estabilidad siguió siendo frágil pues la estabilidad descansaba casi de modo exclusivo en los excedentes generados por la explotación de hidrocarburos, que en esos momentos proporcionan el grueso de los recursos para el servicio de la deuda externa y la administración central. Por otra parte, las políticas de reactivación y desarrollo descansaban en la liberalización económica y la privatización de empresas públicas, esperando:

[...] atraer inversiones extranjeras directas y estimular la repatriación de capitales, tanto para la explotación de recursos naturales como para la instalación de industrias de exportación en zonas francas. Para lograrlo el gobierno ha puesto en marcha [a finales de la década de 1980] una agresiva reforma de la legislación nacional, impulsando nuevas leyes de inversiones, hidrocarburos, minería, etc. Hasta ahora la respuesta del capital internacional ha sido más cauta que especulativa, siendo evidente que percibe con claridad las limitadas ventajas que ofrece Bolivia con su difícil geografía y su reducido y fragmentado mercado.<sup>160</sup>

A pesar de todos estos resultados macroeconómicos equilibrados, es claro que no se favoreció al ancho de la población, trayendo como resultado la profundización de la pobreza y la miseria, el aumento de las tasas de desempleo, el surgimiento de nuevos conflictos sociales, la desestructuración del Estado y debilitamiento de los escasos niveles de democracia, que apenas iniciaba en Bolivia. Asimismo, dichas políticas no fueron capaces de crear una política estable hacia un verdadero crecimiento y desarrollo económico que pudieran consolidarse a largo plazo.

Es interesante observar que el impacto negativo que estas medidas tuvieron en la población fue motivo de airadas protestas desde el primer momento, pero no tienen gran impacto sobre lo “político”, al menos no para contrarrestar o impedir la aplicación de dichas reformas. Esto se debe, principalmente, a que “los actores sociales tradicionales de la sociedad civil (sindicatos y campesinos) se hallaban muy debilitados, tanto a consecuencia de los fracasos que habían tenido en el anterior periodo como por la evidente reducción de miembros con que contaba a raíz de los despidos sobre todo los mineros, otrora ‘vanguardia’ del movimiento obrero boliviano.”<sup>161</sup>

Junto a las políticas de estabilización se intentó implementar paliativos para contener el descontento social. Se desarrolló “un agresivo programa de creación de empleos

---

<sup>160</sup> *Ibidem*, p. 235.

<sup>161</sup> Miguel Villarroel Nikitenko, “La acción colectiva en Bolivia. Cambio y transformación de los conflictos sociales 1970-1998”..., *op. cit.*, pp. 155-156.

de corto plazo que permitió, además, aumentar la cobertura de servicios públicos básicos y de infraestructura comunal en las áreas periurbanas y rurales: el Fondo Social de Emergencia.”<sup>162</sup> Es necesario sin embargo cuestionarse ¿qué tipos de empleos consagraba dicho programa? ¿cuáles eran los derechos laborales que gozaban los trabajadores? Y, en definitiva, ¿en qué medida realmente los ingresos obtenidos de estos empleos alcanzaban para satisfacer las necesidades básicas de las familias bolivianas?

Laserna menciona que dichos programas estaban respaldados por el Banco Mundial, y que lo que se buscaba era aprovechar la captación de recursos externos, la movilización de recursos locales, y la dinamización de la inversión pública en educación, salud y servicios comunales mediante mecanismos flexibles de evaluación y ejecución de proyectos con organismos privados y no gubernamentales.<sup>163</sup> Es decir, se buscaba beneficiar la inversión de capital privado en áreas que corresponden al Estado. Con todas estas medidas lo único que se provocó fue un mayor descontento social que estallará a principios del siglo XXI.

En cuanto a la administración de Paz Zamora se puede decir que su gobierno introdujo conceptos como desarrollo humano<sup>164</sup> con el propósito de “suavizar” toda la referencia a la economía y sugerir, en adelante, una dimensión ética en la adopción de decisiones. También ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pues el descontento de la población se había acrecentado. Prueba de ello fue la Marcha por el Territorio y la Dignidad de los pueblos indígenas de tierras bajas en 1990 y a la cual se sumaron otros grupos indígenas del altiplano paceño.

Con todo, la característica de mayor relevancia, particularmente porque es una causa directa aunque no la única de la emergencia social en el año 2000, fue el inicio del proceso de privatización que se inicia, según González Pazos, en 1989. Para el autor, se afectó directa y paulatinamente a los sectores estratégicos de la economía boliviana: hidrocarburos, minería, electricidad, transporte aéreo, agua, telecomunicaciones, entre otros. Dicho proceso fue:

---

<sup>162</sup> Roberto Laserna, “Reforma del Estado y políticas sociales en Bolivia: los desafíos del desarrollo humano sostenible”, en Vilas, Carlos M. (coord.), *Estado y políticas sociales después del ajuste*, Nueva Sociedad, UNAM, 1995, p. 57.

<sup>163</sup> *Ídem.*

<sup>164</sup> Roberto Laserna expone que dicho concepto fue introducido en la Estrategia Social Boliviana, que era el elemento central de la estrategia de desarrollo del presidente Paz Zamora.

[...] bajo el horizonte prometido de la consecución de un crecimiento anual del 10%, de la mejora del bienestar social y de la creación de miles de puestos de trabajo. Sin embargo, la realidad es otra, pues el desempleo crecerá entre 1994 y 2001 de un 3% al 8,5%; se dará un proceso acelerado de informalización de la economía, pasando en una década del 58% al 68%, con una calidad del empleo cada vez más precaria. Las grandes empresas ocuparán el 7% de la población trabajadora, las pequeñas y medianas empresas a un 10% y las empresas familiares, con relaciones de trabajo semiempresariales o tradicionales, ocuparán más del 80%. Y el crecimiento prometido del 10%, tuvo un promedio real entre 1997 y 2004 del 2,7% del PIB, en un proceso de decrecimiento continuo.<sup>165</sup>

Pero la profundización de este proceso privatizador tendrá su esplendor en la siguiente administración que a la par desarrollará una serie de políticas que pretendía beneficiar a la población. Beneficios significativos, pero que no son comparables cuando hablamos de los efectos negativos que provocaron las diferentes privatizaciones de empresas públicas bolivianas.

### **2.3.3. Sánchez de Lozada (1993-1997) – Bánzer/Quiroga (1997-2002)**

Una de las características de todo este periodo fueron las diferentes reformas políticas de segunda generación las cuales trataban de dar, según la clase en el poder, una cara más social e incluso de “respeto étnico”. Estas reformas fueron desde las sucesivas modificaciones a la ley electoral para garantizar la transparencia de los procesos electorales hasta las reformas constitucionales que pretendieron mejorar el control al Estado y ampliar la participación. Asimismo se modificó el Artículo 1º constitucional en 1994 donde se define al país como “multiétnico y pluricultural”

Es bajo la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), donde un candidato aymara, Víctor Hugo Cárdenas,<sup>166</sup> es elegido como vicepresidente de Bolivia. Esta situación es inaudita si se tiene en cuenta la ideología de ambos sectores que lograron concretar esta alianza, es decir, el MNR y los kataristas. Mientras que, para el primero la

---

<sup>165</sup> Jesus González Pazos, “Bolivia. La construcción de un país indígena”..., *op. cit.*, p. 72.

<sup>166</sup> En 1979 Cárdenas presidió el Congreso en que se creó la CSTUCB, fue también uno de los primeros diputados por el MRTK y, en los años de 1982-84 jugó un papel importante en la redacción de la tesis política y el proyecto de Ley Agraria Fundamental.

homogenización del país siempre fue una premisa, para los kataristas dichas políticas eran objeto de crítica.<sup>167</sup>

Por otra parte, en torno a las medidas desarrolladas bajo esta administración, encontramos la Ley INRA (Instituto Nacional de la Reforma Agraria, 1996), que según González Pazos, fomentaba las grandes empresas agrarias de las tierras bajas impulsando la apertura de las tierras al mercado mediante una explotación extensiva, tal y como es el caso de la intensificación del cultivo de la soja que se opera en esos años y que colocaría a Bolivia como uno de los principales productores a nivel mundial.<sup>168</sup>

Asimismo, se lleva a cabo la Reforma Educativa con una fuerte influencia del enfoque intercultural bilingüe pero que, en la práctica, no contaría con las inversiones necesarias generadoras de investigaciones, infraestructura y proveedoras del personal suficiente para poner en marcha su implementación, perpetuando así una educación colonial donde los conocimientos indígenas quedaron fuera. El “objetivo era renovar los contenidos y métodos educativos a fin de elevar y modernizar la calidad de la educación. [...] Igualmente se hizo el intento de disminuir el poder del gremio docente mediante la libre sindicalización y generando mecanismos de control comunitario sobre la educación.”<sup>169</sup>

Finalmente, se promulgaría la Ley de Participación Ciudadana que pretendía una cierta descentralización a través de la dotación de fondos y dinamización de los municipios, especialmente rurales.<sup>170</sup> Miguel Villarroel considera que esta ley “por un lado opera cambios en el ámbito municipal, ampliando su jurisdicción a toda su base territorial y transformando su organización interna con la creación de la figura del Comité de Vigilancia, ello acompañado con la transferencia de nuevas responsabilidades (salud y educación, por ejemplo) y recursos (de acuerdo al número de habitantes). Por otro lado, por primera vez en la historia boliviana se reconoce y se otorga legalidad a actores sociales

---

<sup>167</sup> Xavier Albó, “¿...y de kataristas a mnristas? La sorprendente y audaz alianza entre aymaras y neoliberales en Bolivia”, en *Boletín de Antropología Americana*, No. 25, Pan American Institute of Geography and History, julio de 1992, p. 54. Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/40977964>, [consulta: 17 de agosto de 2012].

<sup>168</sup> Jesus González Pazos, “Bolivia. La construcción de un país indígena”..., *op. cit.*, p. 73.

<sup>169</sup> Miguel Villarroel Nikitenko, “La acción colectiva en Bolivia. Cambio y transformación de los conflictos sociales 1970-1998”..., *op. cit.*, pp. 156-157.

<sup>170</sup> Jesus González Pazos, “Bolivia. La construcción de un país indígena”..., *op. cit.*, p. 73.

antes ignorados por completo, permitiéndoles incluirse en el accionar del estado, sobre todo en las decisiones estatales a nivel local (prefecturas y alcaldías, entre otras).”<sup>171</sup>

Aunado a ello, puesto que la Ley traía una disposición transitoria, “se reconocerá, por primera vez, los territorios indígenas a través de la denominación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), como una nueva forma de tenencia de la tierra propia de las comunidades indígenas.”<sup>172</sup> Dicho concepto fue incorporado a la constitución en el Artículo 171, donde se “reconoce los usos, recursos, costumbres y formas de gobierno interno de las comunidades originarias, garantizando su identidad, valores, lenguas, e instituciones. [...] reconocimiento de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de los pueblos indígenas del país.”<sup>173</sup>

En el ámbito económico, se llevaron a cabo reformas en el sistema tributario, de la legislación sobre inversiones extranjeras y privatizaciones. Reformas en el marco de acuerdos formales con el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La reforma más importante hace referencia a la profundización del proceso de privatización, denominado capitalización<sup>174</sup>, es decir, “la transformación de las empresas del estado en empresas mixtas mediante la captación de inversionistas nuevos por un monto

---

<sup>171</sup> Villarroel Nikitenko, Miguel, “La acción colectiva en Bolivia. Cambio y transformación de los conflictos sociales 1970-1998”..., *op. cit.*, pp. 156-157.

<sup>172</sup> Jesus González Pazos, “Bolivia. La construcción de un país indígena”..., *op. cit.*, p. 73. Dichos territorios serán continuamente atacados por parte de los grandes terratenientes ganaderos, agrarios y extractores de materias primas (madera, hidrocarburos).

<sup>173</sup> Humberto Vargas R.; Eduardo E. Córdova, “Bolivia: un país de re-configuraciones por una cultura de pactos políticos y de conflictos”..., *op. cit.*, pp. 89-90. Sin embargo, menciona Álbo, la Ley misma se limitó a reconocer la personería de las comunidades, y en la reglamentación aceptó que los alcaldes definieran algunos distritos o subalcaldías como indígenas, pero nunca previó que pudiera llegar a haber municipios indígenas ni menos jurisdicciones mayores. Véase, Xavier Álbo, “Bolivia”, en *Movimientos y poder indígena en Bolivia, Ecuador y Perú*, La Paz, CIPCA, 2009, p. 54.

<sup>174</sup> En el Plan de Capitalización en Bolivia se pretendía realizar la privatización de empresas con la participación del sector privado y de todos los ciudadanos bolivianos mayores de edad. El Plan estipula un aumento del capital de las principales empresas estatales: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), la línea aérea nacional. Esto se consigue mediante la inversión extranjera, aunque con una participación equivalente en el capital de todos los bolivianos adultos (que se convierten en copropietarios, o eso se pretendía, efectivos de estas empresas). Estas acciones se depositan en cuentas individuales en fondos de pensiones privados, creando así un plan de ahorros de base amplia, que habrá de contribuir al futuro crecimiento económico. En diciembre de 1995 ya habían sido capitalizadas la empresa línea nacional (47 millones de dólares), ENDE (134 millones) y ENTEL (610 millones). De hecho, la veta de ENTEL a una filial de la empresa estatal italiana de telecomunicaciones STET superó en cinco veces las estimaciones oficiales. Se esperaba completar la totalidad del programa durante 1997. Asimismo, se pretendía que la ejecución de este proceso de capitalización generara entradas de IED equivalentes a cerca del 30% del PIB. Véase, Banco Interamericano de Desarrollo, “Privatización e inversión extranjera directa”, en *Inversión Extranjera Directa en América Latina en los años 90*, Madrid, 1996, pp. 47-55.

cercano al capital total de la empresa, de modo que resultaran socios, no por adquisición, sino por aporte de capital.”<sup>175</sup>

La Ley de Capitalización de 1994 “privatizaba las empresas antes estatales con ciertos rasgos de *joint venture* que, de hecho, dejaban las principales decisiones a los nuevos sectores privados.”<sup>176</sup> Los argumentos a favor de esta medida, según indica Laserna fueron: la reducción del déficit fiscal, la incorporación de nuevas tecnologías y métodos de administración para aumentar su eficiencia y competitividad, y la eliminación de fuentes de corrupción. De esta forma, con dicha nueva ley el procedimiento establecía poner en subasta abierta a las empresas estatales, previa valorización por una entidad independiente. Consolidada la venta se entregaban los recursos a la Corporación Regional de Desarrollo donde se encontraba la empresa a fin de que éste realizara inversiones en infraestructura de salud y educación.<sup>177</sup>

Supuestamente, con esta ampliación de inversiones en las empresas estatales, por parte del capital privado, mayoritariamente extranjero, la parte estatal de la propiedad, en teoría, “sería transferida a título gratuito a los ciudadanos residentes en el país a través de fondos de pensiones. Es decir que lo que se buscaba era utilizar el patrimonio estatal para atraer inversiones frescas, sobre todo de capital extranjero y estimular el ahorro de largo plazo a partir de la redistribución accionaria.”<sup>178</sup> Lo que supuestamente se pretendía con ese mecanismo de conversión de la propiedad estatal en acciones individuales, era tender a una mejor redistribución de la riqueza para lo cual fueron creados los programas Bonosol y, luego, Bolivida. Pero, ¿realmente esto fue así? Álbo apunta que la capitalización no arrojó la anunciada bonanza económica, y que las empresas transnacionales miraban más sus propios intereses que los del país. Entonces, lo que se pretendía con estas medidas, en palabras de Laserna era:

[...] convertir a todos los bolivianos en accionistas, pequeños capitalistas, para que terminen por admitir que la ganancia individual es el único fin y objeto de la actividad

---

<sup>175</sup> Villarroel Nikitenko, Miguel, “La acción colectiva en Bolivia. Cambio y transformación de los conflictos sociales 1970-1998”..., *op. cit.*, pp. 156-157.

<sup>176</sup> Xavier Álbo, “25 años de democracia, participación...”, *op. cit.*, p. 50

<sup>177</sup> Roberto Laserna, “Reforma del Estado y políticas sociales en Bolivia: los desafíos del desarrollo humano sostenible”..., *op. cit.*, pp. 64-65.

<sup>178</sup> *Ídem.* “El presidente Sánchez de Lozada afirmó alguna vez que su propuesta de capitalización tendrá un impacto transformador tan grande como el de la reforma agraria. [...] la capitalización como núcleo, corazón o columna vertebral de la propuesta gubernamental. [...] véase, Roberto Laserna, “Reforma del Estado y políticas sociales en Bolivia: los desafíos del desarrollo humano sostenible”..., *op. cit.*, pp. 64-65.

económica. La legitimidad del lucro será entonces incuestionable y el capitalismo podrá desarrollarse sin trabas culturales. La nueva mentalidad que desatará en la población [...] podría sentar los fundamentos ideológicos de un capitalismo que fue resistido hasta ahora por formas tradicionales de pensamiento y organización económica.<sup>179</sup>

Sin embargo, ¿cuáles fueron los resultados inmediatos de dicho proceso de capitalización? La capitalización de las cinco empresas públicas mayores en el ramo de la energía, las telecomunicaciones, la electricidad, el petróleo y los transportes generaron flujos de inversión de unos 1.600 millones de dólares. “El 51% se ha destinado a los hidrocarburos, el 37% a las telecomunicaciones, el 6% a la electricidad y el 5% a los transportes.”<sup>180</sup>

Asimismo, este proceso trajo consigo una transformación sustancial en la estructura económica y en la configuración del poder político interno. Grebe López<sup>181</sup> registra que el resultado consiste en una estructura económica muy difícil de manejar puesto que llegaron a existir:

- diez empresas capitalizadas, resultantes de la fragmentación de las anteriores empresas públicas;
- alrededor de unos cien grupos económico-financieros de tipo mixto, entre extranjeros y nacionales, que operan en la industria, la minería, los hidrocarburos, la banca y, en alguna medida, en la agricultura comercial;
- unas quinientas empresas medianas y pequeñas en la industria y el comercio, y
- unas 500 mil microempresas, con menos de cuatro personas por establecimiento, muy bajos niveles de productividad y una escasa capacidad de reclasificarse por sí solas hacia esquemas más modernos de generación de producción e ingresos.

Este resultado fue desastroso para el Estado boliviano pues quedó a merced del nuevo poder económico concentrado en las empresas transnacionales que ahora tenían el control de las empresas estatales. Y aunque es cierto que hubo un formidable ingreso de recursos a la economía, localizados en sectores estratégicos lograndose así estabilizar los principales

---

<sup>179</sup> Roberto Laserna, “Reforma del Estado y políticas sociales en Bolivia: los desafíos del desarrollo humano sostenible”..., *op. cit.*, pp. 66-67.

<sup>180</sup> Horst Grebe López, “Las relaciones económicas externas de Bolivia en la globalización financiera”, en Gambia, Julio (comp.), *La globalización económico-financiera. Su impacto en América Latina*, CLACSO, Buenos Aires, Argentina, 2002, pp. 52-53.

<sup>181</sup> Los puntos que a continuación se enumeran fueron obtenidos de Grebe López, Horst, “Las relaciones económicas externas de Bolivia en la globalización financiera”..., *op. cit.*, pp. 52-53.



indicadores macroeconómicos, esto no se reflejó en beneficios concretos en la población en general.

Uno de los sectores más afectados por este proceso de capitalización, fue la industria petrolera, que en esa época era la mayor fuente de divisas del país. “El 30 de abril de 1996 se promulgó la Ley de Hidrocarburos, que promovió drásticas modificaciones en relación con la propiedad de los recursos naturales. Aunque esta ley establecía que el Estado era propietario de las reservas de gas natural en el subsuelo, legalizaba la transferencia de esta propiedad a las empresas multinacionales que descubriesen una nueva reserva y comenzaran a explotarla. [...] la ley otorgaba a estas mismas empresas el derecho a construir y operar ductos para el transporte de su propia producción y la de terceros, lo que privaba al Estado de la posibilidad de fiscalizar la explotación de sus reservas y beneficiarse de ellas de manera razonable.”<sup>182</sup> Pero el 4 de agosto de 1997, dos días antes de dejar la Presidencia, Sánchez de Lozada promulgó el Decreto Supremo 24806 por el cual transfirió plenamente a las empresas transnacionales la propiedad de los recursos del suelo boliviano. El Estado dejaba de tener cualquier injerencia en el proceso que va de la extracción a la exportación y se limitaba a cobrar los impuestos establecidos por ley, que no pasaban de 18%.<sup>183</sup>

González Pazos<sup>184</sup> afirma que la aprobación e implementación de estas políticas van en abierta contradicción con lo establecido en la Constitución Política boliviana, que señala expresamente que los hidrocarburos son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado. Esto se norma en el artículo 139: Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados, corresponden al Estado. Este derecho lo ejercerá mediante entidades autárquicas o a través de concesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas de operación conjunta o a personas

---

<sup>182</sup> Cristine Koehler Zanella; Pâmela Marconatto Marques; Ricardo Antônio Silva Seitenfus, “Bolivia en el péndulo de la historia”..., *op. cit.* [consulta: 11 de septiembre de 2012].

<sup>183</sup> *Ídem.*

<sup>184</sup> Jesus González Pazos, “Bolivia. La construcción de un...”, *op. cit.*, pp. 79-80.

privadas, conforme a la Ley. En el capítulo cuatro, se analiza con mayor profundidad esta cuestión en el marco del análisis de la denominada *Guerra del Gas* en el año 2003.

La necesidad por parte del Gobierno boliviano de modernizar su economía, se redujo a la simple solución de una ciega apertura al mercado mundial con un mercado interno débil pero con importantes riquezas naturales. Dentro de este mismo periodo se llevó a cabo la modificación de ley que permitió la privatización de los servicios de agua potable dando pie a la privatización de dichos servicios en el departamento de Cochabamba. Este tema en particular se analiza con mayor profundidad en el capítulo tercero de este trabajo por lo cual consideramos sobrado el incluirlo aquí.

#### **2.3.4. Sánchez de Lozada (2002-2003) – Mesa Gisbert (2003-2005)**

A mediados del 2002 Quiroga tenía la responsabilidad política de presidir las elecciones generales. Ante tal situación fue necesaria la mediación de los obispos católicos que pusieron en marcha un cuidadoso y elaborado proceso de concertación que apenas alcanzó a viabilizar la transición., La fragmentación política, sin embargo, se gestó en los marcados antagonismos y desconfianzas entre los partidos políticos.<sup>185</sup> Finalmente en las elecciones del 30 de junio de 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR, 22.5 %) ganó seguido muy de cerca por Evo Morales (20.94%) y Manfred Reyes Villa (NFR, 20.91%). Más atrás estaba el MIR (16.3%) y en 5° lugar, con el 6.1% el otro indígena aymara, Felipe Quispe del MIP. Y aunque Evo Morales quedó en segundo lugar por apenas 700 votos, llegando a disputar la presidencia a Sánchez de Lozada en el Parlamento, al no tener nadie el 50% de los votos válidos, éste último logró formar una coalición que lo hizo nuevamente presidente.<sup>186</sup> Sin Fue una coalición tan frágil que no pudo operar adecuadamente y terminó destruida en octubre de 2003.

Dicha crisis en el gobierno, inició desde febrero de ese mismo año, con el denominado *impuestazo*, un motín policial y el masivo rechazo social, específicamente, de la ciudad indígena-campesina y de trabajadores informales de El Alto, junto a la movilización popular en contra de los acuerdos no transparentes que habían iniciado las

---

<sup>185</sup> Roberto Laserna, “Bolivia: consumidores de democracia”, en *Bolivia: movimientos sociales y problemas de gobernabilidad*, Bolivia, Fundación Konrad Adenauer, 2005, p. 6.

<sup>186</sup> Xavier Álbo, “Bolivia”..., *op. cit.*, p. 72.

administraciones de Banzer y Quiroga, y que la administración actual quería continuar, para exportar gas a través de puertos chilenos. Con todos estos sucesos, el gobierno de Sánchez de Lozada perdió la poca confianza de la sociedad que había logrado. Para el 17 de Octubre de 2003 el presidente renunció “denunciando como ‘sedición’ las protestas en su contra y advirtiendo que ella no removería los peligros de la ‘desintegración nacional, el autoritarismo corporativista y sindical y la violencia fratricida’ puesto que de aceptarse su renuncia se podrían en cuestión los fundamentos de la democracia.”<sup>187</sup>

La situación de violencia existente en el país, imposibilitaron al presidente presentar su carta de renuncia al Congreso. Aun así, éste la aceptó. Sánchez de Lozada se embarcó en un avión que lo condujo a Estados Unidos. Aunque las sucesivas crisis sociales que enfrentó el gobierno fueron una causa importante para su caída, el distanciamiento del vicepresidente respecto de él y, de forma general del gobierno, es clave para entender dicha crisis política.

El vicepresidente, Carlos Mesa, denunció a su gobierno -implícitamente- de uso excesivo de violencia al señalar que se alejaba porque no estaba dispuesto a matar. En esos momentos, Octubre de 2003, la ciudad de La Paz sufría el asedio de las juntas vecinales de la ciudad de El Alto, la población vivía en la zozobra de la escasez y las amenazas de violencia, todo al tiempo que varios enfrentamientos habían causado la muerte de muchas personas. Carlos Mesa se ofreció entonces como opción de recambio para preservar la democracia con la sucesión constitucional. Planteó un gobierno sin partidos políticos pues consideraba que éstos estaban muy desacreditados, de ahí que decidiera conformar su gabinete con ciudadanos independientes y alejados del sistema político boliviano.

Carlos Mesa planteó las tareas de su gobierno en lo que poco después se conocería como la “agenda de Octubre”: referéndum vinculante sobre el gas, cambio de la Ley de Hidrocarburos y convocatoria a una Asamblea Constituyente. A pesar de la convulsión social y política que se vivió durante toda la administración de Mesa, aparentemente el gobierno trató de llevar a cabo sus promesas. Con todo, los bloqueos parlamentarios impidieron obtener buenos resultados.

Existieron tres hechos clave dentro del gobierno de Mesa. Uno ellos, fue la reforma constitucional aprobada en abril de 2004, la cual introdujo las figuras del referéndum, la

---

<sup>187</sup> Roberto Laserna, “Bolivia: consumidores de democracia”..., *op. cit.*, p 18.

iniciativa ciudadana y la Asamblea Constituyente.<sup>188</sup> A partir de ello, fue que se pudo llevar a cabo el referéndum sobre el gas, segundo hecho clave dentro de esta administración.

El referéndum pudo llevarse a cabo el 18 de julio de 2004. Roberto Laserna apunta que dicho referéndum superó apenas el 60% de los electores inscritos,<sup>189</sup> donde el gobierno obtuvo en las preguntas un respaldo entre el 54% y el 92% de los votos.<sup>190</sup> Sin embargo, continua Laserna, el referéndum sobre el gas había sido convertido en un plebiscito sobre la gestión mediante el cual el gobierno trató de obtener una legalidad que le era objetada continuamente por las presiones callejeras.<sup>191</sup> Dicho proceso nunca pudo llegar a verse reflejado en la conclusión de una nueva Ley de Hidrocarburos, al menos en ese momento, razón por la cual se mantuvo la tensión existente entre las propias clases gobernantes, y entre la sociedad y éstas.

Posteriormente, se llevaría dentro del Congreso boliviano la aprobación de una Ley de Hidrocarburos,<sup>192</sup> lo que provocaría una nueva ola de protestas.<sup>193</sup> La COB exigía la nacionalización de los yacimientos de gas y petróleo. Por su parte, el MAS, liderado por el entonces diputado Evo Morales, exigía una corrección de la ley en el Parlamento. Aunado a todas las protestas sociales existentes en el país, existía la presión por parte de las empresas petroleras transnacionales que no querían perder las obscenas ganancias de las cuales eran dueñas desde la capitalización de este sector energético.

Toda esta situación provocó serias tensiones sociales desarrollando o, mejor aún, profundizándose un sentimiento anticolla, antiandino y antimesista en la región de la media

---

<sup>188</sup> *Ibidem*, p. 19. Según Roberto Laserna, esta reforma constitucional violentó el procedimiento de reforma establecido hasta entonces vigente en la Constitución boliviana; según la Constitución solamente podía ser reforma parcialmente y en dos periodos legislativos, uno para declarar la necesidad de la reforma especificando los contenidos de los artículos que podían cambiarse, y el otro para aprobarlos y ponerlos en vigencia.

<sup>189</sup> De cuatro millones de inscritos, acudieron a participar más de 2.5 millones de ciudadanos, es decir, más del 60% y en todo el país la fórmula del Sí ganó en las cinco preguntas. Véase, Urioste Fernández de Córdoba, Miguel, “Inmolación forzada”, en Mesa Gisbert, Carlos D. (coord.), *Un gobierno de ciudadanos*, Bolivia, Plural Editores/Fundación Comunidad, 2008, p. 260.

<sup>190</sup> Las tres primeras referidas a la abrogatoria de la Ley de Hidrocarburos del presidente Sánchez de Lozada, la recuperación para el Estado de la propiedad de los hidrocarburos y la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos obtuvieron una respuesta positiva del más del 90%, mientras que en las preguntas 4 y 5, referidas a la utilización del gas como recurso estratégico para la negociación de la recuperación marítima de Bolivia y su exportación una vez satisfecho el consumo interno, obtuvieron una mayoría de más del 55%. Véase, Urioste Fernández de Córdoba, Miguel, “Inmolación forzada”... *op. cit.*, pp. 260-261.

<sup>191</sup> Roberto Laserna, “Bolivia: consumidores de democracia”... *op. cit.*, pp. 19-20.

<sup>192</sup> Schwarzbauer, Annette, “Bolivia -¿ingobernable?”, en *Bolivia: movimientos sociales...*, *op. cit.*, p. 43.

<sup>193</sup> Todos estos acontecimientos en torno al gas, serán analizados con mayor detalle en el último capítulo.

luna boliviana y que puso en duda la unidad del país. A pesar de ello, es eminente el cambio de núcleo de las movilizaciones indígena-populares. Pasó de “no a la exportación del gas por puertos chilenos”, en Octubre de 2003, a la “nacionalización del gas” a fines del gobierno de Mesa.<sup>194</sup>

El último hecho clave dentro de esta administración fueron las elecciones municipales. Se aplicó, también, por primera vez la reforma constitucional que eliminó el monopolio de partidos, lo que permitió a las agrupaciones ciudadanas e indígenas la presentación de candidaturas propias. Casi 450 organizaciones se presentaron a estos comicios. Esto produjo inevitablemente una dispersión del voto. El MAS se convirtió en la primera fuerza política nacional, pero obtuvo apenas el 17.4% de los votos. Los partidos tradicionales cayeron de modo estrepitoso: el MIR obtuvo el 6.5%, MNR 6.1%, NFR 2.7% y ADN 2.3%. Sin embargo, aunque casi todos estos partidos tradicionales se encontraban al borde de la desaparición, en el Congreso controlaban la mayoría absoluta.<sup>195</sup>

Finalmente, después de presentar varias renunciaciones ante el Congreso, las cuales fueron rechazadas, Carlos Mesa presentó definitivamente su dimisión ante el cargo el 6 de junio de 2005. Esto se debió, entre otras cosas, por la intensidad de las diversas presiones sociales, los bloqueos parlamentarios y las exigencias de los empresarios de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO). No obstante, Mesa ya había propuesto al Congreso adelantar las elecciones generales previstas para el 2007 para fines del año 2005.

#### **2.4. De movimientos obreros, campesinos e indígenas: una respuesta orquestada desde abajo**

Posterior a la década de 1980, los partidos políticos se consolidaron como los medios legítimos e institucionales más importantes para la canalización de las demandas de la sociedad, o al menos eso es lo que se aludía en el nuevo discurso democrático. No obstante, las circunstancias mostraron que dicha canalización era insuficiente o que en realidad nunca existió una verdadera representación popular por parte de los partidos políticos en tanto que éstos se desarrollaron como redes clientelares vagas e ideológicamente poco definidas,

---

<sup>194</sup> Miguel Urioste Fernández de Córdoba, “Inmolación forzada”..., *op. cit.*, p. 259.

<sup>195</sup> Carlos D. Mesa Gisbert, “Política de gobierno 2003-2005”, en Mesa Gisbert, Carlos D. (coord.), *Un gobierno de ciudadanos...*, *op. cit.*, p. 21.

organizadas con el objeto de ganar el poder y de distribuir cargos y puestos entre sus seguidores<sup>196</sup>. Los partidos políticos fueron, y siguen siendo, estructuras cupulares con escaso desarrollo de prácticas democráticas internas y poco abiertos a su entorno social.

Por tal motivo resulta comprensible observar la emergencia de nuevos actores, ocultos la mayoría de las veces por concepciones (erróneas) que se utilizaron para la realización y consolidación del Estado-nación boliviano.

Durante la etapa nacionalista se intentaron crear identidades colectivas bajo la normatividad de la *praxis* política que correspondía a la “modernización” de la sociedad boliviana, a la creación del “mercado nacional” y al fortalecimiento del capitalismo de Estado.<sup>197</sup> Mientras que con las reformas neoliberales, que se inician en un momento de profunda crisis del nacionalismo, como capacidad de reorganizar y gobernar la sociedad, como horizonte de proyección y finalidad de los procesos sociales y políticos, se crean condiciones legales y estructurales para desorganizar las posibilidades de generar una articulación interna, la cual se venía dando entre el Estado y la sociedad.<sup>198</sup> De esa forma, el Estado ya no se legitimaría en términos mayoritarios de apoyo social, sino en términos legales.

Al observar el sistema político boliviano y la recomposición de los partidos políticos, “en el que se configura un oligopolio ejercido y organizado por partidos de empresarios o que representan al poder económico y político de las fracciones empresariales y burguesas existentes en el país, tanto las viejas como las nuevas”,<sup>199</sup> podemos notar una disminución del espectro de representación en el seno del sistema de partidos. Situación verificable cuando identificamos la expulsión del Parlamento de la representación de fuerzas socialistas y de aquellas que habían introducido la temática étnico-cultural a finales de los años setenta; hablamos de los kataristas e indianistas.

---

<sup>196</sup> Catherine M. Conaghan; James M. Malloy; Leandro Wolfson, “Democracia y neoliberalismo en Perú, Ecuador y Bolivia”..., *op. cit.*, p. 876. [consulta: 17 de agosto de 2012].

<sup>197</sup> Rosario de León, “La cultura política del nacionalismo revolucionario y la cultura como política en Bolivia”, en Zemelman, Hugo (coord.), *Cultura y política en América Latina*, México, Siglo Veintiuno Editores, Universidad de las Naciones Unidas, 1990, p. 143.

<sup>198</sup> Luis Tapia argumenta que, dentro de este proceso de creación de condiciones legales y estructurales, también se crean las condiciones de una reorganización ampliada de la subordinación del país a las soberanías de organismos internacionales de regulación y de otros Estados, pero sobre todo, de capitales transnacionales. Véase, Luis Tapia, “Las olas de expansión y contracción de la democracia en Bolivia”..., *op. cit.*, p. 17. [consulta: 12 de agosto de 2012].

<sup>199</sup> Luis Tapia, “Las olas de expansión y contracción de la democracia en Bolivia”..., *op. cit.*, p. 17. [consulta: 12 de agosto de 2012].

A la par, se trata de eliminar cualquier posibilidad de incidencia, presión o influencia de los sectores sociales lo que supone, por lo tanto, una manifiesta reducción en el ejercicio de los derechos ciudadanos. La sociedad “se ve obligada a desarrollar caminos propios al margen del Estado, será el formado por los movimientos de resistencia, las organizaciones sociales, y especialmente las indígenas, que articularán, en principio de forma dispersa, un discurso y acción de oposición a los efectos de ese modelo que irá uniendo a la mayoría social del país hasta su cuestionamiento total.”<sup>200</sup>

A esto deben sumarse gestiones gubernamentales deficientes, ineficaces, con escasos resultados y orientadas fundamentalmente a favorecer intereses particulares. Esta situación, bien apunta González Pazos, irá gestando una imparable crisis de legitimidad, representatividad y credibilidad de los partidos políticos tradicionales, la cual se agudizaría a partir de finales de la década de los noventa, con el resquebrajamiento de la estabilidad económica alcanzada, por lo menos, en cuanto a los indicadores macroeconómicos; haciéndose extensible a la práctica totalidad del sistema político, en una suerte de asociación popular de la democracia representativa con el neoliberalismo y que unido a otros factores generaría una crisis total del modelo estatal y del sistema.<sup>201</sup>

Zegada considera que, ante “el evidente divorcio entre el sistema de partidos y la sociedad, los movimientos sociales y los actores de la sociedad civil optaron por recurrir de manera permanente a formas de autorepresentación social y a medidas de presión abierta contra el Estado para buscar la atención a sus demandas, desestimando los canales de mediación establecidos.”<sup>202</sup>

Es de hacer notar que, diversos actores sociales se vieron “obligados” a constituirse como tales, a consecuencia de las fallas y las carencias de adecuados mecanismos de intermediación entre el Estado y la sociedad, principalmente a partir del debilitamiento de quienes tradicionalmente cumplían estas funciones.<sup>203</sup>

Así, este periodo será clave para la consolidación de los procesos de constitución de sujetos y en particular de espacios políticos de participación, de deliberación y, por lo tanto, de articulación de fuerzas y movilización que dieron en el campo del sindicalismo

---

<sup>200</sup> Jesús González Pazos, “Bolivia. La construcción de...”, *op. cit.*, p. 76.

<sup>201</sup> *Ibidem*, p. 78.

<sup>202</sup> Teresa Zegada, “La democracia ante el desafío...”, *op. cit.*, pp. 32-33.

<sup>203</sup> *Cfr.*, Villarroel Nikitenko, Miguel, “La acción colectiva en Bolivia. Cambio y transformación de los conflictos sociales 1970-1998”..., *op. cit.*, p. 142.

campesino la constitución de asambleas de pueblos indígenas y movimientos antiprivatización que fueron confluyendo, de una manera no planificada, en las grandes movilizaciones que pusieron en crisis al sistema de partidos y al Estado a partir del año 2000.<sup>204</sup>

El cuestionamiento al funcionamiento del sistema democrático neoliberal, que no es nuevo pero que se profundiza en la década de 1990, culminará en el desencadenamiento de una insondable crisis social que demandará una transformación del sistema que no responde a los mínimos requerimientos de una sociedad con grandes fracturas históricas. “Estas fracturas tienen componentes económicos (desigualdad y pobreza), territoriales (cuestionamiento al centralismo estatal), socioculturales (exclusión y discriminación), y políticos (ineficiencia e ineficacia estatal y crisis del sistema de mediaciones). Los cuestionamientos a las bases estructurales del Estado y la expectativa en torno a su transformación conducen a la necesidad de construir un Estado más representativo de la diversidad y heterogeneidad estructural boliviana.”<sup>205</sup>

Lo trascendental en estos cuestionamientos de los movimientos sociales, así como en sus estructuras de acción política es que “ya no son organizaciones que simplemente pretenden alterar la situación social y política de los últimos años, sino que generan nuevos planteamientos y cuestionamientos profundos que van a la raíz fundacional del propio Estado. Se pondrán a desmontar las estructuras coloniales vigentes y modificar radicalmente la república racista y monocultural hacia una nueva de carácter multinacional y verdaderamente democrática.”<sup>206</sup>

#### **2.4.1. Movimiento obrero**

Existe una común en casi todos los autores que abordan el estudio del movimiento obrero boliviano: consideran que durante buena parte del siglo XX, posterior a la Revolución de 1952, el movimiento obrero -siendo los mineros su columna vertebral-, fue el actor que articulaba y proyectaba las fuerzas populares en el país al grado de ser la base social y

---

<sup>204</sup> Luis Tapia, “Las olas de expansión y contracción de la democracia en Bolivia”..., *op. cit.*, p. 19. [consulta: 12 de agosto de 2012].

<sup>205</sup> María Teresa Zegada, “La democracia ante el desafío...”, *op. cit.*, p. 35.

<sup>206</sup> Jesús González Pazos, “Bolivia. La construcción de...”, *op. cit.*, p. 100.



política de las reformas creadas por la misma revolución, y por tanto, el principal articulador de la sociedad civil. En torno a ése se articuló uno de los principales proyectos de nación y Estado.<sup>207</sup>

En dicho sentido García Linera<sup>208</sup> menciona que las divisas mineras, gestionadas por el Estado, fueron las que permitieron la comunicación expedita al oriente, las que lograron la universalización de la educación estatal gratuita, las que expandieron el comercio interno, las que aseguraron los salarios de los burócratas, de los maestros, oficiales y oficinistas. Asimismo, la minería permitió creer en la posibilidad de un asenso social a largo plazo, articuló un imaginario colectivo de unidad social verificable y deseable. Finalmente, fue este sector el que apostó por la democracia como opción de intervención en los asuntos comunes, fue el fundador de un sentido real de ciudadanía democratizadora a través del sindicato, el cual se expandió en todo lo largo y ancho del país. Fue un proletariado nacionalista pues su unidad, su identidad de clase, su asenso social por vía del sindicato, y su pequeño bienestar, se produjeron dentro del programa nacionalista surgido posterior de la Revolución de 1952.

Anterior a este proceso, los sectores laborales urbanos vinculados al trabajo artesanal y obrero en pequeña escala y comercio, articulaban sus experiencias y demandas en el anarquismo; siendo en los años treinta y cuarenta su etapa de mayor esplendor.<sup>209</sup> Con la creación de la Central Obrera Boliviana (COB) a partir de la Revolución del 1952 por parte del MNR quien buscaba ejercer un control corporativo de la sociedad, el movimiento obrero encontró una instancia que representara sus intereses de clase durante toda la segunda mitad del siglo XX.

Es interesante observar lo que Torrico menciona cuando considera que en realidad la Revolución de 1952 creó un sistema político en el cual, dado que no existían partidos políticos que pudieran disputarle al MNR el poder, la COB sería el mecanismo más

---

<sup>207</sup> Álvaro García Linera; Raquel Gutiérrez; Raúl Prada; Luis Tapia, *El retorno de la Bolivia plebeya...*, op. cit., p. 18.

<sup>208</sup> Álvaro García Linera, “La muerte de la condición obrera del siglo XX: la marcha minera por la vida”, *El retorno de la Bolivia plebeya...*, op. cit., p. 29.

<sup>209</sup> Cfr. Álvaro García Linera, “El desencuentro de dos razones revolucionarias. Indianismo y Marxismo”, [en línea], Buenos Aires, *Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano*, CLACSO, No. 3, diciembre de 2007, URL: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/cuadernos/garcia/garcia.pdf>, [consulta: 19 de noviembre de 2011].

importante de mediación entre la sociedad y el Estado.<sup>210</sup> Por lo tanto, dicha central no se asumió desde un principio como un mero sindicato, sino como un órgano de poder en busca de la supresión de toda explotación del hombre por el hombre y por el establecimiento, por parte de algunos sectores de la COB, de una sociedad socialista a través de la revolución nacional y popular.<sup>211</sup>

El movimiento obrero creó una cultura reivindicativa centrada en el salario, los beneficios sociales, la alimentación, la protección familiar, la salud y vivienda, el cuidado familiar, es decir, se enfocó en la conquista de derechos sociales y labores mínimos e indispensables para garantizar la continuidad del trabajo y la vigencia de la dignidad colectiva. García Linera los califica como “un conjunto de derechos articulados a la regulación del valor social medio de la fuerza de trabajo, esto es, refieren al ámbito de la valorización histórico-moral de la fuerza trabajo dentro del espacio del mercado de la fuerza de trabajo.”<sup>212</sup> La fortaleza del movimiento obrero tuvo su fundamento material y político en el Estado y en la economía estatalizada, esto es, la industrialización nacionalista promovida por el mismo gobierno.

En cuanto al papel que jugó este sector durante las dictaduras bolivianas, podemos argumentar que el movimiento obrero, liderado por la COB y el Estado, aparecían como los más irreductibles opositores. Ello se explica porque “en la raíz de la historia de ambos, cada uno era el engendro del otro y su extensión más duradera (bajo la forma de la gestión de la producción minera y circulación de los excedentes económicos).”<sup>213</sup> Por otra parte, al finalizar la etapa dictatorial y previo al proceso de 1982, emergieron en el campo dos nuevos movimientos y organizaciones ligados a partidos de izquierda y a la COB. Al inicio del régimen de Barrientos surgió el Bloque Campesino Independiente como reacción a su plan de crear un “impuesto único” sobre la tierra, algo que no tuvo eco en el campo y por lo que debió archivarse. El otro más tardío y afiliado a la COB fue la Federación de Colonizadores surgida tras la muerte de Barrientos como instrumento de protesta frente al incumplimiento del Instituto Nacional de Colonización; incluso, se firmó un pacto en

---

<sup>210</sup> Mario Alejandro Torrico Terán, *La economía política del periodo democrático y neoliberal en Bolivia en el orden mundial...*, op. cit., pp. 50-51.

<sup>211</sup> *Ídem.*

<sup>212</sup> Álvaro García Linera, “La muerte de la condición obrera del siglo XX...”, op. cit., pp. 45-46.

<sup>213</sup> *Ibidem*, p. 43.

Caranavi entre obreros, universitarios y campesinos.<sup>214</sup> Ya para la etapa democrática, la Central Obrera Boliviana seguía siendo uno de los actores sociales determinantes del proceso y se consideraba, según González Pazos, que nada era factible sin la participación directa de esta central. Los primeros años democráticos fueron protagonizados, en gran medida, por las actuaciones de la COB, razón por la cual la continua inestabilidad político-social era achacada a la organización obrera por parte de las élites dominantes directamente implicadas en el nuevo panorama político económico.<sup>215</sup>

Durante el gobierno de la UDP, la COB formuló en 1983 el *Plan Económico-Social de Emergencia* donde se demandaba poner en marcha un co-gobierno con la central, la co-gestión mayoritaria de los trabajadores en las empresas productivas del Estado, y el control obrero en la gran empresa privada. Los argumentos expuestos incluían que debía haber un cambio en la organización de métodos de gestión para alcanzar una mayor eficiencia de las empresas del Estado y en la administración pública; que no hay mejor garantía para el crecimiento de la economía que una clase trabajadora activa y estimulada en función de su participación en el proceso de producción; y que la participación y vigilancia obrera en las empresas evitarían la evasión de impuestos y por tanto propiciarían el incremento del ingreso público. La UDP rechazó dicho co-gobierno, por lo cual la COB realizó un conjunto de marchas, huelgas, bloqueos, etcétera, que ocasionaron una crisis social y una parálisis estatal que sumadas al empeoramiento de la crisis económica obligaron a Siles Zuazo a adelantar -en más de un año- las elecciones presidenciales.<sup>216</sup>

Con la llegada de Víctor Paz Estenssoro y la aplicación de la Nueva Política Económica se articuló un nuevo mecanismo, un nuevo plan, que atacó directamente a la central sindical: se buscaba la destrucción de la COB y del poder de los sindicatos en la vida política del país. El contexto internacional daría la pauta, el hundimiento, en 1986, del precio del estaño y por tanto la pérdida radical del valor de su explotación, permitió la toma de una serie de medidas que se dirigieron a lograr la desaparición del sector minero.<sup>217</sup>

---

<sup>214</sup> Xavier Álbo, “25 años de democracia, participación... *op. cit.*, p. 44.

<sup>215</sup> Jesús González Pazos, “Bolivia. La construcción de...”, *op. cit.*, p. 75.

<sup>216</sup> Mario Alejandro Torrico Terán, *La economía política del periodo democrático y neoliberal en Bolivia en el orden mundial...*, *op. cit.*, pp. 55-56.

<sup>217</sup> Jesús González Pazos, “Bolivia. La construcción de...”, *op. cit.*, pp. 75-76. García Linera explica que las razones para acabar con la minería provenían de presiones internacionales e intereses empresariales locales, pues ellos consideraban como debería ser la composición económica de la sociedad y la composición política del Estado.

González Pazos menciona que en solamente un año la empresa estatal procedió al despido masivo de prácticamente el 75% de sus trabajadores, más de 27,000 mineros y sus familias que, además, fueron expulsados de los campamentos y empujados a la emigración. Se desarrollaron diferentes políticas sociales para contener el descontento social que provocaba esto. Las políticas de “relocalización” fueron aplicadas a la mayor parte de los trabajadores de las empresas mineras estatales. Esta situación hizo perder la hegemonía a aquella, anterior, vanguardia proletaria dentro del movimiento popular.

En medio de toda esta agitación político-sindical se decretó una huelga general por parte de la COB. Fue un asunto que casi logra la polarización total del país. Se trató de la ocupación sindical de las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por parte de los obreros y empleados. Se optó por inmovilizar los puntos clave de la producción, el transporte, la refinación y la distribución de hidrocarburos. La condición monopólica de esta empresa energética facilitó grandemente este acto de resistencia sindical. Empero, la intervención de efectivos militares impidió sabotajes a las instalaciones que estaban en plena ejecución.<sup>218</sup> Es importante considerar esta movilización, pues será la primera en contra de las políticas neoliberales aplicadas en el gobierno de Paz Estenssoro<sup>219</sup>.

Otro acontecimiento de malestar social, y sindical, que hay que tomar en cuenta fue la acción sindical denominada “Marcha por la Vida” de 1986. Una caminata de casi 200 kilómetros hacia la sede del gobierno por el cierre de operaciones de las minas. Sus características y vigor de lucha masificada fueron impresionantes. Marchaban por la carretera miles de hombres y mujeres cuyo núcleo estuvo constituido por mineros y sus familiares. García Linera considera que esta marcha validó un modo histórico de entender la política como un hecho de masas mediante el cual a) el trabajador asume una identidad

---

<sup>218</sup> Guillermo Bedregal, *Víctor Paz Estenssoro, el político...*, op. cit., pp. 680-681.

<sup>219</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar menciona en su libro, *¡A desordenar! Por una historia abierta de la lucha social*, algunas experiencias sociales posteriores a la promulgación del Decreto 21060. Ella observa que, las huelgas y movilizaciones se hicieron cada vez menos frecuentes. Al ánimo de protesta colectiva frente a lo que era el paulatino desmantelamiento de todas las conquistas previas, le sucedía la temerosa cautela de conservar individualmente el puesto de trabajo, de no ser “relocalizado”. Cada nuevo golpe podía ser respondido sólo con mayor timidez: se fragmentaban las unificaciones construidas en el anterior periodo de auge de las luchas de masas, todos comenzaban a mirarse entre sí con desconfianza porque, esencialmente, cada uno desconfiaba de sí mismo. Cada hombre y cada mujer sabía que el momento decisivo, cuando hubiera que decidir sobre la lucha a emprender y sus riesgos, muy probablemente cundiría el temor en cada uno y prevalecía la inercia más conservadora: a lo largo de 1987, la clase obrera boliviana se quedó pasmada ante la violencia de la ofensiva patronal-estatal.

corporativa por centro de trabajo y, b) este trabajador colectivo así constituido como sindicato interpela al Estado y ejerce, sin más mediación, su lucha por el reconocimiento y sus derechos públicos.<sup>220</sup>

Con el cierre de operaciones de las empresas mineras estatales se puso fin al espacio social de la narrativa obrera de los últimos 50 años. “El fin de este espacio se comenzará a avizorar como el fin del proletariado, de las estructuras materiales y de las estructuras mentales de la condición obrera [...] el fin de obrero [...] no será del proletariado en general, sino de un *tipo de proletariado*, de un tipo de estructuras materiales y simbólicas de la condición obrera de clase y el largo y tortuoso proceso de formación de nuevas estructuras materiales y simbólicas que están dando nacimiento a una condición obrera contemporánea en el siglo XXI.”<sup>221</sup>

Luis Tapia, Álvaro García, Raúl Prada y Raquel Gutiérrez consideran que la estructura material y la condición obrera que sostenían este eje histórico-político se desarticuló, primero, a partir de una iniciativa estatal y de la clase dominante y, luego, por descomposición interna. A partir de este momento, se inició un ciclo de derrotas en el que las clases subalternas, no sólo los obreros y mineros, no atinaban más que atrincherarse a la evocatoria de antiguos pactos sociales. El movimiento obrero se sintió incapaz de producir un proyecto autónomo de orden social distinto al que había conocido y por ello demandaba el regreso al antiguo horizonte del Estado nacionalista.<sup>222</sup>

Ahora bien, posterior a este ciclo de derrotas, durante la década de 1980 y 1990 y cuando se pensaban que los mineros parecían estar confinados en la historia, éstos ponen en evidencia todo lo contrario. Rosario León menciona que gracias a su inagotable imaginación y experiencia, abren la brecha de un nuevo camino de lucha política: el derecho a ser y hacer la vida, desde una dimensión local y cotidiana.<sup>223</sup>

Con la organización de cooperativas por parte de los mineros relocalizados se inicia una nueva etapa donde, sin duda, se definirán identidades y formas de negociación política nuevas, en la medida en que este sector se amplía en una magnitud superior a lo que fue la organización sindical en sus mejores tiempos, y en la medida en que el carácter de las

---

<sup>220</sup> Álvaro García Linera, “La muerte de la condición obrera del siglo XX...”, *op. cit.*, p. 36.

<sup>221</sup> *Ibidem*, p. 50.

<sup>222</sup> *Ibidem*, pp. 44-45.

<sup>223</sup> Rosario León, “La cultura política del nacionalismo revolucionario y la cultura como política en Bolivia”..., *op. cit.*, p. 151.

relaciones de producción en el interior del sector cooperativo será muy diferente al planteado por el sector estatal.<sup>224</sup>

Es importante tener en cuenta que, el fin de este tipo de configuración social, de las condiciones de producción y constitución de sujetos políticos, trae consigo la posibilidad de pensar nuevas formas de levante de un horizonte político y de civilización desde otros sectores de la sociedad. Procesos parecidos a los de los obreros ocurrieron en otros sectores, por ejemplo el sector indígena-campesino cuyos sujetos concretos vivían en condiciones precarias desde largo tiempo atrás. Es por tal motivo que dicho sector se sintió menos sacudido y más bien alcanzó un mayor protagonismo dentro del movimiento popular. Con los años, las juntas vecinales y otros sectores urbanos informales, con mucha presencia de inmigrantes rurales y ex dirigentes obreros relocalizados, se unirán a este sector.<sup>225</sup>

Sin embargo, con la llegada de la institucionalización de la democracia, la importancia de los partidos políticos aumentó en diversos ámbitos: elecciones, el poder Ejecutivo, el Congreso y Consejos Municipales. El debilitamiento del núcleo minero de la COB ayudó de manera sobresaliente en este proceso. Aun así el protagonismo que ganaron los partidos políticos, en general las instituciones democráticas, durante la década de 1990, se vería debilitado al iniciar el siglo XXI, debido a diferentes situaciones y problemas dentro de ellos.

Finalmente, hay que puntualizar que toda la experiencia sindical, reflejada en los mecanismos de unificación colectiva, como son la asamblea, la marcha, la movilización, la rebelión, fueron interiorizadas por los mismos sujetos despedidos y relocalizados. Se constató que dichas prácticas también pueden ser ejecutadas mediante técnicas asociativas comunalizadas y en otros espacios distintos al sindicato<sup>226</sup>.

---

<sup>224</sup> *Ibidem*, p. 158.

<sup>225</sup> Xavier Álbo, “25 años de democracia, participación...”, *op. cit.*, p. 49.

<sup>226</sup> García Linera considera que, fue el sindicato-en-lucha el lugar donde el ser desarraigado de la tierra y del ayllu, el obrero encuentra un sentido de intelección de la vida, una nueva familia perenne que le devuelve la vivencia de integración y de trascendencia, sin el cual ningún ser humano es capaz de sostenerse en pie. En fin, el sindicato, su disciplina, sus costumbres movilizadas son el lugar donde el obrero se puede mirar a sí mismo en la historia y proyectarse en el porvenir, de retarlo, de desearlo y hundirse en él. En este sentido se puede decir que el sindicato fue la única organización de clase obrera del siglo XX. Véase, García Linera, Álvaro, “La muerte de la condición obrera del siglo XX: la marcha minera por la vida...”, *op. cit.*, p. 37.

#### 2.4.2. Movimientos campesino-indígenas

Hablar de movimientos campesinos e indígenas en Bolivia sería tomar como punto partida las rebeliones acaecidas desde el siglo XVIII, si no es que desde la invasión y colonización; lo cual resultaría una tarea muy provechosa pero poco satisfactoria y clarificadora para los objetivos de esta investigación. No obstante sí podemos apuntar que las demandas de los movimientos indígenas han variado con la historia boliviana. El respeto de la propiedad de las tierras ante la expansión de la hacienda y las relaciones serviles antes de 1952 cedió su lugar principal a la búsqueda de la independencia organizativa en los periodos posteriores y a la recuperación de la democracia hacia finales de la década del setenta del siglo pasado. Posteriormente, el discurso de los líderes campesinos e indígenas refieren a la autonomía, a la integración y al respeto de las diferencias, expresan en algunos casos posturas milenarias, y fundamentalistas que intentan recuperar la situación precolonial, mientras que en otros se reclama el poder para los sectores mayoritarios de la población nacional.<sup>227</sup>

Teniendo claro esto, la coyuntura de la cual partiremos, para contextualizar este apartado será la Revolución de 1952; tal y como se ha venido haciendo a lo largo de este trabajo. Es sin embargo indispensable señalar y no perder de vista que la resistencia por parte de los grupos indígenas (llamados durante el siglo XX campesinos) siempre estuvo presente desde que inició la colonización de estos territorios, la cual la mayoría de las veces fue reprimida y diluida por las clases en el poder. Resistencia indígena siempre existió, lo novedoso, o nuevo, son sus formas de articularse y proyectarse ante el Estado y la sociedad.

Enfocándonos directamente en el caso boliviano, es necesario apuntar y resaltar, primeramente que existieron dos corrientes ideológicas (pensamiento marxista y el nacionalismo revolucionario) que influyeron, de manera determinante, en la construcción de una identidad colectiva campesina y, posteriormente, indígena, la cual pretendió y pretende hacer de la recuperación y el olvido selectivo del pasado un instrumento de identidad crítica<sup>228</sup> frente a las políticas implementadas por los gobiernos en el poder tanto dictatoriales nacionalistas como demócratas neoliberales.

---

<sup>227</sup> Humberto Vargas R.; Eduardo Córdova, "Bolivia: un país de re-configuraciones por una cultura de pactos políticos y de conflictos"... , *op. cit.*, pp. 97-98.

<sup>228</sup> Carlos Monsiváis, "La pasión de la historia", en *Historia ¿para qué?*, México, Siglo XXI, 2007, p. 171.

Cuando hablamos del pensamiento marxista en Bolivia, el cual cobró fuerza hasta los años de 1940, por medio de la actividad institucional del Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), el Partido Obrero Revolucionario (POR) y la producción intelectual de sus dirigentes,<sup>229</sup> queremos hacer referencia a la aplicación de esta ideología en la sociedad, la cual no fue privativa de este país, siendo que la mayoría de los países latinoamericanos corrieron más o menos con la misma suerte.<sup>230</sup> Los objetivos de dicho programa iban desde el “despliegue incesante de la modernidad capitalista del trabajo, sustitución de las relaciones ‘tradicionales’ de producción, especialmente de la comunidad campesina que deberá ‘colectivizarse’ u ‘obrerizarse’, homogeneización cultural para consolidar el Estado y una creciente estatalización de las actividades productivas como base de una economía planificada y de una cohesión nacional-estatal de la sociedad.”<sup>231</sup>

El resultado de esto fue la formación de una cultura política en Bolivia extendida en sectores obreros, asalariados y estudiantiles basada en la primacía de la identidad obrera por encima de otras identidades; desarrollándose una convicción acerca del papel progresista de la tecnología industrial en la estructuración de la económica; del papel central del Estado en la propiedad y distribución de la riqueza; de la nacionalización cultural de la sociedad; y de la inferioridad, histórica y clasista de las sociedades campesinas.<sup>232</sup>

En torno a este proceso particular García Linera apunta que, esta “narrativa y teleología de la historia creará un bloqueo cognitivo y una imposibilidad epistemológica sobre dos realidades que será el punto de partida de otro proyecto de emancipación que con el tiempo se sobrepondrá a la propia ideología marxista: la temática campesina y étnica del país.”<sup>233</sup> Dicho proyecto de emancipación cobraría un fuerte impulso con la

---

<sup>229</sup> Cfr. Álvaro García Linera, “El desencuentro de dos razones revolucionarias. Indianismo y Marxismo”, [en línea]..., *op. cit.* Estos son Guillermo Lora, José Aguirre Gainsborg, José Antonio Arce, Arturo Urquidi, etc.

<sup>230</sup> Para una mayor caracterización del marxismo en América Latina consúltese Fonet-Betancourt, Raúl, *Transformación del marxismo. Historia del marxismo en América Latina*, México, Universidad Autónoma de Nuevo León, Plaza y Valdés, 2001, 417 pp.

<sup>231</sup> Álvaro García Linera, “El desencuentro de dos razones revolucionarias. Indianismo y Marxismo”, [en línea]..., *op. cit.*

<sup>232</sup> *Ídem.*

<sup>233</sup> *Ídem.* García Linera argumentará que, “[...] la comunidad y sus relaciones productivas sencillamente no existirán en el horizonte interpretativo de este marxismo y mucho menos cualquier otra identidad social que no sea la estrictamente económica; en este caso, campesina. Los repertorios culturales de las clases sociales, la diversidad identitaria de la sociedad o la existencia de naciones y pueblos indígenas serán un no lugar en la literatura y en la estrategia izquierdista.” Véase, Álvaro García Linera, “El desencuentro de dos razones revolucionarias. Indianismo y Marxismo”, [en línea]..., *op. cit.*



implementación de las políticas neoliberales y la crisis de la identidad obrera en el país, tal y como se apuntó anteriormente.

En cuanto al nacionalismo revolucionario, encabezado por el MNR posterior a la Revolución de 1952, éste negará y rechazará la temática comunitaria agraria, a pesar de la instrumentalización de la reforma a este sector como fuerza productiva política capaz de servir de poder regenerativo de la estructura social.<sup>234</sup>

Este nacionalismo será un horizonte que cubriría una parte muy significativa del imaginario de las comunidades campesinas e indígenas valiéndose de herramientas como el voto universal y la Reforma Agraria para generar una homogeneización social y cultural y, por tanto, una desetnización del discurso e ideario campesino. Sin embargo, este proyecto presentará desde el inicio grietas por las cuales emergerá una identidad campesino-indígena. Entre los primeros y principales fracasos se encuentra:

Los primeros fracasos de este proyecto de modernización económica y de nacionalización de la sociedad se comenzarán a manifestar en los años 70, cuando la etnicidad, bajo la forma del apellido, el idioma y el color de piel, será reactualizada por las élites dominantes como uno más de los mecanismos de selección para la movilidad social, renovando la vieja lógica colonial de enclasmiento y desclasamiento social que se tenía, junto a las redes sociales y a la capacidad económica, como los principales medios de ascenso y descenso social.<sup>235</sup>

Esto sólo es comprensible cuando observamos que, a partir de la Revolución de 1952, se desarrollaron mecanismos de movilidad interna vía los mercados y la ampliación de la base mercantil de la economía rural y con ello un rápido crecimiento de las ciudades, el acceso al trabajo asalariado estable y el ingreso a la educación superior como modos de ascenso social.<sup>236</sup> Sin embargo, el mercado laboral, apunta García Linera, era demasiado estrecho e incapaz para acoger la creciente migración.

Aunado a ello están los componentes de subordinación del campesinado al Estado, los cuales lo proyectaban como clientela para el mercado político, como víctima de una forma de negociación política basada en el caudillismo y el prebendalismo que generaron condiciones básicas para hacer posible su cooptación y control.<sup>237</sup> Entre los componentes

---

<sup>234</sup> Álvaro García Linera, “El desencuentro de dos razones revolucionarias. Indianismo y Marxismo”, [en línea]..., *op. cit.*

<sup>235</sup> *Ídem.*

<sup>236</sup> *Ídem.*

<sup>237</sup> Rosario León, “La cultura política del nacionalismo revolucionario y la cultura como política en Bolivia”..., *op. cit.*, p. 152.

de subordinación se encuentra, por una parte, el aparato sindical construido por el MNR. Y aunque los sindicatos agrarios surgen en la escena política del país desde 1936, es a partir del nacionalismo revolucionario que se cooptan a estos movimientos para convertirlos en “las masas campesinas” que sustentaron el proyecto creado por la Revolución.<sup>238</sup> Por otra parte está la instauración del *Pacto Militar-Campesino* (PMC) de 1964 que se implementó durante el periodo militar. Debe subrayarse que tal pacto se debilitó como consecuencia de la sangrienta masacre de campesinos en enero de 1974, la *masacre del valle*, cuestión que fortaleció a corrientes independientes, en especial el katarismo.<sup>239</sup> Además, dentro de este periodo se origina en una parte muy importante de este sector, una crisis de identidad campesina. Dicha crisis, considera León, se dio a partir de la superación de las justificaciones de su existencia en tanto reivindicaciones de un Estado que condicionó su existencia “ciudadana” al compromiso y construcción de un mercado nacional. Este proceso no implicó sino el olvido histórico de la condición colonial de su ser diferente y, por ello, su propio cuestionamiento se dio a partir de la recuperación de su memoria larga.<sup>240</sup>

De esta forma, el indianismo, corriente ideológica contestataria a las dos corrientes anteriores, será la particularidad del movimiento indígena boliviano<sup>241</sup> surgido durante la década de 1970. El katarismo será una vertiente muy importante para el surgimiento de otros movimientos en todo el territorio nacional. Por lo tanto, es interesante observar como

---

<sup>238</sup> *Ibidem*, p. 154.

<sup>239</sup> Las primeras raíces están en un grupo de jóvenes que estudiaban secundaria en La Paz, y allí entraron en contacto con Fausto Reinaga, llegando a formar primero el Movimiento 15 de Noviembre (aniversario de la inmolación de Tupaj Katari en 1781) y, en la universidad, el Movimiento Universitario Julián Apaza (MUJA). Se llamaron kataristas y generalizaron como lema una frase de resonancias míticas que ellos atribuían a Tupaj Katari haber proferido al ser descuartizado en Peñas en 1781: “Volveré y seré millones”. Para mayor información puede revisarse, Xavier Álbo, “25 años de democracia, participación...”, *op. cit.*, pp. 44-45.

<sup>240</sup> Rosario León, “La cultura política del nacionalismo revolucionario y la cultura como política en Bolivia”..., *op. cit.*, p. 154. Este Pacto será una de las grandes diferencias entre el movimiento campesino-indígena y el movimiento obrero, representado por la COB, pues el grueso de los dirigentes campesinos se mantuvieron fieles a los grupos militares que se sucedieron en el poder; mientras la COB fue la principal fuerza opositora a estos gobiernos. Asimismo, este patrón de subordinación no estuvo exento de conflictos por cuanto la columna vertebral del PMC lo constituía el sindicalismo agrario cochabambino, mientras que en las zonas altiplánicas comenzaron a conformarse organizaciones campesinas disidentes.

<sup>241</sup> Rosario León explica que el nacionalismo revolucionario transformó los movimientos emancipatorios de los indios en movimientos sindicales campesinos (convirtiendo a los indios en campesinos), y neutralizando, con cierta relatividad, las luchas obreras al hacerlos defensores implacables de las medidas de Revolución de 1952, justificando, en el discurso, una “comunidad de intereses” para intentar homogeneizar las demandas sociales y políticas de obreros y campesinos y clases medias. Véase, Rosario León, “La cultura política del nacionalismo revolucionario y la cultura como política en Bolivia”..., *op. cit.*, p. 157.

esta nueva corriente ideológica se constituirá en una narrativa de resistencia que tendrá eco durante las movilizaciones de finales del siglo XX y principios del XXI como una auténtica opción de poder.

Por otra parte, el katarismo además de que sirvió para la revalorización de aymaras y quechuas, también sirvió para modificar la autoimagen de Bolivia. Se pasó de la imagen de una Bolivia mestiza, más o menos unida culturalmente, al reconocimiento de una Bolivia multicultural y plurilingüe, pero ya no como mero dato etnográfico sino como producto de la politización de los pueblos y culturas que antes habían estado excluidos de la comprensión o la definición de lo que es Bolivia en términos políticos. Asimismo, se precisó que el katarismo ha sido el discurso político, ideológico y cultural que ha vinculado una parte de los procesos de recomposición de estructuras de autoridad originaria, parte de los procesos de organización, unificación que se han venido experimentando en toda la zona andina.<sup>242</sup> Finalmente, este movimiento experimentó una bifurcación entre una experiencia de la autonomía que persiste en sí misma aunque más periférica en la política, y una reintegración subordinada y servil al orden económico, político e ideológico de las clases en el poder.<sup>243</sup>

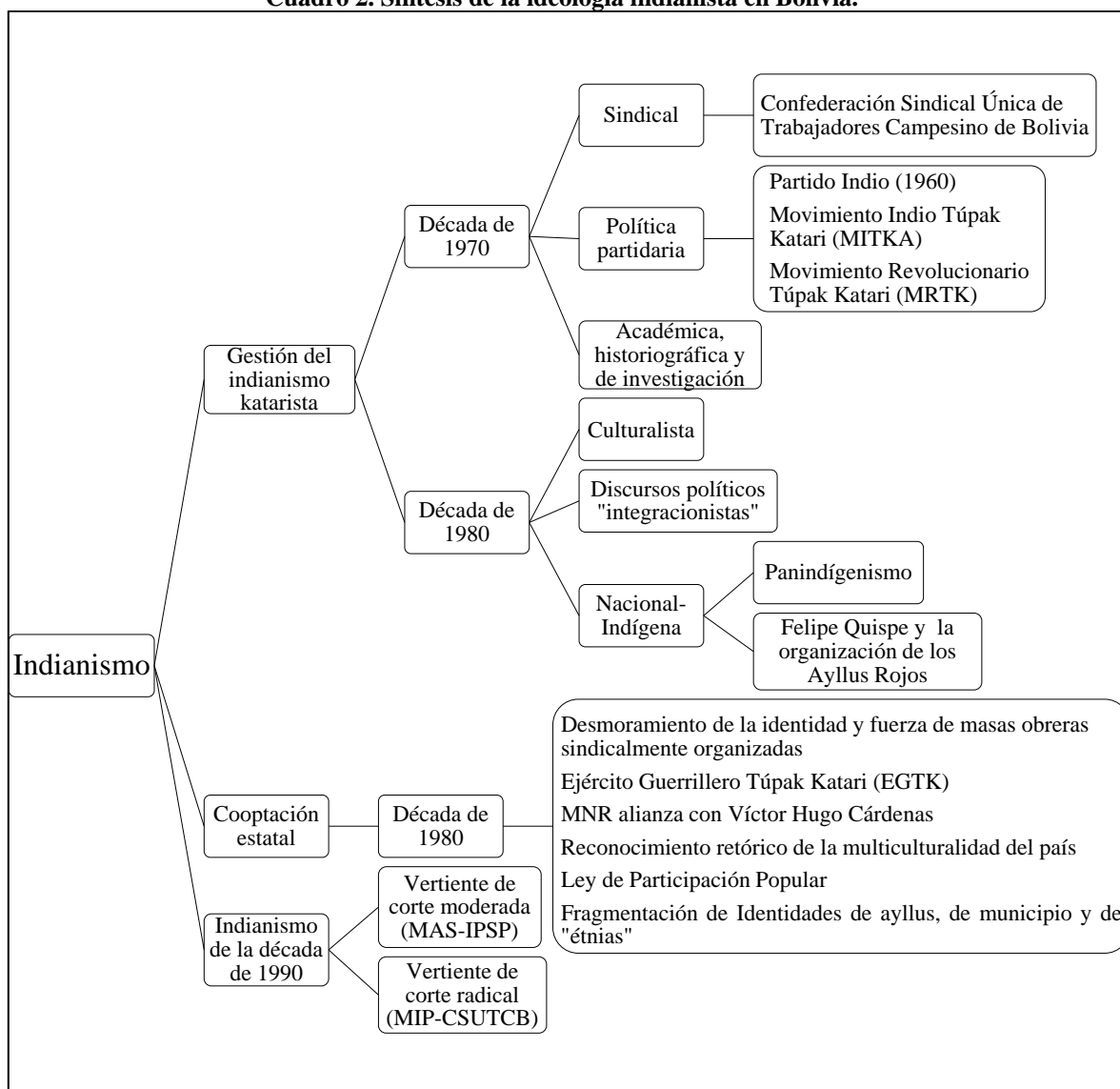
García Linera concluye que dicha corriente ha transitado por varios periodos (gestación del indianismo katarista, cooptación estatal, indianismo de los noventa), por lo cual nos hemos permitido realizar un cuadro donde se sintetiza el desarrollo del mismo, para tener una visión mucho más clara de esta corriente. Véase Cuadro 2.

---

<sup>242</sup> Luis Tapia, “Las estrategias políticas de los movimientos indígenas y los Estados latinoamericanos frente a la insurgencia indígena. Movimientos comunitarios y campesinos y crisis de Estado”, en Gutiérrez Aguilar, Raquel; Escárzaga, Fabiola (coord.), *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, vol. II, México, 2006, Casa Juan Pablos, Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos, Gobiernos del Distrito Federal, UAM, BUAP, Diakonia, Centro de Investigación en Desarrollo-Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Pública de El Alto, UNAM, pp. 416-417. Dirección URL: [http://www.jornadas-andesmesoamerica.org/pdf/movimiento\\_indigena\\_vol2.pdf](http://www.jornadas-andesmesoamerica.org/pdf/movimiento_indigena_vol2.pdf), [consulta: 23 de enero de 2013].

<sup>243</sup> Luis Tapia, “La densidad de la síntesis”, *El retorno de la Bolivia plebeya...*, op. cit., p. 85.

**Cuadro 2. Síntesis de la ideología indianista en Bolivia.**



Elaboración propia a partir del texto de Álvaro García Linera, "El desencuentro de dos razones revolucionarias. Indianismo y Marxismo",... *op. cit.*

De este modo, podemos observar la evolución de la corriente indianista y cómo es que ésta será parte fundamental del movimiento campesino e indígena en el altiplano boliviano. Sin embargo, debemos tener claro que en el oriente también se desarrollaron procesos de reivindicación indígena, si no ajenos a esta corriente ideológica, sí diferenciados de los procesos que se llevaron a cabo en estos territorios donde tuvo mayor eco. Un acontecimiento de envergadura de aquellos pueblos indígenas será la Marcha por el

Territorio y la Dignidad de los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas en 1990<sup>244</sup>, donde se demandaba el reconocimiento de su territorio, sus usos y costumbres, y sobre todo la propiedad colectiva de la tierra. Sin embargo, es necesario tener presente que el analizar estos procesos acaecidos en este lado del país rebasa los objetivos de la investigación, por tal motivo, consideramos preciso sólo enunciar que existieron dichos procesos, para no dejar entrever que en el oriente boliviano no existieron, y existen, reivindicaciones indígenas.

Ahora bien y siguiendo la lógica del cuadro anterior, expondremos puntos específicos sobre los diversos periodos que atravesó el movimiento campesino-indígena, pues es aquí donde se desarrollan muchos de los aspectos que cobrarán fuerza en las movilizaciones de principios del siglo XXI. El periodo la gestación del indianismo katarista se desarrollará durante las décadas de 1970 y 1980, por medio de la actividad de la intelectualidad aymara migrante que accede a procesos de escolarización superior y vida urbana, pero manteniendo vínculos con las comunidades rurales y sus sistemas de autoridad sindical. El aporte fundamental de este periodo será la reinención de la indianidad, pero ya no como estigma sino como sujeto de emancipación, como designio histórico, como proyecto político. La obra de Fausto Reinaga destacará debido a que ésta está dirigida a construir una identidad que se diferencia de la otra “Bolivia mestiza y colonial” y de la izquierda obrerista, que apoyaba el proyecto homogeneizante y modernista del Estado.<sup>245</sup> El Manifiesto de Tiwanaku, difundido en 1973, dio forma a esta concepción pues dicho manifiesto proponía la creación de un movimiento autónomo campesino.

La fuerza del movimiento indianista katarista se va a centrar en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) la cual se fundó en 1979 bajo los auspicios de la COB en el marco del Primer Congreso de Unidad

---

<sup>244</sup> Otro hecho trascendente fueron: la creación de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente del Cacho y la Amazonia de Bolivia (CIDOB). Según Luis Tapia, la diferencia entre los pueblos indígenas de las tierras bajas y tierras altas radica en los procesos políticos de unificación. Mientras que, en el núcleo aymara-quechua se ha dado el paso de los sindicatos a la organización de partidos para poder disputar, durante varios años, el gobierno en el nivel municipal, y más o menos rápido en el nivel nacional con mucho éxito; en tierras bajas, las alianzas, sobre todo la de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) con algunos partidos políticos durante la década de los noventa, no ha llevado a resultados exitosos, no se han convertido en victorias electorales. Véase, Luis Tapia, “Las estrategias políticas de los movimientos indígenas y los Estados latinoamericanos frente a la insurgencia indígena. Movimientos comunitarios y campesinos y crisis de Estado”..., *op. cit.*, p. 419.

<sup>245</sup> Véase, Álvaro García Linera, “El desencuentro de dos razones revolucionarias. Indianismo y Marxismo”, [en línea]..., *op. cit.*

Campesina.<sup>246</sup> La tesis política de la CSUTCB pretende ser una respuesta a la historia de sometimiento del sector indígena-campesino en Bolivia. Su lucha buscará la libertad de una sociedad sin explotación ni opresión, una sociedad organizada en un Estado plurinacional que desarrolle las diversas culturas y las formas de gobierno propio.<sup>247</sup>

La CSUTCB desconoció el PMC y pasó a ser la organización matriz de prácticamente todo el campesinado. En 1980 se conformó rápidamente su rama femenina, llamada Federación Nacional de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” (la militante esposa de Tupaj Katari).<sup>248</sup> Y, aunque, los postulados de dicha confederación tienen muchas diferencias respecto a los planteamientos de la COB, como lo es la instauración de una sociedad plurinacional y pluricultural, ambas organizaciones lucharon juntas por la restauración democrática a inicios de los años ochenta.

La presión política de la CSUTCB será mucho más importante en el periodo democrático por su independencia sindical ante el Estado y porque las políticas neoliberales no dañaron su estructura como ocurrió con la COB, lo que originará que se posicione como un actor político muy relevante.

Asimismo, gracias al discurso de reivindicación indígena, los trabajadores y profesionales de origen aymara y quechua son cada vez más sensibles a las diversas formas de discriminación que se ejercen en su contra. Esta corriente étnica también se manifiesta en el surgimiento de partidos no-tradicionales que, aunque de modo ambiguo, recogen el resentimiento contra el mundo criollo y sus estructuras institucionales. Se trata de partidos tales como el MITKA y el MRTK.

Por otra parte, dentro de este mismo periodo se produce un aporte fundamental para entender la relación que se generó entre el movimiento obrero y el campesino-indígena.

---

<sup>246</sup> Torrico Terán, Mario Alejandro, *La economía política del periodo democrático y neoliberal en Bolivia...*, *op. cit.*, pp. 58-60.

<sup>247</sup> *Ídem.*

<sup>248</sup> Xavier Álbo, “25 años de democracia, participación...”, *op. cit.*, p. 46. Asimismo, ya “en el primer intento electoral de 1978 se crearon además partidos kataristas, en gran medida para expresar su desconfianza ante los partidos tradicionales, de derecha e izquierda, cuyo enfoque consideraban demasiado urbano y colonialista. Se separaron enseguida en dos corrientes: la primera, expresada en el MRTK (Movimiento Revolucionario Tupaj Katari), reflejaba la citad teoría de los “dos ojos”, más presente en la CSUTCB; la otra, expresada en el MITKA (Movimiento Indio Tupak Katari), era impulsada sobre todo por algunos residentes urbanos con un enfoque más “indianista” y descolonizador, dentro de los planteamientos iniciados por Fausto Reinaga desde los años cuarenta. [...] Pero dificultades económicas y organizativas, junto con pugnas de liderazgo y diversos criterios de alianzas, les impidieron progresar hacia partidos indios realmente sólidos. [...] Sin embargo, gracias a estos partidos y a la CSUTCB, las propuestas kataristas fueron ganando un espacio reconocido en el debate político nacional.” Véase, Xavier Álbo, “25 años de democracia, participación...”, *op. cit.*, p. 47.

Éste fue desarrollado por Felipe Quispe y la organización de Ayllus Rojos en el marco del pensamiento de Reinaga. Se hacía el reconocimiento de una identidad popular boliviana resultante de los siglos de mestizajes culturales y laborales en diferentes zonas urbanas y rurales. Recordemos que anteriormente se hablaba de la Bolivia mestiza y colonial, entendiendo lo “boliviano” como una invención de una reducidísima élite extranjera, pero bajo la mirada de la propuesta de Quispe, las “dos Bolivias”, “la identidad popular boliviana, como la obrera, hasta cierto punto la campesina en determinadas regiones, aparecen como sujetos colectivos con los cuales hay que trazar políticas de alianza, acuerdos de mutuo reconocimiento, etc.”<sup>249</sup>

Ya para el segundo periodo, la cooptación estatal a fines de años de la década de 1980, se atraviesa una fuerte frustración política de intelectuales y activistas del movimiento indígena, ello en la medida en que sus intentos de convertir la fuerza de la masa indígena sindicalizada en votación electoral no dan los resultados esperados. Asimismo, la hegemonía discursiva del katarismo indianista entra en decadencia dentro de la CSUTCB. Empero, a nivel institucional, se da el reconocimiento de la multiculturalidad del país (1994), la Ley de Participación Popular, que como ya mencionamos anteriormente por un lado inaugurará un espacio de fragmentación étnica, pero, por el otro, fomentará el resurgimiento y la invención de etnicidades indígenas locales, de ayllus y asociaciones indígenas, pero vinculadas a una economía de demandas y concesiones en el Estado.<sup>250</sup>

Finalmente, está el indianismo de los años noventa, el cual es un nuevo ciclo, según deja entrever García Linera, en la medida en que éste es clasificado o visto como una estrategia de poder, “una concepción del mundo proto-hegemónica intentando disputar la capacidad de dirección cultural y política de la sociedad”<sup>251</sup> a la ideología neoliberal. Lo característico de dicho periodo es la capacidad de sublevación comunitaria con la que las comunidades indígenas, populares y obreras responden a un creciente proceso de deterioro y decadencia de las estructuras comunitarias campesinas y de los mecanismos de movilidad social ciudad-campo, así como a los aparatos institucionales de representación ante el Estado (léase partidos políticos y sindicatos).

---

<sup>249</sup> Álvaro García Linera, “El desencuentro de dos razones revolucionarias. Indianismo y Marxismo”, [en línea]..., *op. cit.*

<sup>250</sup> *Ídem.*

<sup>251</sup> *Ídem.*

En el ámbito político-institucional, pero también social-popular, surgirán dos partidos o instrumentos políticos: el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), encabezado por Evo Morales<sup>252</sup>; y el Movimiento Indígena Pachakuti – Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Movimiento Indio Pachakuti-CSUTCB) encabezado por Felipe Quispe.<sup>253</sup>

El MAS-IPSP proviene del crecimiento del movimiento en defensa de la coca como hoja ancestral para las comunidades indígenas. Para entender esto, debemos recordar que el boom de la coca como materia prima de la cocaína, como siempre lo ha relacionado Estados Unidos y los diversos gobiernos bolivianos anterior al 2005, proviene del tiempo de las dictaduras militares, logrando su punto más álgido en la llamada dictadura narco-militar de García Meza. Para el gobierno de Paz Estenssoro se firmó la controvertida Ley 1008, donde se introdujeron y relacionaron las ideas de narcotráfico y producción de coca, lo cual dio un nuevo impulso a este movimiento que, a su vez, recibía también la inyección de exdirigentes relocalizados ahora como miembros cocaleros.<sup>254</sup> No obstante, este movimiento cocalero lo abordaremos más adelante, cuando hablemos específicamente su participación en la Guerra del Agua, en Cochabamba.

De esta forma queremos enfatizar en algunos aspectos que desarrollaron, crearon y retomaron los movimientos campesino-indígenas. Sin embargo, es necesario apuntar, primeramente, qué es lo que se entiende por movimientos indígenas, más allá de la composición étnica. Para ello, retomamos una definición de Pablo Mamani, la cual consideramos que acierta en el hecho de conceptualizarlos a partir de su accionar en el ámbito nacional, más allá de considerar sólo la composición étnica y de clase. Para el autor, éstos, los movimientos indígenas (pero también campesinos), son poderes dispersos y articulados que en cada rincón de la territorialidad del Estado producen procesos de reapropiación espacial y política para, desde estos lugares, redefinir nuevos sentidos de la

---

<sup>252</sup> En cuando al movimiento cocalero hablaremos el siguiente capítulo, cuando abordemos su participación las diferentes movilizaciones en defensa del agua. Sin embargo, si podemos apuntar que Evo Morales fue dirigente sindical desde principios de los años ochenta. Desde 1994 dirigió las cinco federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba (afiliadas a la CSUTCB). En 1995, con base en la estructura sindical se decide crea un instrumento político, y nace la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, que luego se convertiría en el MAS.

<sup>253</sup> Dentro de este periodo también se creó la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) en 1993.

<sup>254</sup> Xavier Álbo, “25 años de democracia, participación...”, *op. cit.*, pp. 49-50. El autor menciona que existirán otras políticas contrarias al movimiento cocalero, como fueron: “coca cero” y “Plan Dignidad”.



política nacional.<sup>255</sup> Esto se observa durante las movilizaciones que se llevan a cabo a lo largo de la primera década del siglo XXI. En el tercer capítulo abordaremos esta cuestión con mayor profundidad.

Ahora bien, algunos de los aspectos que implementaron los movimientos en Bolivia fue la creación de nuevos imaginarios donde se exponen orgullosamente símbolos indígenas para cuestionar símbolos estatales dominantes, es decir, en estos nuevos imaginarios se representa al mundo indígena de una nueva manera mediante la utilización de la hoja de coca, las *whipalas* multicolores, los *pututus*, ponchos, *awayus* y polleras, donde hombres y mujeres exponen orgullosamente estos símbolos durante las movilizaciones.<sup>256</sup>

Asimismo, las organizaciones étnicas empiezan a reivindicar no sólo el respeto a su cultura (lengua, costumbres, rituales), sino también la propiedad de un territorio y de sus recursos, y finalmente la administración de ese territorio según sus usos específicos (forma de designación de las autoridades, justicia comunitaria).<sup>257</sup> La introducción de elementos discursivos y conceptos como territorio son una característica esencial de los movimientos del siglo XXI; característica que se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XX y que se expresó hasta principios de este siglo. De esta forma, el territorio es el espacio total (superficie, subsuelo, aire, aguas) en el que un pueblo encuentra su identidad y como tal la desarrolla: sin el territorio no hay cultura, no hay pueblos.<sup>258</sup>

Esta perspectiva sitúa el conflicto de la tierra y el territorio, desde la visión indígena en un plano que transgrede el nivel social y económico para darle la dimensión política que le corresponde, como una expresión del sistema colonial y neocolonial. En esta misma línea, el despojo territorial y de sus recursos propios, agrede e imposibilita el desarrollo de los pueblos indígena y no indígena.<sup>259</sup>

---

<sup>255</sup> Pablo Mamani Ramírez, “Dominación étnica, de clase y territorialización del poder indígena en Bolivia”, en Gutiérrez Aguilar, Raquel; Escárzaga, Fabiola (coord.), *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, vol. II, México, 2006, Casa Juan Pablos, Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos, Gobiernos del Distrito Federal, UAM, BUAP, Diakonia, Centro de Investigación en Desarrollo-Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Pública de El Alto, UNAM, p. 45. Dirección URL: [http://www.jornadas-andesmesoamerica.org/pdf/movimiento\\_indigena\\_vol2.pdf](http://www.jornadas-andesmesoamerica.org/pdf/movimiento_indigena_vol2.pdf), [consulta: 23 de enero de 2013].

<sup>256</sup> *Ídem*.

<sup>257</sup> Jean-Pierre Lavaud, “Bolivia: ¿un futuro político hipotecado?”, en *Nueva Sociedad*, no. 209, mayo-junio de 2007, p. 48. Dirección URL: [www.nuso.org](http://www.nuso.org), [consulta: 11 de septiembre de 2012].

<sup>258</sup> Jesús González Pazos, “Bolivia. La construcción de...”, *op. cit.*, p. 92.

<sup>259</sup> *Ibidem*, pp. 93-94.

Por otra parte, las organizaciones indígenas, comunitarias y campesinas (como partidos políticos), vinieron a renovar el ámbito institucional pues recordemos que el sistema de partidos estaba tocando fondo y, muy probablemente, hubiera experimentado una catástrofe institucional. Dicha renovación, según apunta Luis Tapia<sup>260</sup>, se procesó en el nivel electoral con un resultado de cambio de las relaciones de fuerza en el nivel nacional. Sin embargo, este mismo proceso deviene de los ciclos de movilización antiprivatización, autoorganización y unificación política en tierras bajas y altas que se inaugura a partir del año 2000 con la Guerra del Agua.

Definitivamente fueron y son estos movimientos, campesinos y comunitarios, y además, los movimientos nacional-popular antiprivatización, los que pusieron en crisis al Estado boliviano. También son los que lo reformaron a partir del 2005.

Tapia considera que éstos, los movimientos, le dieron un nuevo respiro a un conjunto de instituciones que corresponden al formato estatal preexistente, por un tiempo, mientras se procesan los cambios mayores que se vienen prefigurando ya más o menos por medio de estos ciclos de rebelión, movilización y unificación política de comunidades y sindicatos agrarios frente al patrón de dominación estatal.<sup>261</sup>

---

<sup>260</sup> Luis Tapia, “Las estrategias políticas de los movimientos indígenas y los Estados latinoamericanos frente a la insurgencia indígena. Movimientos comunitarios y campesinos y crisis de Estado”..., *op. cit.*, p. 421.

<sup>261</sup> *Ídem.*

### 3. Praxis liberatoria y emancipatoria: la Guerra del Agua

... si las "masas" son el sujeto de la historia, si de lo que se trata es de hablar de la emancipación, más aún, de la autoemancipación de los hombres y mujeres concretos, vivos, de carne y hueso, que respiran, comen, temen, luchan y dudan, que se equivocan y levantan, de lo que se trata no es de "dar línea", reclutar y formar "cuadros" al modo como se expande un culto religioso evangélico para "salvar" almas, sino de unificar, de aprender, de escuchar y promover posiciones concretas frente a todos los problemas prácticos inmediatos y estratégicos que se vayan presentando.  
Raquel Gutiérrez Aguilar, *¡A desordenar! Por una historia abierta de la lucha social...*

La Guerra del Agua ha quedado inscrita en la lucha del pueblo boliviano como un momento inaugural de recuperación de la potencia social contra el saqueo de los recursos naturales y, más allá de ello, como clave central de la lucha por la recuperación de un bien común para la reproducción de la vida social, cultural y humana. Fue un proceso donde la autoafirmación, la autodeterminación y la lucha emancipativa fueron de elección íntima, personal y colectiva, plena y decidida.

Con los logros obtenidos por parte de los actores involucrados y participantes en la Guerra del Agua se marca el inicio de una serie de revueltas que transformaron el acontecer boliviano; el cual fue alterado por una serie de reformas aplicadas por los diferentes gobiernos desde la conquista hasta el embate neoliberal. Inscrita en un nuevo ciclo insurreccional que se refleja a partir de modos y contenidos nuevos, como son la construcción de acuerdos dentro de la sociedad, la forma de dirigirse a las instancias gubernamentales correspondientes, el enfrentamiento con el ejército y la policía, todo mediante un ejercicio ejemplar de democracia participativa, la Guerra del Agua se puede ubicar dentro de los cambios y esperanzas de transformación del Estado en América Latina durante toda la primera década del siglo XXI.

Con la Guerra del Agua se encadenan reivindicaciones de usos y costumbres y tradiciones del pueblo boliviano, tales como: el reconocimiento de las prácticas campesinas de distribución del agua, del derecho universal a los recursos vitales y de los usos tradicionales de la hoja de coca. Asimismo, dichas reivindicaciones generaron en la sociedad una serie de demandas ante las diversas políticas neoliberales que pretendieron

privatizar otros recursos naturales. Se luchó contra los aumentos de tarifas en los servicios públicos y contra la enajenación de los recursos elementales y estratégicos de la nación.”<sup>262</sup>

Por otra parte, la Guerra del Agua es una de las experiencias de lucha colectiva más importantes de los últimos tiempos en la región latinoamericana. No hay antecedentes de una articulación de lucha de la amplitud alcanzada en este proceso. Las movilizaciones y levantamientos de este suceso son una chispa de una revolución social que se desplegó en Bolivia a lo largo de la primera década del siglo XXI.

La Guerra del Agua tiene su epicentro en el Departamento de Cochabamba aunque existen diversos levantamientos a lo largo de toda Bolivia, con otro tipo de consignas. Durante los meses que duró el conflicto todas estas movilizaciones fueron en apoyo a los sectores que se levantaron en defensa del agua, de sus usos y costumbres, por esto se le considera una guerra en defensa del agua.

En este tercer capítulo se procede a indagar en los rasgos básicos de esa matriz de lucha que inaugura una “forma de politización”, que bosqueja un modo de articulación social que puede, tendencialmente, iluminar posibilidades de unificación y autorregulación social tal y como se observa en las prácticas cotidianas en Cochabamba en el sentido de la socialización y politización del acceso, gestión y usufructo del agua más allá de formas estatales que desafían las lógicas del capital.

### **3.1. Identidad y usos y costumbres**

Sabine Hoffmann, Bernardo Rozo, Luis Tapia y Jorge Viaña<sup>263</sup> han planteado una propuesta teórica para abordar el estudio de la ciudadanía y los movimientos sociales en el contexto de la Guerra del Agua

[...] hemos investigado las relaciones entre ciudadanía y gestión del agua, a partir de la constitución de un movimiento social que ha cuestionado y revertido la privatización del servicio de agua en Cochabamba. En este sentido, pretendemos contribuir al debate actual

---

<sup>262</sup> Ana Esther Ceceña, *La guerra por el agua y por la vida. Cochabamba: una experiencia de construcción comunitaria frente al neoliberalismo*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Asoc. Madre de Plaza de Mayo, 2005, p. 5.

<sup>263</sup> Sabine Hoffmann; Bernardo Rozo; Luis Tapia; Jorge Viaña, *La re construcción de lo público. Movimiento social, ciudadanía y gestión de agua en Cochabamba*, Bolivia, Muela del Diablo Editores/AOS-IUED, 2006, 289 pp.

sobre ciudadanía a partir de un estudio de caso, que nos ha llevado a elaborar una propuesta teórica para estudiar y pensar la ciudadanía en las condiciones de hoy.<sup>264</sup>

Por tal motivo se considera viable utilizar algunos aspectos de esta propuesta teórica para comprender cómo fue que se articularon los diversos sectores de la sociedad cochabambina y, consecuentemente, boliviana en la defensa y recuperación de un recurso vital para la vida.<sup>265</sup> Para ello una primera consideración que debemos tener en cuenta es “volver inteligible la constitución y dinámica de los movimientos sociales que están cuestionando las fallas estructurales y las formas de exclusión y desigualdad acumuladas a lo largo de la historia colonial de Bolivia así como de las recientes formas de organización del sistema mundial que se expresa en el seno de los Estados nacionales.”<sup>266</sup> Dentro de este conflicto, encontramos diversos movimientos y organizaciones sociales y populares<sup>267</sup> que llevan un largo camino en la defensa de los usos y costumbres para la obtención y distribución del agua. Asimismo existe un actor clave para entender la articulación que se genera y desarrolla durante todo este proceso, nos referimos a la *Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida*. Todos estos actores son estudiados y analizados más adelante.

Ahora bien, como hemos apuntado en el título de este apartado, consideramos que los conceptos que nos son de utilidad para poder abordar la movilización social son los de *identidad y usos y costumbres*.

Hoffmann et al identifican una secuencia de identidades con las cuales se orientaron e identificaron los sujetos que participaron a lo largo de todo el conflicto: “una serie de identidades de tipo cultural que a niveles particulares se reprodujeron en los individuos, los

---

<sup>264</sup> *Ibidem*, p. 12.

<sup>265</sup> No hemos utilizado todos los presupuestos teóricos debido a que, si bien el aparato teórico se desprende del mismo proceso que estamos analizando, los objetivos de la investigación de estos autores son diferentes de los de esta investigación. Es decir, mientras los autores pretenden abordar el estudio de la ciudadanía, resultado de este conflicto, el nuestro se refiere al análisis de la movilización en la defensa y recuperación de los recursos naturales. Sin embargo, es incuestionable que muchos de los conceptos desarrollados dentro de la propuesta teórica nos son de gran utilidad, debido a que éstos son desarrollados para entender la misma movilización social en Cochabamba.

<sup>266</sup> Sabine Hoffmann; *et. al.*, *La reconstrucción de lo...*, *op. cit.*, p. 12.

<sup>267</sup> Específicamente nos estamos refiriendo a los comités de agua, que fueron la columna vertebral de la movilización. Éstas organizaciones nacieron en la década de 1990, y a diferencia de los sindicatos en torno a la tierra, éstos agrupan a la población alrededor de la gestión del agua, el cual fue convertido, posteriormente, en un elemento de disputa entre dos racionalidades antagónicas de entender la riqueza social: el agua como bien común gestionada de acuerdo a usos y costumbres tradicionales; y el agua como mercancía, cuya regulación está en función de la ganancia empresarial. Véase, Raquel Gutiérrez Aguilar; Álvaro García Linera; Luis Tapia, “La forma multitud de la política de las necesidades vitales”, en *El retorno de la Bolivia plebeya...*, *op. cit.*, p. 157.

grupos restringidos y las experiencias más particulares (barrios, asociaciones, etc.), y una identidad de carácter más social originada durante las movilizaciones, de alcance más generalizado y colectivo, cuya razón de ser se centraba en una agencia social concreta, de tipo reivindicativo que se mantuvo mientras se mantuvo el conflicto: la defensa de los derechos que la población tiene sobre el agua.”<sup>268</sup>

Para los mencionados autores tales identidades operaron en diferentes momentos durante las movilizaciones. Así, a partir de la identidad cultural y social surge una identidad política posterior a las movilizaciones del agua. Empero, consideramos que la identidad política no explica el por qué de las movilizaciones, sino un actuar posterior a éstas. Ello por una simple razón, la identidad política es “una nueva percepción que las personas tienen de sí mismas, como sujetos políticos activos y contestatarios, capaces de cuestionar el rol y el peso específico de las estructuras e instituciones estatales que buscan imponer modelos de desarrollo contradictorios a las prácticas y percepciones de la misma población.”<sup>269</sup> El surgimiento de esta identidad política será esencial para comprender las movilizaciones que se llevaron a cabo en el año 2003 en defensa del gas.

Ahora bien, cuando hablamos de identidades culturales, éstas son más duraderas a través del tiempo y el espacio, son socialmente reconocidas, aunque la mayoría de las veces generan exclusión y conflictos.<sup>270</sup> Ejemplo de ello son los quechuas, aymaras, pero también los cocaleros, los regantes. Es por este motivo que decidimos realizar apartados específicos para hablar de la Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR), de las movilizaciones de cocaleros en el Chapare, de las movilizaciones en la Ciudad de El Alto, donde existen comunidades indígenas específicas.

Por otra parte, la identidad social es el principio de distinción frente al Estado, un principio de la inclusión de la diversidad; sin embargo, tiene un tiempo reducido de existencia, vinculada a la consecución de objetivos concretos (rechazo y anulación del contrato de concesión y de la Ley 2029) y, su emergencia depende de un espacio

---

<sup>268</sup> Sabine Hoffmann; *et. al.*, *La reconstrucción de lo...*, *op. cit.*, p. 97.

<sup>269</sup> *Ibidem*, p. 98. Los autores dan algunos ejemplos de esta identidad política: “las percepciones que manifestaron los entrevistados sobre sí mismo con relación a su rol como individuos en la sociedad y los derechos y obligaciones que sienten que tienen en términos de participación social y política en los asuntos públicos.” Véase, Sabine Hoffmann; *et. al.*, *La reconstrucción de lo...*, *op. cit.*, p. 98.

<sup>270</sup> Sabine Hoffmann; *et. al.*, *La reconstrucción de lo...*, *op. cit.*, p. 98.

determinado<sup>271</sup> generalizado a otros sectores en el transcurso de las movilizaciones. La identidad social, al igual que las culturales, es socialmente reconocida, convirtiéndose más bien en alternativa de representación social y política. El ejemplo más claro de esta identidad lo representa la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida.

Como veremos más adelante, cuando se hable de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, ésta, ejemplo claro de identidad social, “permitió a los sujetos orientarse, auto-identificarse y ser a la vez identificados en el espacio social como sujetos políticos contestatarios, cuyas reivindicaciones eran comunes a todos.”<sup>272</sup>

En torno a estas identidades, podemos argumentar que la construcción y reproducción de éstas durante las movilizaciones ha resultado de una mezcla de factores tanto de carácter histórico como de carácter circunstancial:

Los factores históricos devienen de: elementos culturales de referencia, identidades de origen [...] y experiencias organizativas previas. En lo organizativo, los factores circunstanciales serán aquellos que han influido en la superación de las fronteras étnicas dando como resultado la identificación de un diverso conjunto de individuos y grupos en un solo propósito. De esta manera, los intereses diversos pudieron confluír en uno solo, vinculado a la participación social y política de las personas en tanto que obligación, y al acceso simétrico a un servicio básico como es el agua potable y de riego, en tanto que derecho.<sup>273</sup>

Un hecho sin embargo prevalecerá a lo largo de las movilizaciones: las identidades culturales darán paso a la identidad social como identidad aglutinadora de este imaginario. La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida será expresión de ello, superando la idea de un liderazgo de tipo caudillista, ello porque al revisar los hechos se da cuenta de un liderazgo colectivo. De esta forma, las movilizaciones en el contexto del conflicto por el agua tendrán una característica muy particular. La participación de los diversos actores será reivindicativa y contestaría ante el Estado, caracterizada por la cooperación social y la solidaridad, con iniciativas sociales novedosas, y la construcción de lazos de solidaridad, de asociaciones de todo tipo, para encarar una necesidad común.

Por otra parte, cuando nos referimos a los *usos y costumbres*, es necesario comprender que todo “fenómeno social, más aún si tiene una fuerte marca política, guarda

---

<sup>271</sup> Cfr., *ídem*.

<sup>272</sup> *Ibidem*, p. 99.

<sup>273</sup> *Ídem*.

una profunda dependencia con el espacio físico donde ocurre.”<sup>274</sup> Los usos y costumbres son una forma cultural de construcción y apropiación de ese espacio, muchas veces como reivindicación política. Sin embargo estos usos y costumbres no son uniformes en todo lugar y en cualquier momento, están determinados e influidos de factores históricos, socio-organizativos y ecológicos que hacen posible la reproducción biológica, social y cultural de la comunidad.

En Cochabamba se había desarrollado una sintomática modalidad de lucha en torno al agua debido a la existencia de un orden de relaciones políticas, económicas, sociales y culturales, en torno a este elemento. Por una parte, existía una red de consumo y distribución creada por la población a partir de sus recursos económicos, sus tiempos y sus formas de relacionarse en comunidad, es decir, a partir de trabajadores de *ayni*.<sup>275</sup> Por la otra, la red de consumo y distribución genera un mapa de fuerzas, las de la comunidad y el Estado, que disputan el agua buscando direccionalizar su uso, su posesión, sus finalidades, así como sus recorridos.

Por tal motivo, el mercantilizar el agua es una forma de fragmentación de una unidad de producción y reproducción de la vida en la comunidad. Mercantilizar el agua es quebrar la comunidad, sustraerle el elemento de la fluidez, la continuidad y la renovación.<sup>276</sup> Es en tal sentido comprensible que se genere una acción subversiva y transformadora en la sociedad para abrir la posibilidad de un embrión de una nueva socialidad.

Finalmente, durante las movilizaciones del 2000 la lucha de los actores involucrados en el conflicto manifestó objetivos muy específicos, como son el respeto a las autoridades tradicionales de las comunidades, a las formas comunitarias de resolución de los problemas vinculados al agua, el respeto a los derechos sobre el agua y sus mecanismos tradicionales de control y distribución, respeto a las formas comunitarias de mantenimiento

---

<sup>274</sup> *Ibidem*, p. 109.

<sup>275</sup> Según el representante (Abraham Grandidier) de la Asociación de Sistemas Independientes de Agua Potable de la Zona Sur de Cochabamba, Asica-Sur, *ayni* es una forma de trabajo comunitario basado en la ayuda mutua. Dicha asociación, durante los últimos 30 años, ha abastecido y construido sus propios tanques de almacenamiento con trabajo comunitario, llevando el agua hasta las comunidades del altiplano y en la propia ciudad. Véase, Abraham Grandidier, “La lucha por el agua en Cochabamba”, en Gutiérrez Aguilar, Raquel; Escárzaga, Fabiola (coord.), *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo...*, *op. cit.*, p. 68. [consulta: 23 de enero de 2013].

<sup>276</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar; Álvaro García Linera; Luis Tapia, “La forma multitud de la política de las necesidades vitales”..., *op. cit.*, p. 191.



de la infraestructura de riego y el uso múltiple del agua en contraposición al contrato de concesión a Aguas del Tunari y la Ley 2029 de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, los cuales abordaremos más adelante.

Teniendo en cuenta el papel que juegan los usos y costumbres en la construcción del espacio, podemos hablar que éste se convierte en un campo de batalla, toda vez que así lo decidan los actores sociales:

[...] el uso de espacios, toma una connotación mucho más política, hecho que se evidencia en la apropiación masiva de las calles del centro de la capital, como mecanismos de reconquista de derechos políticos, primero, y también sociales por parte de estas personas, las mismas que vinieron no sólo desde los barrios más marginados de esta ciudad [Cochabamba] sino también de comunidades de lejanas áreas rurales. Los lugares urbanos públicos se convierten así en espacios de deliberación y de tomas de posición y de decisión. Lugares donde “la masa enardecida” cobra identidad homogénea y actúa como un solo bloque.<sup>277</sup>

### 3.2. “Las transnacionales del agua”

Para Gian Carlo Delgado “la tendencia de ver el agua como un *bulk commodity* [o mercancía que se vende a granel] la coloca como una mercancía estratégica que seguramente establecerá una nueva *commodity frontier*.”<sup>278</sup> Los usos del agua tienden a ser permeados por la lógica del mercado, inscritos en un intenso proceso de privatización y desnacionalización, esto último específicamente en la periferia, impulsado por los países del centro, particularmente Estados Unidos con ayuda de agencias gubernamentales, de cooperación internacional y empresas transnacionales involucradas en el negocio del agua.<sup>279</sup>

Es cierto que existe una tendencia neoliberal de liberalizar, privatizar y desnacionalizar los sectores estratégicos de los países del Sur (agua y gas en Bolivia, 2000 y 2003 respectivamente) en materia de almacenamiento, distribución y tratamiento, apunta

---

<sup>277</sup> Sabine Hoffmann, *et. al.*, *La reconstrucción de lo...*, *op. cit.*, p. 109.

<sup>278</sup> Gian Carlo Delgado Ramos, *Agua y seguridad nacional. El recurso natural frente a las guerras del futuro*, México, Random House Mondadori, 2005, pp. 15-16.

<sup>279</sup> En cuanto a las agencias de la cooperación internacional se encuentran el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio; mientras que en torno a las empresas transnacionales podemos mencionar Bechtel (EE.UU.), RWE/Thames Water (Alemania/Inglaterra), Suez (Francia) y Vivendi/US Filter (Francia/EE.UU.).

Delgado. Pero en este proceso, no solamente se articulan actores a nivel nacional, sino regional y hasta mundial.<sup>280</sup>

El marco de acción para estos procesos de privatización se basa a partir de lo que tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominan “planes estratégicos”. Según Delgado, éstos han incursionado en el aparato de toma de decisiones de los Estados al diseñar y construir, si no en su totalidad, sí parcialmente, los marcos legales que han de regular los diferentes recursos naturales.

En este sentido, el Banco Mundial ha jugado un papel de suma importancia en el proceso que se califica por los principales estrategias de este organismo y otros, como “modernización” del sector. Y esto se lleva a cabo, no por “una incapacidad *per se* del Estado-nación, sino en gran medida como resultado de los ‘préstamos de ajuste estructural’ que ese mismo organismo ha otorgado desde los ochenta para reducir el presupuesto estatal en infraestructura específica como la relacionada a la energía y al rubro de ‘gasto social’.”<sup>281</sup>

Las repercusiones se reflejan en el diseño de reformas nacionales y regionales, destinadas a la descentralización de las funciones del Estado, la mayoría de las veces abriendo las puertas a la privatización bajo los argumentos de mejorar el funcionamiento de los servicios públicos. Y, en cuanto, a la regulación de los servicios relacionados al agua se pretende, básicamente, que sea empresa por empresa, ya que a cada municipio le incumben las competencias de regulación derivado de la descentralización. Esto fue lo que ocurrió en Bolivia.

---

<sup>280</sup> El Banco Interamericano de Desarrollo, el BM, el PNUD, la UNESCO, la *Organización Mundial Meteorológica*, WMO (agencia especializada de la ONU con vínculos cercanos al *Global Environmental Facility*, el BM y los bancos regionales de desarrollo como el BID), el *World Water Council*, WWC (grupo de empresas con base en Marsella encabezadas por Suez; en su consejo figuran el BM, entre otros organismos), el *International Network of Basin Organizations*, RIOC (entre sus miembros están la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Global Water Partnership, el BID, la Secretaría Internacional de Estado de Canadá), y el *Global Water Partnership*, GWP (auspiciado por el BM, el PNUD y las agencias bilaterales de desarrollo de países como Suecia, Dinamarca, Holanda, Alemania y desde luego la AID, entre otros actores como CARE o la Oficina Internacional del Agua de Francia), entre otros actores. Véase Gian Carlo Delgado Ramos, *Agua y seguridad nacional...*, *op. cit.*, pp.145-146.

<sup>281</sup> *Ibidem*, pp. 146-147. Delgado Ramos explica que este diseño de reformas nacionales y regionales que pretenden “modernizar”, según el Banco Mundial, son concebidas para descentralizar las funciones del Estado para que después la iniciativa privada se haga cargo del servicio. “En tal sentido, aseguro el BM, es fundamental establecer un ‘sistema regulatorio que estimule el proceso’. Esto significa en ‘lengua franca’, uno que sea diseñado en función de los intereses empresariales [...]. Todo ejecutado, pero no regulado, por las elites de poder del Sur.” Véase, Gian Carlo Delgado Ramos, *Agua y seguridad nacional...*, *op. cit.*, p. 146-147.

Dicha descentralización se entiende por estos organismos, alude Delgado, como la liberalización del control, acceso y usufructo del recurso, pasando a ser un bien que se puede negociar a conveniencia de los nuevos gestores: la iniciativa privada. Todo ello se impulsa en lugar de abogar por la gestión del recurso de tal o cual zona de manera colectiva (entre todas las partes o *stakeholders*), siempre manteniendo claros los límites y los candados legales que puntualicen que el agua es un recurso propiedad de la nación y su pueblo y que por lo tanto no es privatizable.<sup>282</sup>

El resultado de todas estas políticas promovidas por los organismos internacionales ha sido “una intensa carrera por abrir el ‘acceso, gestión y usufructo’ de ese recurso al ‘mercado global’ provocando un abanico de proyectos y contratos para privatizar reservas, sistemas de almacenaje, distribución y tratamiento.”<sup>283</sup> De esta forma el manejo del agua en localidades en todo el mundo termina en manos de consorcios oligopólicos, para los cuales el agua es sólo uno entre varios negocios.

América Latina tendrá varios proyectos de privatización de su infraestructura y sus servicios hídricos donde los procesos boliviano y serán punto referencial para el estudio de las políticas privatizadoras de este recurso. Según Luis Tapia, en Bolivia, pero en general en toda América Latina, la privatización se ha hecho “bajo el pretexto o justificativo de reducir los costos de los servicios como consecuencia de la mayor eficiencia e inversión que supone el capital privado y transnacional.”<sup>284</sup>

---

<sup>282</sup> Gian Carlo Delgado, *Agua y seguridad nacional...*, *op. cit.*, pp. 146-147. Carlos Crespo explica que los *stakeholders* son aquellos actores cuyos intereses son afectados por las intervenciones. Sus intereses y niveles relativos de influencia y poder variarán de proyecto a proyecto y deberían ser identificados a través de un análisis de cada situación. Es decir, dentro de los proyectos se trata de considerar los intereses comunes de diferentes actores involucrados en procesos de desarrollo, se asume que éstos han concertado intereses, por encima de posiciones particulares; de esta manera, las políticas reflejarían los intereses de toda la gente cuyas vidas son afectadas por las políticas públicas. Véase, Carlos Crespo F., “La guerra del agua en Cochabamba: movimientos sociales y crisis de dispositivos del poder”, en *Ecología Política*, No. 20, 10 Años de Ecología Política en América Latina y España (1991-2000), Icaria Editorial, 2000, p. 68. Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/20743108>, [consulta: 18 de junio de 2012].

<sup>283</sup> Gian Carlo Delgado, *Agua y seguridad nacional...*, *op. cit.*, p. 152.

<sup>284</sup> Luis Tapia, “La crisis política de Abril”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *Observatorio Social de América Latina*, Año N° 2, septiembre 2000, Dirección URL: <http://www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal2/bolivia.pdf>, [consulta: 05 de mayo de 2012].

### 3.3. El problema del agua en Cochabamba

Es difícil subestimar la importancia del tema del agua en la vida local en Cochabamba. Para Tapia, “es un factor productivo central, fuente de vida y salubridad (o falta de la misma) y un potente indicador de poder y desigualdad en la sociedad. También se ha convertido en la materia prima de promesas electorales y manipulaciones políticas. Es, por tanto, un referente material, político y cultural de la vida local.”<sup>285</sup>

El tema del agua ha sido históricamente muy sensible en la región debido a varias cuestiones: el valle de Cochabamba (donde viven alrededor de 700.000 personas, del área urbana y rural) es una zona ecológicamente considerada semiseca, por tanto sufre una crónica escasez del recurso. Por otro lado, apenas el 50% de la población urbana tiene acceso al sistema público de distribución de agua potable; aproximadamente el 35% se ha organizado en cooperativas, asociaciones, comités de agua; y un 15% se aprovisiona a través de carros cisterna (“aguateros”) u otros medios alternativos.<sup>286</sup>

Tal situación no es resultado de unos pocos años de mala administración sino de muchos años en que faltó voluntad política y capacidad de gestión para enfrentar el problema.<sup>287</sup> A pesar de ello, debido a que esta es una región de valle con una incidencia notable en el abastecimiento de productos agrícolas para el mercado nacional, “los distintos gobiernos estudiaron la posibilidad de emprender grandes proyectos de trasvase de agua de lagunas de altura para llevarlas al valle a fin de irrigar zonas productivas y abastecer de

---

<sup>285</sup> *Ibidem*, p. 134. Por otra parte, Carlos Crespo argumenta que, desde los años de 1970, en el valle de Cochabamba, “ya existían movimientos campesinos de resistencia a la explotación de recursos hídricos para consumo de la ciudad; generándose en el año de 1994 una gran movilización campesina contra la perforación de pozos profundos, por parte de la empresa municipal de agua (SEMAPA).

<sup>286</sup> Carlos Crespo F., “Continuidad y Ruptura: la ‘Guerra del Agua’ y los nuevos movimientos sociales en Bolivia”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, OSAL; Año N° 2, septiembre 2000, Dirección URL: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal2/bolivia.pdf>, [consulta: 05 de mayo de 2012].

<sup>287</sup> Roberto Laserna, “Cochabamba: la Guerra contra el Agua”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, OSAL; Año N° 2, septiembre 2000, Dirección URL: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal2/bolivia.pdf>, [consulta: 31 de mayo de 2011]. Laserna apunta en su mismo texto que, la cobertura del sistema público apenas alcanzaba la mitad de la población y con abastecimiento irregular y racionado. De la otra mitad, los que contaban con recursos se vieron obligados a crear sus propios sistemas, habitualmente basado en pozos de propiedad colectiva o privados. Y lo que carecían de recursos no tenían más remedio que recurrir a los proveedores itinerantes, comprando ya sea el sistema entero (los había desde 6 hasta 12 metros cúbicos) o por barriles de 200 litros. En esta escala, la peor calidad y el precio más alto corresponde a los barriles, de donde resulta que la población más pobre es la que consume la peor agua, pagando por ella los precios más altos, no solamente en términos económicos sino, lo que es aún más grave, en salud y en mortalidad infantil.

agua potable a la ciudad,”<sup>288</sup> o al menos estas propuestas fueron parte importante de las varias promesas de campaña.

Por la escasez crónica del agua y la sola promesa electoral de los grandes proyectos de trasvase de agua, la gente ha innovado y desarrollado múltiples formas de manejar su captación, distribución y uso, tanto para riego como para el consumo humano. Muchos sistemas de agua son antiguos, de carácter comunitario y parte integral de la vida rural tradicional de comunidades semi-agrícolas aledañas a la ciudad. En la ciudad, el crecimiento acelerado y desordenado, y la manifiesta incapacidad de las autoridades para organizar una solución, han creado frustración entre los usuarios del sistema municipal y, en las zonas pobres periurbanas, han dado lugar a una multiplicidad de acciones individuales y comunitarias de autoconstrucción.<sup>289</sup>

Por este motivo, analizar la reacción a la privatización del agua en Cochabamba implica comprender el complejo tejido de actores que han emergido en torno a la captación, distribución y consumo del agua y su manejo político. Resulta necesario comprender las contradicciones que existen en el campo y en la ciudad, dentro de este departamento, contradicciones que ayudan a entender la emergencia de los diferentes actores. A su vez, es clave pensar estas contradicciones como parte sustancial del bagaje cultural de las comunidades preexistentes en esa región, quechuas, mayoritariamente.

### **3.3.1. “Contradicción campo-ciudad”**

La gran contradicción campo-ciudad se visibiliza cuando se da cuenta de las diferentes maneras que existen para la captación, distribución y consumo de agua. Para el campo o aún mejor, en las tierras aledañas a la ciudad de Cochabamba; el factor cultural permea

---

<sup>288</sup> Álvaro García Linera (coord.); Marxa Chávez León; Patricia Costas Monje, “Coordinadora del Agua y el Gas y Federación Departamental de Regantes de Cochabamba FEDECOR”, en *Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política*, Bolivia, Plural Editores, 2008, pp. 625-626. En torno a estos megaproyectos, los autores aluden que, a mediados de los años de la década de 1990, y después de millones de dólares en repetidos estudios de factibilidad, se inició la obra de construcción del proyecto Misicuni, que consistía en abrir un túnel que permitiera el trasvase de agua de lagunas de altura para su posterior tratamiento en el consumo urbano y riego rural de los valles en los siguientes años.

<sup>289</sup> Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’ en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas” Garza Toledo, Enrique de la (comp.), *Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina*, Buenos Aires, Argentina, CLACSO, 2005, pp. 134-135.

dichas actividades. Existe “un tejido denso de pequeños propietarios, en mayoría ‘regantes’, o asociaciones comunitarias organizadas en torno a la captación y distribución del agua para usos productivos y humanos. Estos diversos sistemas de riego –entendidos como la organización social de control del agua más la fuente de agua misma- son parte fundamental de la problemática del agua”<sup>290</sup>

Resulta evidente que nos encontramos con un mundo diverso y complejo debido al aspecto cultural que baña la región cochabambina, causa de la diversidad de organizaciones en torno al agua.

Thomas Kruse identifica cuatro aspectos que determinan dicha diversidad: sus características físicas (de valle, sierra, altiplano); sus antecedentes históricos y culturales, que frecuentemente se remontan a tiempos pre-republicanos; las diversas formas de concepción del agua y de los derechos que se ejercen sobre ésta; y las formas socio-organizativas en torno al agua, que se basan en familias, comunidades, sindicatos rurales, federaciones de comunidades regantes, o varias combinaciones de estos.<sup>291</sup>

En otras palabras, la estructura de gestión y derechos del agua en los valles no es homogénea pues se ha ido transformando a lo largo del tiempo de maneras diversas y particulares. Sin embargo, un hecho es claro, a pesar de que esta estructura no es homogénea, existe un eje rector. Raquel Gutiérrez lo plantea de la siguiente manera:

En los valles de Cochabamba existe un conocimiento local ancestral para el manejo, gestión y cuidado del agua, que toma cuerpo en un complejo y diferenciado mosaico de “usos y costumbres” cuyo eje principal es la autonomía para regular el uso del agua con base en complicados comunitarios que se dediquen en asambleas y se vuelven obligatorios para todos quienes depende y usufructúan de una misma fuente de agua.<sup>292</sup>

Asimismo, una característica común de esta estructura de gestión es descrita por García Linera, Orozco y Stefanoni, quienes apuntan que los sistemas de riego local están asentados en una fuerza tradicional de larga data y muchas veces atraviesan incluso las relaciones de autoridad de varios sindicatos. Por ello se puede decir que los sistemas de riego demarcan

---

<sup>290</sup> *Ibidem*, p. 135. En cuanto a los sistemas de riego, el grueso de ellos se halla en el departamento de Cochabamba: según datos de Kruse, casi el 20% de los sistemas y el 40% del total de la superficie regada inventariada están en Cochabamba, y la enorme mayoría son micro-sistemas bajo control local/comunitario. Un ejemplo al respecto: en Quillacollo, un municipio aledaño a la ciudad de Cochabamba, un inventario reciente registró 192 sistemas de los cuales la gran mayoría -126 (65%)- eran pequeños y sólo 9 (5%) grandes.

<sup>291</sup> Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’...”, *op. cit.*, pp. 135-136.

<sup>292</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los Ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 72.

una especificidad geográfica y social tanto, o más relevante, que la delimitada por la estructura sindical agraria.<sup>293</sup>

Por otro lado tenemos los procesos de la ciudad en los cuales existe un actor predominante: el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA)<sup>294</sup>; que ha sido, en palabras de Kruse,<sup>295</sup> en el mejor de sus momentos un esfuerzo valiente encabezado por profesionales locales capaces de mantenerse al frente de un crecimiento urbano galopante con recursos cada vez más limitados, propios del *management* de la austeridad típica de América Latina a partir de los años ochenta. Otra lectura en cambio visualiza algunas buenas intenciones ahogadas por la corrupción y el uso del sector público de manera discrecional para ventajas personales y políticas de caudillos locales.

La ciudad de Cochabamba tiene un grave problema, y es que existe una deficiente cobertura de la red de agua, la cual es exacerbada por una escasez de fuentes de la misma. Según datos que arroja Kruse, en la mayoría de los barrios conectados a la red municipal existe racionamiento de agua, aunque casi ningún sector de la ciudad tiene agua de forma permanente. Muchos cuentan con agua sólo unas horas por día, otros unos días a la semana.<sup>296</sup>

Estos problemas, la deficiencia en cuanto a la cobertura y la escasez de fuentes de agua, han provocado una creciente dependencia de fuentes subterráneas lo que trae consigo problemas ambientales, sociales y políticos entre las comunidades de regantes, establecidas en el campo, y SEMAPA, en la ciudad: la “Guerra de los Pozos.”<sup>297</sup> El nudo conflictivo de esta situación se refiere al control de las aguas subterráneas del valle central.

En torno a la actuación de SEMAPA, se pueden aludir una serie de problemas originados por situaciones de corrupción, ineficiencia y mal estado de su infraestructura, mucho de ello, derivado de la desatención por parte del gobierno, pero también del personal

---

<sup>293</sup> Álvaro García Linera (coord.); Marxa Chávez León; Patricia Costas Monje, “Coordinadora del Agua y el Gas y Federación Departamental de Regantes de Cochabamba FEDECOR” ..., *op. cit.*, p. 646.

<sup>294</sup> En su libro, *La reconstrucción de lo público. Movimiento social, ciudadanía y gestión del agua en Cochabamba*, Sabine Hoffmann, Bernardo Rozo, Luis Tapia y Jorge Viaña exponen que en 1996, existía un total de 286 mil personas atendidas por este servicio y un total aproximado de 198 mil personas que carecían de dicho servicio, principalmente en la periferia sur de la ciudad.

<sup>295</sup> Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’ ..., *op. cit.*, p. 136.

<sup>296</sup> *Ibidem*, p. 137

<sup>297</sup> Es importante tener en cuenta la “Guerra de los Pozos” porque es de este conflicto que surge un actor central, para la posterior “Guerra del Agua”: la Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR).

en la dirigencia. Mucha del agua captada y distribuida por SEMAPA no es “contabilizada”. Una combinación de agua vendida sin medición, medidores mal calibrados, conexiones clandestinas y simples fugas de agua de una infraestructura dilapidada, hacen que alrededor del 50% del agua “producida” por SEMAPA no se contabilice.<sup>298</sup> Asimismo, la falta de acceso a una conexión de agua potable se debe a la inexistencia de redes de distribución del servicio público estatal en los barrios de la zona noroeste y sur de la ciudad; razón por la cual, en diferentes barrios de las zonas periféricas se constituyeron servicios públicos no-estatales.<sup>299</sup>

Es por esta situación prevaleciente en diferentes sectores la ciudad cochabambina que muchas comunidades desarrollan sistemas autogestionados de agua, siendo casi el 20%, o más, de la población total quienes se benefician por estos sistemas.<sup>300</sup> Dentro de este contexto es importante entender el desarrollo de una nueva conciencia sobre los problemas locales que afectan las necesidades básicas de toda una comunidad, por no hablar de cada una de las familias. Surge y echa raíces un sentido colectivo de los derechos que se tiene sobre el agua, conferidos por medio de pertinencia y trabajo comunitarios y una constante inversión de tiempo y esfuerzo en el manejo cotidiano de los sistemas.

A partir de esta visión, de la situación del agua en Cochabamba, podemos entender la importancia de la forma en que se han ido emergiendo y constituyendo durante décadas los espacios no estatales en este departamento. Estos espacios están marcados fundamentalmente por la inexistencia e ineficiencia del Estado en la resolución de los problemas de saneamiento y necesidades básicas. Es así que un conjunto de espacios colectivos y públicos no estatales se han ido formando bajo su propia lógica autogestionaria. A partir de estos espacios, con sus redes de cooperativas y asociaciones de agua, es que un movimiento social fue constituyéndose en defensa de esta lógica comunitaria de autogestión. Y claro está, contra la privatización del sector.

Y es que, con algunos problemas detrás y la desigualdad en el acceso a los servicios de agua potable como pretexto, el Estado boliviano buscó privatizar el servicio público

---

<sup>298</sup> Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’...”, *op. cit.*, p. 137.

<sup>299</sup> Sabine Hoffmann; *et. al.*, *La reconstrucción de lo...*, *op. cit.*, p. 17. Aunado a esto, los autores hablan que los barrios que carecen del servicio de SEMAPA o de cooperativas o asociaciones reciben este recurso generalmente a través de los denominados aguateros (cisternas que comercializan el agua) o de pozos privados e individuales o familiares.

<sup>300</sup> *Cfr.* Sabine Hoffmann; *et. al.*, *La reconstrucción de lo...*, *op. cit.*, p. 139.



municipal de SEMAPA y expropiar y privatizar los servicios autogestionarios constituidos en Cochabamba. Siendo que, había otros intereses de por medio: los intereses de los organismos internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) y de las empresas transnacionales (Bechtel).

### 3.3.2. Privatización del agua

En 1996, durante el gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada, se aplican las políticas de privatización a los recursos públicos. Entre éstas, se dispone que las empresas municipales de servicio de agua potable (SEMAPA) comiencen a ser privatizadas. En dichos procesos, es fácil identificar el papel que desempeñaron las organizaciones internacionales, en especial el Banco Mundial. Según un documento del Departamento de Evaluación de Operaciones de dicha institución, se creó un proyecto de rehabilitación del abastecimiento de agua y alcantarillado, financiado por la Asociación Internacional de Fomento (AIF), perteneciente también a este banco.<sup>301</sup> Dicho proyecto, tenía como objetivo “ofrecer servicio a todos de la manera más eficiente, y sentar las bases de un servicio sostenible.”<sup>302</sup> Se pretendía acabar con o, en su caso, rehabilitar el “grave racionamiento de suministros peligrosos” en la zona, es decir, con los sistemas creados por la población.

Asimismo, llama la atención, dentro del proyecto, temas como son: la expansión del sistema, la mejora de las operaciones y la gestión, el desarrollo acelerado del sector con políticas y reglamentos más adecuados y una mejor coordinación nacional. Sin embargo, es necesario cuestionarse qué consecuencias sociales traería la aplicación de dicho proyecto.

A pesar de todo, junto a los costos sociales que esto traería, privatizar los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado de La Paz y Cochabamba, fue una condición impuesta por el Banco Mundial para la ampliación del préstamo por dos años hasta 1997, según señala el propio banco.<sup>303</sup> La primera empresa en hacerlo será la de La Paz, la cual

---

<sup>301</sup> Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial, “Gestión del agua en Bolivia: Historia de tres ciudades”, [en línea], *Banco Mundial*, 2001. Dirección URL: [http://Inweb90.worldbank.org/oed/oeddoelib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/4AAC162CB3E46A2885256BCF00552CFD/\\$file/Precis\\_222\\_Spanish.pdf](http://Inweb90.worldbank.org/oed/oeddoelib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/4AAC162CB3E46A2885256BCF00552CFD/$file/Precis_222_Spanish.pdf), [consulta: 16 de enero de 2013].

<sup>302</sup> *Ídem.*

<sup>303</sup> *Ídem.*

fue entregada a un consorcio francés Suez en 1997. En Cochabamba, la licitación de la concesión de la empresa SEMAPA y proyecto MISICUNI se dará en abril de 1998.

Específicamente en la privatización en Cochabamba, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, jugaron un papel decisivo en exigir, financiar y consolidar la privatización.<sup>304</sup> Kruse cita un documento interno del Banco Mundial, titulado “El trabajo del Banco Mundial en Bolivia desde 1985”, donde se hace un balance de los 59 préstamos a Bolivia entre 1985 y 2000, por un total de más de 1,1 mil millones de dólares desembolsados bajo una firme orientación privatizadora y de la cual ninguna actividad o sector estaba exento.<sup>305</sup>

Por otra parte, el BID extendió “créditos por más de \$200 millones desde 1995, sólo para temas relacionados con el agua. Entre ellos, en 1996 prestó \$88,8 millones para ‘promover mayor participación privada’ en el agua potable y alcantarillado urbano, y ‘apoyar el proceso de desarrollo y consolidar el marco regulatorio’. Fruto de este crédito fue el borrador de la ley que legalizó la privatización del agua en Cochabamba y creó lo que sería la ‘Superintendencia de Agua’, una especie de ‘zar’ sectorial, rector de las privatizaciones con amplios poderes, pero con lazos de *accountability* efectivamente nulos, y sistemáticamente condenado y resistido por el movimiento campesino boliviano.”<sup>306</sup>

En suma, en 1996 el Banco Mundial condicionó un préstamo de \$14 millones a la operadora municipal de agua en Cochabamba, SEMAPA, a su privatización; y en 1997, el

---

<sup>304</sup> Thomas Kruse apunta que el BM y el BID dieron el impulso al proceso de privatización, dotando al Estado boliviano de las políticas, agencias y estructuras para llevarlo a cabo, ya que financiaron el diseño de las reglas del juego dentro de las cuales operarían las empresas privatizadas. [...] Así, las IFIs [Instituciones Financieras Internacionales] no sólo juegan un rol central en crear mercados e imponer el negocio del agua: diseñan las reglas del juego; reestructuran los estados para sostener el negocio; participan directamente en el negocio como accionistas; y por si hubiera problemas (tales como la resistencia ciudadana), venden seguros a inversionistas en agua, como Bechtel, por medio de su agencia aseguradora de inversiones multilaterales, MIGA. Poco después de la Guerra del Agua, el Banco Mundial-MIGA vendió a Bechtel-International Waters Limited una póliza de seguros para proteger su inversión en el sistema de agua en Guayaquil, Ecuador “contra los riesgos de expropiación y disturbios civiles.” Véase, Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’..., *op. cit.*, pp. 132-133.

<sup>305</sup> Cfr. Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’..., *op. cit.*, pp. 130-131. El informe del BM [...] [El trabajo del Banco Mundial en Bolivia desde 1985] señala por lo menos siete préstamos con componentes dirigidos a promover, amparar y regular privatizaciones, con más de \$77 millones desembolsados para este fin. De estos proyectos, tres tuvieron implicaciones directas para el sector del agua, y dos de ellos mencionan específicamente el imperativo de privatizar el agua en Cochabamba.

<sup>306</sup> Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’..., *op. cit.*, pp. 131-132.

FMI, BM y BID condicionaron la condonación de otros \$600 millones a –entre otras cosas– la privatización de SEMAPA.<sup>307</sup>

Thomas Kruse apunta que los términos de referencia de licitación se emitieron en agosto de 1998,<sup>308</sup> siendo reformulados al siguiente año por la inviabilidad que representaba. Por su parte, el factor político jugaría un rol crucial, es decir, “apurado por cumplir sus promesas electorales, y rompiendo sus propias reglas de juego de la privatización, el presidente Banzer emitió un Decreto Supremo 25351 que permitiría suprimir la licitación competitiva y pasar a una negociación directa con el único postor”<sup>309</sup>, un consorcio de Bechtel Enterprises llamado Aguas del Tunari.<sup>310</sup>

En otras palabras, dicho contrato de concesión fue el resultado de tres situaciones diversas que encontraron el vértice para poder llevarlo a cabo. En primer lugar, reflejaban los imperativos de los organismos internacionales de una solución por la vía de la privatización y bajo reglas y una arquitectura institucional en gran medida diseñados por los organismos internacionales. En segundo lugar, se tiene a Bechtel, deseosa de una *cuota de mercado* del negocio global de agua. En tercer lugar, encontramos a las elites nacionales y locales buscando un enriquecimiento y prestigio personal en torno al proceso de privatización.<sup>311</sup>

Por otra parte, las negociaciones estaban protegidas por cláusulas de confidencialidad, es decir, divulgar su contenido o información calificada de confidencial,

---

<sup>307</sup> *Ibidem*, p. 132.

<sup>308</sup> Dichos términos incluían el Proyecto Múltiple Misicuni (PMM). Como hemos apuntado anteriormente, ante la crónica escasez de agua, han surgido, por otro lado, y en contraposición de los sistemas autogestionados por las comunidades, varios proyectos de proporciones heroicas. Kruse apunta que, estos proyectos buscan proveer grandes cantidades de agua al valle y servir de base para el desarrollo regional. Sin embargo, cada uno tiene sus desafíos técnicos y financieros, sus promotores en distintos grupos de poder local y diferentes implicaciones para la inversión y/o subsidio. El PMM se planea en el marco de esta iniciativa. “La base de este proyecto es la captación de aguas de la cuenca del Río Misicuni en la Cordillera Oriental de los Andes y su conducción hacia el valle central y la ciudad de Cochabamba para consumo humano, riego y generación eléctrica. Contempla ambiciosas y costosas obras de captación y retención de aguas, la perforación de un túnel de 19.5 km y otros túneles secundarios de aducción, y la instalación de una planta hidroeléctrica. “Originalmente concebido en los años ’40, a partir de los años ’80 varios factores conspiraron contra su realización, poniendo en duda su sustentabilidad financiera. Entre otros, el hecho de que hubo cambios en la base económica del proyecto, y la orientación neoliberal de las políticas públicas, que imponían una dramática austeridad en las finanzas públicas, circunscribía el rol de Estado en proyectos de esta índole mientras promovía energícamente la privatización.” Véase, Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’..., *op. cit.*, pp. 140-141.

<sup>309</sup> Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’..., *op. cit.*, p. 142.

<sup>310</sup> En el apartado de los que actores que participan en la Guerra del Agua, ahondaremos más sobre este consorcio.

<sup>311</sup> Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’..., *op. cit.*, p. 141.

era ilegal pues se sabía que el contrato prácticamente garantizaba el rechazo enérgico de amplios sectores.

En primer lugar, prometía de hecho “tarifazos” o alzas dramáticas para los usuarios del agua. La viabilidad de la privatización de SEMAPA con las obras de Masicuni descansaba sobre el negocio de dotación de agua potable para la ciudad; es decir, la movilización de capitales se basaba en vender agua cara a la gente pobre previo a cualquier mejora en el sistema. La empresa insistía en que las alzas no pasarían en promedio de un 35%.

[...]

En segundo lugar, el contrato efectivamente garantizaba la oposición de las comunidades peri-urbanas y rurales. La concesión de un área monopólica con fines de intercambio comercial y de lucro se estrellaría contra una multiplicidad de conceptos arraigados de derechos de uso, e introducía una radical incertidumbre sobre el futuro de estos cientos de sistemas. En los términos del contrato de concesión se establecían las bases para que Bechtel tomara control de estos sistemas construidos laboriosamente con el sacrificio y la ingenuidad de los pobladores, sin ninguna claridad sobre compensación, y mucho menos una sensibilidad frente a conceptos de derechos distintos de aquellos de la propiedad privada.<sup>312</sup>

Cuando se firmó el contrato de privatización de los sistemas públicos de agua, los que propusieron que el agua pasara a manos privadas prometieron bajos costos, una administración más eficiente y mejor distribución. Pero la privatización a través de Bechtel tuvo diferentes consecuencias en Cochabamba. Por un lado, los costos se elevaron; por el otro, la distribución tuvo fallas. Los ciudadanos más pobres fueron los más afectados por dicha privatización.<sup>313</sup>

En torno a la firma del contrato que hizo el gobierno de Bolivia con Aguas del Tunari, Benjamin Dangl cita un reporte del Democracy Center en Cochabamba en el que se explica que en 1999 se prometió, a través de dicho contrato, “el derecho a la propiedad del agua en Cochabamba por los próximos 40 años y les garantizaba ganancias anuales de un 16 por ciento.”<sup>314</sup> De esta forma, Aguas del Tunari se apoderaría de los sistemas de irrigación en las áreas rurales y de las fuentes comunitarias, los cuales habían sido construidos y financiados por los residentes del lugar.

---

<sup>312</sup> Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’...”, *op. cit.*, pp. 143-145.

<sup>313</sup> Dangl expone en su libro, *El precio del fuego. Las luchas por los recursos naturales y los movimientos sociales en Bolivia*, Bolivia, Plural Editores, 2009, que la compañía inmediatamente, después de ganar el control del agua, subió drásticamente su precio, en algunos casos hasta por un 200 por ciento. En una ciudad donde el salario mínimo mensual es de 60 dólares, muchos cochabambinos vieron que un costo de 15 a 20 dólares por mes sería imposible de pagar.

<sup>314</sup> Benjamin Dangl, *El precio del fuego...*, *op. cit.*, p. 81.

Por otro lado, para ayudar a la privatización, se aprobó e implementó la Ley 2029 de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario<sup>315</sup> misma que favoreció el uso del agua por parte de compañías internacionales para la minería, la agricultura y usos eléctricos, y por encima del consumo humano; no garantizando el mismo acceso al agua potable por todos los miembros de la sociedad y, en especial, por los sectores más pobres y asalariados de la sociedad.<sup>316</sup>

[...] la ley privilegiaba la creación de áreas de concesión monopólicas y la operación de concesionarios privados grandes. Mientras reconocía que podía haber diversos tipos de concesionarios y prestadores de servicios, “las condiciones para el otorgamiento de concesiones (garantías, planes de inversión y criterios de rentabilidad), favorecían la formación de empresas grandes que operan de acuerdo con los criterios del mercado. Las concesiones para las grandes empresas se darían por cuarenta años; en cambio, las comunidades tendrían que renovar con trámites engorrosos sus “licencias” cada cinco años. Estas “licencias”, a diferencia de las concesiones grandes, no tendrían el carácter de “exclusividad”. Se estructuraba de este modo la seguridad para los grandes operadores mercantiles, y una permanente vulnerabilidad para los diversos pequeños operadores.<sup>317</sup>

En otras palabras, la ley prohibía el funcionamiento de sistemas alternativos (autogestionados, no-estatales) de distribución de agua prevalecientes tanto en las zonas rurales como urbanas.

Respecto de las áreas de concesión, la Ley 2029 establece un sistema de tarifas que debe basarse en los principios de neutralidad, solidaridad, redistribución, simplicidad, transparencia, eficiencia económica y suficiencia financiera. Willem Assies menciona que el criterio de la eficiencia económica indica que la estructura tarifaria comunicaría a los usuarios la escasez del recurso, mientras que el de la suficiencia financiera garantizaría la recuperación de los costos y los gastos de operación, así como la remuneración del

---

<sup>315</sup> Esta ley legalizaba y amparaba los negocios de Bechtel en Cochabamba, y Suez en La Paz, asimismo abrió un rango de incertidumbre en torno a los autogestionadores de agua, tanto del campo como de la ciudad.

<sup>316</sup> Benjamin Dangl, *El precio del fuego...*, *op. cit.*, p. 80. Willem Assies en su texto “David vs. Goliat en Cochabamba: los derechos del agua, el neoliberalismo y la renovación de la protesta social en Bolivia” que, desde principios de los años setenta, el Estado boliviano ha trabajado en una nueva estructura jurídica respecto del agua. Sin embargo, ninguna propuesta elaborada había sido aprobada en el Congreso Nacional. En efecto, para finales de 1999 se analizaba la propuesta no. 32. Las propuestas más recientes para una ley general se inspiran, en buena medida, en las recomendaciones elaboradas inicialmente por la FAO y la CEPAL, siendo luego adoptadas por otras agencias multilaterales. Ellas se orientan en mayor o menor grado al mercado. Otra fuente de inspiración fue la legislación sobre el agua de Chile de 1981. Por otra parte, las propuestas bolivianas se adaptan al marco de las reformas del Estado de “segunda generación” iniciadas por la administración de Sánchez de Lozada (1993-97). Véase, Willem Assies, “David vs. Goliat en Cochabamba: los derechos del agua, el neoliberalismo y la renovación de la protesta social en Bolivia”, en T’inkazos. Revista Boliviana de Ciencias Sociales, La Paz, Fundación PIEB, No. 8, 2001, p.3. Dirección URL: <http://www.iglom.iteso.mx/PDF/Documentos/assies.PDF>, [consulta: 22 de junio de 2012].

<sup>317</sup> Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’...”, *op. cit.*, p. 145.

patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable.<sup>318</sup> Así, de esta forma, para garantizar la suficiencia financiera, la Ley 2029 introdujo, según explica Assies, la indexación de tarifas que abrió el camino a la dolarización de las tarifas del agua, todo al tiempo que los criterios de expansión y solidaridad fueron aprovechados para argumentar a favor del alza de tarifas.

Es un hecho que la capitalización y el proyecto de ley del agua, que fue duramente criticado por amplios sectores sociales, venía con la promesa de crear monopolios legales del usufructo mercantil de este recurso; monopolios en territorios de economía y cultura agraria, indígena y popular, donde se producía y vivía la articulación y continuidad de la naturaleza y vida social en términos de gestión colectiva y comunitaria de los recursos y de sí mismos. Propiciaba entonces la penetración y quiebre de esas totalidades sociales locales y regionales a través del control del recurso agua por parte de capitales privados, desligados del horizonte de reproducción y desarrollo local.<sup>319</sup>

De esta forma, el movimiento contra la Ley del Agua y el plan de privatización culminó en una serie de bloqueos y de protestas el 4 de noviembre de 1999. Los protestantes demandaron cambios en la ley y un contrato que protegiera sus métodos tradicionales de uso y distribución del agua. Tales situaciones se abordan en los siguientes apartados.

### **3.4. Acción social**

¿Cómo explicar la emergencia de las diferentes movilizaciones a lo largo de Cochabamba, y otras regiones? ¿Cómo se organizaron dichas movilizaciones? Dentro de este apartado pretendemos responder a estas dos preguntas.

En cuanto a la primera, es necesario entender que el detonador de la acción social en Cochabamba, pero no sólo ahí, fue la privatización de un recurso de vital importancia para la vida, que atentaba contra los usos y costumbres de la sociedad boliviana. Sin embargo, hubo otras situaciones que sirvieron, de una u otra forma, a que la movilización siguiera

---

<sup>318</sup> Willem Assies, “David vs. Goliath...”, *op. cit.*, p. 5.

<sup>319</sup> Luis Tapia, “La crisis política de abril”..., *op. cit.* [consulta: 05 de mayo de 2012].

adelante, que se radicalizará y no se diluyera hasta conseguir sus objetivos: el rechazo al contrato de concesión y la anulación de la Ley 2029.

Aparte de la privatización del agua, la rabia por la represión con que actuaron las fuerzas de seguridad empujó a los ciudadanos a una acción violenta: un enorme error por parte del gobierno fue militarizar la ciudad lo que aumentó la rabia contra el uso excesivo de la fuerza con que se actuó, en lugar de buscar un diálogo con la sociedad. Raúl Prada<sup>320</sup> considera que cuando el discurso de las instituciones no es creíble, cuando la propia ley y orden jurídico son escamoteados tramposamente, cuando la decadencia política muestra sus grandes orificios dando como resultado perverso sólo el beneficio del clientelismo y la corrupción, la recurrencia a la violencia es la subversión de los orígenes que repliegan la historia a su memoria, persiguiendo un nuevo comienzo.

Por otra parte, el conocimiento profundo que poseían las diferentes comunidades indígenas y populares en Cochabamba sobre los problemas del control y gestión del agua en la región, sirvió para la elaboración colectiva de los objetivos comunes a conquistar por la movilización social. Como se vio anteriormente, las propias comunidades tomaron en sus manos la solución a los problemas de almacenamiento y distribución del agua, con las complicaciones y contradicciones que engloba el mismo proceso, pero siempre en una lógica de subsanar la falta de un servicio que, por principio, le corresponde al Estado.

Asimismo, el que “un conjunto amplísimo de la población cochabambina estuviera al tanto de la manera cómo se había negociado el ‘convenio de concesión’ del agua cochabambina con Aguas del Tunari, de las amenazas que contenía y de lo que significaba la Ley 2029, permitió articular una serie de acciones flexibles para el despliegue múltiple del antagonismo.”<sup>321</sup> El tener objetivos autónomos completamente claros resultó de suma importancia para el desarrollo y consolidación de las movilizaciones.

Ahora bien, existen diversos textos que hablan y narran, de manera detallada y completa, cada uno de los hechos, acciones y situaciones ocurridas a lo largo de todo lo que se llamó la Guerra del Agua,<sup>322</sup> por lo que no pretendemos entrar en la misma dinámica,

---

<sup>320</sup> Raúl Prada Alcoreza, “Hermenéutica de la violencia”, en *El retorno de la Bolivia plebeya...*, op. cit., p. 99.

<sup>321</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, op. cit., p. 82.

<sup>322</sup> Revisar el libro, de Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005)*, México, Sísifo ediciones/Bajo Tierra Ediciones/ICSH/BUAP, 2009; Benjamín Dangl, *El precio del fuego. Las luchas por los recursos naturales y los movimientos sociales en Bolivia*, Bolivia, Plural Editores, 2009; Ana Esther Ceneña, *La guerra por el agua y por la vida. Cochabamba: una experiencia de*

sino optar por una breve cronología de los mismos para entonces enfatizar en el análisis e interpretación del proceso.

Nos parece importante citar una división de los acontecimientos ocurridos que realiza Gutiérrez Aguilar<sup>323</sup> con el fin de poder entender cómo fue que esta movilización se articula en defensa de un elemento vital para la reproducción social y cultural como lo es el agua. Dicha división está inspirada en pautas de acción que marcaron los ritmos del levantamiento popular.

- Primera acción o batalla. Se llevó a cabo durante los días del 10 al 14 de enero de 2000 a través de un bloqueo de caminos. Dentro de esta primera acción, se fue dando sentido colectivo a lo que se iba a denominar: la “Guerra del Agua.”
- Segunda acción o batalla. Durante los días 4 y 5 de febrero se realizó la “Toma de Cochabamba”, esto, a decir de los organizadores, para “sellar la unidad ciudad-campo en un abrazo” y refrendar la potencia movilizadora de la Coordinadora en un marco de negociaciones estancadas.
- Tercera acción o “batalla final”. Esta batalla es la confrontación de abril que comienza con un nuevo bloqueo de caminos, pasa por la toma de la empresa concesionada y termina en una generalizada rebelión que no logra ser acallada por la imposición del estado de sitio por parte del gobierno del general Bánzer.

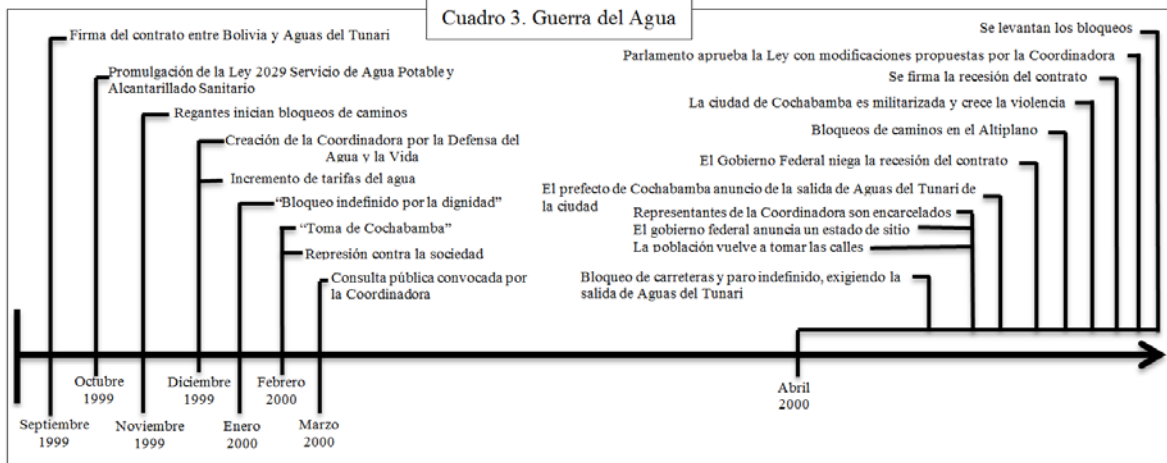
En el Cuadro 3 se muestran algunos de los sucesos más importantes acaecidos en la Guerra del Agua, desde la firma del contrato con la empresa Aguas del Tunari, en septiembre de 1999, y la promulgación de la Ley 2029, en octubre del mismo año, que abrió las puertas a la privatización del agua en Cochabamba, hasta las acciones de represión por parte del gobierno federal boliviano contra la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida, sus voceros, miembros y contra el pueblo en general. En el Anexo 1 se muestra una cronología más detallada sobre cada uno de los eventos.

---

*construcción comunitaria frente al neoliberalismo*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Asoc. Madres de Plaza de Mayo, 2005, entre otros.

<sup>323</sup> Todos estos puntos fueron obtenidos del libro de Gutiérrez Aguilar, Raquel, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, pp. 82-83.





Elaboración propia con base en Ceceña, Ana Esther, *La guerra por el agua y por la vida. Cochabamba: una experiencia de construcción comunitaria frente al neoliberalismo...*, op. cit.; García Linera, Álvaro (coord.); Chávez León, María; Costas Monje, Patricia, "Coordinadora del Agua y el Gas y Federación Departamental de Regantes de Cochabamba FEDECOR"..., op. cit.; Gutiérrez Aguilar, Raquel, *Los Ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005)*..., op. cit.; Dangl Benjamin, *El precio del fuego. Las luchas por los recursos naturales y los movimientos sociales en Bolivia...*, op. cit.; Suárez, Hugo José, *Bolivia. País rebelde (2000-2006)*..., op. cit.; Cronología realizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), a partir del Observatorio Social de América Latina. Disponible en: <http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php?idioma=port>.

Respecto a la segunda pregunta, ¿cómo se organizaron las movilizaciones? Primero es necesario tener claro que estas movilizaciones se dieron en medio de una crisis profunda de las organizaciones sindicales aglutinadas en la Central Obrera Boliviana (COB), que como vimos anteriormente, desde 1952 encabezaba las luchas sociales en Bolivia. En segundo lugar, estas mismas movilizaciones revelaron la crisis del sistema de partidos como principal conjunto institucional de mediación política entre Estado y sociedad, puesto que los problemas y algunas propuestas alternativas de solución no estaban contenidos en los partidos del sistema. Recordemos que inaugurada la etapa democrática (década de 1980), las clases en el poder consideraban que éste, el sistema de partidos, era el único medio para hacer valer las demandas sociales ante el gobierno en turno.

Con el embate neoliberal aplicado desde 1985 y, con ello, las principales consecuencias a partir de estas políticas en los diferentes sectores sociales, se pensaba que para las comunidades en Bolivia sería muy complicado volver a encontrar un componente que fuera la columna vertebral de las movilizaciones. Asimismo, a pesar de que la CSUTCB empezó a ganar mayor reconocimiento, ésta no logró conseguir el mismo apoyo y respaldo que alguna vez tuvo la COB.

A partir del año 2000, habrá una clara escalada de acción colectiva de masas con significativa eficacia que pone ciertos límites a las reformas neoliberales. La Guerra del Agua es el principal ejemplo de esta escalada de acción colectiva. Se prohibió que se

privatizara el agua, se logró echar para atrás y modificar una ley que no consideraba a los sectores sociales relacionados con la problemática y solución de los diferentes sistemas de este recurso. Todo esto se logró, a partir de la emergencia de una nueva estructura organizativa, con nuevas voces, nuevos horizontes y la multitud<sup>324</sup> como protagonista buscando representarse a sí misma, no por medio de los pactos y concertaciones, sino a través de las asambleas, las deliberaciones multitudinarias y los encuentros solidarios en las calles.<sup>325</sup>

De esta forma, el concepto “multitud” es entendido como “una forma de interunificación práctica, deliberativa y discursiva de variadas estructuras de organización local, barrial, laboral o amistosa en torno a objetivos comunes que afectan a todos y por medio de formas de aglutinamiento flexibles multicéntricas y semi-institucionalizadas.”<sup>326</sup> Asimismo, ésta es entendida como un ejercicio de soberanía política, de práctica de derechos políticos. Si bien la Coordinadora por la Defensa del Agua y de la Vida fue esencial en el rumbo de las acciones a seguir, la multitud rebasó en varias ocasiones las decisiones tomadas por dicha Coordinadora.

Por otra parte, existen tres momentos de participación que explica de cierta forma, el cómo poder resistir a los embates tan violentos que se desprendían de las fuerzas del Estado contra todos los que se movilizaron. Por un lado, se presenta la acción ordenada y consistente de los regantes que sostuvieron los bloqueos de caminos. Esto se explica a partir del sistema de rotación y turnos que fue similar al modo como gestionan el agua. Por el otro lado, la respuesta masiva de la población urbana, que muy pocas veces se había movilizado, pero que pudo conformar bloqueos a lo largo de toda la ciudad de Cochabamba; y finalmente, se suma la participación de los “Guerreros del agua”, jóvenes estudiantes y habitantes del sur de la ciudad autoconvocados para apoyar las demás acciones.<sup>327</sup>

Aunado a lo antes dicho deben englobarse las acciones de solidaridad de los cocaleros del Chapare, de las de los aymaras organizados en la CSUTCB, y de las cuales

---

<sup>324</sup> Gutiérrez Aguilar, García Linera y Tapia utilizan el concepto de “multitud” para explicar estas movilizaciones. Véase, Raquel Gutiérrez Aguilar; Álvaro García Linera; Luis Tapia, “La forma multitud de la política de las necesidades vitales”, en *El retorno de la Bolivia plebeya... op. cit.*

<sup>325</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar; Álvaro García Linera; Luis Tapia, “La forma multitud de la política de las necesidades vitales”, en *El retorno de la Bolivia plebeya... op. cit.*, pp. 160-161.

<sup>326</sup> *Ibidem*, p. 168.

<sup>327</sup> Véase, Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, pp. 84-85.

hablaremos más adelante. Es de hacer notar que con todas estas movilizaciones y la resistencia de la población, aún en los momentos de quiebre, se logró conseguir el cumplimiento de los objetivos que se planteó la multitud desde un inicio.

Lo que queda claro es que la Guerra del Agua marca un quiebre en la cadena de derrotas populares. Es la expresión intensa de un proceso de recomposición y cambio de rumbo; de un tránsito del arrinconamiento regresivo a la reorganización y posible expansión progresiva. Este conflicto es un hito y un ejemplo que señala a otras regiones y sujetos sociales que sólo puede confiarse en las propias fuerzas y que si éstas se organizan y deliberan es posible cambiar la realidad.<sup>328</sup> Desde luego, un segundo esfuerzo radicaría en mantener la articulación de esas fuerzas sociales hacia delante, sea en el marco de la gestión del agua o de otros retos y demandas sociales pendientes.

La lucha por la nulidad del contrato con Aguas del Tunari, y también el rechazo a la Ley 2029, “se ajusta a la de los movimientos sociales que rechazan la globalización neoliberal y sus efectos perversos, con su lógica privada, no sólo en los países del Sur, sino también en los industrializados, como reflejan las protestas de Steatle, Washington y Praga.”<sup>329</sup>

### **3.4.1. Actores involucrados en el conflicto**

En la Guerra del Agua se pueden observar varios niveles de actores: transnacional, nacional y nacional-local. Resulta importante identificarlos, por su rol decisivo, pero no siempre aparente, y porque convergieron para crear el conflicto, no sólo la coyuntura desarrollada a partir del 2000, sino además porque confluyeron, directa o indirectamente, en la creación de los problemas (o su solución) en torno a los sistemas de obtención y distribución de agua en Cochabamba.

Por un lado, se encuentran las empresas transnacionales, específicamente, para este caso, Bechtel, de Estados Unidos, en la búsqueda de la creación de mercados de servicios de agua. A la par se pueden observar los organismos internacionales de cooperación, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales crean e impulsan, a

---

<sup>328</sup> Luis Tapia, “La crisis política de abril”..., *op. cit.*, [consulta: 31 de mayo de 2011].

<sup>329</sup> Carlos Crespo F., “La guerra del agua en Cochabamba: movimientos sociales y crisis de dispositivos del poder”..., *op. cit.*, p. 63. [consulta: 15 de junio de 2012].

partir de sus “políticas de ayuda” a los Estados, el aparato jurídico-institucional para que las empresas transnacionales puedan llevar a cabo sus actividades en los países receptores de préstamos. Dentro del nivel nacional, podemos ubicar al propio Estado boliviano, el cual, gracias a la ideología imperante de la oligarquía, coadyuva en la implementación de dichas políticas desarrolladas por los organismos de cooperación, siempre, claro está, con algún beneficio. A esto, se suma el nivel nacional-local, la región de Cochabamba, con una situación crítica; una larga y compleja historia, vivida por una diversidad de actores, alrededor a la solución de los problemas de abastecimiento de agua en la región.

Ahora bien, en subapartados anteriores hemos descrito el papel que jugaron los organismos de cooperación internacional, el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, particularmente. Por ello, consideramos que no es necesario el volver a analizar su participación en este proceso. Preferimos entonces dar paso al análisis y descripción de cada uno de los demás actores involucrados, tanto en la coyuntura como en el largo proceso que se ha desarrollado en Cochabamba en torno al agravamiento y solución de los problemas referentes al agua.

### **3.4.2. Aguas del Tunari/Bechtel**

#### *Bechtel*

Bechtel Enterprises, y su subsidiaria creada para negocios de agua, International Water Limite (IWL), de Estados Unidos, hasta principios del 2001, tenía ocho operaciones del servicio de agua en Asia, Europa Central, Australia, Reino Unido, Estonia y Ecuador.<sup>330</sup> Sin embargo, dicha empresa tenía, para ese entonces, casi un siglo de existencia, y trabajo en ferroviarias, minas y petróleo, aeropuertos, equipos de defensa y tecnología aeroespacial.

Para inicios del siglo XXI era la compañía de construcción más grande del planeta, con 19.000 proyectos en 140 países, en cada continente excepto en la Antártida. Más de 200 plantas de tratamiento de agua alrededor del mundo.<sup>331</sup>

---

<sup>330</sup> Cfr., Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’ ...”, *op. cit.*, p. 128.

<sup>331</sup> Cfr. Benjamin Dangl, *El precio del fuego...*, *op. cit.*, p. 83. “Warren Bechtel fundó su compañía en 1898, principalmente para construir vías ferroviarias desde Oklahoma hasta California con la labor de prisioneros y

[...] Bechtel es una de las empresas mundiales más grandes de ingeniería y construcción. [...] Según el ranking de la revista Forbes, es la sexta empresa norteamericana de patrimonio privado, por tanto no sujeta a las reglas de transparencia de las sociedades anónimas, y famosa por su carácter cuasi-clandestino e hiper-agresivo y sus estrechos lazos con sucesivos ejecutivos en Washington, D.C.<sup>332</sup>

### *Aguas del Tunari*

En septiembre de 1999 SEMAPA fue licitada en un proceso totalmente irregular y oscuro y ahora los cochabambinos, según Humberto Vargas y Thomas Kruse, serían bajo el consorcio nuevo, los generadores de las riquezas para: a) ejecutar los sueños-mitos de las élites locales (reducidos a una inversión mínima de 300 millones en 3 a 5 años) plasmados en el Proyecto Múltiple *Misicuni*; y b) pagar al mismo tiempo las deudas acumuladas (aproximadamente 30 millones de dólares) de anteriores gestiones.<sup>333</sup>

De las quince empresas que compraron el pliego de licitación, la mayoría se desanimó y las otras se unieron para formar juntas un consorcio: Aguas del Tunari. El “consorcio Aguas del Tunari, con registro legal en las Islas Caiman, era la cría peculiar de algunos de los jugadores más importantes en el mundo del negocio del agua”<sup>334</sup>

Bechtel, a través International Water Limited, con 55% de las acciones, se asoció con Abengoa Servicios Urbanos, empresa de ingeniería española, con un 25%, y cuatro

---

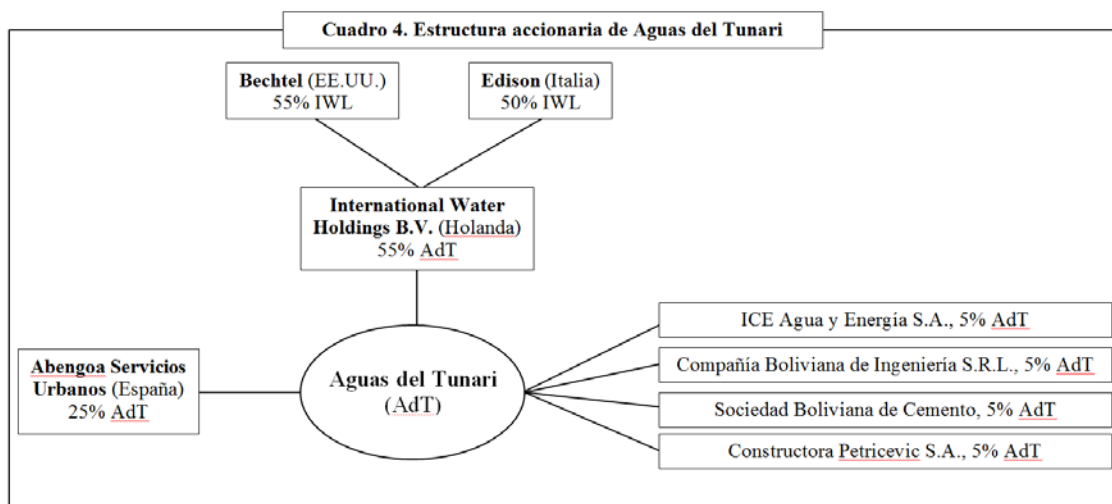
trabajadores Chinos. En 1930, la compañía fue responsable por el proyecto de construcción más grande desde la Gran Pirámide de Giza: la construcción de la represa Hoover. El hijo de Warren Bechtel, Stephen, hizo billones construyendo bases militares y barcos para uso en la Segunda Guerra Mundial. Bechtel luego entró en el negocio del petróleo, y eventualmente construyó bases militares norteamericanas en Vietnam. La compañía está ahora ganando billones con sus “esfuerzos en reconstrucción” en Iraq, un país con una infraestructura en ruinas gracias a los bombardeos de los Estados Unidos. Los sistemas eléctricos, el desagüe, el agua y el teléfono continúan siendo inestables. Los trenes, el agua y los caminos apenas pueden operarse. El agua sucia es parte de la realidad diaria.” Véase, Benjamin Dangl, *El precio del fuego...*, *op. cit.*, pp. 83-84.

<sup>332</sup> Thomas Kruse, *op. cit.*, pp. 128-129. Asimismo, Kruse argumenta que: “Las inversiones de Bechtel fuera de EE.UU. son muy significativas: en el mundo, en el 2000, más de la mitad de los ingresos de Bechtel vinieron de actividades fuera de EE.UU., y esta ‘presencia comercial’ es concebida y con frecuencia ofrecida como una palanca importante para la política exterior de EE.UU. [...]”. Véase, Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’...”, *op. cit.*, p. 129.

<sup>333</sup> Humberto Vargas; Thomas Kruse, “Las victorias de abril: una historia que aún no concluye”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, OSAL, Año N° 2, septiembre 2000, Dirección URL: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal2/bolivia.pdf>, [consulta: 31 de mayo de 2011].

<sup>334</sup> Humberto Vargas; Thomas Kruse, “Las victorias de abril...”, *op. cit.* Thomas menciona que, aunque, inicialmente constituida legalmente en las Islas Caiman, el 8 de diciembre de 1999 Bechtel “traslada” Aguas del Tunari a un holding en Holanda, buscando entre otras cosas el amparo del Tratado Bilateral sobre Inversiones (BIT) vigente entre este país y Bolivia. Véase, Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’...”, *op. cit.*, p. 42.

empresas bolivianas, 5% de las acciones cada una de ellas: Sociedad Boliviana de Cemento, S.A., representada por Juan Carlos Ramón Requena Pinto; Compañía Boliviana de Ingeniería S.R.L., representada por Juan Azcui Sandoval; Construcción Petricevic S.A., representada por Milo Petricevic; e ICE Agua y Energía S.A., representada por Julio León Prado.<sup>335</sup> Thomas Kruse realiza un esquema de la estructura accionaria de Aguas del Tunari el cual consideramos de suma importancia reproducirlo a continuación<sup>336</sup> con la intención de ofrecer una visión más esquemática sobre el punto.



Fuente: Kruse, Thomas, “La ‘Guerra del Agua’ en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas”..., *op. cit.*

Retomando la idea sobre la concesión a Aguas del Tunari, Carlos Crespo considera que de hecho era irregular pues no cubría los requerimientos establecidos por la legislación boliviana en tanto que se necesitaban tres propuestas para validar una licitación.<sup>337</sup>

A principios de 2000, una de las primeras acciones de Aguas del Tunari, y que detonó la explosión social en defensa del agua fue el incremento de las tarifas en un 35%, aunque en muchos casos llegó a más de 100%. Todo esto sin antes haber mejorado el servicio.

<sup>335</sup> Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’..., *op. cit.*, p. 142. Hasta noviembre de 1999, IWL fue propiedad exclusiva de la empresa Bechtel. En ese mes, Edison S.p.A. de Italia adquirió un 50% de IWL, de modo que Bechtel y Edison quedaron con 27.5% de las acciones cada uno.

<sup>336</sup> *Ibidem*, p. 143.

<sup>337</sup> Carlos Crespo F., “Continuidad y ruptura: la ‘Guerra del Agua’ y los nuevos movimientos sociales en Bolivia”..., *op. cit.*, [consulta: 01 de junio de 2011].

### 3.4.3. La Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida<sup>338</sup>

La Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida (la Coordinadora del Agua) se funda el 12 de noviembre de 1999 en una reunión convocada por la Federación de Regantes de Cochabamba (FEDECOR) realizada en la sede de la Federación de Fabriles de Cochabamba. Además de ellos, acuden miembros del Colegio de Abogados y del Colegio de Ingenieros.<sup>339</sup> Dicha convocatoria fue a consecuencia de dos sucesos:

1. El contrato de concesión del servicio de distribución de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Cochabamba y zona periurbana a la empresa Aguas del Tunari.
2. La aprobación de la Ley 2029 de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

De esta forma, el rechazo social hacia estos dos documentos, como al proceso mismo de elaboración y concertación, pasó a ser el objetivo de la Coordinadora del Agua. Específicamente, se oponían al artículo 29 de la Ley 2029, donde se advertía que “ninguna persona natural o jurídica de carácter público o privado, asociación civil, con o sin fines de lucro, sociedad anónima, cooperativa municipal o de cualquier naturaleza, puede prestar servicios de agua potable o servicios de alcantarillado sanitario en zonas concesibles.”<sup>340</sup> Es decir, como se ha dicho no se permitía el uso de fuentes alternativas diferentes a las previstas en la ley.

Por otra parte, la oposición al contrato de concesión con Aguas del Tunari, radicaba en su título II, donde se decía que el concesionario tenía los siguientes derechos y obligaciones con carácter de exclusivo: “transporte, almacenamiento, distribución y

---

<sup>338</sup> Ana Esther Ceceña, en su libro *La guerra por el agua y por la vida. Cochabamba: una experiencia de construcción comunitaria frente al neoliberalismo*, realiza una investigación del conflicto, su importancia e influencia a nivel local, nacional, regional y mundial. Asimismo, esencia de su texto, realiza diversas entrevistas a diferentes actores representativos que participaron en la Guerra del Agua, para entender lo que pensaban y querían en el momento preciso del conflicto en Cochabamba. Ejemplo de los actores entrevistado: Gabriel Herbas (Foro Cochabambino del Medio Ambiente); Omar Fernández Quiroga (Federación Departamental Cochabambina de Regantes); Oscar Olivera Foronda (Federación de Trabajadores Fabriles); Franz Taquichiri Yapura (Organizaciones Territoriales de Base); Guerreros del Agua.

<sup>339</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 69. Raquel Gutiérrez comenta que cada uno de los sectores convocados (regantes, fabriles y profesionales defensores del medio ambiente) tenían ya una historia específica de defensa del agua, de los derechos colectivos –comunales y laborales- y de crítica a los mecanismos estatales liberales de entrega y despojo de los bienes anteriormente públicos.

<sup>340</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar; Álvaro García Linera; Luis Tapia, “La forma multitud de la política de las necesidades vitales”..., *op. cit.*, p. 151.

comercialización del agua potable desde las plantas de tratamiento o de los pozos de agua hasta los usuarios en el área de concesión.”<sup>341</sup>

Así, la Coordinadora del Agua quedó compuesta como un espacio de coordinación y lucha para evitar el despojo del agua<sup>342</sup> (previsto en los dos documentos anteriores), entendida como un bien colectivo, gestionada autónomamente tanto por los regantes como por la red de distribución de agua potable SEMAPA, hasta entonces municipal.<sup>343</sup>

En dicho espacio se dimensionan los distintos sectores (rurales y urbanos, indígenas, campesinos y obreros) que están obligados a superar una necesidad común: la defensa del agua.<sup>344</sup> En este sentido, es claro que cada una de las partes sufre la agresión (privatización) de manera distinta y, por tanto, vive y entiende la amenaza de la Ley 2029 y la concesión del control y la distribución del agua potable de una forma específica; por ello, la Coordinadora del Agua representó el lugar donde se comprendió:

[...] en primer lugar, la específica manera en la que a cada sector afecta lo que el gobierno está imponiendo, y en segundo lugar, que cada una de estas formas de sufrir la imposición estatal no es sino la manifestación específica de la agresión general hacia todos en conjunto, hacia la sociedad llana en pleno. A partir de ese “acuerdo fundacional”, poco a poco se va hilvanando una manera de superar *también en conjunto*, la agresión planteada. Esta será la más importante experiencia de la Coordinadora, aportada al acervo de la lucha boliviana reciente.<sup>345</sup>

La Coordinadora del Agua desarrolla una capacidad para absorber y dar roles, espacio y protagonismo a todos los sectores, que se fueron sumando a la lucha, para poder superar en conjunto la situación existente. “Además, de su práctica asambleísta, de ratificación popular y transparencia fue comprendida y apreciada inmediatamente por la gente.”<sup>346</sup> Trabajó como un instrumento de acción, uniendo a ciudadanos de zonas rurales con los de las ciudades y combinando a varios sectores económicos y políticos.<sup>347</sup> Se creó un sólido pacto ciudad-campo.

---

<sup>341</sup> *Ídem.*

<sup>342</sup> El ente estatal para otorgar concesiones, según la nueva legislación, fue la Superintendencia de Agua.

<sup>343</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 70.

<sup>344</sup> *Ídem.* Según Carlos Crespo argumenta que “la Coordinadora, en su defensa del agua como bien público escarba, directa o indirectamente, una ética comunitaria, de apoyo mutuo (formas de gestión comunitaria del agua, sea riego o consumo humano) y solidaridad, frente a la lógica privada y mercantilista del modelo, expresado en el contrato y la Ley.” Véase, Carlos Crespo, “La guerra del agua en Cochabamba: movimientos sociales y crisis de dispositivos del poder”... *op. cit.*, p. 65, [consulta: 15 de junio de 2012].

<sup>345</sup> *Ibidem*, pp. 70-71. [consulta: 16 de junio de 2012].

<sup>346</sup> Humberto Vargas; Thomas Kruse, “Las victorias de abril...”, *op. cit.* [consulta: 02 de junio de 2012].

<sup>347</sup> *Cfr.* Benjamin Dangl, *El precio del fuego...*, *op. cit.*, p. 85.



Un sustento central de la legitimidad de la Coordinadora del Agua fue precisamente su rechazo a cualquier participación en el sistema político de partidos para buscar cumplir sus objetivos. En contraste, en sus espacios de encuentro, deliberación, traducción y construcción no sólo se logró revertir un proyecto de lucro privado y una ley, sino ensayar escenarios de aprendizaje y construcción de nuevos espacios públicos,<sup>348</sup> diferentes a los pugnados por el supuesto sistema democrático inaugurado desde la década de 1980.

[...] la Coordinadora adquiere visibilidad, presencia y se multiplican sus actividades en momentos de lucha; al no ser una institución, prácticamente desaparece en los momentos de “repliegue” de la población. En cierto sentido, la Coordinadora confrontó un problema muy complejo para las articulaciones sociales que se piensan a sí mismas como “espacios de confluencia para la lucha”, que es la cuestión de la permanencia en el tiempo. [...] <sup>349</sup>

Respecto a las acciones de la Coordinadora del Agua, ésta recuperó formas clásicas de protesta en el marco de la tradición insurreccionalista de la COB y de la CSUTCB, como son los bloqueos campesinos, paros indefinidos, marchas de protesta. A la vez incorpora elementos de crítica novedosos: espectaculares y de gran impacto en los medios de comunicación. Ambas tácticas se complementaron y reforzaron mutuamente.

Es un hecho que la Coordinadora del Agua logró reunir y aprovechar habilidades diversas, resultado de los distintos recursos que llevaba consigo cada uno de los actores que la conformaron y que le permitió construir una crítica clara, compacta y poderosa de los procesos en marcha.<sup>350</sup>

Finalmente, podemos argumentar que la Coordinadora del Agua es un producto de la resistencia con una legitimidad social inédita en las luchas sociales bolivianas de los últimos años. Con el desdén por el sistema político imperante en Bolivia y su reivindicación de participación democrática, solidaria y bien común. La Coordinadora del Agua orientó nuevos escenarios y desafíos de la democracia boliviana.<sup>351</sup> Así, mientras

---

<sup>348</sup> Cfr. Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’...”, *op. cit.*, p. 159.

<sup>349</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 85.

<sup>350</sup> Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’...”, *op. cit.*, p. 156. “La Coordinadora estableció una presencia visual innovadora cada semana en la plaza con una mesa de información para el público; se desplazó a los barrios y asociaciones de manera proactiva con análisis sobre la realidad local; [...] se reapropió de espacios públicos con la “toma” de la ciudad y luego con la instalación y vigilia en la plaza; ensayó nuevos mecanismos de democracia directa no tradicional como la consulta popular, los cabildos y asambleas.” Véase, Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’...”, *op. cit.*, p. 157.

<sup>351</sup> Carlos Crespo F., “Continuidad y ruptura: la ‘Guerra del Agua’ y los nuevos movimientos sociales en Bolivia”...”, *op. cit.* En otro texto de Carlos Crespo argumenta que la Coordinadora constituyó una forma organizativa, que si bien se asienta en la experiencia política de la COB, manteniendo la autonomía frente a los partidos políticos, va más allá de ella, pues rompió los principios del “centralismo democrático” y

insistía y peleaba en la defensa del elemento vital, también exigía un fin a los atropellos a la dignidad.

### 3.4.3.1. Federación Departamental Cochabambina de Regantes<sup>352</sup>

Los regantes son campesinos agricultores, los cuales tienen fuentes de agua (lagunas, ríos, pozos, atajados, represas, tajamares) manejadas de forma organizada y distribuida en base en una tradición andina, según argumenta Omar Fernández, presidente de la Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR).<sup>353</sup>

Dicha organización y distribución del agua es para producir sus diferentes cultivos, en los valles de Cochabamba,<sup>354</sup> en Valle Alto, Valle Central, Valle de Sacaba y Valle Bajo. De esta forma, los regantes establecieron varias formas de derechos de agua en torno a su acceso y uso. “Cada una de las familias regantes tiene consolidados sus derechos de agua, expresados en ‘turno’ de agua, o determinando el acceso al agua en hora y fechas determinadas.”<sup>355</sup> Asimismo, los regantes cuentan con obligaciones con base en los propios derechos.

Omar Fernández sostiene que sobre la fuente de agua hay un derecho comunitario, un derecho colectivo, por encima del derecho de grupo y familiar, que también está expresado en el acceso y uso del agua.<sup>356</sup> De igual manera, se puede decir que hay

---

subordinación al discurso obrerista: la Coordinadora no sólo se protegió de la influencia partidaria, a la vez mantuvo una estructura que respetaba la diversidad discursiva y organizativa de sus miembros. Véase, Carlos Crespo, “La guerra del agua en Cochabamba: movimientos sociales y crisis de dispositivos del poder”..., *op. cit.*, p. 67, [consulta: 15 de junio de 2012].

<sup>352</sup> Álvaro García Linera, Marxa Chávez León y Patricia Costas Monje en su libro *Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política*, tienen un apartado mucho más amplio y con un análisis específico en la estructura, formas de movilización, conformación, entre otros aspectos de la Coordinadora del Agua y el Gas y la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba.

<sup>353</sup> Omar Fernández Quiroga en Ceceña, Ana Esther, *La guerra por el agua y por la vida. Cochabamba: una experiencia de construcción comunitaria frente al neoliberalismo...*, *op. cit.*, p. 64.

<sup>354</sup> Las organizaciones de regantes son autónomas, descentralizadas y flexibles. Estas son instancias donde se determinan aspectos como el uso de las fuentes de agua, la distribución, los derechos, los trabajadores comunitarios, la solución de los conflictos, el manejo de las aguas, la operación, la gestión interna y externa. Véase, Sabine Hoffmann, *et. al.*, *La reconstrucción de lo...*, *op. cit.*, p. 114.

<sup>355</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, pp. 71-72.

<sup>356</sup> Omar Fernández menciona lo siguiente: “[...] O sea, hay un derecho familiar, hay un derecho de grupo, y hay un derecho colectivo, más grande, sobre la fuente de agua. Históricamente, los originarios, los piqueros, tienen sus derechos de agua establecidos, los colonos tiene también sus derechos de agua establecidos. Pero hay muchos, por ejemplo, que han quedado herederos de los hacendados, que no han sido afectados por la reforma agraria, o han quedado con determinados territorios dentro de la hacienda. Estos se han vuelto

diferentes tipos de regantes, “los más antiguos que derivan de los derechos más antiguos, (*sic*) los regantes actuales, que derivan por ejemplo de represas o sistemas de riego que se han elaborado actualmente, donde se puede encontrar inclusive empresarios privados.”<sup>357</sup>

Será a partir de los años de la década de 1990 -cuando las bases de las condiciones de reproducción de los productores del campo sean afectadas por las políticas de reforma estructura y el agua regulada por comunarios empiece a ser objeto de expropiación y control por parte del Estado con la llamada “Guerra de los pozos”- que las asociaciones de regantes, a nivel local, cobran fuerza hasta dar lugar a la FEDECOR<sup>358</sup> el 3 de octubre de 1997.

Dentro de esta Federación se unifican las reivindicaciones de tres grandes sistemas organizativos de regantes: la Asociación de Sistemas de riego Tiquipaya-Colcapirhua (ASIRITIC), la Asociación de Regantes Apaga Punta (ARAP), y los regantes de Punata, asociaciones regionales que ya habían logrado unificar en los años previos las estructuras organizativas de los sistemas de riego en sus respectivas cuencas.<sup>359</sup>

Por otra parte, existe una complejidad estructural de los procesos que se llevaron a cabo en esta región, los cuales serán la base organizativa de la FEDECOR: una memoria organizativa sindical agraria combinada con la experiencia de los sistemas autónomos de riego. Ésta se puede vislumbrar en tres categorías, mismas de las que se desprenden diferentes concepciones en torno al acceso y uso de las fuentes de agua. Por un lado, están las comunidades agrupadas alrededor de los sindicatos agrarios que regulan a la luz del régimen sindical los derechos del agua articulados sobre la tierra y los sistemas de autoridad local. Una segunda categoría se enmarca en las comunidades, que participando en el sindicato agrario, forman simultáneamente asociaciones de riego local y regional con

---

granjeros, se han vuelto empresas de embutidos, por ejemplo, y tienen sus derechos dentro de los derechos colectivos, dentro de su propio territorio, y también tienen derechos de agua que por alguna situación hayan podido adquirir, aunque eso se da muy poca vez, porque los piqueros cuidan mucho su derecho de agua. Ellos, cuando hay alguien que quiere afectarles un poco, inmediatamente se organizan, reaccionan se preparan y entonces dicen: “no, se deben respetar los usos y costumbres”. Una de las palabras muy fuertes aquí en Cochabamba es esto de los usos y costumbres, o sea, muy difícilmente un empresario en un sistema de riego puede cambiar los derechos de agua, porque inmediatamente reaccionan y frenan cualquier situación de usurpación que pueda haber.” Véase, Ceceña, Ana Esther, *La guerra por el agua y la vida...*, op. cit., p.66.

<sup>357</sup> Omar Fernández Quiroga en Ceceña, Ana Esther, *La guerra por el agua y la vida...*, op. cit., pp. 65-66.

<sup>358</sup> Álvaro García Linera (coord.); et. al., *Sociología de los movimientos en Bolivia...*, op. cit., p. 648. Los antecedentes previos a la construcción de la FEDECOR son los conflictos que se dieron en torno a la perforación de pozos entre 1994 y 1998, para extraer agua profunda por parte de SEMAPA en las regiones de Sipe Sipe, Vinto, El Paso, Quillacollo y Vilmona.

<sup>359</sup> Álvaro García Linera (coord.); et. al., *Sociología de los movimientos en Bolivia...*, op. cit., p. 649.

delimitaciones geográficas distintas a la del sindicato; los derechos sobre el agua son administrados por representantes a nivel comunal y superior. Finalmente, existen asociaciones de regantes desde la base comunal totalmente distinta al sindicato agrario lo que da lugar a la creación de niveles organizativos superiores a nivel regional.<sup>360</sup>

Por otra parte, es un hecho que con la Ley 2029 y el contrato con Aguas del Tunari, los regantes perdían el control del recurso y, sobre todo, un menoscabo de usos y costumbres pues como hemos mencionado estos actores fueron marginados de los procesos de regulación, licitación, contratación y gestión del agua.

En torno a la participación de la FEDECOR en la Guerra del Agua, Ana Esther Ceceña señala que ésta representó el puente entre la problemática rural con la que se vivía en la ciudad, es decir, los regantes aportaron a las organizaciones urbanas nuevas maneras de construir consensos y una sensibilidad propia de las áreas rurales, menos devastadas culturalmente y menos individualizadas. Contribuyeron a ampliar el horizonte de reivindicaciones hacia la autodeterminación en el uso y reparto del agua y en esa medida su lucha no se circunscribió a la disposición del recurso vital sino sobre todo a su convicción de continuar con sus prácticas de gestión comunitaria, con sus usos y costumbres<sup>361</sup> opuestas a la lógica privatizadora.

Esta convicción fue visible en la construcción de un discurso amplio y profundo: la defensa de sus usos y costumbres y que no sólo se utilizó en contra de la privatización del agua (“Guerra del Agua”), sino también en demandas hacia la sociedad urbana local tiempo atrás (“Guerra de los Pozos”). Con ello se demostró su capacidad de procesar conflictos sobre el agua entre sus miembros desde la década de 1990; consolidándose esta capacidad en los años posteriores al 2000.

Existen tres grandes movilizaciones de regantes en el período, inmediatamente, anterior a la Guerra del Agua y con los cuales fueron consolidando su discurso y demandas ante el Estado, pero también hacia la sociedad. Dichas movilizaciones estuvieron enmarcadas en la defensa de sus usos y costumbres<sup>362</sup>:

---

<sup>360</sup> Álvaro García Linera (coord.); Marxa Chávez León; Patricia Costas Monje, “Coordinadora del Agua y el Gas y Federación Departamental de Regantes de Cochabamba FEDECOR”..., *op. cit.*, p. 647.

<sup>361</sup> Ana Esther Ceceña, *La guerra por el agua y la vida...*, *op. cit.*, p. 63.

<sup>362</sup> Los hechos referidos fueron obtenidos de Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 75.

- a) El 21 de agosto de 1998 con una concentración de casi 20 mil regantes, que coincidió con una movilización cocalera, los regantes hicieron entrega a la brigada parlamentaria de Cochabamba de una “Propuesta de ley de regulación del agua por usos y costumbres”.
- b) A finales de 1998 se produce la llamada “Guerra de los pozos” cuando los habitantes del Valle Central no permitieron que la empresa SEMAPA perforara una serie de pozos profundos, hecho que abrió cause a un espacio de negociación entre éstos y la empresa.
- c) Finalmente, el 4 de noviembre de 1999 se realiza un bloqueo de caminos de 24 horas en la zona de Vinto y hacia Sacaba donde interviene el ejército para reprimir la movilización. Es justamente después de este bloqueo y de la represión subsiguiente, que el día 12, del mismo mes, se funda la Coordinadora del Agua.

Es un hecho que la problemática del agua en Cochabamba, a partir de la década de 1990, con la implementación de las políticas neoliberales se agudizó. Por un lado, se pretendía mercantilizar el recurso en detrimento de los *usos y costumbres* para el acceso y distribución del agua desarrollados por ciertos sectores rurales y urbanos. Por el otro, se aspiraba a ampliar la distribución del agua en la ciudad en menoscabo del acceso rural.

El papel desarrollado por los regantes a partir de su conformación fue de suma importancia para la conquista de los derechos de las comunidades en torno al respeto de sus *usos y costumbres*. Así, para la conformación, desarrollo y consolidación de la Coordinadora del Agua contaban con una fortalecida experiencia en la demanda de un derecho colectivo del agua. Los regantes serán la columna vertebral de la Coordinadora.<sup>363</sup>

Finalmente, los regantes mostraron una habilidad extraordinaria en conjugar la presión social para forzar la apertura de negociaciones y la capacidad de llegar a ellas con propuestas concretas. El sector de regantes supo aprender de y trabajar con técnicos expertos, sin perderse o dejarse distraer de sus objetivos fundamentales:<sup>364</sup> el respeto de sus *usos y costumbres* en el manejo colectivo de este recurso, el rechazo a una ley que

---

<sup>363</sup> Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’...”, *op. cit.*, p. 151.

<sup>364</sup> *Ibidem*, p. 154.

pretendía privatizarlo, y la anulación de un contrato que vendía el agua como un recurso a granel.

### 3.4.3.2. Federación de Trabajadores Fabriles

La Federación de Fabriles de Cochabamba, que es filial de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia y de la Central Obrera Departamental, e incorporada por esa vía a la COB, “era una anomalía dentro del entramado sindical boliviano clásica de finales del siglo XX.”<sup>365</sup> A pesar del debilitamiento de las estructuras sindicales en Bolivia, particularmente, la COB en Cochabamba, la Federación de Fabriles comenzó a adquirir notoriedad cuando menos desde 1997 y en particular su secretario ejecutivo, Oscar Olivera.

La Federación de Fabriles de Cochabamba contaba con más de tres décadas de trabajo, denuncia y lucha por mejores condiciones laborales.<sup>366</sup> Con esa experiencia, con una gran prestigio acumulado y contando con una amplia red de relaciones hacia la prensa y hacia sectores intelectuales y sindicales, Olivera y los fabriles tomaron conocimiento del problema del agua en Cochabamba durante la segunda mitad de 1999, en particular a cerca del contrato de concesión de la empresa de distribución de agua potable a la transnacional Bechtel y de la amenaza que significaba la Ley 2029 para los regantes y para la población de las zonas periurbanas.

De esta forma, si los regantes constituyeron la columna vertebral de la Coordinadora del Agua en términos de organización, capacidad de movilización y conocimientos de la problemática del agua, la Federación de Fabriles aportó sus recursos, sus vínculos con la prensa y con los medios intelectuales, su capacidad de presentar los problemas de manera pública y su amplia autoridad moral.<sup>367</sup>

---

<sup>365</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, op. cit., p. 75.

<sup>366</sup> Varios años antes de 2000, Oscar Olivera comenzó un proceso de visibilización, organización y denuncia del trabajo precario, de la llamada flexibilización laboral y de las anómalas formas de subcontratación generalizadas en una gran cantidad de centros de trabajo, que le permitió, ante todo, erosionar el discurso liberal de “modernización” y “progreso”, asociado a las reformas neoliberales y a la brusca pérdida de derechos colectivos y labores. Sobre la base de una red de trabajo con intelectuales y jóvenes, la Federación de Fabriles de Cochabamba conformó el Grupo de Trabajo de Apoyo a los Fabriles de Cochabamba, dedicado a estudiar y sistematizar las condiciones de trabajo en las fábricas y talleres de la región. [...] Véase, Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, op. cit., p. 76.

<sup>367</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, op. cit., p. 75. Gutiérrez Aguilar menciona que la Federación de Fabriles de Cochabamba contaba asimismo, desde tres décadas atrás, con ciertos recursos materiales que fueron puestos al servicio de la población movilizada durante la época de la Guerra del Agua:

### 3.4.3.3. Comité de Defensa del Agua y Foro Cochabambino del Medio Ambiente

La presencia del Comité de Defensa del Agua<sup>368</sup> y el Foro Cochabambino del Medio Ambiente, fue muy importante durante los meses previos a la Guerra del Agua puesto que realizaron diversas campañas de difusión organizando foros, conferencias y publicando artículos en los periódicos donde se explicaba en detalle en qué consistía la Ley 2029 de Agua Potable y cómo en ella se “introducía de contrabando” un artículo que privatizaba virtualmente toda el agua del país. De la misma manera, en sus intervenciones públicas los técnicos e intelectuales del Comité de Defensa del Agua fueron explicando al conjunto de la población, en primer lugar, los recovecos más oscuros del contrato de concesión y, en segundo lugar y quizá más importante a la larga, la nueva estructura estatal de regulación de los recursos naturales armada sobre la limitación de la influencia de los antiguos ministros sectoriales y la implantación de las llamadas superintendencias.<sup>369</sup>

La crítica central del Comité de Defensa del Agua era que Bechtel/Aguas del Tunari venía a capitalizarse con dinero de los cochabambinos consumidores de agua sin garantías de cumplimiento de programas de inversión u objetivos sociales.<sup>370</sup> Así fue como este Comité logró la participación de otros profesionales, dirigentes de organizaciones barriales, comunales y medioambientalistas, organizando comités para seguir las negociaciones, organizando foros públicos a los cuales los representantes del gobierno nunca se molestaron en presentarse.<sup>371</sup>

---

una sede sindical en la plaza principal de la Ciudad donde funcionaría por varios años la Coordinadora del Agua, un Complejo Deportivo Fabril donde se llevaron a cabo diversas reuniones amplias en un estadio propio y otra serie de inmuebles que, durante la lucha por la defensa del agua, fueron puestos a disposición de las necesidades de los distintos sectores de la población en lucha fueran o no trabajadores fabriles sindicalizados. Este hecho, desde 2000 en adelante, significó una auténtica novedad en la conducta sindical: frente al comportamiento normal de las instancias corporativas de trabajadores que, bajo pautas de agregación fuertemente gremial sólo utilizan los bienes de los que disponen para la defensa de sus propios afiliados, la Federación de Fabriles de Cochabamba abrió sus espacios para que la población “sencilla y trabajadora” en su conjunto, con contrato formal o no, afiliada a un sindicato o no, pudieran disponer de ellos.

<sup>368</sup> Según Thomas Kruse, el Comité de Defensa del Agua tiene sus orígenes en mayo de 1999: un grupo de medioambientalistas preocupados por el futuro de un parque nacional en Cochabamba y por las vertientes de agua. Al comprender los peligros de la inminente privatización de SEMAPA, volcaron su atención exclusivamente al tema del agua e invitaron a otros grupos profesionales locales, como el Colegio de Ingenieros de Cochabamba, que por su parte ya buscaban ejercer incidencia pública en ese campo.

<sup>369</sup> Cfr. Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, op. cit., pp. 79-80.

<sup>370</sup> Thomas Kruse, “La ‘Guerra del Agua’...”, op. cit., p. 152.

<sup>371</sup> Cfr. *Ibidem*, p. 152.

Con la participación de estos diferentes sectores, la información sobre la privatización del agua comenzó a fluir en distintos niveles y direcciones en la sociedad, es decir, información sobre las funciones de la Superintendencia del Agua, cómo se pretendía implementar un “mercado de agua”, asimismo, de los abusos que englobaba el contrato de concesión.

Lo que comenzó a develarse en medio de estos heterogéneos y variados procesos de deliberación social de los asuntos públicos fue que la confrontación iba más allá de la ruptura del contrato de concesión del agua y que se requería modificar tanto la Ley 2029 como aspectos importantes de la estructura liberal de reciente creación. Se empezó a visibilizar que la cuestión de fondo consistía en la “recuperación social de los bienes comunes” y que en ella se anudaba una lucha contra y más allá del poder corporativo de las transnacionales como con el Estado boliviano y sus regulaciones.<sup>372</sup>

### **3.5. Otras movilizaciones**

#### **3.5.1. Bloqueos aymaras**

Marxa Chávez argumenta que los acontecimientos en Cochabamba iniciaron una discusión nacional sobre las formas de propiedad y uso de recursos vitales como el agua, la constitución de un nuevo polo popular que sin embargo tardará años en articularse con más amplitud.<sup>373</sup> Aun así, este discurso se expandió a lo largo del territorio boliviano en el mismo período en el que se estaban llevando a cabo las diferentes movilizaciones en defensa del agua, donde diversos actores sociales encabezaron variadas manifestaciones, con otras reivindicaciones, pero siempre en apoyo a la Coordinadora del Agua.

La expansión de la protesta se hace evidente por una impresionante movilización indígena en el altiplano boliviano a través de un denso movimiento de dirigencias y niveles mayores de la CSUTCB.<sup>374</sup>

En los recurrentes levantamientos comunitarios aymaras que se vivieron durante 2000, en abril y septiembre, [...] estuvimos ante la presencia desplegada de *la fuerza más profunda*

---

<sup>372</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 80.

<sup>373</sup> Marxa Chávez, “Sobre los ‘movimientos sociales’ en Bolivia: Autonomía/Autoorganización y su relación con el Estado”..., *op. cit.*, p. 29.

<sup>374</sup> La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se funda el 26 de junio de 1979 tras un congreso de “unidad campesina” convocado por la Central Obrera Boliviana (COB). Véase, Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los Ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 125.



*del tejido comunitario*, ancestral, generalmente invisible pues corresponde al polo subalterno, silenciado y ocultado, de la *relación colonial de explotación y dominio* que organiza la estructura política, económica y social boliviana. [...] la ciudad de El Alto, [...] modificó dramática y bruscamente los términos del discurso político público e incendió los corazones y las mentes de los altivos y orgullosos herederos de Tupak Katari y Bartolina Sisa.<sup>375</sup>

Dos cuestiones debemos tener presente al abordar este apartado: por un lado, cómo es que se movilizan, y, por otro, el por qué. En torno a la primera, podemos decir que, a diferencia de las organizaciones existentes en Cochabamba, en La Paz, particularmente, en El Alto, el sindicato-comunal es una de las fuerzas más importantes de movilización; es un eje fundamental de este bloque heterogéneo de movimientos.<sup>376</sup> En otras palabras, tal organización es la esfera fundamental que, en última instancia, decide el ingreso o no a una movilización. En coordinación con todos los otros niveles sindicales, este sindicato-comunal se encarga de conformar, por ejemplo, los comités de bloqueo y comités de huelga, de una manera muy compleja, con sus sistemas de responsabilidad colectiva y turnos por subcentrales, comunidades y, finalmente, familias.<sup>377</sup>

En cuanto al por qué, podemos utilizar un argumento de Felipe Quispe para poder responder a esta pregunta. Él considera que los problemas más sensibles de las zonas rurales eran tres: la privatización del agua, la erradicación de la coca y la usurpación de la tierra por parte de las élites (sobre todo en el oriente del país), así como el régimen normativo e impositivo a la propiedad rural que agredía al tejido comunitario en el altiplano.<sup>378</sup> Con la promulgación de la Ley 2029 y la firma de contrato con Aguas del Tunari ese rechazo a los proyectos gubernamentales y transnacionales encuentra cabida.

---

<sup>375</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los Ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 106.

<sup>376</sup> Marxa Chávez, "Sobre los 'movimientos sociales'...", *op. cit.*, p. 30. La autora explica de una forma más detallada lo que se entiende por sindicato comunal, ella argumenta que: "Cuando hablamos del sindicato comunal nos referimos fundamentalmente al área lacustre de La Paz, asentado en comunidades aymaras. [...] La estructura sindical-comunal está basada en núcleos familiares y núcleos comunales, que de forma escalonada están, finalmente, afiliadas al ente nacional, la CSUTCB, que por su parte, está compuesta de 9 federaciones departamentales, (y otras regiones) [...] En su interior están los sindicatos más grandes, como las subcentrales, centrales, provinciales y federaciones departamentales. En realidad, a pesar del denominado 'sindicato', que es una herencia de la revolución de 1952, en el fondo, se trata de una organización económica y territorial de comunidades y ayllus, que, desagarradas por siglos de arremetidas en contra la propiedad comunal ya sea en el período colonial o en el republicano, perviven, no sólo en sus formas de uso y propiedad de la tierra sino, sobre todo, en su organización política particular. Véase, Marxa Chávez, "Sobre los 'movimientos sociales'...", *op. cit.*, p. 30.

<sup>377</sup> Marxa Chávez, "Sobre los 'movimientos sociales'...", *op. cit.*, pp. 30-31.

<sup>378</sup> Felipe Quispe citado en Gutiérrez Aguilar, Raquel, *Los Ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 131.

De esta forma se inauguraron una serie de movilizaciones y levantamientos comunales aymaras en abril de 2000. Éstos sin embargo no estuvieron exentos de enfrentamientos con las fuerzas del Estado. Dentro de estos sucesos ocurre algo muy significativo para el movimiento indígena aymara: el 6 de abril se invita al presidente Hugo Bánzer a la “capital del mundo aymara” a dialogar “de presidente a presidente”, según expresa Quispe. Son trascendentales los argumentos de Felipe Quispe, quien empezó a difundir y aclarar la idea de que existen “dos Bolivias”: la de los q’aras y sus gobernantes, y la de los de “abajo”, la de los aymaras, quechuas y otras naciones originarias, junto a los trabajadores.<sup>379</sup>

Otro de los eventos importantes fue la firma del acuerdo entre el Gobierno de Hugo Bánzer y la CSUTCB, donde se comprometían por un lado a levantar los bloqueos de los caminos y a retirar a los militares de las carreteras; se incluían puntos sobre la Ley de Aguas, modificación de la Ley INRA, medidas para impulsar el desarrollo rural, entre otras cosas. Sin embargo, el incumplimiento de estos acuerdos fue la causa de una nueva serie de movilizaciones y bloqueos aymaras en el mes de septiembre, provocando que siete de los nueve departamentos de Bolivia quedaran bloqueados. En el Anexo 2 se pueden observar con mayor detalle cada una de las acciones llevadas a cabo por los sectores movilizadas y el gobierno.

Lo destacable a lo largo de estas movilizaciones aymaras es que, “quedó expuesta a nivel público la fractura social boliviana y sus ribetes étnicos, pero ya no como discurso político de algunos activistas sindicales o indianistas sino como realidad patente de la configuración del Estado nacional.”<sup>380</sup> Y a pesar de que eran diversas demandas por las que luchaban (rechazo a la Ley de Aguas, suspensión del proceso de saneamiento de tierras instruido por la Ley INRA, sobre todo de la región occidental del país, y suspensión de la erradicación forzosa de la hoja de coca), solo la modificación y renegociación de la Ley de Agua fue la única que prosperó en los ámbitos parlamentarios, así como la anulación del contrato de concesión, situación un poco entendible por la combinación de fuerzas que se dieron, tanto en Cochabamba como en La Paz.

---

<sup>379</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los Ritmos del Pachakuti...*, op. cit, p. 132.

<sup>380</sup> *Ibidem*, p. 141.

Este hecho trajo como resultado varios escenarios para las diferentes demandas. Uno de ellos, y lo apunta bien Gutiérrez Aguilar, fue el ejercicio de una autonomía local *de facto* en torno a las cuestiones más sensibles: mantener y proteger los cultivos de coca y resistir el proceso de saneamiento de tierras implementado desde el INRA<sup>381</sup>; llevándose a cabo, tanto en la ciudad de El Alto como en la región del Chapare.

Otra de las consecuencias que produjeron estos conflictos fue la idea de la refundación del Estado boliviano, entiéndase por ello, también, el discurso que alude a las dos Bolivias de Felipe Quispe.

[...] se hablaba de la reconstitución de la “nación aymara”, de la dignidad recuperada por los hombres y mujeres tradicionalmente humillados y discriminados, de los múltiples malestares generados por las políticas de los sucesivos gobiernos de los q’aras y, también, se hablaba de cientos de reivindicaciones locales, pequeñas y grandes, desoídas y no atendidas durante años y años. Es decir, se producía un común, amplificándose y profundizándose, un belicoso temperamento colectivo de desafío al orden existente que reforzaba el ambiente de rebelión, que cancelaba la vacilación así como cualquier disposición a transigir con nuevas y reiteradas maniobras gubernamentales para postergar con las demandas explícitas.<sup>382</sup>

Por otra parte, algo a recalcar y que lo vemos claramente al revisar cada una de las situaciones que se vivieron, es la trascendencia de las movilizaciones indígenas del año 2000, para las posteriores movilizaciones en defensa del gas. Se observa “en la pérdida de validez de la presencia y la fuerza física del Estado y sus organismos cuando ni el ejército ni la policía pueden retomar el control de las carreteras y los espacios territoriales copados por las fuerzas indígenas que son las que, a través de los bloqueos, la vigía en los cerros y los puestos de control en los caminos, terminan poniendo en entredicho la institucionalización republicana y practicando su propio control sobre el territorio que ocupan mientras se movilizan.”<sup>383</sup>

El proceso de la emergencia indígena, particularmente aymara, será largo y muy complejo, caracterizado por una búsqueda de respeto a la autonomía *de facto*, así como la construcción de una nación aymara; o vista de manera más general, la instauración del

---

<sup>381</sup> *Ibidem*, p. 142.

<sup>382</sup> *Ibidem* p. 143.

<sup>383</sup> Patricia Chávez; Dunia Mokrani, “Los movimientos sociales en la Asamblea Constituyente. Hacia la reconfiguración de la política”, en Svampa, Maristella; Stefanoni, Pablo, *Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales*, Buenos Aires, El Colectivo, CLACSO, 2007, p. 61

*Pachakuti*.<sup>384</sup> Sin embargo, esto ya no es objeto de la investigación, recordemos que el introducir estos levantamientos y bloqueos indígenas es para ampliar el espectro de la Guerra del Agua, es decir, entender que el proceso acaecido en Cochabamba detonó una serie de levantamientos, que ya se venían dando, a lo largo del territorio con una variedad de demandas, pero en apoyo también, a los actores que se movilizaban en contra del contrato de concesión a Aguas del Tunari y a favor de la anulación de la Ley 2029.<sup>385</sup>

### 3.5.2. Cocaleros del Chapare

Si bien, la lucha cocalera debe entenderse en su particularidad y en respuesta a la llamada estrategia de guerra contra las drogas patrocinada por Estados Unidos desde mediados de la década de los ochenta, existe una ola de luchas, movilizaciones, prácticas organizativas y horizontes políticos de estos actores sociales a lo largo de la Guerra del Agua.<sup>386</sup> Por este motivo, sólo se tomaran en cuenta las acciones acaecidas bajo ésta.

Según Gutiérrez Aguilar, los cocaleros apoyaron comprometida y contundentemente la movilización en Cochabamba. No sólo bloquearon el camino hacia el Chapare en varias ocasiones, sino que incluso significativos contingentes de cocaleros participaron en las batallas urbanas con toda su experiencia de enfrentamiento en los caminos.<sup>387</sup>

---

<sup>384</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar después de un exhaustivo análisis sobre todo lo acontecido con los levantamientos y bloqueos aymaras, concluye: “entiendo la noción de *Pachakuti* como, efectivamente, la ambición, el anhelo, la búsqueda de una inversión del orden fundamental de las cosas. Básicamente, como una inversión del orden político donde lo que estaba adentro, en las comunidades, como su lógica más íntima –y, por supuesto, abajo-, ahora queda colocado como lo visible, lo válido, lo legítimo, ‘lo de afuera’ y ‘arriba’: se trata pues de un trastocamiento general del modo de convivir, no sólo de una modificación en quienes ejercen el gobierno o el mando.” Véase, Gutiérrez Aguilar, Raquel, *Los ritmos del Pachakuti...*, op. cit., p. 153.

<sup>385</sup> Para una mayor análisis sobre el proceso que llevaron a cabo los levantamientos indígenas en La Paz, particularmente los aymaras, se puede revisar el capítulo de Raquel Gutiérrez Aguilar, “Los bloqueos aymaras en La Paz: lo comunal como fuerza de movilización”, en *Los ritmos del Pachakuti...*, op. cit., pp. 105-182.

<sup>386</sup> Cfr., Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, op. cit., p. 184. Para un mayor análisis de la formación de estos actores sociales se pueden recurrir a diversos textos. Uno de ellos es el de Gutiérrez Aguilar, que ha sido citado con regularidad a lo largo de la investigación. En dicho trabajo se distingue la estructura social de la región cocalera de Chapare; asimismo, se analiza la doble estrategia seguida por los cocaleros, consistente en la sistemática resistencia a la erradicación de los cultivos de hoja de coca combinada con la participación política formal electoral desde 1995.

Por otra parte, también puede consultarse el libro de Fernando B. Salazar Ortuño, *De la coca al poder. Políticas públicas de sustitución de la economía de la coca y pobreza en Bolivia (1975-2004)*, Buenos Aires, CLACSO, 2008, 338 pp.

<sup>387</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, op. cit., p. 205.

No obstante, pese al apoyo expresado en las movilizaciones, la articulación entre estas fuerzas nunca estuvo exenta de tensiones, pues, como atinadamente apunta Gutiérrez Aguilar, la participación cocalera no era mera y únicamente solidaria.

[...] Más bien, buscaban enlazarse y reforzar la lucha por el agua, calculando sus tiempos y posibilidades de impulsar y negociar de mejor manera su propia causa: la defensa de la coca. Igualmente ocurrió con las luchas y bloqueos comunitarios y campesinos a nivel nacional convocados por la CSUTCB: los cocaleros se sumaron y dieron fuerza a la movilización colectiva, en septiembre de 2000, por ejemplo, aunque casi siempre lo hicieron calculando sus propios ritmos y centrando la atención y el esfuerzo en la resolución de su propia problemática.<sup>388</sup>

La centralidad de la demanda de la coca, esgrimida desde un inicio, representaba una ventaja para los productores de coca del Chapare, es decir, esto les permitió hacer múltiples alianzas con otros movimientos como la Coordinadora del Agua y el CSUTCB, que representarían en algún momento, posterior a estos conflictos, la consolidación de su partido (Movimiento Al Socialismo) y sus perspectivas de expansión política formal y triunfo electoral.

### **3.6. Consecuencias internacionales**

En noviembre de 2002, Aguas del Tunari, Bechtel y, su co-inversionista, Abengoa de España, presentaron una demanda por \$50 millones contra Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés), un mecanismo del Banco Mundial. El reclamo de \$50 millones no fue solamente para recuperar las inversiones, que se estiman en menos de un millón de dólares, sino también por la pérdida de las ganancias futuras estimadas, que habría perdido la compañía por la cancelación del contrato con Cochabamba.<sup>389</sup>

La demanda de Bechtel/Aguas del Tunari en la jurisdicción del CIADI se sostiene sobre la afirmación de que ésta es una empresa holandesa, siendo que Aguas del Tunari trasladó su registro a Holanda sólo después de firmar el contrato de concesión con

---

<sup>388</sup> *Ídem.*

<sup>389</sup> The Democracy center, “Bechtel vs. Bolivia”, [en línea], *The democracy center*. Dirección URL: <http://www.democracyctr.org/espanol/bolivia/bechtelversusbolivia.htm>, [consulta: 16 de enero de 2013].

Bolivia.<sup>390</sup> De esta forma, se beneficiaba del Tratado Bilateral sobre Inversión entre Holanda y Bolivia de 1992 el cual signó al CIADI como un mecanismo para la resolución de disputas entre Estados miembros e inversionistas.

El proceso y contenido del caso se mantuvieron en secreto, bajo las reglas de procedimiento de dicha institución, de tal forma que ni el pueblo de Cochabamba ni la prensa tuvieron el derecho de acceso a los procedimientos. Por tal motivo, el 29 de agosto de 2003, más de 300 organizaciones de 43 países, incluyendo a Bolivia, enviaron una Petición de Ciudadanos Internacionales “exigiendo que el caso fuera transparente y abierto a la participación del público.”<sup>391</sup> Sin embargo, el CIADI rechazó la petición.

Dentro de la carta enviada, se proponía un método: la aceptación de individuos y organizaciones, esenciales para una resolución legítima del caso. Oscar Olivera, portavoz de la Coordinadora de Defensa del Agua; Omar Fernández de la Federación de Regantes; Padre Luis Sánchez, miembro elegido del Directorio de SEMAPA; y el Dr. Jorge Alberto, diputado del Congreso Nacional de Bolivia y Presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, elegido en 2002. Estas personas tendrían que ser representadas por abogados estadounidenses y bolivianos.<sup>392</sup>

Esta propuesta, por parte de los diversos sectores, nacionales e internacionales interesados en el caso, demostró que el proceso de demanda a Bolivia ante el CIADI tenía una importancia mucho más profunda que tan sólo para las dos partes que tenían acceso formal al proceso de arbitraje: Bechtel/Aguas del Tunari y el Gobierno boliviano.

Finalmente, el 21 de octubre de 2005, el CIADI determinó que tenía jurisdicción en el caso de Aguas del Tunari vs. Bolivia, y que procedería con el caso. El tribunal fue compuesto por tres personas: una nombrada por Aguas del Tunari, una por Bolivia, y una designada por el Banco Mundial. Asimismo, éste, el tribunal, funcionó fuera de las leyes

---

<sup>390</sup> Petición Internacional de 300 organizaciones de la sociedad civil de 41 países. Demanda de participación pública. Aguas del Tunari S.A. (Bechtel) vs. República de Bolivia Case No. ARB/02/3), [en línea], *The democracy center*, 29 de agosto de 2002. Dirección URL: <http://democracyctr.org/bolivia/investigations/bolivia-investigations-the-water-revolt/international-citizens-petition-to-the-world-bank/peticion-internacional/>, [consulta: 16 de enero de 2013].

<sup>391</sup> The Democracy Center, “Bechtel vs. Bolivia”..., *op. cit.*

<sup>392</sup> Petición Internacional de 300 organizaciones de la sociedad civil de 41 países. Demanda de participación pública... *op. cit.*

nacionales siendo así imposible apelar por las decisiones tomadas. Y, si el país no cumpliera con la decisión cabría la posibilidad de ser sancionado económicamente.<sup>393</sup>

Para el 19 de enero de 2006, representantes de Bechtel y Abengoa viajaron a Bolivia para firmar un acuerdo donde declaraban que abandonaban el caso en el CIADI por un pago nominal de 2 bolivianos (0.30 USD).<sup>394</sup> Fue la primera vez que una corporación abandonaba un caso de comercio internacional como resultado directo de la presión pública internacional siendo que la mayoría de las decisiones en estos casos son favorables a las corporaciones. Durante todo el tiempo que duró la demanda, estas compañías transnacionales se vieron perseguidos por protestas, prensa y exigencias públicas para que se abandonara el caso.

El caso Bechtel contra Bolivia en el CIADI tiene mucha importancia para todas las luchas sociales en contra de las empresas transnacionales que pretenden privatizar los recursos naturales. Esta experiencia va más allá de las fronteras nacionales bolivianas y debe entenderse dentro del contexto latinoamericano que se inauguraba al finalizar el siglo XX, un contexto que combinaba la resistencia activa de masas y una cierta recuperación económica, con el surgimiento de fuerzas políticas innovadoras que establecieron una conexión inédita con los movimientos sociales y con una agenda crítica anti-neoliberal de diversos matices.<sup>395</sup>

### **3.7. Logros, retos, contradicciones y limitaciones posteriores a la Guerra del Agua**

En Bolivia se desarrollan realidades diversas en torno al acceso y distribución de agua, los cuales son mediados por múltiples mecanismos sociales, culturales, históricos y políticos. El introducir, específicamente en el departamento de Cochabamba, estructuras que consideraban, y consideran, al agua tan sólo como un bien económico y desde las cuales se pretendía lucrar sin ninguna consideración, resultaba contradictorio a todas luces.

Uno de los principales logros de la sociedad cochabambina fue el poder articular, plenamente, las demandas de la ciudad (tarifas elevadas y dolarizadas y la pérdida de los

---

<sup>393</sup> The Democracy Center, “Bechtel vs. Bolivia”..., *op. cit.*

<sup>394</sup> *Ídem.*

<sup>395</sup> *Cfr.*, Lucio Oliver, Francesca Savoia, “El 2010 en América Latina. La compleja y difícil lucha por una nueva hegemonía”..., *op. cit.* [consulta: 09 de enero de 2013].

sistemas autogestionados) con las demandas de las zonas rurales, específicamente las de los regantes (seguridad en el manejo de sus fuentes, usos y costumbres).

Esto, como ya se expuso, se entiende a partir de la contraposición discursiva-argumentativa basada en lógicas histórico-culturales que desarrollaron los regantes frente a la lógica del capital. Es decir, a “la mercantilización del agua, los regantes responderán con la politización social del agua como medio de reivindicación y resistencia a las decisiones gubernamentales. A la conversión en ‘valor de cambio’ de la riqueza hídrica, los regantes pondrán un valor simbólico histórico-moral del agua como patrimonio ancestral de una memoria de soberanía colectiva.”<sup>396</sup>

Fueron movilizaciones campesinas, indígenas, urbanas y populares que no se aglutinaron en torno al tema de la tierra, la cual es una demanda histórica de muchos sectores subalternos, sino en defensa del agua. Este recurso se convirtió en el centro articulador de antiguas identidades, de la defensa de sus *usos y costumbres* y, por tanto, de su memoria organizativa.

A partir de la Guerra del Agua se ha mostrado por un lado, que existen otros discursos diferentes a los pugnados por el capitalismo global que mantiene una profunda confianza en la capacidad del mercado para administrar los recursos naturales. Estos discursos, los generados en y a partir de la Guerra del Agua, están basados en una lógica comunitaria y de apoyo mutuo donde se entiende que el acceso a y uso a los recursos naturales no debe estar articulado en una lógica de lucro y ganancia; de que es necesario construir formas alternativas de desarrollo sin depender de la teología del mercado.<sup>397</sup> Por el otro lado, ha puesto un signo de interrogación a los dispositivos relativos a la participación ciudadana, que es entendida por las clases en el poder como un mero procedimiento administrativo de consulta. A lo largo de los sucesos de la Guerra del Agua, la Coordinadora del Agua demostró que la participación ciudadana debe ser concebida como un hecho político de toma de decisiones, que la sociedad puede y debe tener un rol protagónico en la dicha toma. El rechazo a la Ley aprobada y al contrato firmado entre el Gobierno y Aguas del Tunari fue reflejo del hartazgo de la sociedad de no ser consultada en asuntos que le afectan directamente.

---

<sup>396</sup> Álvaro García Linera (coord.); *et. al.*, *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia...*, *op. cit.*, p. 653.

<sup>397</sup> Carlos Crespo F., “La guerra del agua en Cochabamba: movimientos sociales y crisis de dispositivos del poder”..., *op. cit.*, p. 67. [consulta: 27 de junio de 2012].



Queda claro que la Guerra del Agua marca un momento de rearticulación social, después de un largo período de destrucción y erosión del tejido social y laboral que se profundizó a partir de la implementación de políticas neoliberales. La Guerra del Agua es el primer movimiento social, la primera acción social colectiva de gran envergadura que revierte esto, que se presentaba como derrota, como debilitamiento y como extinción de las formas autónomas de movilización en la vida política boliviana.<sup>398</sup>

Este momento de rearticulación se debe en gran medida a la constitución de la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida<sup>399</sup> donde se desarrolló una articulación laxa de una heterogénea composición social, una sociedad abigarrada, la cual se observa, de una u otra forma, en las distintas acciones de movilización y en la búsqueda de decisiones colectivas. Diversos autores lo han denominado como un modo de “hacer política”.

A partir de la Guerra del Agua se instaló y reivindicó, en los diversos sectores de la sociedad, particularmente en las comunidades indígenas y populares del altiplano, la idea de democracia como soberanía del pueblo al implementar formas de consulta pública y democracia directa. Se cuestionó el rol del sistema político dominante como referente de la democracia, contraponiendo al pueblo como constructor de la misma.<sup>400</sup>

Por otra parte, el papel que desarrolló la Coordinadora del Agua, durante los sucesos acaecidos en Cochabamba sirvió para que ésta se convirtiera en una “articulación intermitente de la multiforme lucha social boliviana, poniendo a disposición del conjunto de la población movilizada –comunarios aymaras y cocaleros del Chapare, principalmente– los saberes y habilidades desarrollados durante 2000.”<sup>401</sup> Lo aprendido será esencial para los posteriores conflictos que se desencadenarán en torno a la defensa del gas.

---

<sup>398</sup> Entrevista a Álvaro García Linera en Ceceña, Ana Esther, *La guerra por el agua y por la vida...*, *op. cit.*, pp. 148-149.

<sup>399</sup> Existen diferentes estudios sobre el papel que jugó la Coordinadora, durante y después de la “Guerra del Agua”. Uno de ellos es el que realiza Carlos Crespo al fenómeno Coordinadora, según sus propias palabras, desde el debate de los denominados “nuevos movimientos sociales”, en el contexto del neoliberalismo como instrumento de expansión del capitalismo global. Analizando desde su identidad, adversarios y objetivo, para buscar la relación existente entre el movimiento de la Coordinadora y los nuevos movimientos sociales, de resistencia a la globalización neoliberal. Véase, Carlos Crespo, “La guerra del agua en Cochabamba: movimientos sociales y crisis de dispositivos del poder”..., *op. cit.*, pp. 59-70, [consulta: 15 de junio de 2012].

<sup>400</sup> Carlos Crespo, “La guerra del agua en Cochabamba: movimientos sociales y crisis de dispositivos del poder”..., *op. cit.*, p. 66.

<sup>401</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 92.

Pese a los logros obtenidos y el reconocimiento social boliviano hacia la Coordinadora del Agua, no se logró rebasar de manera contundente los márgenes regionales de su acción política; aun cuando se crearon redes con organizaciones sociales como la FEJUVE, de El Alto y diversas organizaciones de gestión del agua potable en Santa Cruz.

En torno a lo conseguido durante la Guerra del Agua se puede observar la modificación de la Ley 2029 de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Se redactó la Ley 2066, la cual da “mayor protección a los ‘usos y costumbres’, el de las cooperativas y otras asociaciones en el suministro local del agua; introduce elementos de control público sobre las tarifas; y abre la posibilidad de tomar en cuenta los criterios sociales. Finalmente, se elimina toda mención de la Superintendencia de Aguas y se abre la posibilidad de crear un Consejo Nacional de Aguas.”<sup>402</sup>

Con la modificación de la ley, SEMAPA volvió a ser del municipio. Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil y otros grupos desarrollaron propuestas para reformar los estatutos de la empresa pública de agua.<sup>403</sup>

La Coordinadora deseaba organizar la participación y el control populares de modo que la mayoría de la junta directiva estuviera compuesta por ciudadanos elegidos. La propuesta fue bloqueada por los sindicatos y el gobierno local, que ha permitido que la junta esté dominada por la Nueva Fuerza Republicana (NFR), el partido que ocupa dicho gobierno; sin duda, un asunto delicado para la política de SEMAPA. La Coordinadora tampoco consiguió que el SEMAPA dejara de ser de propiedad municipal y quedara libre de la regulación impuesta por las autoridades estatales con el fin de disponer de una mayor autonomía operativa. [...] la junta directiva provisional aprobó unos estatutos totalmente nuevos en octubre de 2001 y, en abril de 2002, se celebraron las primeras elecciones libres y secretas para la junta. Los residentes de las zonas Sur, Centro y Norte de la ciudad eligieron a tres de los siete miembros de la junta y, por primera vez en su historia, el sindicato del SEMAPA obtuvo un puesto permanente en la junta. Otro de los puestos se ofreció a la Federación de Profesionales, y los últimos dos cargos, uno de los cuales es el de presidente de la junta, dependen del alcalde.<sup>404</sup>

---

<sup>402</sup> Willem Assies, “David vs. Goliath en Cochabamba...”, *op. cit.*, p. 22.

<sup>403</sup> Luis Sánchez Gómez argumenta que los nuevos estatutos eran un híbrido entre la antigua fórmula de propiedad municipal y la propuesta de control popular, y eran un reflejo de la agitada dinámica del momento. Una vez finalizada la “Guerra del agua”, cada vez se hizo más difícil movilizar partidarios, que estaban distraídos con otros asuntos sociales que estaban estallando en Bolivia. [...] La Coordinadora se aseguró de que la participación popular no se limitara a la estructura de la OTB oficiales (Organizaciones Territoriales de Base, organismos creados desde el estado para fomentar la democracia participativa local; la mayoría en manos de partidos políticos), sino que se basara en elecciones directas y secretas, y que estuviera abierta a organizaciones informales como los comités de agua. El artículo 15 de los nuevos estatutos introdujo el derecho a la participación y el control populares, un derecho que aún no se observa completamente.

<sup>404</sup> Luis Sánchez Gómez; Philipp Terhorst, “Cochabamba, Bolivia: asociaciones públicas y colectivas tras la Guerra del Agua”, en Balanyá, Belén; Brennan, Brid; Hoedeman, Oliver; Kishimoto, Satoko; Terhorst,

Con esto podemos darnos cuenta que la construcción de un nuevo modelo de gestión y participación pública ha resultado ser muy complejo y ha estado salpicado de problemas, desde la falta de financiamiento, hasta la injerencia por parte de las instituciones estatales, las políticas partidistas, la corrupción y las condiciones impuestas por organismos internacionales. Ello ha repercutido en las mejoras en el acceso al agua y el saneamiento, las cuales han avanzado con lentitud.

Con todo, existen diversos logros. Uno de ellos es el impacto de la propuesta de la Coordinadora del Agua sobre SEMAPA<sup>405</sup>: una empresa autogestionada. Dicha propuesta ha demolido la falaz dualidad entre privatismo/estatismo que había guiado las propuestas políticas contemporáneas. Lo que se buscaba con esta propuesta era que el agua fuera gestionada por los que la necesitan y la usan, autogestionada por los propios ciudadanos.<sup>406</sup> Con esto se vislumbra un horizonte de acción alternativo al existente: la autogestión comunitaria frente a la privatización del sector del agua.

A pesar de este horizonte alternativo, resulta muy complejo poder aterrizarlo en los hechos concretos, como son la elaboración de una nueva estructura de tarifas socialmente aceptable y medidas para compensar a las cooperativas y otras iniciativas particulares que administren sistemas de abasto propios para que se incorporen o no al sistema SEMAPA y para lograr un verdadero uso sustentable del recurso.

Raquel Gutiérrez apunta que la ambición de construir una “empresa de propiedad social autogestionada” chocó con el andamiaje legal existente y con el entramado burocrático que impedía ese extremo.<sup>407</sup> Todo esto trajo como consecuencia buscar nuevos caminos para la solución de los nuevos problemas que iban surgiendo. Se abrió en Cochabamba algo que en otras regiones ya se venía dando, la discusión de la necesidad de una Asamblea Constituyente.

Se constató que la ley dibujaba un marco de contención e imposibilidad para poder llevar a cabo dicho proyecto. Tras este choque con la realidad, se opta por asumir la

---

Philipp (Editores), *Por un modelo de agua. Triunfos, luchas y sueños*, España, Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo, 2005, pp. 133-134.

<sup>405</sup> Gutiérrez Aguilar apunta que la atención que dio la *Coordinadora del agua* a la propuesta sobre SEMAPA estuvo encaminada en buscar las maneras de garantizar una vinculación real de la empresa con la población, desconcentrando las decisiones e incorporando mecanismos de participación social. Véase, Gutiérrez Aguilar, Raquel, *Los ritmos del Pachakuti...*, op. cit., p. 62.

<sup>406</sup> Cfr. Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, op. cit., p. 102.

<sup>407</sup> *Ibidem*, pp. 89-90.

necesidad de cambiar la ley y no por la tradicional actitud de ceñir la propuesta colectiva al marco normativo. Así comenzó a discutirse en Cochabamba, más allá de las diversas dificultades prácticas para reapropiarse de SEMAPA, lo relativo a la Asamblea Constituyente.<sup>408</sup>

En un inicio la Asamblea Constituyente fue entendida como una organización política para decidir, es decir, como una forma de recuperación y ejercicio de la soberanía política, de la capacidad de decisión y ejecución sobre el asunto público, actualmente hipotecado en el sistema de partidos políticos, y no tanto como una forma de reorganización estatal sino como “una herramienta para romper la relación estatal y construir ‘capacidad de decisión sobre lo público’ basado en otras prácticas.”<sup>409</sup>

Con la inclusión del tema de una Asamblea Constituyente a los logros obtenidos tras la Guerra del Agua, se expandirá en el imaginario boliviano dos cuestiones de suma importancia para los posteriores levantamientos sociales en Bolivia: la reapropiación social de la riqueza y la refundación del país. De esta forma, surgirá un discurso subalterno respecto a los derechos sobre un recurso y su manejo, y la defensa de las condiciones ecológicas para observar un nuevo modo de vida frente al sesgo del capitalismo.<sup>410</sup>

Asimismo existirán diferentes efectos en diversos niveles de la estructura política boliviana. A decir de los partidos políticos, posterior a los conflictos en Cochabamba, éstos vieron debilitada su legitimidad, siendo los sindicatos tradicionales también afectados. Los eventos revelaran que las viejas formas de organización de los movimientos heredadas de la Revolución de 1952 son obsoletas para una realidad emergente. Lo que se fortaleció fue el poder y la capacidad de las coaliciones de trabajadores urbanos y rurales, indígenas y sectores populares.

Además de fortalecer a los movimientos sociales en Bolivia, la Guerra del Agua inspiró a diversos sectores de otras regiones del mundo a pelear contra la explotación por parte de las empresas transnacionales.<sup>411</sup> Desde la cancelación del contrato de la compañía Francesa Vivendi, en Argentina, por su mala reputación en los negocios, hasta la creación

---

<sup>408</sup> *Ibidem*, p. 90.

<sup>409</sup> *Ibidem*, pp. 90-91. Posteriormente, cuando en 2006 finalmente comenzó a funcionar la Asamblea Constituyente, ya bajo el gobierno de Morales, no se tomó en cuenta las ideas de la *Coordinadora del Agua*, asimismo, los miembros y voceros más destacados de la *Coordinadora del agua* no estuvieron en ella.

<sup>410</sup> *Cfr.*, Willem Assies, “David vs. Goliath...”, *op. cit.*, p. 20.

<sup>411</sup> *Cfr.*, Benjamin Dangl, *El precio del fuego...*, *op. cit.*, P. 96.

de la propuesta de reforma, de la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador (CONAIE), la cual se enfoca en los aspectos sociales, comunitarios y ecológicos del agua. En Bolivia, en 2005 los vecinos y las organizaciones sociales de El Alto se unieron para echar a la compañía francesa de agua Suez.



## 4. Política insurgente: la Guerra del Gas

*¿Qué falta para que los pueblos originarios y la población trabajadora de las ciudades logren dotarse nuevamente de fines autónomos a través de los cuales retomar el camino de recuperación de la riqueza pública saqueada? ¿Qué es lo que late en lo profundo de las comunidades y de los barrios?*

*Como decía un amauta aymara para expresar la rebelión de su pueblo: más allá de la política oficial, "¡el temblor viene desde abajo, carajo!"*  
Raquel Gutiérrez Aguilar

La grave situación económica que incide de forma contundente en la crisis de gobernabilidad política, generada con la implementación de políticas neoliberales y exacerbada a partir de la Guerra del Agua, lleva a la clase política y oligárquica boliviana a colocar como principal opción de salida la venta y exportación del principal recurso natural del país: el gas. Repitiendo, nuevamente, una constante en la historia de dependencia colonial que ha atravesado el país.

Como se vio en el capítulo segundo, el proceso de privatización inició en el año de 1996 durante el gobierno de Sánchez de Lozada, por un lado con la Ley de Hidrocarburos, y, por el otro, con el Decreto Supremo 24086 el cual había supuesto la entrega a las transnacionales de este recurso y de su excedente económico, así como el desmantelamiento del sector público estatal: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Con esto, se percibe con cierta claridad que las elites bolivianas y sus socios foráneos, nuevamente, ha puesto en manos extranjeras un recurso natural estratégico, cercenando una vez más las opciones de desarrollo y alargando la condena de una vida en precario para la mayoría de la población boliviana. Sin embargo, esta situación desembocará en la consigna base de recuperación de la propiedad de los hidrocarburos, es decir, su nacionalización.

La consigna de recuperación del gas tendrá el valor de ser aquella que unificó, de forma rápida, a la totalidad de los sectores sociales por encima de las demandas sectoriales que habían primado en la movilización social de los últimos años. Con epicentro en la ciudad de El Alto, esta demanda se extendió inmediatamente por el altiplano aymara entre múltiples actores, desde los regantes de los valles, los cocaleros, las mujeres organizadas, hasta en los gremios de las diferentes ciudades del país,. El proceso se engarzó plenamente con las demandas indígenas en defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales.

Adolfo Gilly tiende a bien apuntar que, “el movimiento insurreccional de septiembre-octubre de 2003 en Bolivia aparece, en sus formas, sus protagonistas y sus contenidos, como un producto de las transformaciones impuestas por la reestructuración neoliberal de fines del siglo XX en la sociedad, en la economía y, sobre todo, en la vida, los territorios y las relaciones de las clases subalternas. Es un movimiento nuevo, con actores antes inexistentes, con una capacidad fresca para unir las demandas más inmediatas a las propuestas nacionales más generales –gas, agua, hidrocarburos, coca, república- y con métodos de organización y de enfrentamiento de antigua estirpe pero también nutridos por cuanto las nuevas tecnologías han puesto a su alcance.”<sup>412</sup>

De esta forma, más que analizar la insurrección del altiplano en 2003 y la insurrección nacional en 2005, por comparación con las revoluciones del pasado, hay que analizarlas en relación con las transformaciones de la sociedad y de las formas de dominación del capital. Para Gilly, la insurrección boliviana que culminó en octubre de 2003, fue la primera revolución del siglo XXI.

En el año 2000 y, posteriormente en el 2003, las ideas dominantes que presentaban a la inversión externa como motor de la economía, a la globalización y exportación como horizonte inobjetable de nuestra modernidad, y a las coaliciones de partidos políticos como condición *sine qua non* para definir la gobernabilidad, como entendimiento del sentido común de la política, entraron en crisis.<sup>413</sup>

Para el 2005, la movilización social y política adquirió un carácter más denso que el de un movimiento social. Se trató de un conjunto significativo de estructuras políticas y sociales indígenas y populares para cuestionar las políticas y estructuras del Estado, a sus gobernantes y a los modos de reproducir, en nuevas condiciones, la desigualdad entre pueblos y culturas.<sup>414</sup>

Desde el año 2000, quedó demostrado que lo que ocurre en Bolivia no se trata de un movimiento social entendido como sector de la sociedad que se moviliza para reformar el

---

<sup>412</sup> Adolfo Gilly, *Historias clandestinas...*, *op. cit.*, p. 25.

<sup>413</sup> Álvaro García Linera, “Empate catastrófico y punto de bifurcación”, [en línea], Buenos Aires, *Crítica y Emancipación. Revista latinoamericana de Ciencias Sociales*, Año 1, No. 1, junio de 2008. Dirección URL: <http://http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/CyE/cye2S1a.pdf>, [consulta: 01 de mayo de 2013].

<sup>414</sup> Luis Tapia, “Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano*, febrero de 2009. Dirección URL: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/cuadernos/17/17tapia.pdf>, [consulta: 01 de mayo de 2013].



orden social y político del que forma parte orgánica, sino de la acción de otras sociedades subalternizadas por la colonización que se mueven para reformar las estructuras de la sociedad dominantes. En este sentido, se trató de un movimiento social y político anticolonial.<sup>415</sup>

A partir de los acontecimientos entorno a la Guerra del Gas y las protestas por la nacionalización del gas en 2005, quedó claro que se presencié el agotamiento de una forma política y económica, que se expresa en la renuncia de dos presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005).

#### **4.1. Reservas de gas: Bolivia en el contexto latinoamericano**

Según Carlos Villegas Quiroga<sup>416</sup>, la expansión o retracción de la demanda internacional de hidrocarburos depende del ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, de la expansión de la población, la industrialización, la urbanización, y la disponibilidad de fuentes de energía no comerciales. La reconversión de la matriz energética también juega un papel importante en la demanda internacional de gas natural. Dicha reconversión consiste en la introducción de energía “menos contaminante” y más barata en el mercado, lo que supone el desplazamiento de petróleo y del carbón y la utilización de gas natural en las centrales termoeléctricas y en el parque automotor.

Así, dentro de este marco, los descubrimientos de reservas de gas natural acontecidos en Bolivia a partir de 1997 sitúan al país en una nueva realidad en el contexto latinoamericano. Así, las reservas certificadas de gas libre para el 2004, según apunta Villegas, alcanzan en América del Sur los 151,9 trillones de pies cúbicos (TCF), de los cuales: el 36,2% corresponden a Bolivia; el 24,2% a Argentina; el 13,2% a Venezuela; el 8,5% a Perú y el 17,8% a Trinidad y Tobago.<sup>417</sup>

Cabe aclarar que, la diferencia entre Bolivia y Venezuela se explica por el hecho de que las reservas venezolanas tienen un fuerte componente líquido, es decir que el gas

---

<sup>415</sup> *Ídem.*

<sup>416</sup> Carlos Villegas Quiroga, *Privatización de la industria petrolera en Bolivia. Trayectoria y efectos tributarios*, 2da. Edición, Bolivia, CIDES-UMSA, CEDLA, FOBOMADE, DIAKONIA, 2004, p. 31.

<sup>417</sup> *Ibidem*, p. 33.

natural sólo se produce siempre y cuando lo indispensable sea la producción de petróleo.<sup>418</sup> En el caso boliviano en cambio, la gran mayoría de sus campos son “secanos”, es decir, lo predominante es el gas, y el petróleo lo secundario. En la Tabla 5 se muestra un panorama de lo descrito anteriormente, con datos de 2004.<sup>419</sup>

<b>Tabla 5. Reservas de Gas Libre en Sudamérica (en Trillones de Pies Cúbicos / TCF)</b>		
<b>Países</b>	<b>Reservas</b>	<b>Porcentaje (%)</b>
<b>Bolivia</b>	<b>54.9</b>	<b>36.2</b>
Argentina	37.0	24.3
Venezuela	20.0	13.2
Perú	13.0	8.5
Trinidad y Tobago	27.0	17.8
<b>Total</b>	<b>151.9</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Carlos Villegas Quiroga, *Privatización de la industria petrolera en Bolivia. Trayectoria y efectos tributarios*, 2da. Edición, Bolivia, CIDES-UMSA, CEDLA, FOBOMADE, DIAKONIA, 2004, p. 34.

El hecho más significativo ante esta realidad es la permanente presencia de empresas transnacionales en países periféricos con grandes reservas de recursos energéticos, ello con el claro objetivo de obtener cuantiosas ganancias y alimentar de energía a los países desarrollados. Los países que son propietarios de las reservas sólo se benefician del pequeño margen que dejan las empresas transnacionales. Estos exiguos recursos que obtienen los países subdesarrollados no les permiten resolver sus principales problemas de manera sostenida, en particular la pobreza. Ello en buena medida también por los altibajos en los precios internacionales de los combustibles fósiles y la pérdida de valor real de los mismos en el largo plazo.

Una de las empresas que se ha beneficiado de ello era Repsol, la cual hasta 2003 se había apoderado de 22 bloques petroleros con un total de 4.973.511 hectáreas

<sup>418</sup> *Ídem.* Según apunta Villegas Quiroga, “Venezuela, para producir gas natural, debe tener asegurado mercado para su petróleo. Si se incluye el gas asociado a las reservas hidrocarburíferas venezolanas, esas reservas alcanzan a 180 TCF.” Véase, Carlos Villegas Quiroga, *Privatización de la industria petrolera en Bolivia...*, *op. cit.*, p. 33.

<sup>419</sup> La tabla fue obtenida de Carlos Villegas Quiroga, *Privatización de la industria petrolera en Bolivia...*, *op. cit.*, p. 34.

concesionadas; la mayor parte en suelos tropicales.<sup>420</sup> Según apunta Gavalda, en 1994 Repsol conseguía su primer contrato de riesgo compartido: un millón de hectáreas entre el Chapare y Beni. Para 1998, se adjudicaba cuatro bloques en el Chaco y al interior del Parque Nacional Madidi y la Reserva Biológica Pilón Lajas.<sup>421</sup>

A partir de entonces, esta empresa junto con otras transnacionales diseñaron y crearon diversos proyectos para el abastecimiento, tanto regional como internacional de gas natural.<sup>422</sup>

**Tabla 6. Proyectos de Gaseoductos**

<b>Nombre gaseoducto</b>	<b>Trayecto</b>	<b>Longitud</b>	<b>Zonas afectadas</b>	<b>Empresas</b>
Gaseoducto Bolivia Brasil	Santa Cruz-Puerto Suárez-São Paulo	3.000 km	Parque Nacional Kaaya Parque Nacional Bañados de Otuquis	Enron, Shell, Petrobras
Gaseoducto Cuiabá	San José de Chiquitos-San Marías-Cuiabá	425 km	Bosque Seco Chiquitano	Enron, Shell, Petrobras
Gaseoducto GASYRG	Yacuiba-Río Grande	500 km	TCO Guaranís y Weenhayek	Transierra (Repsol-YPF, Petrobras y Total)
Gaseoducto YABOG	Yacuiba-Río Grande	500 km	TCO Guaranís y Weenhayek	(Enron y Shell)

Fuente: Marc Gavalda, “Repsol, la Guerra del Gas de Bolivia”, en *Ecología Política*, No. 26, Icaria Editorial, 2003, p. 133. Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/20743317>, [consulta: 29 de marzo de 2012].

Si bien Bolivia se pudo haber beneficiado de manera extraordinaria con dichos proyectos, el hecho es que a partir de la capitalización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la cual se denominó Transredes, y toda su unidad como comercialización se puso en subasta, siendo, supuestamente, los bolivianos dueños del 50% de las acciones de esta empresa a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), los mayores beneficios se los adjudicaron las empresas transnacionales. Concurriendo, además, que dichos negocios de los gaseoductos no tienen escrúpulos en

<sup>420</sup> Marc Gavalda, “Repsol, la Guerra del Gas de Bolivia”, en *Ecología Política*, No. 26, Icaria Editorial, 2003, p. 125. Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/20743317>, [consulta: 29 de marzo de 2012].

<sup>421</sup> *Ídem.*

<sup>422</sup> La siguiente tabla fue obtenida de Marc Gavalda, “Repsol, la Guerra del Gas de Bolivia”..., *op. cit.*, p. 133.

atropellar comunidades y ecosistemas para sacar de Bolivia las reservas de gas cuanto antes.

Asimismo, los bolivianos pagan a precios internacionales sus propios hidrocarburos. Antes de 1996, los precios se calculaban según los costos de producción anual. Los bolivianos ahora deben comprar gas y petróleo a las transnacionales como si los importaran. Los costos de producción (incluido el transporte interno) por barril de petróleo no superan los siete dólares. Y dado que el Estado boliviano le reconoce a las petroleras el precio de 29 dólares por barril, el precio del gas en el país es muy elevado a pesar de contar con cuantiosas reservas. Lo anterior es una trampa sin fondo en tanto que Bolivia está subsidiando con dinero público a las empresas transnacionales en 22 dólares por barril.<sup>423</sup>

#### **4.1.1. Proyecto *Pacific LNG***

El consorcio *Pacific LNG* se constituyó en el mes de junio de 2001 por las transnacionales Repsol-YPF, British Gas y British Petroleum<sup>424</sup> para la exportación de gas natural boliviano a México y Estados Unidos.

El proyecto de este consorcio consistió en construir un gaseoducto entre el campo Margarita, el cual se encuentra en el bloque petrolero Caipipendi en el Departamento de Tarija, Bolivia y el Puerto de Mejillones, en Chile.<sup>425</sup> Dicho proyecto fue la causa desencadenante de la Guerra del Gas. Según advierte Gavalda, se pretendía licuar diariamente 30 millones de metros cúbicos de gas sometiéndolos a altas presiones para transportarlo en un tren de barcos a las costas de México donde sería, nuevamente, gasificado y transportado a California por medio de un gaseoducto. La empresa Sempra Energy se encargaría, en ese momento, de quemar el combustible en las plantas térmicas para convertirlo en kilowatios.<sup>426</sup>

---

<sup>423</sup> Marc Gavalda, “Repsol, la Guerra del Gas de Bolivia”..., *op. cit.*, p. 132.

<sup>424</sup> Según Marc Gavalda, estas empresas, Repsol-YPF, British Gas y British Petroleum, participan en el negocio del gas natural, y operan el Bloque Caipipendi, en el Departamento de Tarija, en Bolivia.

<sup>425</sup> Según los estudios de factibilidad y rentabilidad del proyecto, realizados por el consorcio, el gaseoducto a construirse entre el Campo Margarita en Tarija y el Puerto de Mejillones, en Chile, tendría una distancia de 780 kilómetros y costaría alrededor de mil millones de dólares. En tanto que un gaseoducto entre el puerto de Ilo, en Perú, alcanzaría los 950 kilómetros. Véase, Marc Gavalda, “Repsol, la Guerra del Gas en Bolivia...”, *op. cit.*, p. 128.

<sup>426</sup> Marc Gavalda, “Repsol, la Guerra del Gas en Bolivia...”, *op. cit.*, p. 127.

Se consideraba “una inversión de aproximadamente 5.000 a 7.000 millones de dólares y que podría culminarse a mediados del año 2005.”<sup>427</sup> De esta forma las empresas creadoras del consorcio *Pacific LNG*, dividirían las ganancias en los siguientes porcentajes: Maxus (Repsol-YPF) 37,5%, British Gas con 37,5% y Unión Texas de Bolivia con 25%. La empresa operadora de este campo es la empresa Repsol a través de la empresa Maxus Bolivia.<sup>428</sup>

El campo Margarita posee 13,42 trillones de pies cúbicos de gas natural y 303,48 millones de barriles de petróleo. Es el mayor yacimiento hidrocarburífero en Bolivia.<sup>429</sup> Por otra parte, la historia de este campo comienza con el descubrimiento del pozo Margarita X-I en 1998 por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fecha a partir de la cual se realizaron una serie de ensayos de producción y nuevas perforaciones.

Marc Gavalda analiza la propuesta que el consorcio *Pacific LNG* tenía para los precios en boca de pozo (de 60 centavos de dólar por millar de pies cúbicos de gas natural en explotarse), en ésta la participación del Estado boliviano se reducía aún más, puesto que de los 60 centavos de dólar, tan sólo 10 centavos, por concepto de regalías, se quedarían en Bolivia.<sup>430</sup>

## 4.2. Gestación de un movimiento social

Un levantamiento urbano en la ciudad de La Paz y El Alto, con quema y saqueo de edificios públicos y oficinas de partidos políticos acaeció en febrero de 2003. Un hecho de suma importancia fue el enfrentamiento del batallón policial Grupo Especial de Seguridad (GES) contra un destacamento militar de la Infantería boliviana. Importante por una cuestión esencial, y es que que las “instituciones armadas del Estado usen las armas para

---

<sup>427</sup> *Ídem.*

<sup>428</sup> *Ídem.*

<sup>429</sup> *Ídem.*

<sup>430</sup> *Ibidem*, p. 128. En realidad el polemizado proyecto de exportación de gas a Estados Unidos, representa un tercio de lo que ya está exportando Bolivia a Brasil por otros ductos. El interés carioca por el gas boliviano se remonta a varias décadas atrás. En 1974, en plena dictadura banzerista, Brasil consiguió un compromiso de Bolivia para la venta de 240 millones de metros cúbicos al día. Sin embargo, esto se concretó durante el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada. Preocupados por la lentitud de los avances, Brasil había ofrecido a Bolivia construir el Gaseoducto y dar “*llave en mano*” a Bolivia. La insistencia era comprensible. São Paulo, la ciudad más grande e industrial del MERCOSUR necesitaba combustible barato que Bolivia podía ofrecer. Véase, Marc Gavalda, “Repsol, la Guerra del Gas en Bolivia...”, *op. cit.*, p. 130.

detener las pretensiones autónomas de otras instituciones armadas del Estado habla de un derrumbe catastrófico del principio de cohesión y unicidad estatal, que es algo así como el instinto de preservación básico de cualquier organización social.”<sup>431</sup> A partir de ese momento, se desarrolla en el imaginario social boliviano un rechazo mucho más enérgico a las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno, mismas que afectan directamente a los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad.

Asimismo, este contexto fue el reflejo de un profundo hartazgo social, de malestar y desconfianza hacia el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada quien estaba gobernando por segunda ocasión. En la primera administración, Sánchez de Lozada implementó diversas políticas tendientes a privatizar sectores estratégicos para la economía boliviana; en esta ocasión, el gobierno pretendía aplicar un impuesto salarial para la generación de fondos. Sin embargo, la población no reaccionó como el gobierno esperaba, desarrollándose una serie de enfrentamientos a lo largo y ancho de varias ciudades del país.

El impuesto salarial, que pretendía emplear el gobierno, se trataba de un impuesto de 12,5% sobre los ingresos de las personas a partir de los dos sueldos mínimos (880 bolivianos, equivalentes a 115 dólares).<sup>432</sup> Ante esto resulta evidente la pregunta: ¿por qué implementar un impuesto al salario de los bolivianos? El hecho está en que Bolivia vivía con un déficit fiscal<sup>433</sup>, el cual había crecido al 8.5% por la privatización del servicio de

---

<sup>431</sup> Álvaro García Linera, “Crisis estatal y muchedumbre”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *OSAL*, Año IV, núm. 10, enero-abril, 2003, p. 55. Dirección URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal10/linera.pdf>, [consulta: 16 de mayo de 2013].

<sup>432</sup> Claudia Espinoza; Gonzalo Gonzalvez, “Bolivia arrinconada en la azotea de su historia”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *OSAL*, Año IV, núm. 10, enero-abril, 2003, p. 30. Dirección URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal10/espinozaetal.pdf>, [consulta: 15 de mayo de 2013].

<sup>433</sup> Tania Aillón, explica que los “ingresos fiscales del Estado boliviano, que estaban compuestos sobre todo por transferencias directas de los beneficios de las empresas estatales al Tesoro General de la Nación (TGN), se vieron drásticamente recortados con la privatización de aquéllas. Para revertir esta situación [...] se aplicó una batería de impuestos indirectos, destinados a gravar el consumo de la población. La política tributaria petrolera muestra con claridad los efectos del cambio en la política estatal de captación del excedente: mientras que en 1995 el 96% de la transferencia petrolera al TGN provenía de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y sólo el 4% estaba compuesto por impuestos indirectos, en el año 2001, en plena vigencia de las reformas del sector petrolero, el 62% del aporte petrolero al TGN está formado por impuesto indirecto; sólo el 4% corresponde al impuesto que grava la utilidad de las empresas petroleras, y el restante 34% está constituido por las regalías departamentales y participaciones de YPF. Para consolidar esta política tributaria, el impuesto especial a los hidrocarburos (IEHD), un impuesto indirecto, se utilizó como variable de ajuste de los precios, con la finalidad de que la población absorba el costo de transferencia de excedente a los consorcios petroleros a través de la subida de precios en el mercado. Esta medida provocó un recorte en el poder adquisitivo de los sectores de la población de ingresos fijos (trabajadores, empleados de clase media, etc.), al mismo tiempo que incrementó los costos de producción de la empresa nacional.” Véase, Tania Aillón Gómez, “La fisura del estado como expresión de la crisis política de la burguesía en Bolivia”, [en

pensiones de los jubilados; ante esto, el FMI exigía que se le redujera en 3.5% para otorgar nuevos créditos.<sup>434</sup> Según explican Claudia Espinoza y Gonzalo Gonzalvez<sup>435</sup>, el gobierno requería 3.900 millones de dólares para aplicar su anunciado plan de “Obras con Empleo”. En 1999 el FMI ya había sugerido varias medidas para evitar el colapso fiscal: una modificación del sistema tributario boliviano; la anulación del impuesto en cascada IT (Impuesto a las Transacciones) que se compensaría con un incremento del Impuesto al Valor Agregado del 13 al 15%; la incorporación al sistema tributario de los regímenes especiales como el de transporte, el simplificado y el régimen agrícola unificado; y además, la sustitución del impuesto de Régimen Complementario (RC-IVA) por un impuesto sobre los ingresos de las personas físicas, (impuesto sobre la renta personal, IRP).

Sin embargo, el gobierno boliviano consideraba que las posibles soluciones a su crisis fiscal eran dos: el “gasolinazo” o el “impuestazo”. La modificación del sistema tributario se plantea como objetivo reducir la dependencia de los ingresos fiscales del sector de hidrocarburos y reducir la presión sobre la inversión privada de las empresas.<sup>436</sup> De esta forma, el gobierno “optó”, según advierten Espinoza y Gonzalvez, por la “sugerencia” del FMI, el “impuestazo”, yendo inclusive más allá: la exención propuesta para cuatro salarios mínimos vitales<sup>437</sup> fue reducida por el gobierno a sólo dos, ampliando aún más la base tributaria que proponía el FMI.

El 9 de febrero de 2003, el presidente Sánchez de Lozada comunicó en cadena nacional a la población la instauración de dicho impuesto directo al salario, el *impuestazo*, que afectaría sobre todo, a los asalariados formales: maestros, médicos y enfermeras, trabajadores fabriles y policías.<sup>438</sup>

---

línea], Buenos Aires, Argentina, *OSAL*, Año IV, núm. 10, enero-abril, 2003, p. 39. Dirección URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal10/agomez.pdf>, [consulta: 16 de mayo de 2013].

<sup>434</sup> Pablo Solón, “Radiografía de un febrero”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *OSAL*, Año IV, núm. 10, enero-abril, 2003, p. 16. Dirección URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal10/solon.pdf>, [consulta: 15 de mayo de 2013].

<sup>435</sup> Claudia Espinoza; Gonzalo Gonzalvez, “Bolivia arrinconada en la azotea de su historia”..., *op. cit.*, pp. 34-35.

<sup>436</sup> *Ídem*.

<sup>437</sup> Pablo Solón explica en qué consistió esto. Se hablaba de una escala gradual que irá desde un descuento del 4,2% para quienes ganan más de 800 Bs (115 u\$s) hasta el 12% para los que ganan más de 20.000 BS (2.630 u\$s). Véase, Pablo Solón, “Radiografía de un febrero”..., *op. cit.*, p. 16.

<sup>438</sup> Según Jim Shultz del Democracy Center, el impuesto aplicado al salario de los trabajadores equivalía al costo hasta de dos días de comida. Véase, Jim Shultz citado en Benjamin Dangl, *El precio del fuego. Las luchas por los recursos naturales y los movimientos sociales en Bolivia...*, *op. cit.*, p. 105.

Surgen una segunda y tercera interrogantes: ¿por qué el descontento, y por consecuencia su reacción, por parte de los sectores policiales?, y ¿por qué la desobediencia de una parte muy importante de la población boliviana?

En torno a la reacción de los sectores policiales, debemos tener en cuenta que en abril del año 2000, en pleno auge de la Guerra del Agua, en la Ciudad de La Paz, las esposas de policías iniciaron una huelga de hambre pidiendo un aumento del 20% en los salarios mensuales de sus maridos y la dotación de chalecos antibala y equipamiento adecuado.<sup>439</sup>

Esta situación se generalizó en todo el país, profundizándose el proceso con el desacato policial a la orden de intervenir la huelga de hambre de las esposas de policías, al que le siguió el amotinamiento policial del GES en apoyo a las huelguistas. Asimismo, existe el desacato al estado de sitio dictado por el gobierno, el 8 de abril de 2000, ante la magnitud de la movilización social que se estaba viviendo: Guerra del Agua en Cochabamba, los bloqueos campesinos de caminos, y para cívicos en las ciudades de Oruro, Potosí y Sucre.<sup>440</sup> Finalmente, el gobierno concedió un aumento de salario a los policías de bajo rango del 50%, significativamente mayor al 20% solicitado.

De esta forma, resulta comprensible que los sectores policiales se muestren renuentes ante una política que los afectaba directamente en su salario, y, además, era un retroceso a una victoria alcanzada poco tiempo atrás e iniciada por sus familias. En esta ocasión, fueron varios niveles de policías que entraron en huelga. Sin embargo, fue el GES, la fuerza dirigida por el mayor Vargas, quien lideró en un inicio el movimiento con una huelga y una protesta nacional.<sup>441</sup> Su capacidad de organización policial les sirvió para resistir a las políticas del Estado que afectaba directamente los ingresos de sus familias.

Por otra parte, se encuentra un descontento social generalizado, en casi toda la población que no posee una relación directa con los sectores policiales. Así, si bien el motín policial marcó el inicio de la protesta, los enfrentamientos terminaron por desatar una ira popular generalizada y contenida de mucho tiempo atrás, por los insultos cotidianos de los

---

<sup>439</sup> Tania Aillón Gómez, “La fisura del estado como expresión de la crisis política de la burguesía en Bolivia”, [en línea]..., *op. cit.*, p. 44., [consulta: 16 de mayo de 2013].

<sup>440</sup> *Ibidem*, p. 45

<sup>441</sup> Benjamín Dangl, *El precio del fuego... op. cit.*, p. 111.



gobernantes de turno a la dignidad e inteligencia de la gente, por el desempleo, la falta de acceso a servicios básicos y ahora debido a la reducción de los salarios.

Es un hecho que, a partir de la aplicación y profundización del modelo neoliberal boliviano, existió una tendencia a constreñir los gastos sociales y a incrementar los gastos corrientes, mismos que tienen una importante participación en los gastos fiscales totales. Entre los gastos corrientes, los gastos en servicios personales desde 1985 hasta el 2000, crecieron continuamente hasta constituir entre el 30% y el 40% de los gastos corrientes en todo el periodo, y entre el 25% y 35% de los gastos totales, lo cual se explica por el aumento permanente de la burocracia estatal y/o del abultamiento de sus remuneraciones. En contraste, durante el periodo de 1995-2001 los gastos sociales apenas significan entre el 13% y 18% de los gastos corrientes.<sup>442</sup> En la Tabla 7 se muestra una comparación de los gastos sociales y gastos corrientes.

**Tabla 7. Comparación de gastos sociales y gastos corrientes del Estado  
(en millones de dólares)**

<b>Rubros</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
Gasto social	183,9 15%	239,4 18%	246,8 15%	245,1 13%	264,9 15%	285,5 16%	295,4 16%
Gastos corrientes	1.189,0 100%	1.318,0 100%	1.665,0 100%	1.853,0 100%	1.771,0 100%	1.826,0 100%	1.891,0 100%

Tania Aillón Gómez, “La fisura del estado como expresión de la crisis política de la burguesía en Bolivia”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *OSAL*, Año IV, núm. 10, enero-abril, 2003, p. 40. Dirección URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal10/agomez.pdf>, [consulta: 16 de mayo de 2013].

Por otra parte, en el periodo de 2000 a 2003, los sueldos del 10% de la población más pobre bajaron en un 15%; mientras que, los del 10% de los más ricos subieron en un 16%. En el altiplano, más del 90% de la población vivía en la pobreza. En julio de 2003, expone Dangl, un reporte del gobierno indicó que la calidad de vida de los bolivianos estaba peor de lo que había sido unos cinco años atrás. El desempleo creció y la gente ganaba menos. En 1998, 2,3 millones de bolivianos vivían sin electricidad, de un total de 8,15 millones; siendo para las elecciones de 2002, 3,1 millones de personas de 8,843 millones.<sup>443</sup>

<sup>442</sup> Tania Aillón Gómez, “La fisura del estado como expresión de la crisis política de la burguesía en Bolivia”... *op. cit.*, p. 39.

<sup>443</sup> Benjamin Dangl, *El precio del fuego... op. cit.*, pp. 104-105.

Dentro de este contexto, resulta evidente la reacción de la población, principalmente, en El Alto<sup>444</sup>: quema de instituciones gubernamentales, además de empresas transnacionales como Aguas del Illimani, Electropaz, financieras de crédito, entre otras. La quema del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y la Vicepresidencia, las sedes de los partidos del MNR, del MIR y ADN son algunos ejemplos.

Al finalizar las jornadas de violencia del 12 y 13 de febrero, se registraron 33 muertos y 189 heridos. Tantas víctimas no son casuales sino resultado de una política de represión y militarización, como se puede comprobar en una lectura más precisa de cada uno de los acontecimientos en aquellos días. Dentro de esta situación, quedó claro que existía el intento de romper la unidad y ascenso de los movimientos sociales, campesinos e indígenas bolivianos. Según Solón, hubo una política consciente de quebrar físicamente el ascenso popular.<sup>445</sup>

Un ascenso popular, que como se observó en la Guerra del Agua no estaba bajo el mando de líderes o caudillos, sino que la organización colectiva y comunitaria era la principal articuladora de dichas movilizaciones. En febrero las personas no estuvieron organizados en ninguna fuerza política ni organización social, a pesar de que existió un llamado por parte del MAS y específicamente por Evo Morales a rechazar el *impuestazo* y realizar acciones de desobediencia civil; o de la COB que también había llamado a la resistencia. Evo Morales fue sin duda un referente muy importante en el levantamiento, pero no fue la dirección real del mismo.<sup>446</sup>

Posterior a estos acontecimientos, Sánchez de Lozada canceló el *impuestazo* y anunció: “Nuestro presupuesto no será el presupuesto del Fondo Monetario Internacional”.<sup>447</sup> Finalmente, los acontecimientos exhibieron tanto el grado de deterioro de la de por sí débil institución estatal boliviana con la elección gubernamental de la represión militar como camino para enfrentar los problemas políticos.

Una cuestión de suma importancia, que comenzó a ser objeto de la atención pública, fue el problema de los ingresos que el gobierno boliviano obtenía por concepto de regalías

---

<sup>444</sup> Según Benjamin Dangl, en El Alto, los manifestantes construyeron barricadas en la calle y fogatas hechas de muebles y basura para bloquear el paso al ejército y a otros vehículos. Véase, Benjamin Dangl, *El precio del fuego... op. cit.*, p. 114.

<sup>445</sup> Pablo Solón, “Radiografía de un febrero”..., *op. cit.*, p. 25.

<sup>446</sup> *Ibidem*, p. 26.

<sup>447</sup> Gonzalo Sánchez de Lozada citado en: Benjamin Dangl, *El precio del fuego...*, *op. cit.*, p. 115.

y gravámenes de las transnacionales. Según apunta Gutiérrez, se empezó a difundir que las corporaciones petroleras que operaban en Bolivia pagaban sólo el 18% de impuestos sobre los volúmenes totales de gas y petróleo extraídos y que, además, tal producción total no era controlada por ninguna entidad estatal sino que se daba por buena y fiable la información contenida en las “declaraciones juradas” de las propias empresas.<sup>448</sup>

### **4.3. Ley de Hidrocarburos y la lucha partidaria legal en el Parlamento**

El 30 de abril de 1996 se promulgó la Ley de Hidrocarburos No. 1689, que tiene referencias significativas con relación a los derechos de propiedad de los hidrocarburos. Por una parte, apunta Carlos Villegas Quiroga, la Ley señala que el “Estado es propietario de las reservas de gas natural cuando se encuentra en el subsuelo; en cambio, cuando éstas son producidas o declaradas campos comerciales, la propiedad es de la empresa transnacional o contratista. Además, éste tiene derecho de construir y operar ductos para el transporte de su propia producción y la de terceros.”<sup>449</sup>

Por la otra, se encuentran las disposiciones constitucionales donde se expresa claramente que “los yacimientos de hidrocarburos son de dominio directo o de propiedad del Estado nacional, es decir, que éste tiene poder para usar y disponer de lo suyo, a su vez es inalienable porque no existe el mínimo de posibilidades para enajenarlos o, lo que es lo mismo, no puede pasar el dominio del yacimiento a otro. Además el derecho que tiene el Estado sobre este recurso natural es imprescriptible, no puede extinguirse.”<sup>450</sup> Por tanto, lo referido en la Ley 1689 a la propiedad de la producción contradecía y violaba la Constitución Política del Estado.

Una de las consecuencias a raíz de la capitalización fue la reclasificación de campos, lo que significó un incentivo a la inversión privada extranjera en el sector. Esta reclasificación hacía la distinción entre campos nuevos y campos existentes: “campos existentes, son los reservorios que están en producción a la fecha de la Ley de Hidrocarburos, certificadas al 30 de abril de 1996 por empresas especializadas. Campos

---

<sup>448</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, op. cit., pp. 235-236.

<sup>449</sup> Carlos Villegas Quiroga, “Rebelión popular y los derechos de propiedad de los hidrocarburos”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *OSAL*, Año IV, núm. 12, septiembre-diciembre. Dirección URL: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal12/dlQuiroga.pdf>, [consulta: 01 de junio de 2011].

<sup>450</sup> *Ídem*.

nuevos son todos los hidrocarburos no contenidos en la definición de campos existentes y que sean descubiertos luego de la promulgación de la Ley de Hidrocarburos.”<sup>451</sup>

Con esta nueva reclasificación, fue que se pudo rebajar el impuesto a las transnacionales de 50% que pagaba YPF, a 18% para los hidrocarburos que se explotan en los denominados campos nuevos, rebaja entonces un 32% los impuestos por regalías a 20 campos productivos ya existentes, perdiendo el país cerca de 500 millones dólares anuales.<sup>452</sup>

Sin embargo, a pesar de las medidas implementadas por el gobierno no existió, de forma tan contundente, una interpelación por parte de la sociedad hacia el gobierno como lo fue la desplegada después de febrero de 2003 cuando se cuestionó el tema de los ingresos del Estado. Según Gutiérrez, a partir de entonces, se comenzó a dar a conocer los desventajosos términos para el Estado boliviano en los que se habían establecido los contratos de extracción y exportación de gas con diversas empresas transnacionales. Esto es evidente, debido a que anterior a la capitalización de YPFB, el sector hidrocarburífero proveía más del 90% de los ingresos del Estado.

En torno a los desventajosos términos, se pueden señalar dos cuestiones:

- a. la asimétrica e injusta distribución de las ganancias obtenidas de la producción del gas, de cuyo total, el 82% era apropiado directamente por las empresas transnacionales quedando para el estado sólo un 18% del monto obtenido en forma de impuesto y regalías;
- b. la cuestión de que los distintos organismos estatales encargados de controlar la cantidad de gas extraído por las empresas petroleras (Superintendencia de Energía, Ministerio de Hidrocarburos, entre otros) no tenían manera alguna de verificar las cantidades explotadas sobre las que dichos consorcios informaban en “declaraciones juradas”.<sup>453</sup>

Dentro de este contexto, es que se produce una lucha partidaria legal en el Parlamento, que llegó a ocupar un lugar central por encima de la movilización social producida en octubre de 2003. Por un lado el MAS planteaba un aumento tributario a las petroleras del 18% al

---

<sup>451</sup> Marc Gavalda, “Repsol, la Guerra del Gas de Bolivia”..., *op. cit.*, p.129.

<sup>452</sup> *Ídem.*

<sup>453</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, pp. 244-245.

50% por la explotación del petróleo, unos 150 millones de dólares.<sup>454</sup> Es decir, lo que se pretendía por parte del MAS y específicamente por Evo Morales era llevar a cabo algunas reformas parciales en la estructura de la ley. Por otro lado, se conformó un Bloque Parlamentario Indígena Originario y Popular con algunos disidentes parlamentarios que consideraba que debía conseguirse algo más que un aumento de los impuestos. Asimismo, de forma paralela, existió un clamor popular que llegó a exigir, en cierto momento, la nacionalización inmediata de los hidrocarburos sin indemnización.

Algo significativo dentro de esta lucha partidaria en el Parlamento boliviano fue una mayor presencia de diputados indígenas y populares, tanto del MAS como del MIP. Esto fue resultado, en cierto grado, por el empuje vigoroso de los levantamientos populares de los años 2000 y 2001. Situación que señala una "...fisura dentro de las prácticas y los procedimientos racistas y discriminatorios reinantes en las instituciones democrático-liberales bolivianas, aunque en el fondo no los modifica substancialmente."<sup>455</sup> Ello en tanto que, las soluciones al conflicto sobre la propiedad del gas se instalaban en el ámbito del Estado-nación, contrariando el clamor popular que se circunscribía claramente en puntos anticorporativos transnacionales.

#### **4.4. Un epicentro neurálgico: El Alto<sup>456</sup>**

Una postura firme contra las políticas neoliberales del gobierno fue la causa determinante que ocasionó el nivel de movilización y rebelión, en octubre de 2003, que hizo paralizar la ciudad de El Alto por días, exacerbando, en cierta forma, lo acaecido en los días de febrero de ese mismo año.

---

<sup>454</sup> *Ibidem*, p. 245. Gutiérrez Aguilar menciona un documento del MAS, donde se plantea "el incremento del 18% al 50% del aporte impositivo de las empresas petroleras como una señal y mecanismo de afirmación de soberanía y la unidad en la solución de la crisis económica." Véase, Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 245.

<sup>455</sup> Patricia Chávez L., "Los indígenas en el poder", en Vega Camacho, Oscar (comp.), *Sujetos y formas de la transformación política en Bolivia...*, *op. cit.*, p. 109.

<sup>456</sup> La ciudad de El Alto ha sido parte fundamental en las diferentes luchas populares a lo largo de la historia boliviana. En 1781, Tupaj Katari-Bartulina Sisa construyeron, ahí, un "cuartel indígena" para cercar La Paz. En 1899, los aymaras contribuyeron, en la guerra federal, en la conformación de una muralla humana para hacer frente al posible ingreso de tropas constitucionales de Fernández Alonso. En 1952, fue el escenario político para confirmar el triunfo de la Revolución Nacional. Véase, Mamani Ramírez, Pablo, "El rugir de la multitud: levantamiento de la ciudad aymara de El Alto y caída del gobierno de Sánchez de Lozada", [en línea], Buenos Aires, Argentina, *OSAL*, Año IV, N° 12, septiembre-diciembre 2003. Dirección URL: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal12/d1mamani.pdf>, [consulta: 13 de agosto de 2013].

Durante esos días de octubre, suscribe González Pazos, "...se encadenan una serie de oportunidades políticas que incidirán de forma decisiva en esa movilización y rebelión permanente hasta alcanzar las demandas exigidas: primero, la recuperación de los hidrocarburos, y después de la represión, la renuncia del presidente Sánchez de Lozada."<sup>457</sup>

La acción de fuerza final y decisiva que produjo la caída de Sánchez de Lozada provino de la ciudad de El Alto, donde se inició un paro indefinido a partir del 8 de Octubre de 2003. Se instalaron, nuevamente, bloqueos en las principales avenidas de El Alto así como en casi todos los barrios. Aun así, fue hasta el 17 de octubre cuando Sánchez de Lozada renunció a la presidencia de la República mediante una carta al Congreso Nacional Boliviano.

El Alto, según observa Adolfo Gilly, es una ciudad joven, moderna, desafiante, alzada por las propias manos de sus vecinos que surgió del capitalismo en su fase neoliberal.<sup>458</sup> Es una ciudad autoconstruida en dos décadas por los desplazados, víctimas del neoliberalismo: migrantes rurales del Altiplano, obreros mineros y fabriles "relocalizados" de Oruro y Potosí, empleados de oficinas de La Paz, comerciantes pobres y medianos, de los cuales, el 80% de todos en el censo de 2001 se declararon a sí mismos "indígenas", aymaras y quechuas, de comunidades diversas.<sup>459</sup>

Por otra parte, es una ciudad que carece de servicios básicos. El 70% de los hogares no tienen alcantarillado ni instalaciones sanitarias, los servicios hospitalarios y educativos son precarios. Es una ciudad donde se encuentran los mayores índices de trabajo infantil y el promedio más alto de personas ocupadas por hogar. Asimismo, el 60% de los hogares está por debajo de la línea de pobreza y la mitad de éstos últimos en la indigencia.<sup>460</sup>

Igualmente, una de las características consecuencia de esta migración rural de regiones andinas e interandinas así como de la amazonía, es la recreación de experiencias y cosmovisiones de lucha social, provenientes de los ayllus y sindicatos mineros que se configuran en relación con la experiencia urbana, dando como resultado todo un conjunto

---

<sup>457</sup> Jesús González Pazos, "Bolivia. La construcción de...", *op. cit.*, p. 131.

<sup>458</sup> Adolfo Gilly, *Historias clandestinas...* *op. cit.*, p. 30.

<sup>459</sup> Adolfo Gilly, "Bolivia, una revolución del siglo XXI", [en línea], México, *La Jornada*, 02 de marzo de 2004. Dirección URL: <http://www.jornada.unam.mx/2004/03/02/per-bolivia.html>, [consulta: 01 de mayo de 2013].

<sup>460</sup> *Ídem.*

de experiencias prácticas y conceptuales de organización colectiva.<sup>461</sup> Del mismo modo, la vestimenta y sus significados: la pollera y los sombreros; y el leguaje de los símbolos - yatiri<sup>462</sup>, coca, pututus<sup>463</sup> y wiphalas<sup>464</sup> -, serán vistos como actos y rituales alternos a los elementos simbólicos del Estado. Esto se hará presente a lo largo y ancho de cada una de sus movilizaciones y protestas sociales en demanda: justicia, igualdad y respeto.

Según Pablo Mamani, dentro de la ciudad de El Alto, el mundo indígena/originario/popular se tornó en el epicentro activo de una inusitada irrupción de poderes alternos o anti-poderes que, él denomina, como cuasi microbianas, envolventes y en movimiento eruptivos para desfigurar, de pronto, el normal funcionamiento del sistema de dominación y de la explotación económica étnica-racial-social que sufre el mundo indígena/originario/popular.<sup>465</sup>

#### **4.4.1. Juntas vecinales: una peculiar organización barrial**

La ciudad de El Alto fue una especie de barrio industrial de La Paz, donde, además, se asentaba el aeropuerto, mismo que hasta 1985 continuó formando parte de esa ciudad (para el 6 de marzo de ese mismo año el Congreso boliviano aprobó la creación del Municipio de El Alto como Cuarta Sección de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz).<sup>466</sup>

---

<sup>461</sup> Pablo Mamani Ramírez, “Gobiernos barriales y su poder: GUERRA DEL GAS EN EL ALTO-BOLIVIA”, en Vega Camacho, Oscar (comp.), *Sujetos y formas de la transformación política en Bolivia...*, op. cit., p. 92. Algunas de las experiencias, que menciona Mamani, se encuentran los llamados turnos y rotaciones, asambleas, toma de decisiones y grupos especiales de vigilancia contra el “otro”.

<sup>462</sup> Yatiri es la persona que se encarga de dar y hacer ofrendas. También puede funcionar como adjetivo: sabio. Véase, <http://www.katari.org/diccionario/diccionario.php?listletter=aymara&display=27>.

<sup>463</sup> Un pututu es una trompeta fabricada con cierta concha marina. Véase, <http://www.katari.org/diccionario/diccionario.php>.

<sup>464</sup> La whipala es un emblema utilizado por los pueblos andinos. Sus características radican en un corte cuadrangular de siete colores, las cuales expresan la organización y armonía. Para mayor información se puede consultar el siguiente enlace: <http://katari.org/wiphala/bandera.htm>.

<sup>465</sup> Pablo Mamani Ramírez, “Gobierno barriales y su poder: GUERRA DEL GAS EN EL ALTO-BOLIVIA”..., op. cit., p. 87.

<sup>466</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, op. cit., p. 251. El rápido crecimiento de la Ciudad de El Alto, que entre 1976 y 1985 triplicó su población y entre 1985 y 2000 volvió a duplicarse, se produjo, en primer lugar, porque en El Alto se asentaron muchas industrias que fueron creadas después de la Revolución de 1952 y, en segundo lugar, porque tras la implementación de las reformas neoliberales en 1985 una gran parte de la población desplazada de los centros mineros por la política de “relocalización”, así como incontables familias de origen rural, comenzaron a habitar los agrestes parajes cercanos al “centro” de la ciudad de El Alto, conocido como “la Ceja de El Alto”, haciendo aparecer una gran cantidad de barrios y asentamiento nuevos. Gutiérrez Aguilar menciona, asimismo, que las instituciones municipales fueron

La dinámica de organización mediante juntas vecinales es una característica de la ciudad de El Alto, que existe anterior a la Revolución de 1952. Dichas organizaciones barriales, por juntas de vecino, surgió, y continúan, como procesos de autoorganización social de los habitantes de las zonas urbanas para debatir y buscar resolver las necesidades básicas insatisfechas (agua potable, electricidad, alcantarillado, atención de la salud, educación, campos recreativos, entre otras)<sup>467</sup>, que por principio le corresponde al Estado garantizarlas. Estas Juntas Vecinales se han logrado constituir en espacios concretos de acción-decisión y decisión-acción vecinal, donde se consolida una racionalidad sociopolítica fundada en las decisiones colectivas mediante el sistema de diálogo, debate y uso de la palabra a partir de la celebración de las asambleas.<sup>468</sup>

Tales agrupaciones son, en cierta medida, una especie de recreación urbana de la autoridad tradicional y sindical de las comunidades rurales, sobre todo, en los barrios con mayor presencia aymara. Funcionan de manera similar a los sindicatos campesinos de base. Se organizan a partir del manejo del espacio y tiempo urbanos interrelacionándolos con los tiempos y espacios rurales.<sup>469</sup> Por lo general, las funciones de las Juntas Vecinales consisten en organizar el conjunto de tareas colectivas que los vecinos de El Alto tienen que cumplir como “contraparte” de las inversiones que la Alcaldía hace en sus barrios.<sup>470</sup> También se constituyen como una especie de microgobiernos barriales tal como los llama Pablo Mamani, los cuales se configuran “en múltiples centros y epicentros de una nueva autoconstrucción colectiva de sí mismo”.<sup>471</sup>

---

totalmente rebasadas por las enormes y recurrentes oleadas de migrantes internos que llegaban a establecer en El Alto, en lo relativo a la provisión de servicios básicos y, en general, organización de la vida urbana.

<sup>467</sup> Shirley Orozco Ramírez; Álvaro García Linera; Pablo Stefanoni, *No somos juguete de nadie: análisis de la relación de movimientos sociales, recursos naturales, Estado y descentralización*, Cochabamba, Bolivia, Swiss National Centre of Competence North-South, JACS-Sud America, Agroecología Universidad Cochabamba, Plural Editores, 2006, pp. 255-256.

<sup>468</sup> Pablo Mamani Ramírez, “Gobiernos barriales y su poder: GUERRA DEL GAS EN EL ALTO-BOLIVIA”..., *op. cit.*, p. 91.

<sup>469</sup> Según explica Mamani, en su texto *Gobiernos barriales y su poder*, el sentido de organización para mover a la sociedad, para cualquier acción colectiva que se pretenda llevar a cabo, y sus mecanismos de cómo hacerlo colectivamente, pertenecen básicamente a la lógica del ayllu-marka y sindicatos mineros donde la rotación y los turnos se han convertido en el matriz constituyente de lo propio.

<sup>470</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 253.

<sup>471</sup> Pablo Mamani Ramírez, “Gobiernos barriales y su poder: GUERRA DEL GAS EN EL ALTO-BOLIVIA”... *op. cit.*, p. 88.



Es necesario resaltar que la estructura vecinal de base no tiene atribuciones legalmente reconocidas en lo relativo a la propiedad de los lotes.<sup>472</sup> De ahí radica parte de la importancia de dichas juntas, puesto que, este espacio urbano se convierte en el núcleo de articulación y construcción de un “yo colectivo” como referente directo de un gobierno territorial, a partir del cual, se controlan, manejan y gobiernan los espacios físicos de la ciudad y por donde se mueven y organizan las acciones colectivas que son parte de la materialización de estos gobiernos.<sup>473</sup> Este mismo gobierno territorial, o en su defecto barrial, se da gracias a las estrategias de acción-decisión y decisión-acción las cuales se acatan colectivamente.

Dentro de este proceso es interesante observar que no existe una identidad laboral o gremial, como sí lo fue en la época del sindicalismo boliviano, que identifique a los integrantes de condiciones socioeconómicas distintas de las juntas vecinales. La unificación de las personas en torno a estas entidades, está anclada en lo territorial. Orozco, García Linera y Stefanoni hablan de una identidad barrial la cual se convirtió, ya para la etapa del neoliberalismo, tanto en un instrumento de presión como en formas de autogobierno.

Ante este proceso, el de la unificación de la población a partir de una identidad barrial, las categorías barrio, un espacio socio-territorial, y vecino y vecina, actores y productores de significados de organización social y que son parte actuante del sistema de responsabilidades colectivas, llegan a ser un referente de la articulación de las estrategias de acción colectiva, recreando así un espacio de autoorganización política socializada vecinal dentro del interior de la ciudad de El Alto e interrelacionándose con las regiones y territorios rurales de las provincias aymaras-quechuas de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba; es decir, de la región andina.<sup>474</sup>

Aproximadamente son más de 400 urbanizaciones<sup>475</sup> en las que se han ido asentando los migrantes, provenientes de las poblaciones de Omasuyus, norte de Camacho, Aroma Pacajes. Cada uno de los barrios que conforma esta ciudad están organizados de

---

<sup>472</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 254.

<sup>473</sup> Mamani habla de este concepto de “gobierno territorial” como un anti-poder contra el poder dominante. Anti-poder emanado del poder de la tecnología comunal indígena, originaria y minera. Véase, Pablo Mamani Ramírez, “Gobiernos barriales y su poder: GUERRA DEL GAS EN EL ALTO-BOLIVIA”... *op. cit.*, pp. 98-99.

<sup>474</sup> Pablo Mamani Ramírez, “Gobiernos barriales y su poder: GUERRA DEL GAS EN EL ALTO-BOLIVIA”... *op. cit.*, p. 91.

<sup>475</sup> Los barrios y distritos que han sido importantes, debido a un enfrentamiento fuerte, son Santiago II, Villa Ingenio, Río Seco, Ventilla, Cruce Villa, Senkata Ballivián.

múltiples maneras: asociaciones deportivas, de padres de familia, fraternidades para las distintas fiestas patronales, etcétera. Las instancias político-técnicas operativas dentro de los gobiernos barriales son la comunicación a partir de las radios emisoras y televisoras, teléfonos celulares, golpe en los postes de luz, etcétera. Asimismo, existe comunicación con la Federación de las Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), la Central Obrera Regional-El Alto (COR), la Federación de Gremiales y los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), y la CSUTCB.<sup>476</sup>

A la postre de toda esta dinámica existente en la ciudad de El Alto, fue hasta 1966, cuando la Subfederación fue reconocida y elevada al rango de Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), siendo hasta el primer Congreso Nacional de Juntas de Vecinales realizado en Cochabamba en 1979, donde se obtuvo el reconocimiento legal de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia. La FEJUVE nació bajo dos impulsos: la lucha política y social por conquistar la democracia en el país (1978-1980) y la presión social del movimiento barrial por alcanzar sus derechos y reivindicaciones urbanas, haciendo parecer el espacio de la ciudad como un recurso en disputa y como una base para la formación de nuevos vínculos organizacionales.<sup>477</sup>

Orozco menciona que, por lo general, el marco de reivindicaciones que moviliza a la FEJUVE se caracteriza por demandas de tipo local referidas a la satisfacción de servicios básicos, siempre apegada a los objetivos por el cual se crearon dichas instancias barriales. A partir de las movilizaciones derivadas de la Guerra del Agua, en Cochabamba, que colocó en el escenario político el tema de la no privatización de los servicios públicos como una reivindicación no sólo social, sino política y de alcance nacional. Se produjo una focalización de las luchas urbanas en El Alto en torno a la resistencia al alza y la dolarización de tarifas de servicios como agua, luz y carburantes. A partir de estas reivindicaciones la estructura vecinal adquirió una mayor cohesión y una actitud de interpelación al régimen político y económico vigente.<sup>478</sup>

Cabe precisar que durante varios años atrás las dirigencias de las Juntas Vecinales fueron presa del clientelismo partidario en la gestión de la vida urbana, lo cual introdujo

---

<sup>476</sup> Pablo Mamani Ramírez, “Gobiernos barriales y su poder: GUERRA DEL GAS EN EL ALTO-BOLIVIA”... *op. cit.*, p. 95.

<sup>477</sup> Shirley Orozco Ramírez; Álvaro García Linera; Pablo Stefanoni, *No somos juguete de nadie...*, *op. cit.*, pp. 252-253.

<sup>478</sup> *Ibidem*, p. 260.

profundas disputas y fracturas entre diversos barrios. No obstante, para septiembre-octubre de 2003, cuando la movilización por la defensa del gas fue mucho más intensa, la estructura organizativa, así como los saberes prácticos de las juntas se pusieron al servicio de ésta.

A partir de, y durante, la experiencia vivida en las movilizaciones por la defensa del gas (para un mayor examen de cada uno de los acontecimientos se puede revisar el Anexo 3), se produjo, algo que podemos denominar, un anti-poder, es decir, un poder que va contra el poder constituido por la República boliviana, en particular, por los sectores blanco-mestizos.<sup>479</sup> Este anti-poder se observa en las acciones radicales por parte de la población de El Alto, frente a las políticas del gobierno: militarización del territorio para detener el avance de la movilización social. Algunas de estas acciones fueron el cavado de zanjas profundas y los bloqueos de avenidas con barricadas creadas con postes de luz y puentes peatonales, donde el sistema de rotación y turnos,<sup>480</sup> en cuanto práctica y concepción del manejo y control de los espacios públicos y privados, fue pieza clave para poder concebir que la resistencia social lograra sus objetivos.

A partir de estas experiencias es visible que se han tejido otras, y nuevas, formas de entender el mundo y la sociedad como un espacio-territorio de autoorganización propia y colectiva. El Alto se convirtió en el epicentro de la irradiación de un poder indígena y popular a partir del cual surgirían nuevos actores y centros de movilizaciones multitudinarias que amenazaron con colapsar el Estado-nación (o el mencionado Estado blanco-mestizo) durante las siguientes administraciones federales.

Todas estas experiencias contenidas en las dinámicas políticas, económicas y socio-culturales de la ciudad de El Alto, fueron según Pablo Mamani, la “puerta en práctica de toda una tecnología social indígena y popular-minera adquirida de la cruda realidad de la colonialidad del país que todavía hoy se mantiene en los espacios urbanos-rurales como

---

<sup>479</sup> Existen varios autores que han analizado conceptos que hacen referencia a un anti-poder frente al poder proveniente del Estado-nación; particularmente generado en las comunidades indígenas latinoamericanas. La mayoría de estos análisis coinciden en que el “poder” dentro de estas comunidades proviene de decisiones colectivas que están estructuradas bajo el principio de jerarquías horizontales, que es parte sustancial de las dinámicas de las relaciones sociales desarrolladas aquí. Un caso existente en México, es la experiencia zapatista, donde se habla de un “mandar-obedeciendo”.

<sup>480</sup> Pablo Mamani explica que, los turnos o *myyu* son los actos específicos de la filosofía del poder indígena y del manejo y movimiento del tiempo-espacio dado a nivel personal, familiar o de las diferentes parcialidades al que uno pertenece. Véase, Pablo Mamani Ramírez, “Gobiernos barriales y su poder: GUERRA DEL GAS EN EL ALTO-BOLIVIA”... *op. cit.*, p. 97.

lugares desde donde se ha desmentido a la democracia oficial: la idea de una gozosa libertad democrática.”<sup>481</sup> El Alto fue el epicentro neurálgico durante la Guerra del Gas.

#### **4.4.2. Tres exigencias: “gas, constituyente, renuncia”**

La Guerra del Gas tuvo como punto más álgido el mes de Octubre de 2003, siendo la ciudad de El Alto punto clave para conseguir, al menos, uno los de los objetivos que se fueron planteando los diferentes sectores sociales que se iban sumando a las movilizaciones en la defensa del gas, ello sin dejar de lado cada una de sus demandas, algunas ancestrales, que cada grupo traía consigo. Durante los sucesos de Octubre se registró el despliegue del antagonismo social de mayor cohesión en el enfrentamiento y en la disputa sobre la prerrogativa de decidir sobre el asunto público que protagonizaron los diversos hombres y mujeres movilizados e insurrectos.<sup>482</sup> La ciudad se convierte en un verdadero campo de redefinición y reforzamiento sociopolítico indígena y popular.

Al revisar puntualmente cada uno de los acontecimientos acaecidos, desde que finalizó la Guerra del Agua, se puede observar una serie de protestas o movilizaciones asiladas que rechazaban el aumento al precio de los hidrocarburos (marzo de 2000); asimismo, se advierte que no existe realmente una unidad, u organización, social que pugnara específicamente por la defensa del gas, es decir, que demandara la no explotación y venta por parte de empresas transnacionales de este recurso, siendo que éstas se venía dando mucho antes de la privatización de la empresa petrolera boliviana. Fue hasta Agosto del año 2002 cuando por primera vez se demandara la no venta del gas boliviano a Estados Unidos y México, protesta desarrollada por estudiantes rurales de la provincia de Omasuyos, quienes bloquearon las principales calles de La Paz.

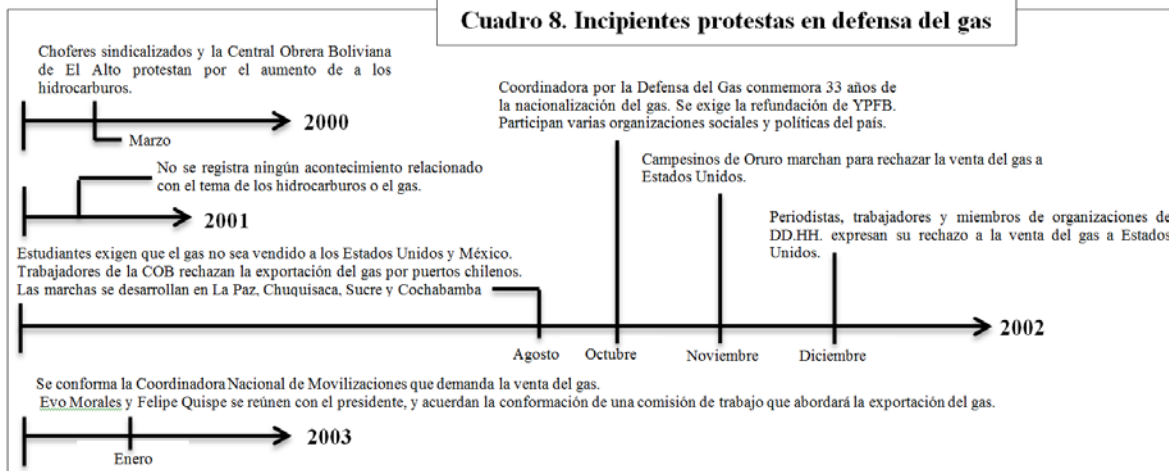
En el Cuadro 8 se pueden observar algunas de las protestas en torno a una incipiente defensa del gas.

---

<sup>481</sup> Pablo Mamani Ramírez, “Gobiernos barriales y su poder: GUERRA DEL GAS EN EL ALTO-BOLIVIA”... *op. cit.*, p. 102.

<sup>482</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 270.

**Cuadro 8. Incipientes protestas en defensa del gas**



Elaboración propia con base en los siguientes textos: Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005)*, México, Sísifo ediciones/Bajo Tierra Ediciones/ICSH/BUAP, 2009, pp. 231-276; 277-341. Suárez, Hugo José, *Bolivia. País rebelde (2000-2006)*, México, El Colegio de Michoacán, 2007, 156 pp. Cronología realizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), a partir del Observatorio Social de América Latina. Disponible en: <http://www.clacso.org.ar/institucional/lh.php?idioma=port>.

Como se puede observar, durante el año 2000 se empezó a cuestionar la política económica del gobierno hacia los hidrocarburos, misma que cobró más fuerza a mediados del 2003. A pesar de que se abordó desde temprano el asunto de los hidrocarburos y del gas, nunca se pensó o imaginó colectivamente -durante ese tiempo., cómo se podría producir una reapropiación social de estos ni mucho menos sucedió esto durante las movilizaciones más enérgicas (de agosto a octubre del 2003).

Aun así, es interesante analizar las acciones llevadas a cabo por los diferentes sectores sociales, no sólo de la ciudad de El Alto, sino de casi todo el país ya que estos acontecimientos acaecieron durante la primera mitad de la primera década del 2000; una década donde la protesta, la movilización y el rechazo de fuerzas actuantes y transformadoras<sup>483</sup> de las sociedades latinoamericanas pusieron en jaque a los gobiernos neoliberales y lograron generar nuevas fuerzas políticas dominantes en América del Sur.

Ante esto, es interesante observar cómo Oliver describe el actuar de estas fuerzas políticas, porque es en cierta medida, la dinámica que se desarrolla en Bolivia durante la Guerra del Gas y, anteriormente, la Guerra del Agua, Y es que la generación de nuevas fuerzas políticas dominantes,

han expresado tanto la acción y la voluntad de individuos asociados como la confluencia de sectores, grupos, comunidades y/o clases sociales ubicados en determinados campos sociales y políticos en que se organizan las relaciones de poder en las sociedades. La

<sup>483</sup> Lucio Oliver conceptualiza así a los movimientos obreros, campesinos, indígenas, feministas y ecologistas del siglo XXI.

heterogeneidad de la sociedad y la diversidad de individuos y clases han confluído en determinadas relaciones y campos de fuerzas, establecidas histórica y políticamente, que definen quién manda, quién dirige, cómo lo hace, qué adhesiones sociales, políticas y culturales tiene y hasta dónde llega su poder.<sup>484</sup>

Durante las movilizaciones de la Guerra del Gas se expresó la acción, la voluntad y confluencia de individuos asociados, de sectores, grupos y comunidades étnicas y de diversas clases sociales, quienes definieron ante el gobierno y la sociedad en general quién manda, cómo lo hace y hasta dónde llega su poder. Echar para atrás la legislación que privatizaba un recurso clave para el desarrollo del país, es algo que se debe tener muy en cuenta; provocar e inducir la renuncia de un presidente y condicionar la estabilidad de un nuevo gobierno si no se cumplen con lo prometido, no es cosa que se menosprecie cuando se abordan los alcances de la movilización boliviana.

Al realizar una lectura precisa de cada uno de los acontecimientos durante el año 2003,<sup>485</sup> se observa claramente lo anteriormente descrito, es decir, los sectores sociales bolivianos que se movilaron e hicieron visible su poder ante el gobierno y oligarquías de su país. Antes de revisar con más detalle esto, vale decir que al indagar en la movilización y el levantamiento del mes de octubre de 2003, atendemos a la producción de gigantescos esfuerzos cooperativos, donde, hasta cierto punto, se moderan las rivalidades y competencias entre las diferentes organizaciones sociales. Y se moderan porque no dejaron de estar presente durante los días que duró la Guerra del Gas y, en el transcurso de los siguientes acontecimientos como el ascenso del gobierno de Carlos Mesa. Así, podemos pasar a analizar los hechos más relevantes que acontecieron en Bolivia; protestas por la defensa del gas, por su no exportación por puertos chilenos, combinando de manera compleja añejas reivindicaciones locales.

Ante todas las acciones llevadas a cabo por la sociedad boliviana -campesinos, indígenas, sectores obreros, magisteriales, estudiantes, comerciantes, amas de casa, clases medias, etcétera-, el único camino que el gobierno eligió, desde los acontecimientos del febrero negro (el impuestazo), fue el de la represión para disuadir la protesta social, siempre, en continuo crecimiento (discursivamente hablando). Aunque, las diferentes

---

<sup>484</sup> Lucio Oliver, “Discutir la coyuntura en América Latina”..., *op. cit.*, p. 122. [consulta: 08 de febrero de 2013].

<sup>485</sup> Para ello se puede revisar el Anexo 3.

acciones frecuentemente fueron entendidas como un mero esfuerzo local de resistencia (la ciudad de El Alto), sin llegar a hilvanarse un marco de intelección de lo que sucedía en otras partes, lo que hubiera puesto el acento en los pasos a seguir después de la consecución de sus objetivos.<sup>486</sup>

La intensificación de las protestas por la defensa del gas y el rechazo a la exportación de éste hacia Estados Unidos por puertos chilenos<sup>487</sup> se dio a finales del mes de agosto, cuando miles de personas entre jubilados, trabajadores fabriles, maestros, mineros y productores de coca, marcharon por el centro de La Paz en una manifestación convocada por la COB para exigir al gobierno la no venta del gas boliviano. Véase el Anexo 3.

En el mes de septiembre se suman diversas organizaciones e instituciones, pertenecientes a distintos ámbitos de la vida social, a las movilizaciones por la defesa del gas. Algunas de estas organizaciones son: la Universidad Pública de El Alto (UPEA), el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), la CSUTCB, la FEJUVE, la COR-El Alto, el Movimiento al Socialismo (MAS), el Estado Mayor del Pueblo,<sup>488</sup> la COB, el Comité Ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), la Caja Nacional de la Salud, la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM), la Universidad Tomás Frías, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), entre miles de personas no pertenecientes a algunas de estas organizaciones o instituciones.

Un acontecimiento de suma envergadura, para que la movilización y protesta social cobrara aún más fuerza, fue la masacre en Warisata el 19 y 20 de septiembre. Entonces, un contingente militar encabezado por el Ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzán, recorría el Altiplano en dirección a Sorat, siendo en la población de Warisata donde la población opuso resistencia al paso de los camiones. Se produjo así un enfrentamiento que fue brutalmente reprimido por las fuerzas militares. Utilizando la fuerza aérea se pretendió quebrar la resistencia de los comunarios de la región de Omasuyos, cuna de la reconocida

---

<sup>486</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti... op. cit.*, p. 273.

<sup>487</sup> Durante todas las movilizaciones, por la defensa del gas, coexistió una demanda clave, para la región latinoamericana, dentro del contexto de las Cumbres de las Américas, es decir, el rechazo al ingreso a la Alianza de Libre Comercio para las Américas (ALCA) de Bolivia.

<sup>488</sup> El Estado Mayor del Pueblo fue una organización cuyo objetivo era resistir a las políticas adoptadas por el gobierno. Fue conformada por diversas COD, la COB, trabajadores fabriles y de los sectores de la salud y educación, integrantes del Movimiento Sin Tierra (MST) de Bolivia, campesinos, colonizadores de los Yungas, comerciantes, estudiantes y cocaleros en el Complejo Fabril de Cochabamba, el día 19 de enero de 2003.

Normal Superior Rural de Warisata (dedicada a la educación indígena desde 1932).<sup>489</sup> Esta represión causó la muerte de cinco campesinos, entre ellos dos niños, un militar y más de 20 heridos entre manifestantes y militares. Como reacción a este acontecimiento se intensificaron los cortes de ruta y huelgas generales en diferentes puntos del país.

Según expone Gutiérrez Aguilar, este tipo de acciones por parte de la población de Warisata y otras regiones hizo evidente, no sólo la “capacidad de despliegue de una vigorosa autonomía *de facto*, sino el tendencial contenido de búsqueda de autogobierno propio por parte de la población rural –y posteriormente urbana- del altiplano paceño.”<sup>490</sup>

Por otra parte, se encuentra una movilización que se llevó a cabo el mismo día 19 de septiembre. Dicha movilización fue una convocatoria de la Coordinadora de Defensa y Recuperación de los Hidrocarburos.<sup>491</sup> Sin embargo, pese a que se reeditaron algunas experiencias deliberativas y organizativas adquiridas en abril del 2000, en esta ocasión no se alcanzó la eficacia organizativa y política de la sociedad. Y esto no sucedió por una razón muy concreta: no es lo mismo abordar una temática compleja y de carácter nacional como lo es la “reapropiación social del gas”, que movilizar a una población con gran experiencia en la gestión tradicional del agua que se enfrenta a una ley que pretende privatizar dicho recurso y que esa misma población objete y rechace la manera en la cual el Estado ha entablado los contratos con las transnacionales y decida gestionar y usufructuar los recursos.<sup>492</sup> Además, durante las movilizaciones del 2003 se hizo evidente la heterogeneidad de la sociedad y sus demandas, situación que complejizó, aún más, la búsqueda de un consenso.

Ya para octubre no sólo se defiende el gas boliviano de las empresas extranjeras sino que se busca su reapropiación social. Se demanda la revisión y modificación de la Ley de Hidrocarburos y la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta última demanda a consecuencia de la respuesta militar que el gobierno estaba dando para atender las demandas sociales: reprimiendo a las movilizaciones y deteniendo a los dirigentes de diversas organizaciones sociales y políticas. Ello trajo como resultado que las

---

<sup>489</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, pp. 242-243.

<sup>490</sup> *Ibidem*, p. 243.

<sup>491</sup> El 5 de septiembre de 2003, en la ciudad de Oruro se formó, lo que se denominó como, la Coordinadora de Defensa y Recuperación de los Hidrocarburos. Dicha Coordinadora del Gas se conformó agrupando a sindicatos, instituciones cívicas, vecinales, campesinas, profesionales y universitarias, junto a partidos opositores, como el MAS, PS, MIP y MSM.

<sup>492</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 247.



movilizaciones no decayeran sino más bien que continuaran e incrementaran. Y si en un principio el pedido de renuncia del presidente fue una demanda más entre las posibilidades que se barajaban, ésta se convirtió paulatinamente en un grito unánime después de la masacre de la ciudad de El Alto.<sup>493</sup>

Esta masacre, la de la ciudad de El Alto, se dio en el contexto del decreto 27209<sup>494</sup> que establecía un operativo militar que pretendía hacer llegar un convoy de carros cisterna desde la Planta de Senkata -un complejo de procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos en el extremo de la ciudad de El Alto- hasta la ciudad de La Paz para garantizar la provisión de gasolina. Mientras que la ciudad se encontraba en un paro indefinido desde el 8 de Octubre. Para el día 9 y 10 los jóvenes de El Alto se movilizaron bajo la consigna “gas, constituyente, renuncia”, sintetizando lo que era común y visible en todas las movilizaciones sociales.

La respuesta de El Alto fue una insurrección:

[Sus habitantes] [...] hicieron caer los puentes peatonales en algunas avenidas, movieron viejos carros de ferrocarril para reforzar ciertos puntos de bloqueo, cavaron zanjas en las avenidas principales, construyeron muros en las calles de entrada a los barrios, hicieron guardias, cuidaron heridos y velaron muertos [...] destruyeron las instalaciones de la compañía de energía eléctrica Electropaz y las de Aguas de Illimani, enfrentándose al ejército en una batalla desigual en la que se produjeron 257 heridos y 63 decesos.<sup>495</sup>

De esta forma, la resistencia de El Alto modificó sustancialmente el escenario: aceleró el aislamiento político del gobierno del MNR, que ya se venía dando a consecuencia de la violencia generada por el propio gobierno hacia la sociedad. Segmentos de la clase media urbana de La Paz comenzaron a movilizarse, provocando que el gabinete de Sánchez de Lozada comenzara a colapsarse. Así, de las exigencias sintetizadas en la consigna “gas,

---

<sup>493</sup> *Ibidem*, p. 260.

<sup>494</sup> El Decreto 27209 fue firmado, por el gobierno, el día 11 de octubre de 2003. “Artículo 1.- (Emergencia Nacional). Declárase emergencia nacional en todo el territorio de la Republica para garantizar el normal abastecimiento de combustibles líquidos a la población a través del resguardo de instalaciones de almacenaje, asegurar el transporte de combustibles por camiones cisternas y otros y la distribución y suministro de estaciones al servicio por el tiempo de hasta noventa días. Artículo 2.- (Orden expresa). En cumplimiento de los artículos 7 y 11 de la Ley 1405 de diciembre de 1992, se ordena a las Fuerzas Armadas de la Nación hacerse cargo del transporte en camiones cisterna y otros, resguardar instalaciones del almacenaje, poliductos, estaciones de servicio y todo tipo de infraestructura destinada a garantizar la normal distribución y suministro de combustibles líquidos a la población en el Departamento de La Paz. A tal efecto el Ministro de defensa establecerá los mecanismos necesarios para su ejecución. Artículo 3.- (Garantías) Cualquier daño sobre los bienes y personas que se pudiesen producir como efecto del cumplimiento del objeto del presente decreto supremo, su resarcimiento se encuentra garantizado por el Estado boliviano.” Citado en: Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, pp. 261-262.

<sup>495</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, *op. cit.*, p. 263.

constituyente, renuncia”, la primera en cumplirse fue la renuncia del presidente, el día 17 de Octubre de 2003. Siendo Carlos Mesa, hasta entonces vicepresidente, el nuevo presidente de Bolivia.

Gutiérrez Aguilar menciona que en la caída de Sánchez de Lozada fue central el convencimiento de una gran parte de las clases medias y de las élites económicas a cerca de que la manera en que el gobierno pretendía conducir el país era ya insostenible.<sup>496</sup>

En cuanto a Carlos Mesa, nuevo presidente de Bolivia, si quería contar con una estabilidad en el país, algo de lo que él mismo era consciente, debía detener la venta del gas en las condiciones que su antecesor había pactado y tenía que modificar la Ley de Hidrocarburos. Sin embargo, un hecho queda claro, al menos en lo que toca a la movilización social, la expulsión de Sánchez de Lozada se transformó en un límite para el avance del movimiento en la medida de que éste delegó, a Mesa y su nuevo gobierno, el cumplimiento de la “Agenda de Octubre” (hidrocarburos y Asamblea Constituyente).<sup>497</sup>

#### **4.5. Gobierno de Carlos Mesa y la “Agenda de octubre”: “encapsulamiento estatal”**

Con el arribo de Carlos Mesa a la presidencia sucedieron dos hechos de suma importancia que signaron dicha administración. Por un lado, aprovechando el profundo desprestigio del Parlamento, Mesa logró que éste aprobara cambios constitucionales que, a decir de Xavier Álbo, rompían por fin el monopolio partidario para presentar candidatos, abrían el camino para la Asamblea Constituyente, y añadían la figura del referéndum como una forma complementaria de democracia directa.<sup>498</sup>

Por otra parte, el segundo hecho se manifiesta en el momento en que todas las acciones colectivas, a consecuencia de los cambios propiciados desde el nivel político-institucional, quedaron atrapadas tanto en la institucionalidad boliviana dominante como en el imaginario estatal de la transformación política; es decir, si bien fueron *contra* el Estado, sus instituciones y sus partidos políticos (concibiéndolos como representantes de la voz e

---

<sup>496</sup> *Ibidem*, p. 271. Gutiérrez Aguilar menciona que: “Segmentos de la clase media urbana de La Paz comenzaron a movilizarse del modo que pudieron, organizaron debates y concentraciones incluso en algunas avenidas y plazas en el Sur de la ciudad [...] instalaron una huelga de hambre en una iglesia en el tradicional barrio de Sopocachi donde participaron, entre otras, la ex defensora del Pueblo, Ana María Campero y grupo feminista Mujeres Creando”.

<sup>497</sup> *Ibidem*, p. 264.

<sup>498</sup> Xavier Álbo, “Bolivia”, en *Movimientos y poder indígena en Bolivia...*, op. cit., p.79.

intereses del pueblo), claramente no avanzaron *más allá* del Estado. La elección de Mesa, fue una debilidad que a la larga limitó la capacidad emancipativa de los levantamientos y movilizaciones sociales. Esta administración logró crear un encapsulamiento estatal.

Es más, si durante el levantamiento de octubre de 2003 se pensaba y concebía en el imaginario social, que el Estado estaba roto, que había dejado de existir,<sup>499</sup> con la elección de un nuevo gobierno al cual se le delegó la tarea de transformación social, estas ideas resultaron equívocas. Esto se observa a partir del instante en que la movilización indígena y popular “acuerda descansar por 90 días” para permitirle al gobierno que logró resultados. Fue evidente entonces que “los movimientos sociales no abordan la elaboración alternativa de planes y programas de largo aliento, optando por construcciones parciales, momentáneas y coyunturales.”<sup>500</sup>

Raúl Prada<sup>501</sup> apunta que en la contemporaneidad, la comprensión de los movimientos sociales requiere captar la inmanencia de los procesos, las singularidades de los acontecimientos, la elaboración espontánea y consensuada de las tácticas, las constantes adecuaciones de la multitud a los desafíos de la coyuntura; sin embargo, también habría que preguntarse sobre los límites y contradicciones, en este caso, de los movimientos indígenas y populares bolivianos, sobre las herencias estructurales, sobre las reformas conservadoras y autoritarias persistentes, sobre sus deseos de Estado.

Así, al preguntarnos sobre los límites y contradicciones que presentó el movimiento insurreccional de septiembre-octubre de 2003, encontramos que la disidencia irreversible del sistema de creencias hegemónicas del Estado neoliberal, que se gestó desde la Guerra del Agua, no fue exitosa. No se tuvo la capacidad para postular un orden estatal alterno, que es precisamente lo que los insurrectos experimentaron detrás de cada barricada que fue capaz de paralizar al Estado, pero sin ser ellas mismas un proyecto de poder alterno y legítimo.<sup>502</sup>

---

<sup>499</sup> Pablo Mamani citado en Dangl, Benjamin, *El precio del fuego...*, *op. cit.*, p. 196.

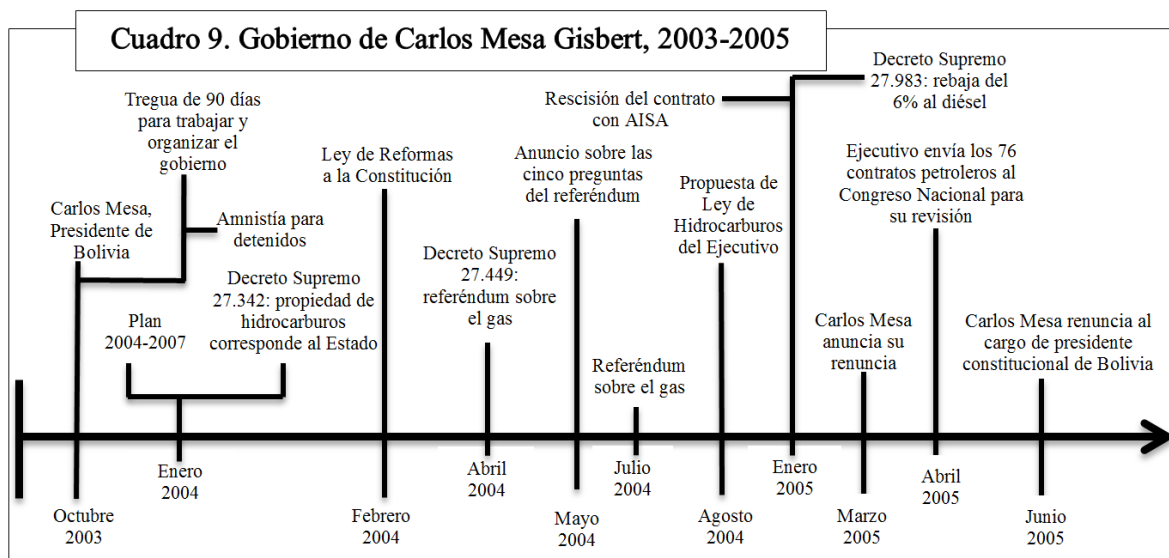
<sup>500</sup> Raúl Prada Alcoreza, “Bolivia. Los movimientos moleculares de la multitud”, [en línea], Argentina, *Revista Herramienta*, No. 30, octubre de 2005. Dirección URL: <http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-30/bolivia-los-movimientos-moleculares-de-la-multitud>, [consulta: 24 de julio de 2013].

<sup>501</sup> Raúl Prada Alcoreza, “Bolivia. Los movimientos moleculares de la multitud”... *op. cit.*

<sup>502</sup> García Linera, Álvaro, “Crisis del Estado y sublevaciones indígena-plebeyas en Bolivia”, en *La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*, Bogotá, Siglo del Hombre/CLACSO, 2009, p. 440.

De ahí, que Carlos Mesa, un comunicador ilustrado de las viejas élites, canalizara el programa mínimo de los sublevados a la vez que dejara en pie toda la maquinaria gubernamental de la reforma neoliberal. Mesa realiza una serie de acciones que pretendieron modificar, hasta cierto punto, la situación existente referente a los hidrocarburos a la participación ciudadana y a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, mucho de esto estuvo encaminado a contener a la ascendente movilización social no sólo en el altiplano boliviano, sino en lo que se conoce como la “media luna” boliviana la cual, dentro de esta corta administración, cobró mayor fuerza de articulación en demanda de su autonomía regional.

En el Cuadro 9 se puede observar algunas de las acciones que realizó Carlos Mesa durante su administración. Si se quiere profundizar en ello y observar las consecuencias o causas de algunas de sus acciones, se puede recurrir al Anexo 3 donde se realiza una revisión más precisa de cada uno de los acontecimientos que acaecieron durante esos años. Y es que lo que se desea exponer aquí es en cambio el andamiaje institucional del que se valió Carlos Mesa para lograr frenar las movilizaciones sociales callejeras.



Elaboración propia con base en los siguientes textos: Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005)*, México, Sísifo ediciones/Bajo Tierra Ediciones/ICSH/BUAP, 2009, pp. 231-276; 277-341. Suárez, Hugo José, *Bolivia. País rebelde (2000-2006)*, México, El Colegio de Michoacán, 2007, 156 pp. Cronología realizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), a partir del Observatorio Social de América Latina. Disponible en: <http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php?idioma=port>.

Como se puede observar, todas las acciones realizadas por Mesa se enmarcan dentro de la “Agenda de Octubre”. Una agenda fruto de la movilización social que se había desplegado

desde el 2000 y no como producto de los intereses de la clase en el poder. De ahí su trascendental importancia. Aun así, es claro que esta agenda resulta exigua ante la diversidad de demandas sectoriales que se originaron del conjunto de movilizaciones y enfrentamientos. Muchas de las demandas que cobraron un nuevo impulso en este nuevo siglo son demandas de largo aliento. El tema de la exportación del gas demostró ser una chispa que estimuló un fuego aún mayor a nivel nacional: no sólo se rechazaba dicha exportación, se demandaban mejores salarios, reformas en las leyes de la coca, liberación de presos políticos y soluciones al problema de la distribución de la tierra.<sup>503</sup>

Muchas de estas demandas -latentes aún- han encontrado una solución *exprés*, que se reflejó en una infinidad de acuerdos y convenios elaborados por el gobierno para poder contener, aunque sea por un tiempo, las movilizaciones. Y fue ésa la forma en la actuó la administración gubernamental de Mesa. En un escenario de profundas limitaciones impuestas por la vigencia del modelo económico, leyes sectoriales, acuerdos bilaterales de comercio e inversiones, compromisos con organismos internacionales de cooperación, así como por presiones de grupos empresariales nacionales y regionales, Carlos Mesa logró encapsular, con dichas reformas superficiales y promesas de cambio, la ascendente movilización indígena y popular.

Es claro que la emergencia indígena y popular, este despliegue del antagonismo social, logró poner en crisis, interpelando y cuestionando radicalmente, el monopolio de la decisión sobre las cuestiones fundamentales del asunto público en manos de los dominantes, y los cimientos de la relación mando-obediencia.<sup>504</sup> Sin embargo, las formas de organización política, el andamiaje normativo y administrativo de la vida social para resolver las necesidades fundamentales del conjunto de la población lograron resistir los embates de la movilización social, introduciendo cambios hasta cierto punto superficiales en su propia regulación.<sup>505</sup>

---

<sup>503</sup> Benjamin Dangl, *El precio del fuego...*, *op. cit.*, p. 155. Según expone Dangl, en su libro, algunos manifestantes “demandaban una industria estatal de gas y petróleo que pudiera industrializar el gas dentro de las fronteras bolivianas para beneficiar a la población. Esto no sólo significaba un mejor acceso al gas, sino mayores ganancias para programas sociales [se quería imitar la experiencia venezolana de nacionalización y programas sociales].”

<sup>504</sup> Dichos cimientos se asientan en las estructuras simbólicas profundas del imaginario social que habilitan y hacen reconocer como aceptables ciertas formas de dominación, es decir, la relación mando-obediencia, que se hunde en las divisiones étnicas y genéricas drásticas jerarquizadas, más íntimas de un conjunto social.

<sup>505</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...* *op. cit.*, p. 275.

Dentro de este contexto, se pudo llevar a cabo en julio de 2004 el referéndum sobre la cuestión energética del país. Y, aunque esto generó diversas posiciones encontradas sobre la forma y el contenido, principalmente por algunos dirigentes de las principales organizaciones sociales, el referéndum se llevó a cabo en todo el territorio boliviano.

La población tuvo que elegir “sí” o “no” como respuesta a cinco preguntas. Los temas fueron: la anulación de la ley 1689; la recuperación, por parte del Estado, de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo; la refundación de YPF a partir de la recuperación de la propiedad estatal de las acciones; la continuidad de la política oficial de condicionar la exportación a Chile a los resultados del reclamo de soberanía marítima; y la exportación de gas, siempre y cuando se cubra primero el consumo interno.

Un 75% de las personas marcaron el “sí” en las cinco preguntas,<sup>506</sup> siendo la participación ciudadana en un 60% del padrón. A partir de esto, la decisión de algunas organizaciones fue no admitir dichos resultados, anunciando movilizaciones en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos, como fue el caso de la COB. Por otro lado, otras organizaciones, en la actitud de no ver afectados sus intereses, particularmente electorales, como fue el MAS y, principalmente, Evo Morales trataron de buscar una posición central aceptado, en ciertos puntos, dichos resultados y tratando de influir en la modificación de otros.

Según algunos autores, el referéndum sobre los hidrocarburos inició un lento recular del gobierno de transición hacia la gravitación conservadora.<sup>507</sup> Esto llega a ser cuestionable cuando uno observa, en los hechos, que tanto el parlamento como los diversos sectores sociales le dieron la espalda a Carlos Mesa. Unos por su actitud tan conciliadora, otros porque no respondía a sus intereses y, unos más, por no cumplir con sus promesas contenidas en la “Agenda de Octubre”.

Si bien Carlos Mesa no era “el hombre de los movimientos sociales”, no hubiera tampoco podido serlo debido a los límites impuestos por la clase a la que él pertenece, la clase media alta e ilustrada. Y aunque fue la movilización social quien lo obligó a una sustitución constitucional, esto sólo se debió a las circunstancias.

---

<sup>506</sup> Benjamin Dangl, *El precio del fuego...*, *op. cit.*, p. 241.

<sup>507</sup> Raúl Prada Alcoreza, “Bolivia. Los movimientos moleculares de la multitud”... *op. cit.*

A partir de este momento, consecuencia en parte por el envío de su proyecto de Ley de hidrocarburos al Congreso Nacional para su análisis y consideración, Carlos Mesa entró en conflicto con los diferentes sectores sociales y con el mismo parlamento. Las organizaciones populares se empezaron a unir en torno demandas como el rechazo al Tratado de Libre Comercio Andino, a la oposición del precio de los hidrocarburos y a la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Evo Morales que en un principio apoyo la administración de Mesa, empezó a cuestionar dicha administración: “Frente a la soberbia y burla del presidente Mesa que sólo obedece a la embajada norteamericana y a las transnacionales, los pobres de este país que somos la mayoría, tenemos una sola alternativa: unirnos nuevamente”.<sup>508</sup>

Los sectores liderados por Morales, la COB, la CSUTCB, Felipe Quispe, la FEJUVE, entre otras, empezaron a acusar al gobierno de Carlos Mesa de estar dando continuidad a los aspectos fundamentales de la política liberal de Gonzalo Sánchez de Lozada y de no manifestar, asimismo, la voluntad política de afectar los derechos adquiridos y las condiciones favorables reconocidas a las empresas en los años noventa durante el proceso de reestructuración del sector.

El Observatorio de Política Energéticas de Bolivia y el CEDIB, en conexión con la Coordinadora del Gas, elaboraron un documento titulado “Cinco motivos para rechazar la Ley de Hidrocarburos de Mesa”<sup>509</sup> y que a continuación se reproduce:

#### CINCO MOTIVOS PARA RECHAZAR LA LEY DE CARLOS MESA

1. RECUPERACIÓN: No existe una verdadera recuperación de nuestros hidrocarburos, como manda la Constitución Política del Estado en su artículo 139.
2. INGRESOS FISCALES: No se repone ni siquiera el 50% de los ingresos para el Estado boliviano.
3. YPFB: YPFB será sólo una empresa más, y después de haberle QUITADO TODO, debe COMPETIR –en las mismas condiciones- con las empresas transnacionales. PetroBolivia

---

<sup>508</sup> Evo Morales citado en: Alex Contreras Baspineiro, “Bolivia. El retorno de las movilizaciones sociales”, [en línea], México, *Memoria*, No. 189, noviembre de 2004, pp. 51. Dirección URL: <http://es.scribd.com/doc/98066028/Memoria-Revista-de-politica-y-cultura-num-189>, consulta: 17 de agosto de 2013].

<sup>509</sup> Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti...*, op. cit., p. 296.

sería una simple oficina de fiscalización, por encima de todas las demás empresas. (en resumen YPFB cumpliría un rol secundario).

4. **PRECIOS:** Los precios de “nuestros” hidrocarburos para el mercado interno, se ajustan a los precios internacionales, antes de basarse en los costos de producción nacional, tal como pasa en Venezuela donde se aplican a nivel interno precio 10 veces menores que en Bolivia. Sólo las REGALÍAS debería regirse por los precios internacionales, para lograr un verdadero BENEFICIO para el país.
5. **INDUSTRIALIZACIÓN:** Los proyectos de industrialización sólo benefician a empresas extranjeras, dejando al país migajas e impidiendo que YPFB sea PROTAGONISTA de la planificación y ejecución de una verdadera estrategia Nacional de HIDROCARBUROS.

A partir de este enfrentamiento, la lucha por una nacionalización de los hidrocarburos (por parte de organizaciones sociales) y la pelea en el Parlamento por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) (por parte del MAS), se alargó durante todo el resto de la administración de Carlos Mesa.

Por su parte, dentro del Parlamento, especialmente los partidos neoliberales impusieron frenos a los cambios sustanciales en la Ley de Hidrocarburos para que no prosperara el juicio contra Sánchez de Lozada y para que no se atendieran las demandas populares. Así, Carlos Mesa encontró un rechazo a su propuesta de la Ley motivo por el cual el Jefe del Ejecutivo amenazó con no promulgar ninguna ley si el Congreso no aprobaba su proyecto de ley de Ejecución y Cumplimiento del Referéndum.<sup>510</sup> Esta misma pelea dentro del Parlamento se alargó hasta el momento de su renuncia.

En los siguientes apartados se pueden apreciar algunos de los sucesos donde la movilización social hizo tambalear el gobierno de Carlos Mesa.

---

<sup>510</sup> Alex Contreras Baspineiro, “Bolivia. El retorno de las movilizaciones sociales”,... *op. cit.*, p. 5. El mismo Carlos Mesa, si en un principio argumento que él no trabajaría con los partidos políticos tradicionales, posterior al bloqueo que encontró en el Parlamento, invitó a la ex coalición gubernamental de Sánchez de Lozada a apoyar su política hidrocarburífera. Dicha megacoalición del gobierno está compuesta por los partidos de ideología neoliberal como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Acción Democrática Nacionalista (ADN).



#### 4.5.1. La Ciudad de El Alto vs. Aguas del Illimani

El conflicto por el agua en El Alto, en enero del 2005, trajo fin -al menos en lo superficial- al descontento de esa ciudad por estar sujeta al control empresarial del agua. Después de 1997 cuando el Banco Mundial privatizó el agua como una condición de préstamos para Bolivia, los sistemas de agua de Cochabamba, El Alto y La Paz fueron privatizados. Aguas del Illimani, un consorcio privado a manos de la compañía de agua francesa Suez, se quedó en control del agua de El Alto y por ello los precios subieron en un 35 por ciento.<sup>511</sup>

El precio para conectarse a los servicios de agua y desagüe subió a 445 dólares, equivalente a seis meses de un sueldo mínimo boliviano. La compañía no expandió sus servicios a los alrededores de la ciudad de El Alto, así que más de 200.000 personas se quedaron sin acceso a este recurso vital.

Según expone Dangl, el contrato con Aguas de Illimani tampoco permitía el uso de sistemas alternativos de agua, como las muchas pozas que habían sido construidas por los mismos vecinos que no tenían acceso al sistema regular o que no podían pagar por el costo de instalación.

Y aunque, sucedieron algunas protestas desde que la compañía de agua llegó en 1997, fue después de ocho años de tener que pagar precios elevados y de enfrentamientos, que los ciudadanos de El Alto organizaron una huelga general el 11 de enero de 2005 que duró 72 horas. Organizada por la FEJUVE y la COR, los protestantes demandaron que Aguas de Illimani se fuera de la ciudad y fuera reemplazada por un sistema público de agua.

Si bien con este apartado no se pretende realizar una comparación con la movilización de Cochabamba en el año 2000, puesto que se trata de dos momentos totalmente diferentes (en el año 2000 se defendía la propiedad social del agua, mientras que en el 2005, en El Alto se trató más bien de la estatalización del recurso), se puede relucir que esta movilización no tuvo el eco que tuvo la Guerra del Agua ni las mismas repercusiones sociales y políticas, puesto que los actores que participaron en dichos acontecimientos desarrollaron acciones diversas a partir de su surgimiento. Mientras que en el 2000, la Coordinadora del Agua surgió de las necesidades colectivas de la población; la

---

<sup>511</sup> Benjamin Dangl, *El precio del fuego...*, op. cit., pp. 233-234.

FEJUVE, en El Alto ya existía y tenía una larga historia como organización popular. En El Alto, la lucha era contra una compañía que operaba desde hace varios años. En Cochabamba apenas se implementó la subida de los precios y los contratos cuando la gente reaccionó con movilizaciones callejeras.<sup>512</sup>

Al finalizar la movilización, Carlos Mesa pasó una ley el 13 de enero de 2005 declarando que los sistemas de agua y desagüe de El Alto regresarían a manos del Estado. Meses después se tuvo que convocar a una nueva movilización para expulsar a la empresa, pues no se había conseguido el objetivo. Y peor aún, en su momento no se comprendió ni evaluó debidamente por qué ocurrió.

#### **4.5.2. La oligarquía cruceña y su demanda autonomista**<sup>513</sup>

El tema de la autonomía de descentralización se hizo presente a finales del siglo XX, por medio de los comités cívicos. En ese momento, no sólo era Santa Cruz quien demandaba la descentralización sino también otros departamentos como Cochabamba, Sucre y Potosí. El ascenso de la demanda por la descentralización departamental llegó a cristalizarse y consecuentemente a neutralizarse con la aplicación de la Ley de Participación Popular de 1994.<sup>514</sup>

Esta Ley, a decir de García Linera, descentralizaba administrativamente el Estado por municipios, lo que se sumó a la integración de las elites regionales, especialmente cruceñas y a la estructura del Estado centralista a través de los partidos MNR, MIR y ADN. Ello provocó que se pusiera fin al ímpetu descentralizador de los años ochenta pero al mismo tiempo llevó a las élites empresariales cruceñas a ocupar posiciones fundamentales

---

<sup>512</sup> *Ibidem*, p. 235.

<sup>513</sup> El tema de lo federal y lo autonómico renacer intelectualmente en Santa Cruz a principios de siglo XX, con el Manifiesto de la Sociedad Geográfica, que le critica al Estado el abandono de las regiones del oriente, y plantea un modelo de desarrollo económico integral y un modelo de desarrollo político con una fuerte presencia autonómica de autogobiernos regionales. El tema de los gobiernos regionales vuelve a renacer en 1957, cuando se debate el tema de las regalías del petróleo y, después de múltiples incidentes y enfrentamientos, se distribuye departamentalmente un porcentaje de las regalías petroleras. Véase, Álvaro García Linera, “La lucha por el poder en Bolivia”, en *La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*, Bogotá, Siglo del Hombre, CLACSO, 2009, p. 467.

<sup>514</sup> Esta Ley realiza no una descentralización política, sino administrativa a nivel de los municipios y no política.

de poder en la estructura estatal las cuales ayudaron a promover las reformas de libre mercado en los últimos años.<sup>515</sup>

Ante la irrupción indígena y popular de los años 2000 y 2003, que demandaban transformaciones económicas y políticas radicales y, aprovechando los diferentes distanciamientos de algunos sectores sociales por su postura ante el referéndum sobre el gas que Carlos Mesa llevó a cabo, el empresariado y la oligarquía cruceña lograron sacar ventaja de dicho contexto. Lograron así revitalizar *su* demanda autonomista a partir de un movimiento social y popular:

[...] es una clara sublevación empresario-regional contra las demandas e ímpetus indígeno-populares de transformación económica y política; es un levantamiento burgués de reacción a los procesos de cambio propugnados por los movimientos sociales. Se trata de una serie de manifestaciones, movilizaciones y acciones directas dirigidas por el empresariado regional, en torno a objetivos y convocatorias de los sectores empresariales, que buscan preservar el orden económico y establecer un blindaje político regional a esos intereses, en retirada en el resto del país. Lo llamativo es que esta convocatoria tiene recepción social, apoyo regional de sectores laborales y populares, lo que permite hablar de la presencia activa de una hegemonía, de un liderazgo empresarial en la región.<sup>516</sup>

Esta sublevación empresario-regional, que durante la administración de Carlos Mesa por primera vez en su historia adquirió fuerza de movilización popular y masiva, fue dirigida por los partidos tradicionales (MNR, MIR y ADN) y las corporaciones empresariales regionales (Cámara Agropecuaria del Oriente, CAO; y Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, CaInCo).

El aumento del diésel en diciembre de 2004 fue el pretexto que les permitió movilizar, canalizar y liderar un malestar social hacia la defensa de intereses empresariales cruceños que, por cierto, son los que más se benefician con la subvención de ese combustible por parte del Estado.

---

<sup>515</sup> Álvaro García Linera, “La lucha por el poder en Bolivia...”, *op. cit.*, p. 468. “Desde 1985, independientemente de los gobiernos del MNR, ADN o MIR, las élites cruceñas ocuparon cargos ministeriales clave en la definición de las políticas económicas del país; estaban posesionados en niveles de dirección de los principales partidos de gobierno y controlaban áreas de decisión en el parlamento. Esto les permitió influir de manera directa en la definición de políticas públicas que favorecieron su potenciación como moderna fracción empresarial. A su modo, la burguesía cruceña desde hace treinta años, y con particular énfasis en los últimos quince años, ha hecho lo que desde la historia republicana ha realizado todo empresariado dominante: utilizar el poder político para ampliar, extender y proteger su capitalización económica empresarial sectorial.” Véase, Álvaro García Linera, “La lucha por el poder en Bolivia...”, *op. cit.*, pp. 469-470.

<sup>516</sup> *Ibidem*, pp. 468-469.

Posteriormente, lograron obligar a Mesa a retirar un impuesto sobre el patrimonio. En junio de 2004, ante el eventual referéndum, lograron convocar a un cabildo abierto en el que plantearon la autonomía departamental y la elección directa de prefectos. Tales demandas fueron conocidas como la “Agenda de Junio” y se contraponían a las contenidas en la Agenda de Octubre.<sup>517</sup> Si se hubieran cumplido las demandas de esta última, habría afectado directamente los mecanismos de poder económico empresarial pues se hubiera modificado el sistema de propiedad de la tierra a partir de la Asamblea Constituyente y se habría puesto freno a la esperanza de unas regalías petroleras regionalizadas con la nacionalización de los hidrocarburos. Por ello la lucha cruceña por el poder es a la vez una resistencia a la implementación y eventual continuidad de la llamada “Agenda de Octubre”.

La rebelión de las elites regionales cruceñas contra el gobierno tiene que ver con el hecho de que en los dieciséis meses posteriores a Octubre de 2003, dichas elites perdieron el control de una buena parte de los resortes del poder político que durante diecinueve años administraron de manera ininterrumpida.<sup>518</sup>

Fue en Santa Cruz donde se organizó un grupo radical autodenominado la “Nación Camba”, contraponiéndose de alguna manera a la “Nación Aymara” que pugnaba Quispe. Tal grupo logró ampliar su campo de acción, primero en Tarija, el departamento más rico en gas, y de ahí a los demás departamento de tierras bajas.

Como expone García Linera, lo llamativo de esta convocatoria fue que tuvo una recepción social, apoyo regional de sectores laborales y populares, y esto se entiende porque en el oriente boliviano ocurre un proceso diferente al del occidente boliviano. Es decir, si bien existen en los sectores subalternos del oriente boliviano las mismas carencias sociales, la falta de empleo, la discriminación y la crisis, estos problemas son explicados por el centralismo, en contraposición a la construcción por parte de los movimientos

---

<sup>517</sup> Xavier Álbo, “Bolivia”, en *Movimientos y poder indígena en Bolivia...*, *op. cit.*, pp. 79-80.

<sup>518</sup> Álvaro García Linera, “La lucha por el poder en Bolivia...”, *op. cit.*, pp. 469-470. El desplazamiento de los hilos de poder vino inicialmente con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien creó una serie de vínculos de fidelidad y apoyo con el empresariado cruceño, que se mantuvo hasta el último minuto en que el expresidente partía a su “autoexilio”, en octubre de 2003. El segundo momento de esta pérdida de poder vino por el debilitamiento político de los partidos donde este empresariado cruceño controlaba estructuras de influencia y decisión (MNR y MIR); el tercer momento de esta pérdida de control personal de los aparatos de poder gubernamental se dio cuando el presidente Carlos Mesa posesionó en ministerios a representantes cruceños provenientes de elites intelectuales y civiles distantes de las elites económicas regionales. Y el punto final de esta pérdida de los resortes del poder gubernamental vino con los resultados de las elecciones municipales, que acabaron por debilitar, y casi marginalizar de las esferas de decisión política, a los partidos que tradicionalmente habían sido el centro de la política nacional (MNR, MIR, ADN).

sociales populares e indígenas del altiplano, de un sentido común generalizado que advierte al modelo neoliberal de Estado como el autor y promotor de estas situaciones. Este centralismo, que se desarrolla en las tierras bajas, “es una ideología y visión del mundo administrada por las elites empresariales que permite entender su liderazgo y base social.”<sup>519</sup>

Asimismo, esta ideología cobra fuerza por la ausencia de autonomía política de los sectores populares residentes en esa región, por tal motivo, las demandas de varios sectores populares urbanos se articulan individualmente en las ofertas que hacen estas elites empresariales, en lugar de buscar una solución colectiva a sus problemas que son muy similares entre sí.

La demanda de autonomía, por parte de Santa Cruz, se debe a que el empresariado, en todos sus momentos, y en todas las regiones, y pese a todos sus modernismos técnicos, nunca ha dejado de imaginar de manera patrimonial el poder y el territorio. En el primer caso, como privilegio de abolengo, y en el segundo, como prolongación de la lógica señorial de la hacienda.<sup>520</sup> La demanda de autonomía se presenta por tanto como una lucha defensiva, de repliegue en su zona de irradiación básica y, con ello, el abandono de la lucha por una hegemonía nacional que se siente imposible. Es la “constatación de los límites regionales de una burguesía que no se anima a intentar dirigir, política, económica y culturalmente, el país, y se repliega en su dominio regional para disputar ahí el control, compartido con las petroleras, del excedente gasífero existente.”<sup>521</sup>

El empresariado cruceño lee el espacio regionalmente, y ha renunciado a una lectura socialmente incorporada del territorio nacional, independientemente de la globalización de sus actividades económicas. La “territorialidad estatal no se le presenta como espacialidad inherente a su destino, sino tan sólo como una contingencia de la esencialidad de la hacienda. En ese sentido, la visión del vínculo espacial del Estado es premoderna, señorial, similar a la de las elites andinas del siglo XIX, a las que, [...] les importaba más el estado de la estatua de la Virgen de Copacabana que la mutilación del litoral.”<sup>522</sup>

---

<sup>519</sup> Álvaro García Linera, “La lucha por el poder en Bolivia...”, *op. cit.*, p. 469.

<sup>520</sup> *Ibidem*, p. 466.

<sup>521</sup> *Ibidem*, pp. 471-472.

<sup>522</sup> *Ibidem*, p. 466. La diferencia entre el movimiento indígena y popular con el movimiento cruceño radica en que la “lógica nacional del espacio estatal está incorporada en su horizonte intelectual; es el legado de una lógica agrícola de ‘múltiples pisos ecológicos’. Es por eso que los indios se imaginan el poder no sólo donde

Sin embargo, con las movilizaciones que realizaron los sectores indígenas y populares en demanda de la nacionalización del gas y el establecimiento de la Asamblea Constituyente y, posteriormente, para impedir que tanto el presidente de la Cámara de Senadores como él de la Cámara de Diputados sucedieran a Carlos Mesa posterior a su renuncia, en mayo y junio de 2005, logró que las demandas autonomistas por parte de Santa Cruz quedaran relegadas ante la situación que estaba imperando: el llamado a elecciones generales. Esta situación se verá con más detalle en el apartado siguiente.

Aun así, es interesante observar que como apunta García Linera, de llevarse a cabo su victoria, en aquel contexto se hubiera radicalizado la regionalización de la lucha de clases, de los liderazgos políticos y de los proyectos de país, incrementando las tendencias escisionistas que siempre se han anidado en el comportamiento político de los sujetos sociales de oriente y occidente.<sup>523</sup>

#### **4.5.3. Mayo-junio de 2005: nacionalización y renuncia**

En mayo de 2005 se detona nuevamente una gran movilización pero ahora por la nacionalización del gas debido a la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos. Esta lucha logra que la consigna de nacionalización se expanda a escala nacional. Asimismo impide que, luego de ser expulsados del poder, los partidos políticos conservadores lo recuperen.

Fue un movimiento indígena y popular que reivindicó, desde las profundidades de su propia memoria, el gas para los bolivianos, para los trabajadores, para los desocupados, para las familias humildes, planteándose desde un enfoque de distribución social a este recurso energético.<sup>524</sup> Para Prada Alcoreza no sólo se trata de una consigna nacional, sino

---

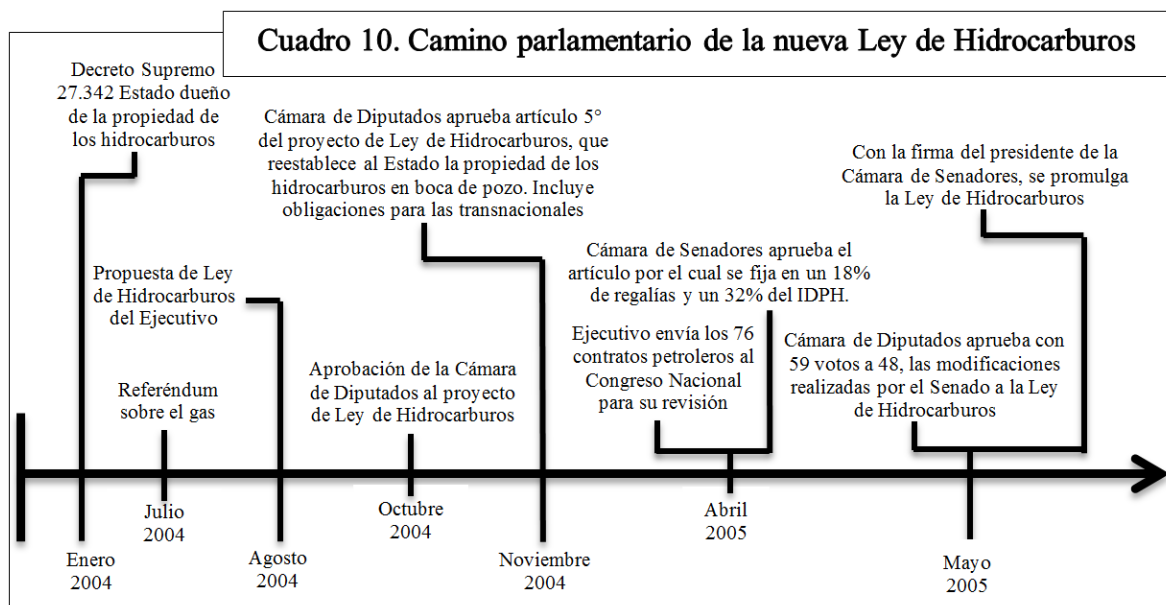
son mayoría indígena, sino en todo el país (mediante la victoria electoral en la versión moderada, a través de la Asamblea Constituyente; o mediante la instauración del *Qullasuyu*, en la versión radical), pues el espacio de sus pretensiones llega hasta donde llega el Estado, e incluso a veces más allá, como en el caso aimara. Se trata entonces de una incorporación moderna de la geografía estatal, aunque, claro está, el sustento técnico-económico de este ímpetu nacionalizador puede ser considerado 'premoderno'. Véase, Álvaro García Linera, "La lucha por el poder en Bolivia...", *op. cit.*, p. 466.

<sup>523</sup> Álvaro García Linera, "La lucha por el poder en Bolivia...", *op. cit.*, p. 472.

<sup>524</sup> Raúl Prada Alcoreza, "Perfiles del movimiento social contemporáneo. El conflicto social y político en Bolivia" [en línea], Buenos Aires, Argentina, *OSAL*, Año IV, N° 12, septiembre-diciembre 2003, p. 36. Dirección URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal12/d1prada.pdf>, [consulta: 16 de agosto de 2013].

de “una consigna que replantea popularmente la concepción de nación.”<sup>525</sup> Quizás sea ésta la razón por la que la defensa del gas estaba relacionada con la consigna de la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, veamos el por qué de esta nueva movilización. En el Cuadro 10 se pueden observar algunos de los acontecimientos más importantes, a nivel político-institucional referentes a la nueva legislación de los hidrocarburos, una de las demandas contenidas en la “Agenda de Octubre”.



Elaboración propia con base en los siguientes textos: Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005)*, México, Sísifo ediciones/Bajo Tierra Ediciones/ICSH/BUAP, 2009, pp. 231-276; 277-341. Suárez, Hugo José, *Bolivia. País rebelde (2000-2006)*, México, El Colegio de Michoacán, 2007, 156 pp. Cronología realizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), a partir del Observatorio Social de América Latina. Disponible en: <http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php?idioma=port>.

A partir del referéndum sobre el gas, en julio de 2004, se activa una disputa entre Carlos Mesa y el Parlamento; y, aún más importante, entre Carlos Mesa y los sectores sociales movilizadas, los cuales comenzaron a replantear los mismos objetivos que unificaron a amplios sectores de la sociedad en 2003, es decir, las consignas recuperación total de los hidrocarburos y Asamblea Constituyente fueron replanteadas con una maduración en los significados: se habla ahora de una nacionalización de los hidrocarburos y de una Asamblea Constituyente como “poder constituyente” de las multitudes.<sup>526</sup>

<sup>525</sup> *Ídem.*

<sup>526</sup> Raúl Prada Alcoreza, “Bolivia. Los movimientos moleculares de la multitud”..., *op. cit.*

Asimismo, se trata de un contexto totalmente diferente al 2003. El mapa de las fuerzas sociales, políticas y económicas es diferente. La derecha desplegó una ofensiva articulada en varios niveles, monopolio de los medios de comunicación, campañas publicitarias que hacen caja de resonancia, cabildos autonómicos, conspiración parlamentaria, asamblea preautonómica, intentando una sustitución presidencial, que terminaría en el presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez.<sup>527</sup> Esta situación obligó a Mesa a aproximarse más a una nueva agenda inventada e impuesta por la burguesía intermedia, apoyada por la conspiración de las empresas transnacionales y, de manera indirecta, por la conspiración de los organismos multilaterales.

Una diferencia más entre el 2003 y el 2005, es que en Octubre de 2003, los sectores conservadores que manejaban el aparato público, fueron sorprendidos por la virulencia de los eventos. En mayo y junio de 2005 las organizaciones sociales se vieron en cambio obligadas a defenderse de una ofensiva en torno a la nacionalización de los hidrocarburos y a la Asamblea Constituyente. Aun así, los movimientos sociales con sus diferencias - integradas en una simultaneidad rebelde<sup>528</sup> - logran repetir lo del Abril del 2000 y lo de Octubre de 2003: la suma de los sectores sociales alzados. Las seis federaciones cocaleras del Chapare, sumadas a la federación cocalera de los Yungas; las organizaciones de los colonizadores; el Movimiento de los sin Tierra (MST); el pueblo alteño, con su poderosa FEJUVE; corporaciones gremiales, los sindicatos de maestros, los obreros sindicalizados de las urbes, los estudiantes universitarios. Sumándose irradiaciones del movimiento del norte, sobre todo en el departamento de Beni.

Todo este abigarramiento social se movilizó en contra de una ley, la Ley 3058 que se presentaba como un elemento innovador en tanto que supuestamente daba respuestas a los pedidos de reformulación en el tratamiento de los hidrocarburos bolivianos pero que en realidad no reflejaba un mayor protagonismo estatal en materia gasífera ni una distribución más equitativa de los ingresos provenientes de las exportaciones energéticas. Dicha normativa dio origen al mencionado Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH),

---

<sup>527</sup> *Ídem.*

<sup>528</sup> *Ídem.*



“aplicable a todo el territorio nacional y a la producción de hidrocarburos en Boca de Pozo”.<sup>529</sup>

Como ya se dijo, el Parlamento aprobó una ley que mantuvo las regalías del gas en un 18%, lejos de un 50% que muchos protestantes estuvieron exigiendo, incluido el MAS, a partir del referéndum en julio de 2004, ya no la demanda de un 50% de regalías sino la nacionalización de los hidrocarburos. Volvieron los bloqueos y marchas, para presionar al Ejecutivo, pero con un matiz: no se pedía su renuncia.

Como fue previsible la promulgación de esta nueva ley, el movimiento social logra construir una argumentación popular en torno a la nacionalización y a la Asamblea Constituyente, “...desarrollando un posición crítica respecto a los gobiernos autonómicos departamentales, a partir de dos alternativas: discutir el tema en la Asamblea Constituyente, lugar apropiado para tratar todas las propuestas en torno al nuevo diseño de Estado; inducir alternativas formas autonómicas a partir de las nacionalidades, los municipios y las provincias.”<sup>530</sup>

Fue un aprendizaje de os movimientos en corto tiempo tanto de los ritmos políticos como de las transformaciones inherentes al campo político. Puede decirse que se sintetizó en la decodificación de los discursos oficiales, en la emergencia de los saberes y en la constitución de sujetos sociales.

Ante esta nueva emergencia de la movilización social, Carlos Mesa quedó inmerso en las presiones tanto de los sectores sociales y políticos que habían votado a favor de la recuperación de YPF como de los sectores empresariales vinculados a la explotación energética y de las diferentes fuerzas políticas:

Sería muy fácil para mí decir: ‘Sí vamos a nacionalizar a través de la expropiación’, y yo probablemente sería la persona más popular en mi vida. Pero yo no gobierno para ganar popularidad. Gobierno por mi responsabilidad hacia el Estado, dijo el presidente Mesa.<sup>531</sup>

El 6 de marzo de 2005 Mesa anunció que las protestas, huelgas y bloqueos habían vuelto al país “ingobernable” y que él ofrecía su renuncia. Amenazaba con dejar el poder a un conservador, Hormando Vaca Díez, presidente del Parlamento. Sin embargo, la renuncia de

---

<sup>529</sup> Natalia Ceppi, “Hidrocarburos y procesos autonómicos en Bolivia. Factores intervinientes en su fragmentación social”, en *Ciencia, docencia y tecnología*, Año XXI, No. 41, noviembre de 2010, p. 84. Dirección URL: <http://www.scielo.org.ar/pdf/cdyt/n41/n41a04.pdf>, [consulta: 29 de marzo de 2012].

<sup>530</sup> Raúl Prada Alcoreza, “Bolivia. Los movimientos moleculares de la multitud”..., *op. cit.*

<sup>531</sup> Carlos Mesa citado en: Dangl, Bejamin, *El precio del fuego...*, *op. cit.*, p. 240.

Mesa no sólo fue rechazada por el Congreso sino que su pronunciamiento también tuvo un efecto contrario. Varios grupos de protesta se unieron para relanzar un frente de defensa conocido como los Empleados Generales del Pueblo. Ellos convocaron a nuevas huelgas y demandaron que las regalías de la venta del gas se incrementaran a un mínimo del 50%.<sup>532</sup>

Para el 2 de Junio, en un último intento por calmar las protestas, Mesa anunció planes para rediseñar la Constitución en una Asamblea Constituyente. Esa iniciativa tendría que ser aprobada en el Congreso pero no ofrecía una respuesta inmediata a la demanda popular de nacionalización del gas. Según expone Dangl, las movilizaciones llegaron a su punto clave el 6 de Junio, cuando cientos de miles de protestantes bajaron de nuevo hacia La Paz. Los mineros explotaron dinamita en las calles en lo que sería la protesta más grande desde octubre de 2003. Provocaron que Mesa renunciara nuevamente ante el Congreso Nacional.<sup>533</sup>

Lo interesante cuando uno observa detalladamente cada uno de los acontecimientos acaecidos durante los meses de Mayo y Junio de 20005 es que, como se dijo, la renuncia de Carlos Mesa no fue una demanda principal de la movilización social, como sí lo fue con Sánchez de Lozada, sino el tema principal para muchos bolivianos quién tenía el control del gas de la nación, no quien estaba como presidente.

Benjamín Dangl expone de forma concreta los principales hechos durante los últimos días, antes de la renuncia de Mesa:

El 7 y 8 de junio, las tuberías de gas cercanas a Cochabamba, las cuales enviaban alrededor de 20.000 barriles de gas diarios a Chile, fueron cerradas por los protestantes. Alrededor de 100 huelgas de hambre se organizaron por todo el país por la nacionalización del gas. El 9 de junio, varios políticos viajaron a Sucre para ponerse de acuerdo en una solución a la crisis. La mudanza de La Paz a Sucre tuvo la intención de llevar el debate a un área sin protestas [...]. Decenas de miles de personas viajaron a Sucre desde todas partes, llenando la plaza principal para demandar la nacionalización y para prevenir que Vaca Díez reemplazara a Mesa [...]. El Congreso no tuvo otra opción sino aceptar la renuncia de Mesa. Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, los dos que quedaron en línea para ser presidentes después de Mesa, no quisieron aceptar la presidencia, en gran parte por la presión que seguían aplicando los sectores de protesta. La posición le tocó al juez supremo Eduardo Rodríguez.<sup>534</sup>

Durante esta irrupción popular, las juntas vecinales de El Alto, los mineros cooperativistas de Oruro, los comerciantes gremialistas de La Paz, los campesinos aymaras, los cocalleros

---

<sup>532</sup> Benjamin Dangl, *El precio del fuego...*, *op. cit.*, p. 241.

<sup>533</sup> *Ibidem*, p. 244.

<sup>534</sup> *Ibidem*, pp. 244-245.

de los Yungas y el Chapare y los maestros urbanos y rurales mostraron una impresionante capacidad de movilización y desplazamiento: “llevando al asedio al Congreso desde la sede de gobierno en La Paz hasta la capital política en Sucre, en demanda de la aprobación de una ley recuperatoria de la propiedad de los hidrocarburos y una ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente.”<sup>535</sup>

La ciudad de Sucre fue copada, la Plaza 25 de Mayo sitiada y emboscada, fue tomado el aeropuerto, los trabajadores de la Administración y Servicios de Aeropuertos Nacional (ASANA), organizados en el sindicato de trabajadores de los aeropuertos, entraron en huelga; también los gobiernos municipales entraron en huelga. Toda una tenaza social movilizaba envolvía a los diputados atrapados en la vorágine de la sublevación.<sup>536</sup>

Cuando el presidente del Congreso y el presidente de la Cámara de Diputados renuncian a su sustitución constitucional, la derecha volvió a ser derrotada políticamente. Sin embargo se abrió una nueva coyuntura plagada de incertidumbre. No se lograron los objetivos de la lucha, ni la nacionalización de los hidrocarburos ni tampoco la Asamblea Constituyente.

Con la renuncia de Mesa, ante el desborde social, le sucedió el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez. Era el tercero y último en la línea de sucesión constitucional pero el único que no pertenecía a los partidos que gobernaron con Gonzalo Sánchez de Lozada y también el único que podía adelantar las elecciones: “la misión fundamental y específica de su nombramiento era llegar a las elecciones, lo que hacía mucho menos conflictivo su rol”.<sup>537</sup>

Carlos Mesa se retira sin poder y sin apoyo, desmoralizado ante la intensidad de la revuelta popular, que irónicamente vuelve a forzar una segunda serie de sustituciones constitucionales.

---

<sup>535</sup> Erick Fajardo Pozo, “De la resistencia a la construcción de poder. Tareas pendientes del movimiento popular en Bolivia”, [en línea], México, *Memoria*, No. 198, agosto de 2005, p. 39. Dirección URL: <http://es.scribd.com/doc/98069376/Memoria-Revista-de-politica-y-cultura-num-198>, [consulta: 17 de agosto de 2013].

<sup>536</sup> Raúl Prada Alcoreza, “Bolivia. Los movimientos moleculares de la multitud”..., *op. cit.*

<sup>537</sup> Álbo, Xavier, “Bolivia”, en *Movimientos y poder indígena en Bolivia...*, *op. cit.*, p. 81.

#### 4.5.4. Después de Carlos Mesa... ¿qué?

Es cierto que, los movimientos sociales conllevan sus contradicciones, muestran paradojas, a veces hasta aporías. Una paradoja dentro del movimiento indígena y popular boliviano tiene que ver con los objetivos primordiales planteados por los integrantes del mismo: la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente.

Ante esta realidad cabe preguntarse: ¿Quién iba a nacionalizar y quién iba a convocar a la Asamblea Constituyente? Es evidente que, ante los hechos, los sectores sociales depositaron esta tarea al Estado. Encomendaron al gobierno de transición de Carlos Mesa estas tareas exigiendo en Mayo y Junio de 2005 al Gobierno y al Parlamento el cumplimiento de éstas. La paradoja que se presenta en este caso en particular es cuando se deposita el cumplimiento de los objetivos del movimiento indígena y popular a instituciones que no tienen la voluntad de cumplirlas, es más, que están en contra. “La sublevación contra el Estado termina siendo estatalista, la rebelión reproduce al Estado en la expectativa de sus demandas. Reproduce al sujeto, al soberano, a quien van dirigidas estas demandas.”<sup>538</sup>

Después de mayo y junio de 2005, se reforzaron los procesos de autoorganización y de gestión político-económico de los movimientos sociales bolivianos pero no se llegó al punto de avanzar más allá. Tal vez porque no se han gestado en su interior potencialidades de gestión y administración del poder. Estos acontecimientos esbozaron, ante los movimientos indígenas y populares, que se posee la capacidad de paralizar al país. Territorialmente se tiene esta capacidad, pero también habría que preguntarse si estos mismos acontecimientos lograron -en el imaginario social- plantear al movimiento como una posibilidad de soberanía, para reformarlo o conducirlo a nuevas aspiraciones provenientes desde abajo, desde los sectores pobres y humildes, para avanzar más allá del Estado.

Esta nueva sustitución constitucional provocada, como hemos visto, por nuevas movilizaciones sociales, manifiesta que no sólo se está asistiendo a una crisis del Estado neoliberal, sino que también se está asistiendo simultáneamente a una crisis del conjunto de

---

<sup>538</sup> Raúl Prada Alcoreza, “Bolivia. Los movimientos moleculares de la multitud”..., *op. cit.*

instituciones y de estructuras de larga duración del Estado republicano boliviano.<sup>539</sup> Esta crisis política no es un problema meramente de gobernabilidad, como muchos autores expresaron en su momento, no se está frente a un problema de ineficiencia administrativa de la figura del presidente, que por cierto la tiene; esta crisis rebasa la mala gestión presidencial y la mediocridad parlamentaria. “La estructura institucional del Estado está en crisis: su correlación de fuerzas, sus creencias y su institucionalidad están siendo cuestionadas, debilitadas, resquebrajadas o reblandecidas por este tipo de fenómenos sociales y políticos.”<sup>540</sup>

Ante esta situación, surgen “nuevas” ideas: nacionalización, descentralización, autonomía, gobierno indígena, entre otras. Ideas con creciente apoyo social, que se imponen en el escenario político, debilitando las ideas que caracterizaron al neoliberalismo de los años ochenta.

El sistema de convicciones y esquemas mentales que permitió que gobernantes y gobernados se articularan muestra hoy un acelerado proceso de agotamiento, por la imposibilidad material de mostrarse verificable, dando lugar nuevamente a un estado de disponibilidad cultural de la población hacia nuevas fidelidades y creencias movilizadoras. De hecho, nuevos discursos, que han contribuido a la erosión de las certidumbres estatales, hoy comienzan a hallar receptividad en amplios grupos sociales, que empiezan a utilizar esas propuestas como ideas-fuerza, esto es, como creencias en torno a las cuales están dispuestos a entregar tiempo, esfuerzo y trabajo para su materialización y que, como en zonas del altiplano aimara, comienzan a promover modos de escenificación y ritualización alternativos de poder y mando (sustitución de banderas bolivianas por *whipalas* indígenas, el chicote y bastón de mando en vez del escudo como símbolos de poder, etcétera).<sup>541</sup>

Pero, también es cierto que estas “nuevas” posturas centradas en un mercado interno, con mayor presencia de un Estado productivo y que intenta recuperar la dinámica económica de sectores tradicionales en el campo, comunidades, en el mundo urbano, familiar y microempresarial, con mayor presencia indígena en la toma de decisiones, no tienen la capacidad de irradiarse a todas las regiones, a todas clases y a todas las identidades étnicas.

Son posturas que se contraponen a un proyecto neoconservador, liberal, que en lo económico sigue apostado a una economía abierta, globalizada, de inversión externa, de débil intervención del Estado; que apunta a una lectura partidaria de la política o corporativa empresarial de la política, inauguradas desde los años ochenta.

---

<sup>539</sup> Álvaro García Linera, “La lucha por el poder en Bolivia”..., *op. cit.*, p. 455.

<sup>540</sup> *Ídem.*

<sup>541</sup> García Linera, Álvaro, “Crisis del Estado y sublevaciones indígena-plebeyas en Bolivia”..., *op. cit.*, p. 437

Como argumentara García Linera, Bolivia sigue viviendo, en términos gramscianos, un “empate catastrófico”.<sup>542</sup> Es decir, no existe la capacidad de una hegemonía completa, “sino de una confrontación irresuelta por esa hegemonía entre dos protohegemonías, y esto genera procesos de confrontaciones permanentes de baja intensidad, de enfrentamientos, desgastes mutuos que impiden que alguno de ellos expanda su liderazgo sobre el resto de la sociedad.”<sup>543</sup> Y aunque este mismo autor, en el año 2008 argumentara que hubo un punto de bifurcación imponiéndose la hegemonía del bloque indígena-popular los hechos comprueban lo contrario.

#### **4.6. Balance crítico: reflexiones en torno al gobierno de Evo Morales**

Es cierto que los movimientos indígena-populares en Bolivia han tenido logros, la anulación del contrato con Bechtel en la explotación del agua (todo un antecedente a nivel internacional); la recuperación, en cierto sentido, del recurso agua por parte de los pobladores de Cochabamba; la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada, un presidente que hipotecó la soberanía nacional y que reprimió a la población civil que buscaba justicia; la inclusión de temas emanados de las movilizaciones sociales en la agenda parlamentaria; y, como anotamos anteriormente, la elección presidencial de Evo Morales, el primer presidente indígena en Bolivia.

Sin embargo, la experiencia y los hechos demuestran que no basta con conseguirlos, sino que se tiene que ir más allá. Se tiene que encontrar la vía por la cual seguir transitando en su andar como creadores de espacios alternativos en todos los ámbitos de la vida. De ahí que se desprendan cuestionamientos que sólo la población boliviana será capaz de responder: ¿Cómo hacer y cómo lograr implementar este diseño de un espacio alternativo emanado de la lucha social? ¿Cómo insertarlo, en lo concreto, dentro del proyecto de nación basado en otra visión de desarrollo, cuando Bolivia sigue dependiendo profundamente de los recursos naturales?

Es más, como bien apunta Gaya Makaran, hoy día estamos en el centro del acalorado debate por el porvenir boliviano y aunque quisiéramos, nos resulta imposible ver

---

<sup>542</sup> *Ibidem*, p. 475.

<sup>543</sup> *Ídem*.

todos los matices y prever todas las consecuencias del proceso. Resulta difícil valorar los fenómenos inmediatos, cuya proximidad no nos permite encontrar la distancia adecuada para analizarlos imparcialmente.<sup>544</sup> Por tal motivo, dentro de este último apartado no se pretende analizar los gobiernos de Evo Morales, sino aproximarnos a unas reflexiones sobre algunas de las acciones de su gobierno frente a las demandas de toda esta emergencia indígena y popular, cabe anotar una de las principales plataformas que lo ayudó a llegar al poder.

En las elecciones presidenciales del 2005 Evo Morales Ayma resultó victorioso, convirtiéndose en el primer presidente indígena en Bolivia. Por tal motivo, es lógico que existieran grandes expectativas del sector indígena y popular, pero también de sectores marginados y subalternos.

La toma de posesión del presidente Morales, el 21 de enero de 2006 en Tiahuanaco, lugar emblemático para los aymaras y quechuas bolivianos, se convirtió en la manifestación de la identidad étnica y una muestra simbólica de un nuevo estilo en la vida política del país. Así, al mediodía, Evo Morales Ayma llegó a la pirámide de Akapana, donde lo esperaban los sacerdotes aymaras para vestirle con un poncho rojo y un gorro andino, y entregarle el bastón de bando, símbolo de la autoridad. Rodeado de humo de incienso y de *wiphalas*, Morales recibió regalos de los delegados indígenas del continente americano y expuso su primer discurso como presidente.<sup>545</sup>

Los puntos cardinales de la política del gobierno de Evo Morales coincidían con los postulados de la Guerra del Gas: la reforma de la Ley de Hidrocarburos y del Código de Minería, la creación del sistema de pensiones, la Nueva Ley de Reforma Agraria, la reforma educativa y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Todos estos pedidos tenían como fin la redefinición del modelo político y económico del Estado boliviano, siguiendo el modelo de la democracia directa y la económica social andina.<sup>546</sup>

Sin embargo, con el paso del tiempo los caminos del gobierno y del movimiento social se dirigieron en otras direcciones. Makaran<sup>547</sup> apunta: el presidente una vez promulgada la Constitución, se posicionó como el guardián del nuevo orden del Estado Plurinacional, abandonando la protesta; mientras que los movimientos sociales al ver que la

---

<sup>544</sup> Gaya Makaran, *Identidades confrontadas. Conflictos identitarios en Bolivia*, México, CIALC-UNAM, 2012, p. 282.

<sup>545</sup> *Ibidem*, p. 296.

<sup>546</sup> *Ibidem*, p. 298.

<sup>547</sup> *Ibidem*, p. 299.

implementación de los principios constitucionales dejaba mucho que desear siguieron con su lucha.

Asimismo, según nuestra autora, el gobierno de Evo Morales junto a García Linera, vicepresidente y uno de los portavoces e ideólogos más destacados del gobierno “evista”, comenzaron a inclinarse hacia una visión estatalista, característica esencial de la tradicional izquierda boliviana, que va abiertamente en contra de las visiones del movimiento indígena y popular. Según el vicepresidente el objetivo del gobierno es:

Nuestro objetivo es un Estado que intervenga puntualmente y selectivamente en los núcleos modernos de la producción del excedente estratégico del país, y a la vez, que inyecte o transfiera tecnología, recursos, infraestructura, financiamiento a los otros bolsones, ejes, espacios de la economía tradicional no capitalista, semi capitalista, semi mercantil, artesanal y comunitaria. Al final, quien lleve el liderazgo de todo el proceso será evidentemente el Estado, sin obstruir la actividad económica, sino despertando sus potencialidades internas, empujando su propio desarrollo interno.<sup>548</sup>

Ante esto, si observamos con detenimiento las consignas que se enarbolaban en las movilizaciones de octubre de 2003, podemos advertir que los sectores que demandaban la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada buscaban la supresión del Estado. Y aunque las circunstancias obligaron al movimiento insurreccional a hincar sus demandas en una sustitución constitucional, el hecho es que durante el gobierno de Mesa se reforzaron procesos de autoorganización y de gestión político-económico, que bien podrían llegar a plantear una posibilidad de soberanía para reformar o conducir nuevas aspiraciones provenientes desde abajo para avanzar más allá del Estado, si realmente se gestaran en el interior de éstos potencialidades de administración del poder.

Sin embargo, la política llevada a cabo por el gobierno de Morales imposibilita, dificulta y veda toda posibilidad de autoorganización y de gestión político-económica por parte de las comunidades, siendo que sólo se reconoce el liderazgo del Estado en el proceso de cambio y refundación de una nueva sociedad.

De igual forma se han distorsionado y/o malinterpretado las demandas de la movilización indígena-popular sobre la reducción de la pobreza, sobre el hartazgo que se tiene ante el despojo y saqueo de la riqueza natural y económica, por parte del gobierno

---

<sup>548</sup> Álvaro García Linera, “El papel del Estado en el Modelo Nacional Productivo”, ponencia presentada en el Seminario *Organización Económica en la Nueva Constitución Política del Estado*, organizado por el Viceministerio de Presupuesto y Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el auditorio del Banco Central de Bolivia, La Paz, 20 de enero de 2009.



“evista”. Es decir, desde el gobierno se habla de la construcción de una modernidad liderada por el Estado, cuando dicha modernidad fue una de las causas de la explosión y emergencia de los sectores indígenas y populares de la ciudad.

Alguien tiene que construir modernidad en el país, si no lo va a hacer la inversión extranjera porque produce riqueza y la externaliza, si no lo puede hacer el empresariado boliviano porque no tiene la potencia ni la fuerza de acumulación interna capaz de generar un núcleo que atraiga actividades económicas, y anda preocupado más de sus vacaciones en Miami y de su casa en París, es decir, del uso dispendioso del excedente económico, y no del uso industrial de éste, tiene que ser el núcleo estatal quien se encargue de esto.<sup>549</sup>

Es más, se pretende “modernizar” estructuras internas, léase economía familiar, artesanos, comunidades, productores del agro:

Tenemos que producir la modernización interna de esas estructuras, en términos de mercado, de tecnología, de derechos sociales, de renovación asociativa, de mejora de sus capacidades laborales internas, nadie más que el Estado podrá impulsarla.<sup>550</sup>

Finalmente, parece ser que las políticas implementadas por el gobierno, o al menos en la fundamentación teórica, sigue concibiendo al desarrollo como la panacea a todos los problemas:

El objetivo es obtener más riquezas, el desarrollo interno de nuestra economía, la conversión del país en un centro energético, ahora lo somos, pero lo seremos de más maneras: vía gas, vía energía y vía valor agregado de nuestros energéticos, además, con la capacidad de promover desarrollos internos y sociales de cada uno de los pobladores. El industriosismo que reivindicamos no es un industriosismo por sí mismo, es para generar mayor bienestar para los bolivianos, mayores ingresos, renovación y ampliación de sus capacidades de consumos.<sup>551</sup>

Esto último contrasta mucho con la visión o enfoque indígena que supuestamente asumió el gobierno en un inicio, y que está plasmado como un precepto ético-moral en la Constitución Política, el *suma qamaña*. Las acciones en el marco de política económica que está desarrollando el gobierno “evista” discrepan en lo absoluto con los grandes discursos de Morales de corte ecologista y defensa de la *Pachamama*, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Se ha dicho que el modelo que está llevando adelante el Presidente Evo nos aísla del mundo y eso no es cierto. Al contrario, estamos profundamente vinculados al mundo y estamos exportando más que nunca. El promedio de exportaciones en la época del capitalismo de

---

<sup>549</sup> *Ídem.*

<sup>550</sup> *Ídem.*

<sup>551</sup> *Ídem.*

Estado fue de 310 millones de dólares, luego vino el neoliberalismo y el promedio que se exportó fue de 1.100 millones de dólares, fue un interesante y buen crecimiento porque hubo una mayor vinculación a los mercados internacionales. Ahora bien, ¿cuál es el promedio de estos dos años y medio de Modelo Nacional Productivo?: 4.400 millones de dólares, eso es lo que hemos exportado en promedio, entre 2006 y 2007... Estamos exportando gas al Brasil y a la Argentina, también minerales: plomo, plata, zinc, estaño, wólfam, estamos exportando manufacturas, textiles, estamos orgullosos de nuestra industria textilera, estamos exportando soya, aceite de soya.<sup>552</sup>

Demasiadas son las críticas que se le pueden hacer a las políticas que están implementando desde el gobierno, las cuales están profundizando la economía de enclave y reproduciendo el mismo papel de economía primario-exportadora. Sin embargo, lo más preocupante es la explotación y exportación de hidrocarburos y minerales, donde la inversión privada sigue presente, lo que representa un repliegue de la experiencia surgida de las movilizaciones del 2003 y 2005, así como una carencia, y/o negación, de cumplir con esa filosofía indígena plasmada en la Constitución Política y difundida en organismos internacionales, como la ONU, donde se defienden los derechos de la *Pachamama*.

[...] en verdad ahora Bolivia vive de los hidrocarburos, su economía se sostiene sobre ellos y por eso la importancia de una empresa estatal petrolera fuerte. En segundo lugar, exportamos minerales, seguimos siendo ahora un país minero. [...] Hay que utilizar el dinero de los hidrocarburos para crear y potenciar otras áreas productivas porque en algún momento se agotará este recurso y debemos tener una base industrial vigorosa que permita sustituirlo.<sup>553</sup>

Aquí algunas cifras referentes a la exportación de minerales:

En el capitalismo de Estado, el país exportaba en promedio, 141 millones de minerales, en el neoliberalismo crece la exportación minera a un promedio de 280 millones, pero no es un crecimiento exagerado, es apenas el doble. Durante el gobierno del Presidente Evo Morales, estamos exportando en promedio 1.200 millones de dólares de minerales. [...] Hemos firmado un convenio con una empresa estatal coreana para fundir el cobre en Coro Coro en La Paz, vamos a fundir el cobre para exportarlo en lingotes [...]. Además la inversión privada está presente, algunas mineras, como San Cristóbal, están exportando muy bien y el Estado va a explotar las colas y desmontes, es decir, ese mineral que en los años 20 ó 30 se botaba como sobra al borde los ingenios [...].<sup>554</sup>

---

<sup>552</sup> Álvaro García Linera, "Del liberalismo al Modelo Nacional Productivo", en *Revista de Análisis. Reflexiones sobre la coyuntura*, Bolivia, Presidencia del H. Congreso Nacional, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Año 2, Núm. 3, pp. 9-10. En torno a la exportación de soya, este producto está siendo cultivado a través de agricultura extensiva, proyectos que se están llevando junto a empresas transnacionales. Por otra parte, cabe mencionar que las ventas de la industria textil boliviana cayeron en un 87% en 2011.

<sup>553</sup> Álvaro García Linera, "Del liberalismo al Modelo Nacional Productivo"..., *op. cit.*, p. 10.

<sup>554</sup> *Ídem*.

Mientras que en las exportaciones de hidrocarburos:

En la época del capitalismo de Estado, las exportaciones de hidrocarburos ascendían a 49 millones de dólares en promedio. En el neoliberalismo el promedio de estas exportaciones eran de 305 millones de dólares. Actualmente, estamos exportando 2.100 millones de dólares en hidrocarburos y esto tiene que ver con dos cosas: han mejorado los precios, evidentemente, pero también han mejorado los volúmenes. [...] El Presidente Morales recibió un país que en el año 2005 producía 39 millones de metros cúbicos día, ahora estamos produciendo alrededor de 42 millones de metros cúbicos día, tres millones más en dos años.<sup>555</sup>

Aunado a esto podemos observar cómo es que Bolivia, junto al resto de países con gobiernos progresista del Cono Sur, en el marco del UNASUR, están apostado a un cierto extractivismo. Esto es, en un documento elaborado por los miembros del UNASUR, *Potencial de Recursos Energéticos y Minerales en América del Sur: Coincidencias Jurídicas hacia una Estrategia Regional*,<sup>556</sup> estos establecen que el aprovechamiento estratégico de los recursos energéticos y minerales destaca como un eje para la promoción de la integración regional, en especial al permitir la generación de complementariedades a gran escala, a partir de procesos de industrialización y desarrollo tecnológico en el marco de una integración productiva.<sup>557</sup>

Supuestamente, este estudio, que más bien es un inventario de los recursos naturales existentes en la región –reservas estimadas y probadas, actividades extractivas y de transformación-, pretende brindar un apoyo al establecimiento de políticas integrales de los países miembros de UNASUR en cuanto al aprovechamiento y uso de los recursos naturales, estableciendo una estrategia de integración y fortaleciendo las bases estructurales de la unidad.

La realización de dicho documento y el consecuente extractivismo al que se está apostando en aras de un supuesto desarrollo e integración regional es sumamente preocupante. Como bien se menciona a lo largo de ese texto, dichas negociaciones se están desarrollando con base a una estructura mínima acordada a nivel presidencial, cuando

---

<sup>555</sup> *Ibidem*, p. 11.

<sup>556</sup> Este documento se enmarca en el mandato de la Declaración de la IV Reunión Ordinaria del Consejo de Jefes y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR-, presentes en Lima, Perú, el 30 de noviembre de 2012.

<sup>557</sup> UNASUR; OLADE, *Potencial de Recursos Energéticos y Minerales en América del Sur: Coincidencias Jurídicas hacia una Estrategia Regional*, [en línea], octubre 2013. Disponible: <http://www.unasurg.org/uploads/3c/c7/3cc78ee394cd00b8b28a8f4c6df5e567/Potencial-Recursos-Energeticos-y-Minerales-en-AS.pdf>, [consulta: 22 de enero de 2014].

deberían ser los propios pueblos quienes estén dentro, y participando activamente, en la elaboración y tomas de decisiones tan trascendentales, donde no sólo se está hipotecando el futuro de las naciones latinoamericanas, sino se están abriendo, si es que alguna vez se cerraron, las puertas a la inversión privada extranjera –corporaciones transnacionales-, que ha demostrado a lo largo de la historia que en su afán de incrementar sus ganancias, la depredación y saqueo de la naturaleza son cosas mínimas.

La experiencia latinoamericana, particularmente la boliviana, ha señalado que los pueblos en la búsqueda de mejores condiciones de vida, de la reducción de la pobreza, de generar contextos de igualdad y equidad donde todos puedan tener las mismas oportunidades y, finalmente, de una transformación radical de la sociedad, van en contraposición de toda esta costumbre y/o práctica extractivista. Si bien, desean un desarrollo rechazan la idea de entender a éste como un simple crecimiento económico -que tal vez pueda generar oportunidades de empleo y distribución justa de los recursos-, puesto que ellos, los pueblos, los indígenas, los sectores populares de las ciudades, los obreros, los marginados, los subalternizados, entre otros, apuestan por un desarrollo que sea holístico. En el caso de los países andinos, el *suma qamaña*.

Con esto, queda que a pesar de los grandes discursos y apariencias, las formas tradicionales de ejercicio del mando en Bolivia no han sido aún puestas en discusión. Ha cambiado el gobierno pero no sus prácticas de ejercicio del poder.<sup>558</sup> Prueba de ello, es que a pesar de que el gobierno electo de Evo Morales se autodefiniera como un “gobierno de los movimientos sociales”, planteando desde el discurso, una radical transformación en las formas del ejercicio del poder y administración del país, la incorporación en el gobierno, y en las instituciones, de actores sociales, indígenas y populares no implicó automáticamente un cambio en los modos de hacer política.

Las administraciones de Evo Morales demuestran que no es suficiente con tan sólo tomar el poder, o con la existencia de una Constitución que crea y refunda otro Estado. Dichos sucesos no tienen el poder de cambiar de la noche a la mañana todas las estructuras coloniales. La construcción de una sociedad, verdaderamente, plurinacional basada en otro modelo de desarrollo, resultado de las movilizaciones que defendieron sus recursos

---

<sup>558</sup> Paola Martínez; Lucía Linsalata, “Las asimetrías del mandar obedeciendo en Bolivia”, en *¿Ahora es cuando? Bolivia: cambios y contradicciones*, México, Colectivo Katär Uta, 2001, p. 34.

naturales, es un proceso largo que no depende de una sola persona, sino de varias generaciones. Al parecer se está creando, actualmente, en Bolivia un Estado Plurinacional aparente, puesto que lo plurinacional supone no homogeneizar los aspectos políticos, culturales y sociales, situación que contrasta con las políticas implementadas desde el gobierno “evista”.

La implementación de políticas económicas, en la lógica capitalista-extractivista, tienden a limitar en cierta forma las iniciativas gubernamentales culturales. Como bien expone Makaran, es frecuente observar las contradicciones por una parte entre el discurso oficial pro indígena y las declaraciones de respeto a la naturaleza frente a la actitud extractivista del gobierno que afecta directamente a territorios indígenas; y por la otra, se observan las inconsistencias del principio de pluralidad de voces y formas de participación inscritos en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia frente a su tendencia de monopolizar la representación política a través del MAS.<sup>559</sup>

Finalmente, es necesario puntualizar que no hay que confundir las políticas implementadas y desarrolladas desde el aparato de gobierno con el proceso de cambio y refundación que han iniciado los movimientos sociales en Bolivia, a partir del 2000, en la búsqueda de una sociedad más justa en lo económico y social, armoniosa con la naturaleza e igual frente a los demás pueblos del mundo.

---

<sup>559</sup> Véase, Gaya Makaran, *Identidades confrontadas. Conflictos identitarios... op. cit.*, p. 308.



## A manera de conclusión

Boaventura de Sousa Santos tiende a bien apuntar que vivimos tiempos paradójicos. Por un lado, existe un sentimiento de urgencia de que es necesario hacer algo ya ante la crisis ecológica que puede llevar al mundo a colapsar; ante desigualdades sociales tan intensas que no es posible tolerar más; en suma, ante la creatividad destructiva del capitalismo tan grande hoy en día, que destruye la ecología y las relaciones sociales. De ahí la urgencia de muchos por intentar cambiar la realidad. Pero también existe un sentimiento casi opuesto: el sentimiento de que las transformaciones que necesitamos son de largo plazo, son civilizacionales.<sup>560</sup>

En Bolivia se vislumbran dichos sentimientos consecuencia, por un lado, pues estamos hablando de un país que fue construido por oligarquías señoriales y liberales, a través de un conjunto de instituciones económicas, políticas, sociales e ideológicas, que expropiaron los territorios de pueblos y culturas no occidentales; un país de larga historia de dominación, pero también de luchas y presencia popular conflictiva, subordinada, rebelde y autónoma, siendo que con el arribo del neoliberalismo, como en cualquier otro país periférico se incrementaron y profundizaron los problemas que acaecían desde larga data: en lo económico la recesión, la deuda externa y la inflación; en lo político la inestabilidad gubernamental; y en lo social la pobreza, la exclusión y marginación.

Por el otro, difícilmente durante los siglos XIX y XX se pudieron conciliar en lo concreto concepciones de progreso, crecimiento económico y desarrollo, ni siquiera la supuesta homogeneización de la población, buscada tenazmente por las élites bolivianas, pudo realizarse a pesar de todas las políticas –culturales y económicas- implementadas por los diferentes gobiernos. De esta forma, resulta indiscutible a la luz de los hechos la existencia de una urgencia de muchos sectores de la población, en especial de los sectores más pobres, por intentar cambiar la realidad.

Ahora bien, una primera conclusión que se desprende a partir de la elaboración de esta investigación fue entender que las luchas transformadoras se enmarcan en un horizonte histórico complejo, es decir, se localizan dentro del fracaso del modelo económico neoliberal, pero también se encuentran intrínsecamente relacionadas con la cuestión del

---

<sup>560</sup> Boaventura de Sousa Santos, “La reinención del Estado y el Estado Plurinacional... *op. cit.*, p. 193.

Estado y la democracia. Las movilizaciones indígenas y populares en Bolivia fueron consecuencia de esta crisis capitalista de corte neoliberal, pero también fueron consecuencia de la crisis de las estructuras estatales basadas en mecanismos coloniales, de exclusión social y de reproducción de la pobreza.

Es preciso esclarecer que aunque las movilizaciones que se desarrollaron a partir del año 2000 al 2005 son de diversa índole –estudiantiles, de transportistas, del sector de la salud, de trabajadores del gobierno, de maestros, entre otras-, las referentes a la defensa y recuperación de los recursos naturales –agua y gas-, objeto de dicha investigación, protagonizadas por indígenas, campesinos y sectores populares del campo y la ciudad, junto a otros actores de viejo cuño, tuvieron consecuencias de largo alcance: lucharon por un cambio, atacaron el *status quo* del Estado, no sólo demandaban la supresión del modelo de desarrollo neoliberal que saquea y depreda a la naturaleza, sino trataron de modificar las estructuras coloniales, discriminatorias y excluyentes que sustentan al Estado-nación boliviano, las cuales no permitían crear mecanismos de participación y decisión referentes a lo común.

La crítica al modelo de desarrollo, imperante desde la década de 1980, se situó en los sistemas comunitarios de apropiación de los recursos naturales –en este caso del agua- en beneficio y uso de la comunidad frente a la dinámica privatizadora que sustenta dicho modelo. Mientras que la crítica a las estructuras republicadas y coloniales existentes, así como al sistema democrático representativo basado en la existencia de partidos políticos como único canal de comunicación entre la población y los poderes establecidos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), se observó en los diferentes modos de organización y accionar de la población para demandar al Estado el cumplimiento de sus reclamos.

Es por ello que si las movilizaciones analizadas a lo largo de esta investigación se enmarcan en este horizonte histórico, entonces son innegables las consecuencias que éstas generaron para la creación de una nueva Constitución Política, para la transformación y conformación del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, así como para la elección de Evo Morales como el primer presidente indígena del aquel país. Asimismo, es un hecho que estas movilizaciones trataron, y lo siguen haciendo, de buscar soluciones a problemas locales y nacionales de alcance internacional.



Es por ello que quisiéramos puntualizar detalladamente cuáles han sido los logros y los retos, pero también las contradicciones y limitaciones de todo este proceso que ha modificado sustancialmente conceptos –democracia, Estado-nación, desarrollo–, provenientes de una tradición occidental<sup>561</sup> que ha sido universalizada por los grandes centros dominantes como la línea a seguir por parte de los países pobres, atrasados, marginados, subdesarrollados y dependientes. Línea que si se sigue al pie de la letra, según sus misioneros, llevarán a las sociedades a un estadio de “desarrollo” igual al que se populariza en los países desarrollados.

Para ello, hemos decidido separar los logros, retos y contradicciones referentes a las cuestiones de desarrollo y economía y, por otro lado, las de Estado y democracia. En ambos casos, realizamos una síntesis de lo que han significado dichos conceptos en la conformación de Bolivia como un actor del sistema capitalista mundial, así como las repercusiones que se generaron en el interior, situación que se expuso a lo largo de la investigación, pero que son necesarias mencionar nuevamente para poder contrastarlas con lo concebido por parte de las movilizaciones indígenas y populares.

### *Desarrollo y modelo neoliberal*

A lo largo de todo el siglo XX y principios del XXI, el concepto de desarrollo ha sido central en el proceso de construcción de lo que se ha dado en llamar modernidad.<sup>562</sup> Dicho desarrollo siempre ha estado encaminado a obtener simplemente un crecimiento económico. La modernidad ha estado basada en la apropiación y control de los recursos naturales y el hombre, éste entendido como parte de la naturaleza.

El desarrollo se muestra así como un fin en sí mismo, lo que significa salir/dominar la naturaleza y también a los hombres. Son sutiles las redes de argumentos que conectan la dominación de la naturaleza con la dominación de los hombres entre sí, basta recordar aquí todos los pueblos, segmentos, clases o grupos sociales que son o fueron dominados están asimilados a la condición de naturaleza, puesto que la sociedad moderna se establece al sancionar la dominación de la naturaleza y, como tal, legitima la dominación de los seres humanos semiotizados como naturales [...].<sup>563</sup>

---

<sup>561</sup> Mucha de la teoría política, aplicado hoy por hoy a todas las sociedades, fue desarrollada básicamente en cinco países: Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Estados Unidos.

<sup>562</sup> Carlos Walter Porto Goncalves, *Geo-grafías. Movimientos sociales... op. cit.*, p. 7.

<sup>563</sup> *Ibidem*, p. 8.

Este proceso es el que se ha universalizado en el sistema económico internacional, profundizándose aún más en los países de la periferia, en este caso América Latina, los cuales han representaron el papel en el sistema capitalista de economías primario-exportadores. Un papel reforzado y mantenido actualmente por los países centrales, principalmente Estados Unidos, empresas transnacionales y la oligarquía dentro de cada uno de los Estados latinoamericanos.

Ante esto es necesario advertir que este modo de producción capitalista, que una vez constituido, con “sus condiciones de acumulación y de reproducción ampliada a escala mundial han determinado los ritmos de extracción de materias primas, las formas de utilización de los recursos y los procesos de transformación del medio natural,”<sup>564</sup> ha sido la causa principal de la erosión de los suelos, de la pérdida de fertilidad de las tierras, de la destrucción de la capacidad de producción de los ecosistemas, así como del agotamiento de los recursos naturales.

A partir de la aplicación del modelo neoliberal esta situación se ha acentuado y reforzado en países subdesarrollados y dependientes como Bolivia. Se desarrollaron modelos de privatización de recursos naturales y capitalización de empresas públicas con el objeto, según sus predicadores, de atraer inversión externa capaz de mejorar la productividad empresarial, elevar los ingresos del Estado, ampliar la base moderna de la economía boliviana y generar bienestar social.

Sin embargo, a principios del siglo XXI se visibilizó que estábamos frente a una crisis económica y socio-política consecuencia de los claros límites del modelo de crecimiento económico neoliberal.

García Linera<sup>565</sup> proporciona unas cifras de la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB), desde la capitalización hasta el 2003: en 1997, 4,9%; en 1998, 5%; en 1999, 0,4%; en 2000, 2,2%; en 2001, 1,5%; en 2002, 2,7% y en 2003, en 2,4%. Según la explicación que da el autor, el promedio del crecimiento anual del PIB en siete años fue de 2,7%, a ello le resta la tasa de crecimiento demográfico anual del 2,2%, concluyendo que la economía boliviana había crecido en promedio un 0,5% anual en el periodo de capitalización frente al 10% que prometieron las elites bolivianas. Por otra parte durante

---

<sup>564</sup> Enrique Leff, *Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable*, México, Siglo XXI Editores/UNAM, 2007, p. 140.

<sup>565</sup> Álvaro García Linera, “La lucha por el poder en Bolivia”, en *La potencia plebeya...*, op. cit., p. 448.

todo este proceso de capitalización boliviano el trabajo informal había crecido del 58% al 69%, siendo ocho de cada diez empleos precarios, insatisfactorios y mal remunerados.<sup>566</sup>

Asimismo, se demuestra que las grandes empresas sólo empleaban al 7% de la población; las pequeñas y medianas empresas el 10%, en tanto que la empresa familiar, bajo relaciones de trabajo tradicionales, empleaba, y parece ser que lo sigue haciendo, a poco más del 80% de la población.<sup>567</sup>

Sin embargo, también es cierto que el desempeño de la economía nacional tiene condiciones estructurales, que vienen muchas veces desde la época colonial, por lo cual, no se puede decir que sólo la capitalización o la inversión externa son las generadoras de los desequilibrios económicos y sociales. Aun así, este modelo neoliberal inauguró un tipo de desarrollo basado exclusivamente en el protagonismo productivo de la inversión externa, siendo esta inversión en sociedades subdesarrolladas y dependientes de tipo enclave, es decir, de alta inversión tecnológica, de bajo empleo, nula diversificación productiva y externalización de las ganancias.<sup>568</sup> Asimismo, rompió los lazos de articulación entre la economía moderna y globalizada de Bolivia (28% de la población) y la economía campesina tradicional (550.000 unidades familiares, 35% de la población) y la economía mercantil familiar-artesanal (700.00 establecimientos urbanos, 37% de la población nacional).<sup>569</sup>

A partir de este escenario de crisis del modelo de crecimiento económico es entendible que sectores marginados, que sufrieron directamente las consecuencias de la aplicación de dichas políticas neoliberales, se movilizan en busca de un cambio de modelo económico y político más justo y equitativo para el ancho de la población. El que sólo se señale ciertos acontecimientos –la Guerra del Agua y la Guerra del Gas–, no implica que no existieran otras movilizaciones de diversos sectores de la sociedad con demandas muy específicas que velan por resolver sus intereses tanto en el ámbito laboral como familiar, como se anotó anteriormente.

---

<sup>566</sup> *Ibidem*, p. 449.

<sup>567</sup> *Ídem*.

<sup>568</sup> *Ibidem*, p. 451. García Linera menciona que este modelo de desarrollo incrementó drásticamente las desigualdades económicas, elevando la tasa de concentración de la riqueza y aumentando la precariedad de las condiciones de trabajo y el desempleo, limitando las tasas de crecimiento y reduciendo la redistribución de la riqueza.

<sup>569</sup> Álvaro García Linera, “La lucha por el poder en Bolivia... *op. cit.*, p. 451.

Lo interesante es observar dentro de todo este proceso de descomposición social como las reivindicaciones de la problemática del antiguo movimiento obrero –salario directo y mejores condiciones para la reproducción del trabajo- se desconcentraron para ubicarse en una política de necesidades básicas –agua, territorio, servicios y recursos públicos, hidrocarburos, educación-, puesto que éstas están siendo mercantilizadas por las empresas transnacionales en complicidad con la oligarquía nacional.

Como se pudo observar en los capítulos tercero y cuarto, los sectores indígenas y populares, en defensa del agua y los hidrocarburos, realizaron fuertes cuestionamientos a las políticas implementadas por parte de la oligarquía y, por tanto, al papel de la economía primario-exportadora boliviana dentro del sistema capitalista mundial. La Guerra del Agua y la Guerra del Gas fueron hechos coyunturales que ayudaron a diseñar espacios alternativos al modelo neoliberal. Situaciones acaecidas en “epicentros” neurálgicos, sin desmeritar las acciones llevadas a cabo en otros puntos del país, representan esa *praxis* liberatoria y emancipatoria al sojuzgamiento de la oligarquía boliviana articulada con empresas transnacionales y organismos internacionales, en pro del modo de producción capitalista.

El cuestionamiento que se hace al sistema económico boliviano tiene que ver con la necesidad de replantear las relaciones de propiedad con base en las cuales se sustentaba, o sustenta, el orden neoliberal; un replanteamiento que está íntimamente vinculado con la Revolución de 1952, es decir, tierra<sup>570</sup> y nacionalización. Sin embargo, este nuevo proyecto de nacionalización, abanderado por la movilización social en 2005, maduró en el deseo de una reapropiación del control colectivo, no estatal, sobre los recursos naturales y sobre el excedente generado por la explotación de éstos, accediendo a una redistribución más equitativa de la riqueza.

Posteriormente, y consecuentemente al arribo de Morales al poder, se maduró toda esta crítica, al concepto de desarrollo y al orden neoliberal, a través de concepciones indígenas, específicamente el concepto de *suma qamaña*, o vivir bien, el cual fue una

---

<sup>570</sup> A partir de estas movilizaciones, según señala Martínez y Linsalata, surgió la necesidad de un nuevo reparto agrario respetuoso de las distintas formas de propiedad existentes en el territorio nacional, lo cual respondía a la necesidad de crear condiciones de mayor equidad económica en el país y, a la vez, de reconocer a los pueblos indígenas el derecho a reapropiarse de sus territorios originarios y administrarlos según sus usos y costumbres. Véase, Paola Martínez; Lucía Linsalata, “Las asimetrías del mandar obedeciendo en Bolivia”... *op. cit.*, p. 21.

consigan y/o concepto que no se vio ni se escuchó durante los levantamiento del 2000 al 2005. Sin embargo, es necesario poner de relieve la importancia que este fenómeno tiene, es decir, no sólo se trata de contraponer concepciones indígenas frente a nociones occidentales de desarrollo, que en sí resulta importantísimo, sino que dichas concepciones han llegado a formularse como preceptos constitucionales, que han modificado de manera sustancial la forma de entender la construcción de un Estado, sus instituciones o, en suma, la vida misma.

Lo trascendental se inscribe cuando, en la primera administración de Evo Morales<sup>571</sup>, se formula una Asamblea Constituyente que crea la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, donde en su artículo 8, se encuentra una de las influencias indígenas más importantes, el concepto de *suma qamaña*. Éste es entendido como un principio ético-moral, en contraposición de lo que se entiende por desarrollo. Dicho concepto junto a otros de origen indígena se enfocan en la concepción de enmarcar una sociedad que se define como plurinacional. Lo importante a destacar aquí es que hay un esfuerzo deliberado de volver a hacer visibles saberes y concepciones que han estado ocultas y sojuzgadas por largo tiempo.<sup>572</sup> Saberes que introducen una idea contraria al sistema de “desequilibrio de la vida”, sea una familia, en el *ayllu-marka*, en una sociedad, en el sistema mundo.<sup>573</sup> Los movimientos indígenas y populares en Bolivia cuestionan al régimen de desarrollo imperante, su *bien vivir* cuestiona el llamado desarrollo, en tanto concepto holístico que supera el economicismo.

Si bien es cierto, que el Bien Vivir, o Buen Vivir, es una categoría en la filosofía de las sociedades indígenas ancestrales, la cual va perdiendo terreno por efecto de las diversas prácticas y mensajes de la modernidad occidental; también es cierto que su aporte nos invita a asumir otros saberes y otras posibilidades diferentes a las pugnadas por organismos

---

<sup>571</sup> Los gobiernos de Evo Morales serán abordados de manera sumaria en el *Epílogo*.

<sup>572</sup> Eduardo Gudynas, “Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión ambiental del Buen Vivir”, en Farah, Ivonne; Vasapollo, Luciano (coord.), *Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?*, Bolivia, CIDES-UMSA, Sapienza Università di Roma, OXFAM, 2011, p. 235.

<sup>573</sup> Pablo Mamani Ramírez, “Qamir qamaña: dureza de ‘estar estando’ y dulzura de ‘ser siendo’”, en Farah, Ivonne, Vasapollo, Luciano (coord.), *Vivir bien... op. cit.*, pp. 66. Pablo Mamani considera que es totalmente insuficiente el concepto de *suma qamaña* para entender y pensar en la complejidad de la civilización andina, para ello habría que añadir una serie de conceptos, palabras, con las cuales recrear toda la cosmovisión andina.

internacionales, ya sean de cooperación o financieras, que pugna por el Desarrollo Sustentable y Economía Verde.<sup>574</sup>

El Buen Vivir más que una declaración constitucional de Bolivia, o Ecuador, se presenta entonces como una oportunidad para construir colectivamente un nuevo régimen de desarrollo, más claramente, una nueva forma de vida. El Buen Vivir, diría Alberto Acosta, constituye un paso cualitativo importante al pasar del desarrollo sustentable y sus múltiples sinónimos, a una visión diferente, más rica en contenidos y más compleja.<sup>575</sup> Éste es un concepto en construcción. Gudynas<sup>576</sup> apunta que esto plantea algunas dificultades y varias posibilidades. Entre las primeas se encuentra que existen distintos énfasis sobre los contenidos del buen vivir, y que éstos representan distintas posturas teóricas, prácticas políticas e incluso diferencias entre sus expresiones normativas. Sin embargo, todas las aproximaciones coinciden en que este nuevo concepto es resultado de la inconformidad frente a los estilos de desarrollo convencionales y que es necesario un cambio radical.

En cuanto a las posibilidades, se destaca que como es un proceso en marcha es posible incidir en los actuales debates para avanzar hacia mejores conceptualizaciones, evaluaciones sobre los aciertos o dificultades en sus primeras aplicaciones prácticas y mayores presiones.<sup>577</sup> Asimismo como es un concepto en construcción, es necesario construirlo desde todos los ámbitos estratégicos posibles, empezando por el nivel local, sin descuidar el global.<sup>578</sup> En Bolivia, los movimientos sociales están desarrollando espacios alternativos al modelo neoliberal y democracia occidental. Y aunque existen contradicciones, complicaciones y retos en la búsqueda de dichos espacios alternativos, así como en el proceso de definir en lo concreto el proyecto de nación basado en otra visión de desarrollo, éstas son situaciones en las que los propios movimientos sociales tienen buscar las respuestas.

---

<sup>574</sup> Alberto Acosta, “Sólo imaginando otros mundos, se cambiará éste. Reflexiones sobre el Buen Vivir”, en Farah, Ivonne; Vasapollo, Luciano (coord.), *Bien Vivir... op. cit.*, pp. 190-191.

<sup>575</sup> *Ibidem*, p. 193.

<sup>576</sup> Eduardo Gudynas, “Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión ambiental del Buen Vivir”..., *op. cit.*, p. 232.

<sup>577</sup> *Ídem*.

<sup>578</sup> Alberto Acosta, “Sólo imaginando otros mundos, se cambiará éste. Reflexiones sobre el Buen Vivir”..., *op. cit.*, p. 204.

## *Estado-nación y democracia representativa*

La conformación de los Estados-nación representó para las sociedades latinoamericanas la negación de la existencia de la diversidad cultural. Con la implementación del derecho liberal en las constituciones latinoamericanas: la igualdad y ciudadanía como ejes articuladores en las cartas constitutivas de los Estados, se negó el sentido de ser diferentes, así como de tener distintas necesidades para la satisfacción de intereses colectivos.

Asimismo, el constitucionalismo moderno, que fue una emergencia de la sociedad civil en Europa, en las Américas fue una imposición desde arriba. La independencia no fue conquistada por las poblaciones originarias, sino por los descendientes de los conquistadores. Por tal motivo, este constitucionalismo moderno fue el que aseguró la continuidad del colonialismo en las épocas posteriores a la independencia.

A finales del siglo XX e inicios del XXI, comienza un cuestionamiento por comunidades y/o pueblos indígenas:

La emergencia indígena tiene múltiples aspectos y factores a tomar en cuenta. Es en primer lugar un proceso de afirmación de identidades colectivas y constitución de nuevos actores. Pero es también un fuerte cuestionamiento al Estado Republicano, centralizado y unitario que se trató de construir en América latina (*sic*). Es un cuestionamiento a las Historias oficiales, al relato que estos Estados han tratado de construir.<sup>579</sup>

Es por ello que la movilización indígena-popular en Bolivia representa un parteaguas dentro de los movimientos sociales. Si bien se pugna por la recuperación de la propiedad de sus recursos naturales saqueados por empresas transnacionales en complicidad con las oligarquías de cada país, dentro de esta recuperación va implícita la reivindicación de aspectos culturales, indígenas e identitarios que siguen siendo negados tanto en el ámbito jurídico como en el político-institucional-administrativo. Estas reivindicaciones van acompañadas del diseño de espacios alternativos a la democracia occidental, como son las múltiples formas de organización y toma de decisiones desplegadas durante las movilizaciones sociales; de igual forma, el Estado Plurinacional de Bolivia.

Además del contexto caracterizado por la crisis neoliberal, también existe una crisis de los componentes estatales de “larga duración”.<sup>580</sup> La caracterización del escenario

---

<sup>579</sup> José Bengoa, *La emergencia indígena en América Latina*, Chile, FCE, 2007, p. 13.

<sup>580</sup> Según García Linera el Estado tiene dos niveles de instituciones y componentes: uno, de larga duración, que permanece durante décadas y siglos, constituido por los componentes estructurales del orden estatal. por

sociopolítico boliviano anterior a estas movilizaciones era la existencia de una correlación de fuerzas basadas en una concentración, o monopolización, del capital burocrático administrativo, de la capacidad de decisión; un bloque de poder conformado por sectores exportadores, parte de la banca, la inversión extranjera directa y organismos internacionales de cooperación. Éste bloque de poder desplazó a los bloques organizados corporativamente<sup>581</sup> –COB-, como se observó detalladamente en el segundo capítulo. A partir de la irrupción indígena y popular, en el año 2000, de grupos sociales que habían sido invisibilizados y subalternizados por el aparato político-estatal, el bloque de poder que caracterizó a la sociedad boliviana desde la década de 1980 se empezó a resquebrajar, trayendo consigo que los sectores marginados comenzaran a construir fuerzas de presión capaces de modificar la manera de influir en las políticas públicas, de cambiar leyes y de cambiar presidentes.

Por otra parte, es sabido que la república boliviana se fundó dejando en pie los mecanismos coloniales que consagraban prestigio, propiedad y poder en función del color de piel, del apellido, el idioma y el linaje. Las distintas formas estatales que se produjeron hasta 1952 no modificaron sustancialmente el *apartheid* político.<sup>582</sup> Ya para la Revolución de 1952 se iniciaron procesos de democratización y homogeneización cultural que transformaron el régimen de exclusión étnica y cultural del Estado oligárquico. Por ejemplo, si bien el voto universal amplió el derecho de ciudadanía política liberal a millones de indígenas, esta reforma se aplicó en medio de una sociedad portadora de otros sistemas tradicionales de organización política, los cuales quedaban borrados como mecanismos eficientes en el ejercicio de prerrogativas políticas.

Pese a los profundos procesos de mestizajes cultural existentes en Bolivia, no se pudo construir en realidad una comunidad nacional. “En el país existen por lo menos treinta idiomas y/o dialectos regionales, existen dos idiomas que son la lengua materna del 37% de la población (el aimara y el quechua), en tanto que cerca del 62% se identifica con algún

---

otra parte, están los componentes de “corta duración”, que se modifican cada dos o tres décadas (Estado nacionalistas, Estado neoliberal, etc.).

<sup>581</sup> Álvaro García Linera, “La lucha por el poder en Bolivia... *op. cit.*, p. 453.

<sup>582</sup> *Ibidem*, p. 456. “El Estado caudillista (1825-1880), y el régimen de la llamada democracia ‘censitaria’ (1880-1952), tanto en su momento conservador como liberal, modificaron muchas veces la Constitución Política del Estado; sin embargo, la exclusión político-cultural se mantuvo, tanto en la normatividad del Estado, como en la práctica cotidiana de las personas. De hecho, se puede decir que en todo este periodo la exclusión étnica se convertiría en el eje articulador de la cohesión estatal.” Véase Álvaro García Linera, “La lucha por el poder en Bolivia... *op. cit.*, pp. 456-457.



pueblo originario.”<sup>583</sup> García Linera menciona que a lo largo de toda la etapa republicana se efectuaron varios ciclos de movilización indígena, tanto por reivindicaciones parciales como por el poder político. Y es precisamente, a partir del 2000, que se desarrolló un nuevo ciclo de insurgencia indígena, combinada con otros sectores subalternos –los cuales fueron pauperizados aún más a partir de las políticas neoliberales-, dirigido a disputar la conducta estatal y la hegemonía política-cultural de la sociedad.

Lo característico de este nuevo ciclo rebelde es que la articulación de diversos sectores sociales fue en torno a la conquista de necesidades básicas y a la defensa de recursos territoriales de gestión comunitaria, pequeñas estructuras organizativas locales de tipo territorial y no territorial, basadas en el lugar de residencia, en el control de bienes como la tierra y el agua, en la actividad laboral y gremial, que evolucionó en la demanda de una transformación radical del Estado.

La importancia histórica del proceso boliviano para los movimientos sociales en las diversas latitudes es su capacidad para reconstruir, por una parte, el tejido social que ha sido agrietado en esta etapa neoliberal; y por la otra, su autonomía frente al Estado, redefiniendo radicalmente lo que entienden por democracia. Los movimientos indígenas y populares en Bolivia crearon mecanismos de participación, de adhesión y filiación colectiva a escala regional, flexibles y fundamentalmente territorializados. Su núcleo organizativo son la comunidad indígena-campesina en el área rural y las comunidades vecinales en el área urbana. García Linera apunta:

[...] los movimientos sociales y societales han transformado varios aspectos del campo político, modificando el espacio legítimo donde se produce política, rediseñando la condición socioeconómica y étnica de los actores políticos, innovando con técnicas sociales novedosas para hacer política, además de mutar los fines y sentidos de la política en sus características no sólo neoliberales, sino fundamentalmente republicanas, planteándose transformar el actual Estado monocultural en un Estado y una institucionalidad política multinacionales.<sup>584</sup>

En suma, lo que pretendieron los diferentes sectores sociales a través de las diversas movilizaciones fue cuestionar y transformar las estructuras de la relación de dominación existentes: el eje colonial y el de la democracia representativa de cuño liberal, como único

---

<sup>583</sup> Álvaro García Linera, “La lucha por el poder en Bolivia... *op. cit.*, p. 458.

<sup>584</sup> *Ibidem*, p. 462.

espacio de configuración de la política.<sup>585</sup> El cuestionamiento al eje colonial de dominación tenía que ver con la necesidad de transformar todo el conjunto de instituciones que organizaban y reproducían la condición de dominación de una sola cultura y de un solo tipo de sociedad sobre todas las existentes en el país. Mientras que el cuestionamiento a la democracia representativa como espacio único de configuración de la política era parte sustancial de un macro-problema. Según Martínez y Linsalata, la superación de esta democracia representativa pasaba no sólo por el reconocimiento del derecho de los pueblos a autogobernarse según sus usos y costumbres, sino también por un proceso más amplio de reconfiguración general de los procedimientos y las instituciones políticas que tomaran en cuenta la complejidad de la plurinacionalidad del país.

De esto último se desprende la demanda de una Asamblea Constituyente, sin intermediación partidaria y por representación autónoma, para emprender el complejo proceso de refundación del Estado boliviano, redefiniendo las formas tradicionales y dominantes del ejercicio de la política.

Finalmente, a partir de todas estas experiencias donde somos conscientes que existen limitaciones y contradicciones, y que aún faltan muchos retos por cumplir, se manifiesta la necesidad de seguir aprendiendo con el Sur. Un Sur conformado de pueblos, países y naciones que han sufrido más con el desarrollo del capitalismo global porque se mantuvieron como países subdesarrollados y dependientes sin llegar nunca al marco de los países desarrollados.<sup>586</sup> El aprender con el Sur invita a las teorías dominantes en las Ciencias Sociales y, específicamente, en las Relaciones Internacionales a observar que la comprensión del mundo es mucho más amplia de la que proviene de la tradición occidental, enseña que hay otras visiones del mundo que hay que compartir, ver y analizar.

Ante esto, podemos observar que existen prácticas novedosas de solución a problemas locales, regionales, nacionales e internacionales, con lenguajes nuevos, narrativas diferentes y diferentes imaginarios, donde algunos ni si quiera se quieren caracterizar de izquierda o de derecha. Existen nuevos actores con prácticas transformadoras: los movimientos indígenas, pero también los movimientos feministas, los campesinos, ecologistas y muchos otros. Asimismo, hay nuevas formas y culturas de

---

<sup>585</sup> Paola Martínez; Lucía Linsalata, “Las asimetrías del mandar obedeciendo en Bolivia”..., *op. cit.*, p. 20.

<sup>586</sup> Boaventura de Sousa Santos, “La reinención del Estado y el Estado Plurinacional... *op. cit.*, pp. 196-197.

organización, donde los partidos políticos dejan de ser los únicos representantes organizados de los intereses de los pueblos.<sup>587</sup> Finalmente, existen demandas diversas, en ocasiones contrapuestas a las demandas de la izquierda en Occidente, por ejemplo, en América Latina la lucha por la igualdad es también una lucha por el reconocimiento de las diferencias.

---

<sup>587</sup> De Sousa Santos explica que en este mundo neoliberalizado existe una neoterritorialidad. Es decir, la idea de que con la globalización todo se iba a desterritorializar, todo iba a ser global, se ve empañada por la repentina importancia que cobran el territorio y la tierra como aspectos centrales.



## Anexos

### Anexo 1. Cronología de la Guerra del Agua

Se firma el contrato entre el Gobierno de Bolivia y Aguas del Tunari, donde se concede el monopolio de distribución del agua en Cochabamba y alrededores.	3 de septiembre	<b>1999</b>
Se promulga la Ley 2029 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.	20 de octubre	
La empresa Aguas del Tunari se hace cargo de SEMAPA	1	
Los regantes inician los bloqueos de caminos.	4 y 5	<b>Noviembre</b>
Se crea la Coordinadora de la Defensa del Agua y de la Vida, conformada por organizaciones de regantes, campesinos, trabajadores fabriles, organizaciones profesionales, vecinos y comités de agua.	12	
Se incrementan las tarifas de agua, en algunos casos en más de 100%	Diciembre y enero	
La Coordinadora del Agua convoca a una movilización en contra del contrato con Aguas del Tunari y la Ley 2029.	10	<b>2000</b>
“Bloqueo indefinido por la dignidad”.	11-14	<b>Enero</b>
El gobierno se compromete a elaborar una nueva estructura tarifaria, a estudiar la revisión del contrato con Aguas del Tunari y a modificar la Ley 2029.		
Los convocantes al bloqueo, además de la Coordinadora del Agua, eran la COB, los fabriles, maestros y el Comité Cívico que emplazaban a un “paro cívico” de 24 horas.	11	<b>Enero</b>
Sus demandas era: ¡No al contrato con Aguas del Tunari! ¡No al tarifazo! ¡No a la Ley 2029!		<b>2000</b>

<p>El Comité Cívico levanta “su bloqueo”. Por su parte, la Coordinadora del Agua, comenzó otro bloqueo de carreteras, reclamando la anulación del contrato con la empresa Aguas del Tunari y de las tarifas actuales. Asimismo, los campesinos en adhesión marcharon para que se revise la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.</p>	12		
<p>Cochabamba quedó aislada del resto del país, por segundo día consecutivo, a causa del bloqueo de caminos que llevaron a cabo decenas de campesinos. Asimismo, los transportistas declararon un paro indefinido en apoyo al reclamo por las tarifas del agua.</p> <p>La Coordinadora del Agua convoca a un “Cabildo abierto”, dado que las “organizaciones sociales” (COB, trabajadores organizados en sindicatos, etc.) no han respondido.</p> <p>Finalmente, ocurre el primer enfrentamiento bajo la forma de “motín civil” en la Plaza 14 de setiembre.</p>	13		
<p>Reunidos en el cabildo abierto, los asistentes coincidieron en que no se debe levantar las medidas de presión, los bloqueos y el paro de transportes hasta que el gobierno acepte las demandas regionales.</p> <p>Los manifestantes se quedaron en la Plaza 14 de setiembre a la espera de los resultados de negociación, que comenzaron los Ministros del gobierno nacional, los representantes de la Coordinadora del Agua y el Comité Cívico de Cochabamba.</p> <p>Finalmente, como resultado de las protestas, se conformó una comisión mixta de negociación que revisará la estructura tarifaria del agua potable, el contrato firmado con Aguas del Tunari y la revisión de la Ley 2029. El Acuerdo se denominó “Acuerdo regional por la dotación de agua, defensa de la economía popular, la convivencia pacífica y el respeto de los derechos humanos”,</p>	14		
<p>Los vecinos de Cochabamba convocaron para el 4 de febrero, la toma simbólica de la ciudad. Más de 20 mil campesinos se aprestan a iniciar una nueva fase de la guerra del agua, en protesta por el alza de tarifas. Frente a estas amenazas, el Presidente ordena el despliegue de las fuerzas armadas en la zona y pone a Cochabamba bajo control militar y policial. Por la noche, la Iglesia intenta acercar a las partes en el conflicto, Gobierno y Coordinadora del Agua, para evitar acciones de violencia.</p>	2	Febrero	
<p>El Gobierno y la Coordinadora del Agua no logran llegar a acuerdo. Sin embargo, queda planteada la posibilidad de que las negociaciones por las tarifas de agua continúen hasta su resolución.</p>	3		

<p>Se llevó a cabo la “Toma de Cochabamba”, liderada por la Coordinadora del Agua. Vecinos, maestros, profesionales y campesinos se movilizaron por la ciudad, y en los accesos a ésta se produjeron enfrentamientos con las fuerzas policiales. Los enfrentamientos se prolongaron por más de 14 horas, dejando decenas de heridos y detenidos.</p> <p>Entretanto, efectivos militares, destinados a controlar los accesos a la ciudad se enfrentaron con campesinos de la región de Parotani y en el Cañador fueron detenidos 20 autobuses con cocaleros.</p> <p>Comercios, bancos, supermercados, y todo tipo de entidades públicas y privadas, cerraron sus puertas, sin haberse declarado un paro cívico.</p> <p>Los policías ocuparon la Plaza 14 de setiembre, y los alrededores, no permitiendo que ningún ciudadano ingresara a ese sector. Mientras tanto, los manifestantes rodearon a las fuerzas del orden en el centro de la ciudad. Cochabamba había sido tomada.</p> <p>Por su parte, los detenidos de la cárcel de San Sebastián se amotinaron y ocuparon los techos del penal para expresar su apoyo a la protesta ciudadana.</p> <p>Las demandas de toda la movilización continuaron siendo las mismas: no a la Ley 2029, no al contrato de concesión, no a la elevación de las tarifas del agua.</p>	4	Febrero	2000
<p>Continuaron enfrentamientos y bloqueos en toda la ciudad. Se toma de nuevo la Plaza central, 14 de setiembre, donde existe un combate callejero durante todo el día, en una superficie de más de 30 manzanas en torno a la plaza. Se produce una represión intensa con gases lacrimógenos.</p> <p>Por la noche, el Gobierno y las organizaciones acuerdan, que para el cobro del servicio de agua y alcantarillado se mantengan las tarifas que regían en octubre de 1999, hasta que terminen las negociaciones.</p>	5		
<p>La Coordinadora del Agua propuso fortalecer las organizaciones de base, continuar el entendimiento y discusión en torno a la temática del agua, y pedir cuentas a los dirigentes que han mostrado posturas “ambiguas”.</p>	6		
<p>La Coordinadora convoca a una consulta pública donde participan más de 50 mil personas. Se instalaron más de 140 mesas electorales en todos los barrios y zonas de la ciudad, sobre todo en plazas, mercados y templos.</p> <p>La consulta consistió en tres preguntas: “Si está de acuerdo con la elevación de las tarifas del agua potable”. “Si desea mantener el contrato suscrito con Aguas del Tunari”. Y, “si aprueba las modificaciones a la Ley 2029”.</p> <p>El 96% de los votantes apoyaron cancelar el contrato de concesión, asimismo, se exigió la revisión de la Ley 2029, así como la salida de la empresa Aguas del Tunari de Cochabamba. Sin embargo, las autoridades declararon ilegal la consulta.</p>	26	Marzo	
<p>Una asamblea decretó parar y bloquear los caminos en Cochabamba. Preparan la Batalla Final para que Aguas del Tunari se vaya, se congelen las tarifas y se modifique la Ley 2029. La Coordinadora del Agua pidió la población aprovisionarse de alimentos y agua porque “la Batalla Final será larga”.</p>	31		

<p>La Confederación de Campesinos de Bolivia ordenó a sus afiliados interrumpir la circulación vehicular en todas las vías carreteras del país. Entre las demandas campesinas se destacan la reforma a la Ley de Aguas, y a la del Instituto Nacional de Reforma Agraria, así como a la no erradicación de los cultivos de coca de los yungas de La Paz.</p> <p>La Coordinadora del Agua ratificó que el paro y el bloqueo de caminos serán sostenidos hasta que la empresa Aguas del Tunari abandone la capital del valle. Por otra parte, los trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) determinaron suspender este martes sus actividades en apoyo a la Coordinadora del Agua.</p>	3	Abril	2000
<p>La Coordinadora del Agua convoca a bloqueos de carreteras y un paro indefinido para exigir que Aguas del Tunari se vaya, se modifique la Ley 2029 y se respete el uso público del agua, así como los usos y costumbres, pese a la inminente represión policial.</p> <p>Por otra parte, el Comité Cívico rechaza el llamado a un paro y defiende el diálogo con el gobierno. En consecuencia, el edificio del Comité Cívico fue apedreado por estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón, y fueron destruidos algunos de sus símbolos. El Arzobispo de Cochabamba expresó que la iglesia no estaba de acuerdo con un eventual estado de sitio. La Coordinadora del Agua convocó a la toma física de las instalaciones de Aguas del Tunari si el gobierno en 24 horas no decidía que el consorcio se fuera.</p>	4		
<p>En Cochabamba sigue el bloqueo de caminos; asimismo, un paro en toda la región por campesinos.</p> <p>Una gran movilización convocada por la Coordinadora del Agua toma la Capital con el reclamo de la anulación del contrato con Aguas del Tunari, mientras el Gobierno ratifica su negativa a negociar.</p> <p>En el camino de Laja se producen los primeros enfrentamientos entre las fuerzas militares y los campesinos. Los militares toman el control de las carreteras en La Paz y Oruro, mientras los campesinos advierten con más bloqueos hasta que el gobierno atienda sus reivindicaciones: la defensa de sus fuentes de agua, mejoramiento de los caminos, contra el alza del precio de los carburantes y la titularización de las tierras. En la ciudad de Cochabamba, pese a la fuerte presencia militar que impidió el bloqueo de caminos, el paro cívico fue contundente.</p>	5		



<p>Al tercer día de paro, se reinician las negociaciones. En plenas pláticas el gobierno toma presos a los representantes de la Coordinadora del Agua acusados de sedición y daños a la propiedad privada. Asimismo, los militares y policías reprimen a una multitud concentrada en la Plaza 14 de setiembre. El gobierno central anuncia un estado de sitio.</p> <p>El Arzobispo se declara preso solidario con los miembros de la Coordinadora del Agua. A las pocas horas se desmiente la noticia del estado de sitio y liberan a los detenidos. 50 mil personas se congregan en la plaza principal.</p> <p>La multitud toma la planta de tratamiento de aguas y las instalaciones de la empresa Aguas del Tunari señalando que “si el gobierno no la expulsa, la misma gente de Cochabamba los va a sacar”.</p> <p>Por otra parte, se realizan tres Cabildos en las zonas rurales del Departamento de La Paz: en Huatajara, con unos 5000 campesinos; en Achacachi, más de 1500; y Vilaque, cerca de 500. Expresaron la decisión de continuar con el bloqueo de caminos mientras el gobierno no muestre señales reales de diálogo para frenar la Ley de Aguas y la persistente alza de precios en los carburantes, entre otras demandas.</p>	6		
<p>La ciudad de Cochabamba es, nuevamente, tomada por miles de personas que copan, como nunca antes, la plaza 14 de setiembre. La muchedumbre exige que Aguas del Tunari se vaya. Más tarde el Prefecto comunica a Monseñor Solari que el consorcio se fue y éste lo anuncia al pueblo. Inmediatamente se desata una fiesta popular que terminó en una frustración al desmentirse oficialmente este anuncio. El Prefecto se ve obligado a renunciar.</p> <p>Mientras que el gobierno anuncia estado de sitio. Hay allanamiento de moradas en Cochabamba y La Paz. Se aprehende a 22 dirigentes de la Coordinadora del Agua y del movimiento campesino del Altiplano.</p>	7	Abril	2000
<p>El gobierno hace oficial el decreto del estado de sitio.</p> <p>Otra vez miles de personas toman las calles de Cochabamba y en los violentos enfrentamientos, muere un estudiante víctima de un disparo de arma de fuego. Entremezclado entre la tropa militar un capital vestido de civil es descubierto por una cámara de televisión disparando sobre los manifestantes.</p> <p>La Coordinadora del Agua instruyó al pueblo de Cochabamba continuar con los bloqueos y movilizaciones para mantener una resistencia civil al estado de sitio y lograr en definitiva el retiro de Aguas del Tunari.</p> <p>En la carretera a Oruro muere un maestro cuando los militares levantan el bloqueo.</p>	8		

<p>Aniversario de la Revolución de 1952. Las autoridades, pertenecientes al MNR, se presenta en el sepelio de Víctor Hugo (estudiante muerto el día anterior) y los guerreros del agua los corretean. Simultáneamente, el Superintendente anuncia la salida de Aguas del Tunari de la ciudad.</p> <p>La gente se enfrenta contra la policía y militares. Muere el joven Daza.</p> <p>Graves enfrentamientos en Achacachi cuando los militares intentaban desbloquear la carretera. Una tensa calma se apodera de Cochabamba. Las tropas policiales y militares se repliegan a sus cuarteles y centenares de jóvenes ocupan la Plaza 14 de setiembre y levantan barricadas hasta que “Aguas del Tunari se vaya”.</p>	9	Abril	2000
<p>La Coordinadora del Agua exige un documento firmado por el gobierno comprometiéndose a la salida de Aguas del Tunari. El gobierno se niega y declara que todo lo sucedido en Cochabamba ha sido obra del narcotráfico.</p> <p>Se realiza una marcha masiva, después de la cual se reinician las negociaciones. El negociador enviado por el gobierno es el Viceministro que dirigió la operación represiva en Cochabamba.</p> <p>Al final de la tarde se comunica que Aguas del Tunari se va de Cochabamba. El gobierno firma un acuerdo accediendo a la demanda de la Coordinadora del Agua, mientras crece el pedido de partidos políticos e instituciones para que se levante el estado de sitio. Sin embargo, los manifestantes deciden proseguir con los bloqueos mientras el parlamento no apruebe efectivamente las modificaciones a la Ley de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico. Ante la exigencia, los diputados se convocan de urgencia para modificar la Ley de Aguas.</p> <p>Por otra parte, los universitarios de Potosí marchan en franco desacato a la medida de estado de sitio</p>	10		
<p>El Parlamento aprueba la Ley con las modificaciones propuestas por la Coordinadora.</p> <p>En el campamento de la catedral de Cochabamba, ubicada en la plaza principal, aparece colgado Juan Carlos Rodríguez (23 años), responsable durante la guerra del agua de avisar sobre la llegada del ejército y la policía con el toque de campanas.</p> <p>Gobierno y campesinos comienzan a negociar con mediación de la iglesia. Se levantan gran parte de los bloqueos.</p> <p>La COB convoca a un paro nacional de 24 horas en demanda de la suspensión del estado de sitio y contra la represión a los campesinos bloqueadores.</p>	11		
<p>Se levantan bloqueos.</p> <p>Baja la tensión en todo el país, pero el conflicto se traslada a la ciudad de La Paz con manifestaciones y marchas universitarias. El comité de la COB realiza un paro con movilización a la que se suman los universitarios, logrando paralizar el tránsito vehicular hasta que son dispersados por la policía.</p>	12		

El Congreso Nacional ratifica en la madrugada el estado de sitio, bajo la protesta de la oposición que asegura no se cumplieron los procedimientos para ratificar esta medida.	13	Abril	2000
El gobierno y los campesinos firman un acuerdo que pone fin al conflicto y a los bloqueos. El gobierno se compromete a atender en 90 días las demandas del sector. El ejército se repliega a los cuarteles.	14		
La empresa Aguas del Tunari rompe el silencio y exige al gobierno una justa compensación por la ruptura del contrato de Cochabamba.  El consejo de ministros aprueba el levantamiento del estado de sitio.	19		
La Coordinadora del Agua inicia una movilización por el centro de la ciudad donde se concentraron cerca de 5000 campesinos, para denunciar la total pasividad del Gobierno frente a la constante alza del nivel de vida.	28	Julio	
La comisión de heridos de la guerra del agua de Cochabamba se reúne con el Gobierno para exigirle la atención de las personas que sufrieron heridas permanentes en los enfrentamientos de abril de esa ciudad.	30	Agosto	
El Gobierno anuncia el congelamiento del proyecto de la Ley de Aguas.	15	Septiembre	
La Coordinadora del Agua realiza una reunión para definir si asume o no medidas de presión para exigirle al gobierno la resolución definitiva del contrato de concesión con Aguas del Tunari.	18		
La Coordinadora del Agua realiza una marcha por la ciudad, a la que concurren fabriles, maestros, gremiales, estudiantes y trabajadores de la salud, en contra del Gobierno del presidente Hugo Bánzer.	22		
La Coordinadora del Agua realiza un cabildo abierto en la plaza de la ciudad de Cochabamba, en el que participan la Central Obrera Departamental, algunas Juntas Vecinales, la Federación de Fabriles, la Federación Universitaria Local, la Federación de Estudiantes de Secundaria y la Central de Campesinos Regantes, para decidir nuevas medidas de apoyo a los campesinos y cocaleros, y para pedir al Gobierno la anulación de la elevación de las tarifas eléctricas, la revisión del pasaje escolar, terminar la acción legal contra Aguas del Tunari sin el pago de indemnización y la reglamentación de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado.	24		
La Coordinadora del Agua realiza una manifestación en dicha ciudad pidiendo la renuncia del Presidente Hugo Bánzer y exigiendo la destitución del Prefecto.  El Gobierno accede a suspender la Ley de Aguas.	25		

Dirigentes de la Coordinadora del Agua se reúnen con el ministro de Gobierno, que no acepta la exigencia de renuncia del Prefecto del departamento. La Coordinadora del Agua anuncia que no suspenderá las medidas de presión mientras no se solucione el conflicto cocalero y campesino.	26	Septiembre	2000
La Coordinadora del Agua firma un acuerdo de intensión con el Gobierno. En el documento el Gobierno se compromete a reglamentar la Ley de Aguas y Alcantarillado, a retirar el proyecto de Ley de Aguas, a elaborar consensuadamente un proyecto modificadorio de la Ley INRA y atender el tema de las tarifas de energía eléctrica y transporte escolar.	30		
La Coordinadora del Agua realiza una asamblea donde, más allá de que el Gobierno haya atendido parte de sus demandas, exige una solución global al problema docente y campesino.	2	Octubre	
En Cochabamba, seis dirigentes de la Coordinadora del Agua se crucifican en el edificio de la Federación de Fabriles en demandas de una solución inmediata a los conflictos.	5		
La Superintendencia de Saneamiento Básico revoca oficialmente la concesión a la empresa Aguas del Tunari.	21	Noviembre	
La Coordinadora del Agua realiza una movilización en el departamento de Cochabamba bajo el lema “Marcha de la Dignidad Cochabambina”, para decirle al Gobierno que no pagarán la deuda del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA).	6	Febrero	
El Comité Cívico de Cochabamba realiza un paro de 24 horas, con cortes de calles y avenidas, para demandar al Gobierno la condonación de la deuda de SEMAPA e invertir esos recursos en la ampliación de la red de agua potable y alcantarillado en los barrios marginales.	16	Marzo	
La Coordinadora del Agua realiza una marcha en Cochabamba para conmemorar el primer aniversario de la Guerra del Agua, y para exigir la condonación de la deuda de SEMAPA, y la nacionalización de la Empresa de Luz Electrica (ELFE) y la Planta Industrializadora de Leche (PIL).	3	Abril	
La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de Ley de Exploración, Cuantificación, Aprovechamiento y Comercialización de Recursos Hídricos en el sudoeste de Potosí. La Coordinadora del Agua y los campesinos lo rechazan por considerar que el mismo mercantiliza el agua.	21	Noviembre	
Potosinos toman el inmueble de Servicios Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA) y realizan una huelga de hambre en reclamo de precisión por parte del gobierno sobre cuándo y cómo se llevarán adelante las medidas aprobadas por el Congreso, como por ejemplo, la ley que autoriza a Potosí comercializar aguas, entre otras demandas de los ciudadanos.			

Aguas del Tunari, Bechtel y, su co-inversionista, Abengoa de España, presentaron una demanda por \$50 millones contra Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés), un mecanismo del Banco Mundial.	Noviembre	2002
Más de 300 organizaciones de 43 países, incluyendo a Bolivia, enviaron una Petición de Ciudadanos Internacionales exigiendo que el caso Bolivia vs Bechtel, dentro del CIADI fuera transparente y abierto a la participación del público.	Agosto 29	2003
Pobladores de la localidad de Vinto, departamento de Cochabamba, bloquearon la carretera que conduce hacia Oruro en demanda de que el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) local cumpla con los convenios de dotación de agua potable en la región.	18	2005
Los pobladores de Vinto, levantan el bloqueo de la carretera que conduce hacia Oruro, luego de firmar un acuerdo con los directivos de SEMAPA por medio del cual este organismo garantiza el suministro de agua potable a la región.	19	
El CIADI determinó que tenía jurisdicción en el caso de Aguas del Tunari vs. Bolivia, y que procedería con el caso	21	
Representantes de Bechtel y Abengoa viajaron a Bolivia para firmar un acuerdo donde declaraban que abandonaban el caso en el CIADI, por un pago nominal de 2 bolivianos (0.30 USD)	Enero 19	2006

Elaboración propia con base en los siguientes textos: Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005)*, México, Sísifo ediciones/Bajo Tierra Ediciones/ICSH/BUAP, 2009, pp. 83-84.

Ceceña, Ana Esther, *La guerra por el agua y por la vida. Cochabamba: una experiencia de construcción comunitaria frente al neoliberalismo*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Asoc. Madres de Plaza de Mayo, 2005, pp. 36-37.

Dangl, Benjamin, *El precio del fuego. Las luchas por los recursos naturales y los movimientos sociales en Bolivia*, Bolivia, Plural Editores, 2009, pp. 77-100.

Cronología realizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), a partir del Observatorio Social de América Latina. Disponible en: <http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php?idioma=port>.

**Anexo 2. Movilizaciones rurales aymaras en abril de 2000**  
**Inicio del conflicto y enfrentamientos de Achacachi**

Fecha	Suceso
<b>3 de abril</b>	A convocatoria de la CSUTCB, se inicia el bloqueo de caminos y productos agropecuarios contra la Ley de Aguas, que es acatado en el departamento de La Paz por la provincia Omasuyos.
<b>4 de abril</b>	El bloqueo se amplía a otras provincias paceñas como Ingavi y Los Andes. Contingentes organizados por las Federaciones de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca sales a las carreteras para realizar los bloqueos. Por su parte, el gobierno moviliza fuerzas militares hacia la carretera de Oruro y hacia las provincias del norte paceño. Ocurre el primer enfrentamiento entre bloqueadores y militares en Laja, camino a Guaqui.
<b>5 de abril</b>	Enfrentamientos en Lahuachaca –camino La Paz-Oruro- donde hay comunarios heridos. Se reportan bloqueos contundentes en Guaqui, Copacabana, Huarina, Huatajata y Achacachi. Todos los caminos hacia el norte de La Paz están bloqueados.
<b>6 de abril</b>	Cabildo en Achacachi. Se invita al presidente Bánzer a “la capital del mundo aymara” a dialogar “de presidente a presidente”, según dice Felipe Quispe. Es muy importante esta manera de presentar las cosas pues, sobre la fuerza del bloqueo de caminos, Felipe Quispe comenzó a difundir y aclarar la idea de que existen “dos Bolivias”: una, la de los q’aras y sus gobernantes y otra, la de “abajo”, la de los aymaras, quechuas y de otras naciones originarias, junto a los trabajadores.
<b>7 de abril</b>	El gobierno declara estado de sitio y se produce un motín policial en La Paz.
<b>8 de abril</b>	Enfrentamiento en Patacamaya y Lahuachaca –sobre la principal carretera del país. A las ocho de la mañana fuerzas militares intervienen una reunión de vecinos y comunarios que iba a realizarse en el Colegio Germán Busch de Patacamaya, donde se registraron cuatro heridos por bala. Más tarde, el ejército avanzó hasta Lahuachaca, donde las tropas del Regimiento Patacamaya y Motorizado de Viacha, con tanques y balas de guerra, cruzaron la barricada levantada por las comunidades que se hallaban realizando la vigilia y dispararon contra la concentración de gente, que trató de resistir con piedras lanzadas con <i>q’urawas</i> . La intervención culminó con la muerte de dos personas, ambas por heridas de bala. Los bloqueos se extienden por la carretera principal hacia zonas limítrofes con la ciudad de El Alto, como San Roque. Hay enfrentamiento con fuerzas policiales y el bloqueo no cede. El discurso y la movilización de los comunarios se radicalizan a partir de las muertes de Lahuachaca y Patacamaya. La federación provincial de Omasuyus convoca a una marcha de protesta para el día 9 de abril. Felipe Quispe es apresado y confinado con otros dirigentes en San Joaquín.
<b>9 de abril</b>	Desde la noche anterior, el gobierno desplaza a los regimientos Junín y Ayacucho, que se hallan dentro de Achacachi, de tal manera que en la madrugada del 9 de abril, los caminos aparecen militarizados. Se producen enfrentamientos en Achacachi: la marcha programada, a cargo de dirigentes “de base”, se congrega en protesta por los enfrentamientos del 8 de abril y en desacato al estado de sitio, instaurado por Bánzer. Desde las ocho de la mañana se producen escaramuzas entre comunarios y tropas apostadas en la parte sur del poblado. Se producen enfrentamiento en la Avenida Sorata, que conduce hacia la salida de Achacachi. Las personas congregadas en la Plaza y los alrededores inician la

	<p>movilización desde el sector norte, acudiendo en auxilio de las personas que se enfrentaban con los soldados en la parte sur. Las fuerzas militares quedan cercadas. Represión en Qalachaqa y Janqupata con armas de fuego por parte de militares. Tras el ingreso de otro contingente de soldados desde el sur, las mujeres deciden impedir la llegada de los militares tendiéndose en el camino para evitar que los “wipones” – <i>jeeps</i>- del ejército lleguen a reforzar la represión.</p> <p>El teniente Omar Téllez es herido y llevado al hospital de Achacachi. Más tarde, Ramiro Quispe, herido por una bala de guerra, es trasladado en una ambulancia hacia la ciudad de La paz y fallece en el camino.</p> <p>La noticia de la muerte de Ramiro Quispe llega a Achacachi por vía telefónica. La gente enciende fogatas en el cerro Surucachi, en señal de convocatoria para la lucha. Cientos o miles de personas de los alrededores llegan a pie hasta Achacachi para reforzar los bloqueos. El enfrentamiento es generalizado.</p> <p>La gente logra hacer retroceder a los militares, con piedras y fuerza de multitud. Fallece por herida de bala Hugo Aruquipa. Los comunarios deciden quemar todos los edificios de las instituciones públicas: arde la prefectura, la alcaldía, el puesto de tránsito y la cárcel; se libera a los presos. Se quema también el cuartel de policía y se expulsa a su personal. La gente se congrega en la puerta del hospital exigiendo que se entregue al teniente Téllez. Un grupo compuesto mayoritariamente de mujeres entra por él, lo sacan del hospital llevándolo hasta la plaza y lo matan entre todos. Llegan más tarde contingentes militares, la gente se retira ya que se militariza todo el pueblo de Achacachi. La persecución a dirigentes se inicia y se comienza a allanar casas y tomar presos.</p>
<b>10 de abril</b>	El bloqueo se expande desde La Paz hacia los caminos a Copacabana, Oruro, Pucarani, Yungas, Ilabaya y Sorata. La ciudad de La Paz queda completamente bloqueada.

### Expansión del conflicto y primer Convenio con el gobierno

Fecha	Suceso
<b>11 al 13 de abril</b>	<p>El bloqueo a nivel departamental se expande a provincias anteriormente “tranquilas” como Inquisivi, Yungas y Murillo. Se unen a la movilización los productores de hoja de coca de La Paz, que logran interrumpir la vía principal que conduce a Yungas, al noreste de la capital.</p> <p>Por otro lado, las comunidades del sur de la ciudad de La Paz deciden prohibir el envío de productos agropecuarios a la sede de gobierno.</p> <p>El bloqueo se hace más denso en las carreteras La Paz-Copacabana.</p>
<b>14 de abril</b>	<p>Tras el establecimiento de una mesa de negociación, se firma un acuerdo entre el gobierno de Hugo Bánzer y la CSUTCB.</p> <p>La dirigencia se compromete a levantar los bloqueos camineros y el gobierno a retirar a los militares de las carreteras y pagar la curación de los heridos así como indemnizar a las familias de los fallecidos en los enfrentamientos y a liberar a los presos.</p> <p>El acuerdo incluía, además, otros 14 puntos, el primero de los cuales señalaba la suspensión del tratamiento legislativo de la Ley de Aguas, que según los términos suscritos, debía ser reelaborada.</p> <p>También incluía cuestiones relativas al saneamiento de tierras, modificaciones a la Ley INRA y medidas necesarias para impulsar el desarrollo rural. Se establecen varias comisiones que se encargarán de elaborar propuestas y establecer acuerdos respecto a diversos temas básicos exigidos por las comunidades.</p>

### Cronología del bloqueo de septiembre de 2000

Fecha	Suceso
<b>18 de septiembre</b>	<p>Ante el incumplimiento de los “Acuerdos de Abril” por parte del gobierno, la CSUTCB convoca a un nuevo bloqueo de caminos y productos Agropecuarios. Tras notables divergencias entre los dirigentes de la CSUTCB, unos partidarios de suspender la movilización y los otros a favor de iniciarla, en un Ampliado de dirigentes departamentales y provinciales de La Paz se acuerda comenzar el bloqueo caminero.</p> <p>Las provincias de Los Andes y Omasuyus inician las medidas en alianza con el magisterio rural y la Federación de Transportistas. De forma gradual se unirán los maestros y choferes de Pakajes y Manko Kapac.</p>
<b>20 de septiembre</b>	<p>Cesa el envío de alimentos hacia la ciudad de La Paz y el bloqueo se extiende hasta las zonas aledañas a la ciudad de El Alto (zona San Roque). El gobierno militariza las carreteras principales.</p> <p>Las federaciones campesinas de los departamentos de Chuquisaca, Oruro y Santa Cruz, se unen a los bloqueos.</p> <p>De manera paralela, simultanea y distanciada del liderazgo de Felipe Quispe, las federaciones cocaleras del trópico cochabambino bloquean las rutas del Chapare en este departamento.</p>
<b>24 de septiembre</b>	<p>Enfrentamientos en las localidades de Parotani (Cochabamba) y Guaqui (La Paz), entre comunidades y el ejército.</p> <p>Regimientos y volquetas enviadas por la alcaldía de Guaqui intentan levantar las barricadas y recoger las piedras que bloquean la carretera, gasificando y disparando a los campesinos, los cuales respondieron con piedras. Fallece Modesto Mamani por un disparo de bala.</p> <p>Esta nueva confrontación con un muerto, provoca la indignación de las comunidades movilizadas y de los dirigentes de la CSUTCB, quienes en Ampliado, deciden la intensificación y ampliación de los bloqueos hasta llegar al borde de la ciudad de El Alto, es decir, a la difusa frontera campo-ciudad.</p>
<b>26 de septiembre</b>	<p>La movilización se expande y siete de los nueve departamentos en Bolivia se hallan bloqueados. Se registran algunos enfrentamientos entre militares y comunarios en las provincias Pakajes e Ingavi, sin bajas.</p> <p>Los bloqueos se radicalizan y ya no sólo se arrojan piedras a la carretera, sino que se abren zanjas en el camino La Paz-Copacabana.</p>
<b>27 de septiembre</b>	<p>Se incorporan a la movilización las federaciones campesinas del sur de La Paz. Durante una marcha logran tomar y destruir el puesto de peaje de Lipari, zona que colinda con los barrios de clase alta del Sur de La Paz. La marcha y el bloqueo avanzan hacia las comunidades de Aranjuez, Mallasa, Jupapina y Huajchilla, prácticamente dentro de la ciudad. Comunarios intentan tomar la represa de Jampaturi, para impedir la llegada del agua al área urbana y se enfrentan con el ejército. Se anuncia que se va a establecer el “Cercos a la Ciudad”.</p>
<b>28 de septiembre</b>	<p>Se produce el enfrentamiento más grave en el altiplano. Los bloqueos de la localidad de Huarina, al norte de La Paz, son intervenidos por contingentes militares, que efectúan disparos de balas de guerra, apoyados por avionetas que sobrevuelan la zona. Maestros rurales y campesinos intentan resistir con piedras. Sin embargo, ante la magnitud de la represión se repliegan. Durante la intervención mueren tres comunarios y otros cinco son heridos. Después de estos sucesos, los Ampliados de emergencia que realizan las subcentrales en los puntos de bloqueo se convierten en Cabildos donde participan muchas comunidades. Se decide mantener los bloqueos y radicalizarlos. Las intervenciones y los “operativos limpieza” ordenados por el gobierno no dan resultado, ya que la capacidad de movilización comunal impide</p>



	desbloquear puntos importantes.
<b>29 de septiembre</b>	Se realiza un Cabildo en la población de Achacachi a la que acuden alrededor de 4000 comunarios de las poblaciones y cantones cercanos. En la reunión se repudiaron los asesinatos del día anterior y se comprometieron, todos, a continuar con los bloqueos.
<b>1° de octubre</b>	A instancias de la Iglesia se intentan abrir el diálogo entre el gobierno y la dirección de la CSUTCB. Sin embargo, Felipe Quispe abandona la mesa de negociación con duras increpaciones públicas a los ministros de Estado por los “asesinatos de comunarios” que están llevando a cabo los “carniceros del gobierno”. Pese a ello, comienza la negociación con dirigentes de ocho federaciones departamentales que muestran la existencia de fisuras entre los líderes.
<b>2 de octubre</b>	La Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la Confederación de Gremiales, la Federación de Padres de Familia y estudiantes universitarios, se movilizan en El Alto y La Paz, en apoyo a la protesta dirigida por la CSUTCB. Comienza a producirse la articulación entre organizaciones urbanas y rurales. Piquetes de vecinos, estudiantes, gremiales, etc., encienden fogatas en las calles principales de El Alto. Se quema la caseta de peaje situada en la frontera de las ciudades de La Paz y El Alto y se apedrea a una unidad de policías. En otros sectores como Achocalla, al sur de La Paz, varias comunidades encienden grandes fogatas para que se sepa de su presencia en el borde de la ciudad. La movilización es contundente. La fuerza exhibida por la publicación es inmensa. Después de tres semanas de movilización se inicia un diálogo, plagado de dificultades. Las reuniones llevadas a cabo en una oficina de la Iglesia fueron transmitidas por los medios de comunicación. En la primera sesión de un “diálogo” difícilmente pactado, Felipe Quispe se presentó sólo para acusar de “asesinatos” a los miembros del gobierno, con un discurso emotivo y dramático. Finalmente, en los días subsiguientes, con la intermediación de la Iglesia Católica y representantes de Derechos Humanos, se firmaron algunos convenios. Se consigue la anulación total de la Ley de Aguas y la promesa de derogación de la Ley INRA, que no se cumplirá.
<b>4 de octubre</b>	Se realiza el Segundo Gran Cabildo en Qalachaka (Achacachi), para discutir lo relativo al comienzo de las negociaciones. Este cabildo fue más grande que el del 29 de septiembre, y contó con la participación de más de 20 mil personas. A la reunión llegaron representaciones de un mayor número de provincias y se acordó mantener la vigilancia del curso de las negociaciones. En este Cabildo se presentó además, el Manifiesto de Achacachi, que tiene dos puntos principales: a) lucha conjunta de las provincias “para el renacimiento del poder indígena”, es decir un pacto entre todas las provincias presentes en esta gran reunión, que según el manifiesto, constituirían el Jach’a Umasuyus –Gran Omasuyus-, en recuerdo a los antiguos territorios que componían la parcialidad Omasuyus, rompiendo la división territorial impuesta por la Colonia y la república. B) La expulsión de la política y del ejército de todo el territorio Jach’a Umasuyus. Desde octubre de 2000 –y nuevamente en 2001- el cerro de Qalachaqa a la entrada del pueblo de Achacachi se convertirá en la “sede” del “Cuartel Indígena”. Esta denominación exhibe el ritmo creciente de la movilización que comienza a utilizar términos militares, pensando la acción de levantamiento como la entrada en acción de un “Ejército indígena cuyo cuartel –entendido como lugar para la deliberación- es Qalachaqa.

Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los Ritmos del Pachakuti...*, op. cit., pp. 132-140.

### Anexo 3. Cronología de la Guerra del Gas

Paro de actividades de los choferes sindicalizados, en las ciudades de La Paz y El Alto, en protesta por la continua alza del precio de los combustibles.	21	Marzo	2000
Los trabajadores de la Central Obrera Boliviana, de El Alto, paralizan La Paz. La protesta es por el aumento de los precios de los hidrocarburos y su efecto multiplicador en los demás productos de consumo diario.	27		
En la sede de la COB, un ex policía comienza un ayuno en reclamo por un aumento salarial. Se suman a la medida algunas esposas de policías.	28		
La huelga de hambre del ex policía obtiene respaldo de otros compañeros, en servicio y jubilados. En algunas reparticiones policiales hay amenaza de acuartelamiento, en reclamo de aumentos salariales.	29		
Las personas que estaban en huelga de hambre, entre policías y familiares, levantan, momentáneamente, su medida de protesta tras el compromiso del Ministro del Interior de buscar soluciones a sus problemas.	30		
En La Paz, la policía reanuda la huelga de hambre de las esposas. Los policías rechazan la oferta del Ministro de Gobierno de un incremento del 6% en los salarios y amenazan con acuartelarse si no obtienen una respuesta.	05	Abril	
Los policías de La Paz se amotinan contra el gobierno. Apoyan a sus esposas en huelga de hambre y piden mejores salarios. Son los efectivos del regimiento 1 y 2 del GES, los Pumas y los Polivalentes.	07		
Los policías amotinados en La Paz lograron un incremento del 50% en sus salarios. Ante la gravedad de la situación el gobierno cede ante las demandas policías.	08		
Los trabajadores de la empresa Aguas del Illimani comienza un paro de 48 horas por el despido de 96 empleados. La medida es respaldada con un piquete de huelga de hambre de los ex empleados en las instalaciones de la COB.	04	Diciembre	
Felipe Quispe, secretario ejecutivo de la CSUTCB, se reúne con el Ministro de Asuntos Campesinos e Indígenas, en la sede central de la COB, para reanudar el tratamiento del convenio firmado en octubre del año 2000. Se conforman siete comisiones, entre ellas, Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Ley de Biodiversidad y Desarrollo Rural, ayuda a los heridos en los enfrentamientos y erradicación de los cultivos de coca.	04	Abril	2001

<p>El gobierno y los campesinos de la CSUTCB firman un acuerdo de 70 puntos que contempla: la puesta en marcha de un programa de desarrollo rural con créditos y la asistencia técnica por 70 millones de dólares, la realización de un estudio de cargo del Ministro de Educación para analizar la creación de una universidad agraria, la erradicación de coca en forma voluntaria, la implementación del Seguro Social Campesino de salud indígena y la indemnización con 50 mil bolivianos a los familiares de los 87 indígenas fallecidos en los conflictos, que tuvieron lugar durante el gobierno de Banzer, entre otras cosas. Los campesinos levantan las medidas de protesta.</p>	23	Agosto	2001
<p>La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), junto con campesinos, indígenas y colonos de la región de Santa Cruz inician una movilización hacia la ciudad de La Paz, en demanda de que el gobierno haga efectivo el llamado de una Asamblea Constituyente, en la que participen todos los sectores sociales, y en rechazo de la reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados. Los indígenas exigen, además, que se archive en forma definitiva el proyecto de Ley de Apoyo al Desarrollo Sostenible y de Reforma a la Ley Forestal, entre otras cuestiones. Al mismo tiempo, el líder de la CIDOB inicia, junto a otros dirigentes de la Confederación, una huelga de hambre por tiempo indefinido.</p>	13	Mayo	
<p>Luego de 37 días de caminata, más de 3000 indígenas de Santa Cruz, Beni, Potosí, Oruro y Chuquisaca ingresan a la sede de gobierno, en la ciudad de La Paz, para exigir la modificación del artículo 230 de la Constitución, el cual permite habilitar una Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma.</p>	20		
<p>Representantes del Gobierno, miembros de diversos partidos políticos, autoridades del poder legislativo y dirigentes de los indígenas y campesinos de las tierras altas y bajas, nucleados por la CIDOB, y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), firman un acuerdo por el cual se establece la realización de un Congreso Extraordinario, en la primera semana de julio, en el que se trabajará la modificación del artículo 230 de la Constitución Política para habilitar la reforma constitucional por medio de una Asamblea Constituyente.</p>	21	Junio	2002
<p>Se realizan elecciones presidenciales en todo el territorio boliviano. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), obtiene el primer puesto con el 22,46% de los votos; mientras que el Movimiento al Socialismo (MAS), queda en segundo lugar con el 20,94%; y la Nueva Fuerza Republicana (NFR), es tercera con el 20,90% de los sufragios. De esta manera, es el Congreso de la República el encargado de elegir, entre Gonzalo Sánchez de Lozada por el MNR y Evo Morales por el MAS, al nuevo presidente.</p>	30		
<p>En las 19 provincias, que conforman el departamento de La Paz, se impone el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), con el 33,77% de los votos; seguido por el MAS, con el 26,58%; y por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), con el 11,74% de los sufragios.</p>			
<p>Campesinos pertenecientes al Consejo de Ayllus Originarios de Potosí (CAOP) bloquean la ruta Potosí-Betanzos para exigir la aprobación, por parte del Congreso Nacional, de la ley de necesidad de reforma de la Constitución.</p>	24	Julio	
<p>El Senado sanciona la Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución Política del Estado, la cual tiene que ser remitida al Poder Ejecutivo, para su promulgación. Pasado un lapso de 15 días de la aprobación, de esta reforma, se convoca a un referéndum que se tiene que llevar a cabo tres meses más tarde.</p>	31		

<p>El Congreso Nacional elige a la formula integrada por Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa Gilbert, ambos del MNR, como presidente y vicepresidente de Bolivia, respectivamente, para el periodo constitucional 2002-2007, al obtener el apoyo de 84 de los 157 miembros del Poder Legislativo.</p> <p>El MNR accede al Gobierno tras conformar una alianza junto al MIR, Acción Democrática Nacionalistas (ADN) y la Unión Cívica Solidaridad (UCS), e imponerse sobre el binomio del MAS conformado por Evo Morales Aima y Antonio Peredo, quienes al sumar a MIP y al Partido Socialista (PS) alcanzan un total de 43 votos.</p>	04	Agosto	2002
<p>Un centenar de estudiantes rurales de la provincia de Omasuyos bloquean las principales calles de la ciudad de La Paz, para exigir que el gas boliviano no sea vendido a los Estados Unidos y México.</p>	21		
<p>Miles de trabajadores y ciudadanos, convocados por la COB, y diversas centrales departamentales, se movilizan en diferentes puntos del país, para protestar contra el actual modelo económico, y para rechazar la exportación del gas a través del puerto chileno. Las marchas se desarrollan en La Paz, Chuquisaca, Sucre y Cochabamba.</p>	29		
<p>Cerca de 5 mil personas, convocadas por la Coordinadora por la Defensa del Gas, se movilizan hacia la sede del Gobierno, en La Paz, para conmemorar los 33 años de la nacionalización del gas. Exigen que éste, el petróleo, vuelva a pertenecer al pueblo mediante la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La marcha cuenta con la participación del Comité Nacional de Defensa del Patrimonio Nacional, la Central Obrera Departamental (COD), la Federación de Trabajadores Fabriles, el Movimiento al Socialismo (MAS) y la CSUTCB.</p>	17	Octubre	
<p>Cientos de trabajadores, estudiantes, campesinos, regantes, jubilados y mineros de Oruro marchan, por el centro de Cochabamba, para rechazar la erradicación de la coca, la venta del gas a los Estados Unidos, el ingreso de Bolivia al ALCA y para exigir la reversión de la privatización de la empresa minera Huanuni y de la metalúrgica de Vinto.</p>	11	Noviembre	
<p>Las organizaciones que conforman el Bloque Antineoliberal, realizan una movilización, en la ciudad de La Paz, en la que participan trabajadores de todo el país, en rechazo a las políticas neoliberales adoptadas por el gobierno.</p>			
<p>Cientos de trabajadores se movilizan por la ciudad de Cochabamba, convocados por la COD, en repudio a la política general del Gobierno.</p>			
<p>Decenas de periodistas, trabajadores y miembros de organizaciones de Derechos Humanos realizan una marcha, convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (STPLP), para expresar su rechazo a la política del Gobierno referente al pago del Bonosol, a la venta del gas a los Estados Unidos y al ingreso de Bolivia al ALCA. La movilización es reprimida por la policía quien desaloja a los manifestantes.</p>	17	Diciembre	

<p>Representantes de diversas organizaciones sociales, entre las que se cuentan mineros, comerciantes minoristas de hoja de coca, la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (STPCP), estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas se reúnen en la ciudad de Cochabamba y acuerdan con las federaciones de cocaleros de la región, conformar la Coordinadora Nacional de Movilizaciones y participar activamente en el inicio de las jornadas de protesta con bloqueos de rutas programadas para el lunes 13 de enero. Las demandas planteadas por la Coordinadora están centradas: en el rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a la venta del gas, y al ingreso de tropas norteamericanas a territorio boliviano. Al mismo tiempo, el gobierno moviliza unos 3,500 efectivos de la policía y del ejército hacia la zona del Chapare para evitar el corte de caminos.</p>	9	Enero	2003
<p>Representantes de diversas COD, de la COB, trabajadores fabriles y de los sectores de la salud y educación, integrantes del Movimiento Sin Tierra (MST) de Bolivia, campesinos, colonizadores de los Yungas, comerciantes, estudiantes y cocaleros se reúnen en el Complejo Fabril de Cochabamba y conforman el Estado Mayor del Pueblo (EMP), organización cuyo objetivo es resistir a las políticas adoptadas por el gobierno. En el marco de la reunión, las organizaciones dan un plazo de 48 horas para que el presidente resuelva todos los problemas planteados, caso contrario exigirán su renuncia.</p>	19		
<p>Dirigentes de diversos sectores sociales, entre ellos Evo Morales y Filemón Escobar del MAS y Felipe Quispe se reúnen con el Presidente de la República y representantes del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Cochabamba, donde acuerdan la conformación de siete comisiones de trabajo para abordar los temas de la coca, de la exportación del gas y del ALCA, entre otros. Como parte del acuerdo, los dirigentes se comprometen a desbloquear las rutas, mientras se procede a su desmilitarización.</p>	26		
<p>El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada presenta al Congreso un proyecto de reforma impositiva en el marco del Presupuesto General de la Nación para el presente año, a partir del cual, se busca reducir el déficit fiscal por medio de la aplicación de un impuesto directo y gradual a los salarios. El tributo será aplicado a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y se efectuará a partir de los sueldos superiores a los 880 bolivianos.</p> <p>La COB, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la comunidad universitaria y los dirigentes de los principales partidos de oposición al gobierno, Evo Morales del MAS y Manfred Reyes Villa, de Nueva Fuerza Republicana (NFR) expresan su rechazo al impuesto a los salarios y a los mandatos del FMI.</p>	9	Febrero	

<p>Cientos de jefes, oficiales y efectivos de la Policía Nacional de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz se amotinan en reclamo de un incremento del 40% en sus haberes a la vez que rechazan el impuesto a los salarios, aprobado por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos y Clases de la Policía expresan que otro de los problemas es el incumplimiento por parte de las autoridades de las 19 demandas planteadas por el sector.</p> <p>Funcionarios y trabajadores administrativos, nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Mayor de San Andrés (STUMSA), se movilizan por el centro de la ciudad de La Paz, en rechazo al impuesto a los salarios aprobado por el gobierno y para exigir el incremento del presupuesto de la institución.</p>	11		
<p>Cientos de efectivos de la Policía Nacional, quienes se encuentran amotinados, se movilizan por el centro de La Paz, junto a sus esposas, para exigir que el gobierno derogue el decreto que modifica el sistema tributario y brinde solución a las demandas planteadas por el sector. Al promediar la marcha, efectivos de las Fuerzas Armadas reprimen a los policías, al mismo tiempo en que, un gran contingente de estudiantes, del Colegio Nacional de San Simón de Ayacucho, se suma a las acciones y apedrean el frente del Palacio de Gobierno.</p> <p>Se producen disparos de gases lacrimógenos y balas de plomo, lo que provoca 16 muertos y cerca de un centenar de heridos. Ante los hechos de violencia producidos en la ciudad de La Paz, el Ministerio de Trabajo dispone la suspensión de actividades de la administración pública y privada en todo el país.</p> <p>Sargentos, oficiales y efectivos policiales de las unidades de Tarija, Potosí y Cochabamba se amotinan en apoyo a las demandas planteadas por sus colegas de La Paz.</p> <p>Unas 200 personas ocupan e incendian las instalaciones del edificio de la Vicepresidencia de la República y las del Ministerio de Trabajo para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien acusan de ser el responsable directo de los hechos de violencia sucedidos en el centro de La Paz.</p> <p>El presidente Sánchez de Lozada anuncia, a través de un mensaje televisivo, el retiro del proyecto de Presupuesto General de la Nación, que establece el impuesto a los salarios y convoca a iniciar el dialogo entre los diferentes sectores sociales.</p> <p>Diversos sectores sociales del trópico de Cochabamba, entre ellos, trabajadores, estudiantes, cocaleros y campesinos, convocados por el EMP se movilizan por el centro de la ciudad para rechazar el impuestazo y exigir la renuncia del Presidente Sánchez de Lozada. Un grupo de manifestantes intenta ingresar al edificio de la Prefectura en el momento en que miembros de la policía militar irrumpen en la marcha disparando gases lacrimógenos. Los manifestantes se dispersan y proceden al bloqueo de las calles céntricas. Se producen enfrentamientos con efectivos militares, saqueos, destrozos y el incendio de edificios públicos y de la sede del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR)..</p> <p>Un grupo de nueve trabajadores fabriles de La Paz se declaran en huelga de hambre para exigir la anulación del decreto gubernamental que establece el impuesto a los salarios.</p>	12	Febrero	2003

<p>El Gobierno y las principales autoridades del Comando General de la Policía Nacional firman un acuerdo por el que se pone fin al conflicto y al amotinamiento. Los efectivos policiales retornan a las calles con la orden de controlar la ola de saqueos registrados en diferentes instituciones públicas y privadas. Así detienen a 180 personas las cuales son puestas a disposición de la Policía Técnica Judicial (PTJ). El saldo del segundo día de conflictos es de 19 personas muertas y 34 heridas en La Paz y varias ciudades del interior.</p> <p>La COB cumple con el paro de labores por 24 horas y realiza una movilización en la que miles de personas recorren el centro paceño, junto a otros sectores entre los que se destacan campesinos, mineros, maestros, trabajadores de la salud y partidarios del MAS y del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), ante la presencia de numerosos efectivos militares, quienes custodian el acceso a la Plaza Murillo. Los oradores, entre ellos Evo Morales, y el secretario de la Central, reiteran el pedido de renuncia del Presidente y Vicepresidente de la Nación.</p> <p>En las ciudades de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Beni se realizan diversas manifestaciones, en repudio a la política del gobierno y para exigir la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Las acciones, convocadas, por diversas organizaciones sociales y políticas desencadenan una ola de saqueos e incendios de edificios públicos y privados, entre ellos las sedes de los partidos de gobierno MNR y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).</p>	13	Febrero	2003	
<p>Cientos de personas, convocados por la COB, junto a comerciantes informales, la Federación de Gremiales y la COR de El Alto, se movilizan por la ciudad de La Paz en la primera jornada del paro nacional de 48 horas, declarado por la Central para rechazar la actual política económica del gobierno.</p>	17			
<p>Cientos de personas se movilizan por la ciudad de La Paz, convocadas por la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y cerca de 500 juntas vecinales de los distintos barrios de la ciudad, para protestar contra el permanente aumento de las tarifas de los servicios básicos y exigir la reversión al estado de las empresas capitalizadas.</p>	31	Marzo		
<p>Miles de personas, entre jubilados, trabajadores fabriles, maestros, mineros y productores de coca, marchan por el centro de La Paz, en la marcha convocada por la COB para exigir al gobierno la atención a sus demandas y en repudio al ALCA y la venta del gas.</p>	28	Agosto		
<p>Miles de personas pertenecientes a diversas organizaciones sociales, entre alumnos de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), campesinos y vecinos de la ciudad, marchan por las calles de El Alto hacia el centro de La Paz y declaran un paro cívico en repudio a la intención del gobierno de vender el gas a los EE.UU. por un puerto chileno, a la firma del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y en demanda de un conjunto de más de 80 reivindicaciones sectoriales. Durante la manifestación, la policía reprime a los estudiantes quienes intentan bloquear la carretera que conduce hacia el aeropuerto metropolitano.</p>	8	Septiembre		
<p>Varias decenas de campesinos del altiplano paceño, incluido el líder del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) y dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe, se declaran en huelga de hambre en el auditorio de radio San Gabriel de El Alto, en repudio a la venta del gas, a la firma del ALCA y en demanda de la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, entre otras cuestiones.</p>	10			

<p>Diversas organizaciones sociales, aglutinadas en la Coordinadora por la Defensa del Gas, inician medidas de fuerza en diferentes puntos del país en repudio a la decisión del gobierno de exportar el producto a los EE.UU., por un puerto chileno, y en rechazo al ALCA. Campesinos y cocaleros proceden al bloqueo de rutas en las ciudades de Pando, Beni y en la región de Los Yungas y el altiplano paceño, sindicatos de choferes, pedían la apertura de la carretera Cotapata-Santa Bárbara, disminución del costo anual del “seguro obligatorio para el autotransporte”. En El Alto, la FEJUVE y la Central Obrera Regional (COR) inician un paro cívico por tiempo indefinido (decidido en la Asamblea del 9 de septiembre de este año), con las demandas de anulación total de los formularios “Maya” y “Paya”.</p> <p>Cerca de 20 mil personas, entre trabajadores, cocaleros, campesinos y estudiantes, convocados por el Movimiento al Socialismo (MAS), el Estado Mayor del Pueblo (EMP) y la Central Obrera Boliviana (COB), se movilizan por el centro de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz en repudio a la exportación del gas y a la firma del ALCA. El conjunto de organizaciones que participan de la medida coincide en que el gas debe ser industrializado y utilizado en el país.</p>	15	Septiembre	2003
<p>Diversos sindicatos y asociaciones de transportistas, del departamento de La Paz, realizan un paro de actividades en demanda de disminución del costo del “seguro obligatorio para el autotransporte”.</p>	18		
<p>Se realiza una movilización general en defensa del gas y múltiples reivindicaciones sectoriales, en La Paz (FEJUVE, El Alto, Cocaleros junto a organizaciones de transportistas de Yungas, Central Obrera Boliviana y choferes del departamento de La Paz) y Cochabamba (cocaleros, regantes y población en general convocados por la Coordinadora de Defensa del Gas). Las demandas eran tres: revisión de la Ley de Hidrocarburos, específicamente el artículo 7°, que habla de la propiedad del recurso natural en boca de pozo; industrialización del gas en territorio nacional, no vender el recursos en su estado natural; y, plebiscito o referéndum para la elección de un puerto de salida del gas.</p>	19		
<p>Fuerzas combinadas de la policía y el ejército intervienen el bloqueo de ruta campesino en la localidad de Warisata, en el altiplano paceño. La represión de las fuerzas de seguridad causa la muerte de 5 campesinos, un militar y más de 20 heridos entre manifestantes y agentes del orden. Felipe Quispe, dirigente de la CSUTCB, repudia el hecho, convoca a declarar un estado de sitio campesino en la región y anuncia la intensificación de los cortes de ruta.</p>	20		
<p>Comunarios de Sorata toman el pueblo y queman las oficinas de gobierno.</p>	21		
<p>El Comité Ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de La Paz, determina el inicio de una huelga general indefinida en protesta por el asesinato de campesinos, llevado a cabo por fuerzas policiales y militares en la intervención del bloqueo campesino de Warisata el pasado fin de semana.</p>	22		



Alrededor de 20 mil personas, pertenecientes a diversas organizaciones entre las que se encuentran los maestros rurales y urbanos, estudiantes de la UPEA, trabajadores administrativos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y estudiantes secundarios, marchan por la ciudad de La Paz en la convocatoria realizada por la COB, en el segundo día de huelga general declarada por la máxima entidad de los trabajadores. En el departamento de Oruro, un conjunto de organizaciones sociales se moviliza por el centro de la ciudad en rechazo a la exportación del gas.	30	Septiembre	2003
Diversos sectores sociales, entre estudiantes universitarios y trabajadores fabriles, marchan por el centro de La Paz en el tercer día de huelga general, convocada por la COB, en repudio a la exportación de gas a los EE.UU por un puerto chileno, en rechazo al ALCA y para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Al promediar la movilización, efectivos del Grupo Especial de Seguridad (GES) reprimen a los manifestantes y detienen a 14 estudiantes. En Cochabamba cientos de personas se movilizan, convocados por la Central Obrera Departamental (COD), con las mismas reivindicaciones.	1		
Diversas organizaciones sociales, aglutinadas en la COR, realizan un paro cívico en El Alto. Se movilizan en oposición a la política del gobierno. Efectivos de la policía y el ejército reprimen a los manifestantes y se enfrentan con estudiantes de la UPEA y con miembros de la FEJUVE, quienes resisten con palos y cartuchos de dinamita. Distintas movilizaciones con similares demandas, se producen en las ciudades de Beni, Sucre, Santa Cruz y en la región de los Yungas de La Paz.  Más de mil trabajadores de la salud, de todo el país, inician un paro de actividades por 48 horas de acuerdo con la convocatoria de la CSTSB y la COB en defensa del gas.	2		
Estudiantes universitarios, rentistas y trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) marchan por la ciudad de La Paz para expresar su rechazo a la exportación del gas y para exigir la renuncia del presidente de la nación. En Cochabamba, con las mismas consignas, campesinos y cocaleros se movilizan por el centro de la ciudad e instalan bloqueos en las principales vías de acceso a la región.  Miles de personas marchan, por la ciudad de La Paz, en contra de la política del gobierno y para exigir la renuncia del presidente Sánchez de Losada. La misma situación se vive en diversas ciudades del interior del país entre las que se destacan Potosí y Oruro, cuyas movilizaciones son protagonizadas por los maestros y los mineros respectivamente.	3	Octubre	
Alrededor de 500 mineros del centro productivo Huanuni de Potosí, inician una marcha hacia la ciudad de La Paz en protesta por la intención del gobierno de exportar gas a los EE.UU. y en apoyo a las medidas de presión desarrolladas por la COB.	6		
Estudiantes y profesores, de diversas universidades, se manifiestan, en diferentes puntos del país contra la política del gobierno y en rechazo a la exportación de gas, y al ALCA. Las movilizaciones más destacadas se producen en la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM) de Santa Cruz, en la UMSS de Cochabamba y en la Tomás Frías de Potosí.	8		
Los mineros de Huanuni que marchan desde Potosí hacia El Alto se enfrentan en la localidad de Ventilla con fuerzas combinadas de la policía y el ejército. Como consecuencia de la represión, un trabajador muere a causa de una explosión mientras que otros 8 resultan heridos.	9		

<p>Vecinos de El Alto se enfrentan con la policía y el ejército en una nueva jornada del paro cívico, que se lleva a cabo en rechazo a la exportación del gas. La represión provoca la muerte de 2 personas mientras que otras 19 resultan heridas.</p>	11		
<p>Las Fuerzas Armadas inician, bajo órdenes del gobierno, el operativo de ocupación militar de El Alto para garantizar el abastecimiento de combustible en la ciudad de La Paz, con la llegada de camiones cisterna. Tropas del regimiento Ingavi intervienen una marcha convocada por la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y toman las calles y avenidas de la zona norte de la ciudad, ocasionando la muerte de 2 personas. Los habitantes de la región intentan interrumpir la caravana de camiones con piedras y palos, al tiempo que los efectivos, allí apostados, reprimen con gases lacrimógenos y balas de plomo. El accionar del ejército se extiende por siete zonas de la ciudad lo que provoca 26 muertos, 25 de ellos civiles, y más de 60 heridos en lo que constituye la jornada más violenta en la historia de la ciudad.</p>	12		
<p>Campeños, coccaleros y trabajadores, aglutinados en diversas organizaciones sociales como la Coordinadora por la Defensa del Gas y la COB, intensifican los bloqueos de rutas en los departamentos de Santa Cruz, Potosí, Oruro y Sucre en protesta contra la exportación del gas y para exigir la renuncia del presidente Sánchez de Losada. En el corte de carretera efectuado en Santa Cruz, un grupo de bloqueadores se enfrenta con la policía y resiste el intento de desalojo. Como consecuencia de la represión muere un campesino por el impacto de una bala de plomo, mientras que otros 4 resultan heridos.</p>		Octubre	2003
<p>Estudiantes de la UMSS, coccaleros, trabajadores afiliados a la COD y el EMP marchan y bloquean las calles céntricas de Cochabamba, para exigir la renuncia de Sánchez de Losada, en rechazo del ALCA y en demanda de la modificación de la Ley de Hidrocarburos. Efectivos de la policía reprimen a los manifestantes y detienen a tres personas.</p> <p>El vicepresidente de la república, Carlos Mesa, retira su apoyo al presidente Lozada tras los hechos de violencia ocurridos en los últimos días, en todo el país, aunque expresa que no renunciará al cargo.</p> <p>Diversas marchas contra la represión y la política del gobierno se llevan a cabo en las ciudades de El Alto, La Paz y en la localidad santacruceña de San Julián. Las fuerzas de seguridad intentan evitar la realización de las mismas y reprimen a los manifestantes, lo que genera la muerte de 20 personas mientras que otras 100 resultan heridas. Al finalizar la jornada se produce la muerte de 8 personas, que fueron heridas durante los acontecimientos del domingo.</p>	13		

<p>Alrededor de 20 mil personas marchan por el centro de Sucre, convocadas por la COD local. Al promediar la manifestación se producen enfrentamientos con la policía, en el momento en que los manifestantes arremeten contra el edificio de la Prefectura local. La represión deja un saldo de 2 personas heridas y 4 detenidas.</p> <p>El Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y los habitantes de Potosí inician un paro cívico y bloquean las principales calles y accesos a la ciudad en demanda de la renuncia del presidente de la república.</p> <p>Cocaleros y estudiantes marchan por la ciudad de Cochabamba y bloquean calles para exigir la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. La policía interviene la movilización y detiene a 17 personas, muchas de ellas menores de edad.</p>	14	Octubre	2003
<p>El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anuncia que, de común acuerdo con los partidos que integran la coalición de gobierno, el poder ejecutivo convocará a un referéndum consultivo por departamento, para conocer la posición del pueblo sobre la exportación del gas, se revisará la ley de hidrocarburos y se incorporará el mecanismo de la Asamblea Constituyente al régimen constitucional. Momentos después, Evo Morales y Felipe Quispe expresan que no aceptan las propuestas y reiteran el pedido de renuncia del primer mandatario.</p> <p>Un destacamento de militares del Regimiento Calama interviene, en la localidad de Patacamaya del departamento de Oruro, la marcha de 2 mil mineros de Huanuni hacia la ciudad de La Paz en repudio a la exportación del gas y en demanda de la renuncia del presidente de la república. Como consecuencia de la represión 3 trabajadores resultan muertos por balas de plomo, mientras que otros 14 son heridos de gravedad y trasladados a la capital departamental.</p> <p>Miles de personas se reúnen frente a la sede de la COD de Cochabamba en un acto convocado por la organización obrera, la Federación Universitaria Local y el dirigente cocalero Evo Morales, como punto culminante de la jornada de movilizaciones en reclamo de la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Al finalizar la actividad la policía reprime a la multitud, al tiempo que un grupo responde a la agresión arrojando bombas caseras a los balcones del Comando Departamental de la Policía. La represión deja un saldo 4 personas heridas y 22 detenidas.</p>	15		
<p>Alrededor de 200 mil personas, según los organizadores, entre campesinos, cocaleros de Los Yungas, mineros, y decenas de juntas vecinales de El Alto, se movilizan por el centro de La Paz para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y rechazar la propuesta del gobierno referida a la realización de un referéndum sobre la exportación del gas. Hacia el final de la marcha diversos grupos de estudiantes de la UPEA se enfrentan con la policía en las inmediaciones de la Corte Superior de Justicia (CSJ), lo que deja como saldo 3 heridos y 28 detenidos.</p> <p>Organizaciones sociales de la localidad Uyuni, en el departamento de Potosí, entre las que se encuentran maestros, trabajadores de la salud, campesinos y mineros declaran a instancias de la COR un paro cívico con la paralización de todos los servicios para exigir la renuncia del presidente de la nación.</p>	16		

<p>El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), renuncia a la primera magistratura luego de 6 semanas de conflictos sociales originados en la intención del gobierno de exportar gas a los EE.UU. por un puerto chileno en las que, como consecuencia de la represión policial y militar, perdieron la vida más de 70 personas. El Congreso de la nación nombra, con el apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria, primer mandatario al, hasta entonces, vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert.</p> <p>El nuevo presidente anuncia la convocatoria a un referéndum vinculante para determinar la política a seguir con respecto al gas, el llamado a una Asamblea Constituyente, la revisión de la ley de hidrocarburos y expresa que ocupará el cargo hasta que el cuerpo legislativo así lo disponga.</p>	17	Octubre	2003
<p>Dirigentes de la COR, de la FEJUVE de El Alto y de los coccaleros del Chapare expresan que declararán una tregua en las medidas de presión, para permitir al nuevo gobierno el cumplimiento de sus compromisos.</p>	18		
<p>Alrededor de 5 mil campesinos, pertenecientes a la CSUTCB, marchan desde El Alto hacia La Paz para realizar, en representación de las 20 provincias del departamento, una asamblea en la plaza San Francisco, en la cual otorgan un plazo de 90 días para que el presidente Carlos Mesa brinde solución al pliego petitorio de 72 puntos; entre los que se encuentran la libertad de todos los dirigentes campesinos detenidos, el pedido de 3,8 millones de hectáreas de tierra y la suspensión de la erradicación de la coca en Los Yungas y el Chapare. El primer mandatario asiste a la asamblea campesina en la cual expresa la necesidad de que se le otorgue una tregua para trabajar y organizar su gobierno.</p>	20		
<p>El líder del MAS, Evo Morales, anuncia que las federaciones de coccaleros del trópico de Cochabamba otorgan al gobierno un plazo de 30 días para que brinde respuestas a las exigencias del sector referidas a la suspensión de la erradicación de las plantaciones de coca.</p>	21		
<p>El presidente Carlos Mesa dispone la amnistía para los detenidos durante las protestas sociales, realizadas en el mes de octubre, en diversos puntos del país. El decreto alcanza a 70 personas que fueron detenidas bajo la Ley de Seguridad Ciudadana.</p>	31		
<p>Parlamentarios del MAS, MIP y del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), entre otros, votan la modificación de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana mediante la derogación de los artículos referidos al endurecimiento de las sanciones penales contra aquellos que bloqueen rutas en cualquier punto del país. El cuerpo de la ley es resistido por el conjunto de las organizaciones sociales.</p>	5		
<p>Familiares de las víctimas de la represión estatal marchan desde El Alto hacia la ciudad de La Paz e instalan un piquete de huelga de hambre frente a la casa de gobierno, en demanda de que el poder ejecutivo haga efectivo el pago de las indemnizaciones.</p>	18		

Los familiares de las víctimas de la represión estatal declaran un cuarto intermedio en la huelga de hambre que llevan adelante y suspenden el diálogo que mantenían con el gobierno. Representantes de los familiares rechazan la oferta oficial de una indemnización cercana a los 60 mil bolivianos en efectivo y los gastos de salud y educación de los hijos de los fallecidos, y expresan que la demanda mínima asciende a los 120 mil bolivianos por familia.	19	Noviembre	2003
Alrededor de 200 personas, entre heridos y familiares de las víctimas de la represión estatal arriban a La Paz, en la marcha iniciada el 29 de noviembre en Warisata en demanda de una indemnización cercana a los 50 mil bolivianos.	1	Diciembre	
Integrantes de la Coordinadora de Familiares de los Caídos y Heridos en la guerra del gas, se crucifican e inician una huelga de hambre en las inmediaciones del Viceministerio de Justicia, de la COB y del Congreso Nacional en demanda de la aprobación, por parte del gobierno, de una indemnización cercana a los 60 mil bolivianos.	2		
Un grupo de familiares de heridos graves firma un acuerdo con el gobierno, que consiste en una indemnización cercana a los 50 mil bolivianos y levanta las medidas de presión iniciadas en los últimos días. De esta manera son 15 los que han firmado mientras que el resto continúan con la huelga de hambre organizada por la Coordinadora de Familiares.	4		
Carlos Mesa presenta su plan 2004-2007. Propone Asamblea Constituyente, referéndum vinculante sobre el gas, Ley de Hidrocarburos, austeridad y reactivación económica.	4	Enero	2004
Cerca de 18 organizaciones sociales y sindicales entre las que se encuentran la APDHB, la COB, la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y la Universidad Pública de El Alto (UPEA), la Federación de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación de Mineros de Bolivia, conforman en la ciudad de La Paz un comité impulsor con el objetivo de iniciar un juicio de responsabilidades al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a sus ministros y al alto mando militar, a quienes responsabilizan de las muertes ocurridas durante los meses de febrero y octubre de 2003.	20		
El presidente Carlos Mesa aprueba el Decreto Supremo 27.342, por medio del cual se restituye a manos del estado boliviano el concepto de propiedad de los hidrocarburos.	31		
Carlos Mesa promulga la Ley de Reformas a la Constitución, que incluye la Asamblea Constituyente, la iniciativa ciudadana y el referéndum.	20		

Alrededor de 4 mil personas marchan por el centro de La Paz, convocadas por la COB, en repudio a la política del gobierno y para exigir la derogación de la ley de hidrocarburos, entre otras reivindicaciones. Asimismo, trabajadores del magisterio urbano se movilizan hacia el Ministerio de Educación para exigir un aumento de presupuesto.	17	Marzo	2004
Cientos de personas, entre mineros, obreros industriales y desocupados, convocados por la COB, marchan por el centro de La Paz en repudio a la política del gobierno y exigen la renuncia del presidente Mesa y la convocatoria a elecciones en un plazo de 6 meses. Al mismo tiempo, maestros rurales se movilizan por la ciudad en demanda de aumento presupuestario para el sector. Luego, dirigentes de la central obrera y del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional y de la Soberanía y Dignidad (CODEPANAL) presentan en el Congreso Nacional un proyecto de ley que apunta a la recuperación de los hidrocarburos y petroquímicos.	25		
El presidente Carlos Mesa firma el decreto supremo 27.449, por medio del cual se establece el marco para la consulta nacional sobre la política energética del país que se realizará el próximo 18 de julio y se llevará a cabo en distrito único a nivel nacional. Asimismo, informa de los cambios realizados en su gabinete: el nombramiento de 3 nuevos ministros, la rotación de otros 2, la eliminación de 3 delegaciones con rango ministerial y la creación de una nueva cartera vinculada a los asuntos indígenas y pueblos originarios.	13	Abril	
Alrededor de 5 mil personas, entre mineros, fabriles y trabajadores sin jubilación, convocadas por la COB, marchan por el centro de La Paz en demanda de la derogación de la actual ley de hidrocarburos, de la ley de pensiones, la reversión al estado de los recursos hidrocarburíferos y el cumplimiento del pliego petitorio que la organización presentó al gobierno a principios del año. Al finalizar la actividad, el secretario ejecutivo Jaime Solares anuncia el inicio de una huelga indefinida para el próximo 3 de mayo. Similares movilizaciones se realizan en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz.	15		
La Confederación de Choferes de Bolivia inicia un paro de 24 horas, en todo el país, para exigir que el gobierno mantenga estable el precio de los hidrocarburos y que la distribución de los mismos sea realizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) en lugar de los mayoristas privados.	22		
Miles de personas, entre trabajadores fabriles, docentes, médicos, desocupados e integrantes de la generación intermedia, convocados por la COB, se movilizan por el centro de La Paz, en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y en rechazo a la política del gobierno del presidente Carlos Mesa, en repudio a las empresas transnacionales y exigen la industrialización del gas.	1	Mayo	
En la ciudad de El Alto la Central Obrera Regional (COR) marcha, junto a estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), trabajadores de la empresa Embotelladora Boliviana (EMBOL), del Servicio Nacional de Caminos (SNC) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), en defensa del gas. Evo Morales, dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) expresa su rechazo a las movilizaciones y convoca a pacificar el país por la vía del diálogo.			
Cerca de 4 mil indígenas guaraníes ocupan los campos petroleros de las empresas transnacionales Repsol, Maxus y Pluspetrol en el departamento de Santa Cruz para exigir una nueva ley de hidrocarburos que recupere los recursos para los bolivianos.			

Comienza la huelga general con bloqueo de caminos, convocada por la COB, y la CSUTCB, en reclamo de la nacionalización del gas, con la adhesión de un sector de los trabajadores mineros.	3	Mayo	2004
Unas mil personas, entre maestros rurales, trabajadores de la salud, pequeños prestatarios, desocupados y representantes de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, se movilizan desde la localidad de Patacamaya hacia La Paz en la actividad denominada “Marcha por la Vida, la Dignidad y la Recuperación de los Hidrocarburos”, convocada por la COB, y el dirigente de la COR de El Alto, Roberto De la Cruz. La medida busca la derogación del decreto 27457 y la convocatoria a elecciones generales en un lapso de 6 meses	13		
El presidente Carlos Mesa anuncia, a través de un mensaje a la nación, las 5 preguntas del referéndum nacional sobre el gas, previsto para el próximo 18 de julio. Los temas sobre los que la ciudadanía deberá decidir son la anulación de la ley 1689, promulgada por Sánchez de Lozada, la recuperación por parte del estado de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, la refundación de YPFB a partir de la recuperación de la propiedad estatal de las acciones, la continuidad de la política oficial de condicionar la exportación a Chile a los resultados del reclamo de soberanía marítima y la exportación de gas siempre y cuando se cubra primero el consumo interno.	19		
Miles de personas, convocadas por la COR de El Alto, se movilizan desde esa ciudad hacia La Paz para exigir la convocatoria a elecciones generales. La marcha está integrada por comerciantes, trabajadores de frigoríficos, de la salud, desocupados, campesinos y federaciones de mujeres alteñas.	21		
Indígenas de la localidad de San Alberto, departamento de Cochabamba, inician una marcha hacia la ciudad de La Paz para exigir al gobierno que se rescinda el contrato de capitalización con la empresa petrolera de origen brasilero Petrobras, debido a que la misma ha desatendido cuestiones ambientales e incumplido cláusulas contractuales.	1	Junio	
Maestros urbanos y rurales de La Paz y vecinos de la ciudad de El Alto bloquean, en esta última ciudad, los principales accesos que conducen hacia otras regiones del país como parte del paro cívico convocado por la FEJUVE en rechazo a las preguntas formuladas por el poder ejecutivo para el referéndum sobre el gas y para exigir la conexión del servicio en el departamento.	2		
Alrededor de 100 mil personas, convocadas por el Comité Cívico de Santa Cruz, se concentran en el centro de la ciudad en demanda de un referéndum departamental para que la ciudadanía decida sobre las autonomías regionales.	22		
Se realiza el referéndum sobre el gas en todo el territorio nacional. La opción por el SÍ se impone en las cinco preguntas en todos los departamentos, con excepción de Potosí, en donde el NO gana en las dos últimas, por lo que triunfa la política de hidrocarburos del presidente Carlos Mesa. La participación ciudadana alcanza el 60% del padrón. El secretario ejecutivo de la COB, Jaime Solares, no admite el resultado del proceso electoral y anuncia movilizaciones en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos. Por su lado, Evo Morales expresa que, con el resultado arrojado por el referéndum, se logra la nacionalización del gas y un importante avance democrático, puesto que se pasa a una instancia de democracia participativa.	18	Julio	

<p>El Poder Ejecutivo envía al Congreso Nacional su proyecto de Ley de hidrocarburos, el cual es derivado a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis y consideración.</p>	10	Agosto	2004
<p>Transportistas y dirigentes vecinales de la ciudad de Santa Cruz ocupan la planta de refinación de hidrocarburos de Palmasola en repudio al alza en los precios de los combustibles anunciada por el gobierno.</p>	18		
<p>La comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados cuestiona el proyecto de ley de hidrocarburos presentada por el Poder Ejecutivo y conmina al gobierno a presentar una nueva propuesta dentro de los próximos 7 días.</p> <p>Choferes de transporte de La Paz inician una huelga de hambre, en la ciudad capital, en repudio del alza en las tarifas de los combustibles habilitada por el gobierno. En el departamento de Oruro, trabajadores del mismo ramo bloquean calles en rechazo al aumento de los carburantes.</p> <p>Los presidentes de los comités cívicos de todo el país aprueban, en Santa Cruz, el llamado Manifiesto Cívico a la Nación en el que se expresa la intención de realizar, junto a las elecciones municipales del próximo 5 de diciembre, un referéndum nacional de carácter vinculante para aprobar las autonomías regionales.</p>	19		
<p>El presidente Carlos Mesa expresa que, mientras que el Congreso no apruebe el proyecto de ley de hidrocarburos presentado por el Poder Ejecutivo, no promulgará ninguna ley que emane del parlamento.</p>	20		
<p>La Federación Departamental de Chóferes Primero de Mayo de La Paz realiza un paro de actividades por 24 horas y bloquea las principales calles céntricas y accesos a la ciudad, para exigir al gobierno el congelamiento por un año del precio de los combustibles. La medida, que incluye una huelga de hambre de una veintena de dirigentes de la organización, obtiene una respuesta masiva por parte de los transportistas.</p> <p>En la ciudad de El Alto unas 20 mil personas se movilizan, convocadas por la FEJUVE, para demandar el congelamiento de los combustibles, la nacionalización de los hidrocarburos y el inicio del juicio al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.</p>	25		
<p>Cientos de coccaleros de Cochabamba marchan por el centro de la ciudad para exigir al gobierno el cumplimiento del compromiso, tomado el pasado 18 de julio, referente a la nacionalización de los hidrocarburos. El líder del sector y diputado nacional, Evo Morales, expresa que si el gobierno no cumple con el mandato popular los coccaleros iniciarán medidas de presión. Otras marchas con similares reivindicaciones se realizan en las ciudades de Oruro, Potosí, Sucre y Santa Cruz.</p> <p>En La Paz, gremiales, desocupados y militantes del MAS se movilizan desde El Alto, en apoyo a la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos.</p>	30		
<p>Dirigentes de la Confederación de Choferes de Bolivia y representantes del gobierno firman un acuerdo por el cual ambas partes se comprometen a instalar mesas de diálogo para evaluar la posibilidad de congelar el precio de los hidrocarburos por más de 100 días.</p>	31		



<p>La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados aprueba en general la cláusula que establece la obligatoriedad en la migración de las empresas petroleras hacia la nueva ley de hidrocarburos en el término de 180 días.</p>	<p>22</p>	<p>Septiembre</p>	
<p>Miles de padres de familia de La Paz y el Alto marchan por el centro paceño para exigir al gobierno cargos docentes, mobiliario, infraestructura, mayor participación del sector en el Consejo Nacional de Educación (CONED), la aprobación de la ley de hidrocarburos y el inicio del juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros.</p> <p>Con la participación de más de 500 representantes de organizaciones sociales de Bolivia y de las delegaciones de las Campañas contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, concluye en la ciudad de La Paz el III Encuentro Boliviano contra el TLC y el ALCA iniciado el pasado lunes 6. Como conclusión del evento se redacta una declaración andina la cual respalda la lucha del pueblo boliviano por la nacionalización del gas y el inicio del juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada y rechaza las negociaciones llevadas a cabo por los diversos gobiernos de la región con el de EE.UU. tendientes a la firma de los acuerdos comerciales</p>	<p>8</p>		
<p>La Asociación de Familiares de Fallecidos y Heridos como consecuencia de la represión militar de octubre de 2003, campesinos, colonizadores, padres de familia y productores de coca del trópico de Cochabamba, entre otros, inician una marcha desde la localidad cochabambina de Caracollo hacia La Paz en conmemoración de las víctimas de la represión en las jornadas de octubre. Exigen el inicio del juicio de responsabilidades hacia el ex presidente Sánchez de Lozada y sus principales colaboradores y demandan la nacionalización de los hidrocarburos.</p>	<p>11</p>	<p>Octubre</p>	<p>2004</p>
<p>El Congreso Nacional aprueba, con 123 votos a favor sobre 157 legisladores, el inicio de un juicio de responsabilidades contra el ex presidente de la república Gonzalo Sánchez de Lozada y sus 15 ministros acusados de violación de garantías constitucionales durante las jornadas de octubre de 2003.</p> <p>Alrededor de 100 indígenas chiquitanos del departamento de Santa Cruz inician una marcha hacia la ciudad de La Paz para sumarse a las movilizaciones que reivindican la nacionalización del gas. Exigen, junto al Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (CONAMAQ) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que en la nueva ley de hidrocarburos sean incorporados los derechos de los pueblos originarios.</p>	<p>13</p>		
<p>Miles de personas, integrantes de la FEJUVE de El Alto, se movilizan por La Paz para exigir la nacionalización de los hidrocarburos y el inicio del juicio contra Sánchez de Lozada y sus ministros.</p>	<p>15</p>		

<p>Alrededor de 10 mil coccaleros de Cochabamba, 5 mil campesinos de La Paz y cerca de 30 mil mineros, según los organizadores, arriban a la ciudad de La Paz procedentes de diversos puntos del país con motivo de la confluencia de las movilizaciones convocadas por distintas organizaciones políticas y sociales que exigen la nacionalización de los hidrocarburos y el inicio del proceso judicial al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su cuerpo de ministros. Al finalizar la jornada, representantes de las diversas organizaciones, entre las que se cuentan el MAS, la CSUTCB, la COB y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, expresan que los manifestantes se quedarán en las inmediaciones de la plaza Murillo hasta obtener una respuesta del poder ejecutivo.</p>	18	Octubre	
<p>La Cámara de Diputados aprueba en general el proyecto de ley de hidrocarburos presentado por la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso Nacional. Los legisladores deberán aprobar la norma en particular, proceso que puede llevar varias semanas debido a los 142 artículos que posee. Los diputados del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), liderado por Felipe Quispe, y algunos de la Brigada Parlamentaria de Tarija se retiran del recinto antes de la votación.</p>	20		
<p>En Santa Cruz se realiza el paro departamental convocado por el Comité Cívico local en demanda de que el gobierno nacional convoque a un referéndum vinculante para que la ciudadanía decida acerca de las autonomías departamentales. En el departamento de Tarija, la medida de presión obtiene un cumplimiento parcial y los representantes cívicos expresan que la convocatoria al referéndum debe hacerse a través de la Asamblea Constituyente. En Santa Cruz y Tarija se encuentran las mayores reservas de gas natural de todo el país.</p>	11		2004
<p>El presidente de la República, Carlos Mesa, manifiesta su intención de convocar al referéndum nacional para que la ciudadanía decida sobre el tema de las autonomías regionales. La convocatoria se realizaría en el próximo mes de enero para que la consulta se concrete en abril de 2005.</p>	12		
<p>Cientos de vecinos de la ciudad de El Alto, entre gremiales, transportistas campesinos, estudiantes y mineros, se movilizan y bloquean calles en la jornada de paro cívico convocada por la FEJUVE local para exigir al gobierno el cumplimiento de un pliego de 18 demandas, entre las que se cuentan la nacionalización de los hidrocarburos, la instalación de gas natural en todos los domicilios alteños, la expulsión de las empresas concesionarias Aguas del Illimani y Electropaz, el inicio del juicio de responsabilidades al ex mandatario Sánchez de Lozada y la anulación de la subvención de 33 millones de bolivianos para los partidos políticos.</p>	15	Noviembre	
<p>La Cámara de Diputados aprueba el artículo 5° del proyecto de ley de hidrocarburos, presentado por la Comisión de Desarrollo Económico. La normativa, que reestablece al estado boliviano la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo y obliga a las empresas transnacionales que hubieran suscrito contratos de riesgo compartido para ejecutar las actividades de exploración, explotación y comercialización al amparo de la Ley 1.689 del 30 de abril de 1996 a convertirse a las modalidades de contratos establecidos en la nueva ley, cuenta con el apoyo de los legisladores del MAS y la Nueva Fuerza Republicana (NFR) y parte de las bancadas del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).</p>	17		

Decenas de desocupados y vecinos de la ciudad de El Alto se concentran en la céntrica plaza Los Héroes y proceden a la quema de banderas de los partidos políticos que participaron en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El repudio apunta al MNR, MIR, NFR, Acción Democrática Nacionalista (ADN) y al Movimiento Sin Miedo (MSM) a quienes se acusa de ser partícipes de las matanzas de octubre de 2003.	26	Noviembre	2004
Se realizan las elecciones municipales en todo el territorio nacional con la participación de decenas de listas conformadas por agrupaciones ciudadanas y pueblos indios. En la ciudad de La Paz, Juan del Granado es reelecto como alcalde por el MSM con el 46% de los sufragios mientras que la segunda ubicación es ocupada por Pablo Ramos del MAS con el 20% de los votos. En la ciudad de Cercado, capital del departamento de Cochabamba, el candidato de la agrupación Ciudadanos Unidos (CIU), Gonzalo Terceros, obtiene el 33% de los sufragios seguido por Gonzalo Lema del MAS con el 31%. En todo el país, el partido liderado por Evo Morales obtiene representación en 178 de las 327 alcaldías. Los partidos tradicionales como el MNR, MIR, NFR y Unión Cívica Solidaridad (UCS) experimentan una fuerte reducción en su caudal de votos con respecto a las elecciones presidenciales de 2002.	5	Diciembre	
La Confederación Nacional de Choferes de Bolivia realiza un paro nacional con bloqueo de caminos por 24 horas, para repudiar el incremento de los precios de los combustibles decretado por el gobierno y exigir el inicio del diálogo con representantes del Poder Ejecutivo. Hacia el final de la jornada, representantes de los choferes acuerdan con funcionarios del gobierno nacional declarar un cuarto intermedio en la protesta con el compromiso de estudiar el aumento de las tarifas en todo el país.	4		2005
Miles de personas marchan por el centro de Santa Cruz hacia la sede de la prefectura local para repudiar la política del gobierno de Carlos Mesa y protestar por el aumento del precio de los combustibles; al mismo tiempo, la Federación de Transportistas local inicia, con las mismas reivindicaciones, un paro indefinido de labores. Los policías lanzan gases lacrimógenos contra la multitud, lo que obliga a dispersar la movilización por unos instantes. Momentos después, decenas de personas traspasan las vallas de seguridad y se enfrentan con los agentes del orden, dejando un saldo de 8 heridos.	5	Enero	
Cientos de trabajadores sin jubilación, conocidos como generación intermedia, marchan por el centro de La Paz para repudiar el aumento de los combustibles.	7		

<p>Miles de personas se movilizan por la ciudad de El Alto y bloquean calles y avenidas en la primera jornada del paro cívico, por tiempo indefinido, declarado por la FEJUVE local y un conjunto de organizaciones sociales –transportistas, comerciantes, jubilados, docentes y estudiantes, entre otras– en repudio al aumento de los precios del combustible decretado por el gobierno. Otras demandas giran en torno a la nacionalización de los hidrocarburos, el inicio del juicio a Sánchez de Lozada y la rescisión del contrato con la empresa Aguas del Illimani Sociedad Anónima (AISA).</p> <p>Al mismo tiempo, integrantes de organizaciones cívicas y sociales de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y Cochabamba se movilizan por sus respectivas ciudades en la jornada de huelga general convocada por la COB y las diversas centrales departamentales locales en repudio al aumento de los combustibles.</p>	10		
<p>Se inicia en la ciudad de Santa Cruz la primera jornada del paro cívico por 48 horas, declarada por el Comité Pro Santa Cruz, en demanda de la anulación del decreto presidencial que establece el incremento en los combustibles.</p> <p>El primer mandatario firma 6 decretos en beneficio del sector productivo y agropecuario, concentrado en la región cruceña, y expresa la necesidad de poner fin a la medida de fuerza.</p> <p>El presidente Carlos Mesa anuncia la rescisión concertada del contrato con la empresa francesa AISA, concesionaria del agua potable en la ciudad de El Alto.</p>	11		
<p>Miles de personas se movilizan por la ciudad de El Alto en la denominada “Marcha de Júbilo Patriótico” para marcar el fin del paro cívico y celebrar la rescisión del contrato con la empresa AISA, concesionaria del agua potable en la región.</p>	13		
<p>Miles de personas, entre dirigentes de la Central Obrera Regional (COR) y trabajadores pertenecientes a diversos sindicatos, marchan desde la ciudad de El Alto hacia La Paz, para exigir la anulación del decreto que autoriza el incremento en los combustibles, el inicio del juicio a Sánchez de Lozada y la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos.</p>	17		
<p>El presidente Carlos Mesa firma el Decreto 27.983 por el cual establece una rebaja del orden del 6% en los precios del combustible diesel, con el objetivo de generar una instancia de diálogo con los dirigentes de diversos sectores del departamento de Santa Cruz, que se mantienen en huelga de hambre en repudio al Decreto 27.959 por el que se aumentan los precios de los combustibles. No obstante a la medida gubernamental, las organizaciones santa-cruceñas y del resto del país continúan con las acciones de protesta.</p>	19		
<p>Miles de personas, entre estudiantes, vecinos y representantes de organizaciones cívicas y empresariales marchan por la ciudad de Santa Cruz para exigir la anulación del Decreto 27.959 y la realización de un referéndum por las autonomías regionales. En los momentos finales de la movilización, cientos de jóvenes se concentran en las puertas de la Prefectura local y apedrean a los efectivos policiales allí apostados, quienes con el apoyo del Grupo Especial de Seguridad (GES) reprimen a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma, y desalojan el lugar. Como consecuencia del enfrentamiento resultan heridos 24 policías y 3 estudiantes.</p>	20		

Enero

2005

Miles de personas marchan por las calles de Santa Cruz y se concentran en la Plaza 24 de Septiembre para exigir la asunción de un gobierno autónomo departamental. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz pronuncia un discurso en el que lanza una convocatoria para realizar un Cabildo Abierto el próximo viernes 28 con el objetivo de inaugurar un gobierno departamental provisional. Al mismo tiempo, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM) ocupa las instalaciones de la Prefectura local con las mismas reivindicaciones enunciadas por el líder cívico.	21	Enero	2005
Miles de personas convocadas por diversas organizaciones cívicas y sociales marchan por las ciudades de Sucre, Cochabamba y La Paz para rechazar las pretensiones santacruceñas de declarar la autonomía regional, así como para respaldar el sistema democrático y consolidar a la Asamblea Constituyente como el único medio legítimo para establecer una nueva estructura orgánico-institucional del estado.	27		
Alrededor de 200 mil personas participan en la ciudad de Santa Cruz del Cabildo Abierto convocado por el comité cívico local, con el objetivo de declarar la autonomía regional. Durante el acto, los concurrentes otorgan pleno poder a la asamblea autonómica, la que establece la elección directa del prefecto departamental y la convocatoria a un referéndum nacional vinculante a realizarse el próximo 10 de abril para decidir sobre la autonomía.	28		
En diversas ciudades del país, miles de personas marchan en rechazo a las exigencias de autonomía expresadas por Santa Cruz. En La Paz, una multitud conformada por campesinos, estudiantes universitarios y miembros de organizaciones cívicas y sociales se moviliza en defensa de la democracia y de la Constitución.			
El presidente Carlos Mesa firma un decreto supremo por el que convoca a elecciones nacionales para el próximo 12 de junio a fin de elegir prefectos departamentales.			
Convocados por el MAS y las 6 Federaciones de Productores de Coca de Cochabamba, miles de campesinos, indígenas y cocaleros del Trópico de Cochabamba marchan por las calles de la ciudad hacia la Plaza 14 de Septiembre, para expresar su rechazo a la elección directa de los prefectos departamentales y su oposición a que se inicie el proceso de las autonomías regionales antes de celebrarse la Asamblea Constituyente.	31		
Con el apoyo del comité cívico local y medio centenar de instituciones, alrededor de 10 mil personas marchan en la localidad de Yapacaní para exigir al gobierno la inclusión, en la nueva ley de hidrocarburos, de un artículo que otorgue un 10% de las regalías petroleras a los departamentos productores y un 3% a los no productores.	14	Febrero	
Habitantes de Camiri, junto a organizaciones cívicas locales, bloquean por 24 horas la ruta que conduce de Santa Cruz a Yacuiba para exigir que el Parlamento decida considerar a su localidad como el centro de operaciones de la refundada empresa YPFB.	21	Febrero	
Decenas de indígenas, integrantes del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ), inician una marcha desde la localidad de Konani hacia el centro de La Paz en demanda de que la ley de hidrocarburos garantice los derechos de los pueblos indígenas y que el Congreso avance en la convocatoria a la Asamblea Constituyente.	28	Febrero	

<p>Cientos de campesinos, pertenecientes a las 6 Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, marchan por el centro cochabambino para exigir la inmediata aprobación de la ley de hidrocarburos en los términos expresados por la población en el referéndum realizado en el mes de junio de 2004.</p> <p>Miles de campesinos y trabajadores pertenecientes a diversos sectores sociales bloquean la carretera que vincula a Sucre con los departamentos de Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz, y las localidades de Entre Ríos, Bulo Bulo y Yapacaní, en demanda de la aprobación de la ley de hidrocarburos y de la convocatoria a la Asamblea Constituyente.</p> <p>Voceros del gobierno no descartan el uso de la fuerza para garantizar el libre tránsito por todo el territorio nacional.</p>	1	Marzo	2005
<p>La FEJUVE de El Alto inicia un paro cívico con bloqueo de calles y avenidas, por tiempo indefinido, en demanda del inmediato retiro de AISA y la pronta instalación de una empresa pública bajo control social.</p>	2		
<p>Efectivos de la policía se enfrentan con vecinos de El Alto en diversos puntos de la ciudad, en el segundo día de paro cívico encabezado por la FEJUVE local en demanda del retiro inmediato de AISA. El presidente de la organización, Abel Mamani, expresa que si el gobierno no cumple con su palabra se extremarán las medidas de presión con la toma de las instalaciones de la empresa.</p>	3		
<p>Alrededor de 15 mil personas marchan por el centro de El Alto y se concentran en la autopista que une a la ciudad con el aeropuerto para exigir la renuncia del alcalde José Luis Paredes y el inmediato retiro de la empresa AISA.</p>	4		
<p>El primer mandatario Carlos Mesa anuncia, por cadena nacional de radio y televisión, que debido a los múltiples bloqueos de rutas y caminos existentes en el país y a las presiones de diversos sectores políticos y sociales en torno a la aprobación parlamentaria de la nueva ley de hidrocarburos, presentará al Congreso la renuncia a la presidencia en las primeras horas del lunes 7. Instantes después, miles de personas se concentran en las principales plazas de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí, Oruro y Sucre para respaldar al presidente Carlos Mesa y rechazar su renuncia. Representantes del MAS, incluido el líder cocalero Evo Morales, se oponen a la renuncia y la califican como una maniobra de chantaje destinada a concentrar poder en el Ejecutivo y derrotar las aspiraciones del pueblo boliviano.</p>	6		
<p>Campesinos del Chapare, pertenecientes a las 6 Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, bloquean por tiempo indefinido las carreteras que conducen hacia Santa Cruz y Oruro en repudio a las empresas transnacionales y en demanda de la aprobación parlamentaria de la ley de hidrocarburos.</p>			
<p>Ante la carta de renuncia presentada por el presidente Carlos Mesa, dirigentes de diversas organizaciones sociales de Santa Cruz, entre ellas colonizadores, gremiales, transportistas, juntas vecinales y la COR, deciden la suspensión por 48 horas de los cortes de rutas realizados en la localidad de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, en demanda de la aprobación de la ley de hidrocarburos.</p>	7		

<p>El Congreso Nacional rechaza por unanimidad la renuncia presentada por el presidente de la República, por lo que Carlos Mesa continúa al frente de la Primera Magistratura. Las condiciones de la negociación se establecen en un documento firmado por el Poder Ejecutivo y los legisladores de todos los partidos, con excepción del MAS y del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP).</p> <p>Cientos de personas se concentran en la Plaza Murillo, en el centro de La Paz, para celebrar la ratificación parlamentaria de Carlos Mesa. En las ciudades de Oruro y Cochabamba, alrededor de 5 mil personas se movilizan en apoyo al presidente.</p>	8	Marzo	2005
<p>Se firma un “pacto antiligárquico” entre todas las fuerzas sociales movilizadas.</p>	9		
<p>Miles de personas se movilizan, a instancias del presidente Carlos Mesa, en las ciudades de La Paz y Cochabamba, en repudio a los bloqueos de rutas organizados y sostenidos por diversas organizaciones sociales. En el centro cochabambino, cientos de personas entre regantes, campesinos y comerciantes bloquean una avenida para exigir la aprobación del pago del 50% de regalías al estado boliviano por parte de las empresas petroleras.</p>	10		
<p>El presidente Carlos Mesa anuncia por cadena nacional que solicitará al Congreso Nacional que adelante las elecciones presidenciales para el 28 de agosto de 2005, las cuales serían coincidentes con la elección de constituyentes para la reforma de la Carta Magna. En el mismo mensaje acusa al Parlamento y al líder del MAS, Evo Morales, de bloquear su gobierno. También critica a la Fiscalía General de la República, ya que ésta ha determinado que el bloqueo de rutas no constituye delito, por lo que no corresponde su intervención de oficio.</p>	15		
<p>La Cámara de Diputados aprueba la propuesta realizada por su presidente de gravar a las empresas petroleras con el 18% de regalías y el 32% de un Impuesto Directo a la Producción de Hidrocarburos (IDPH).</p> <p>Campesinos de Cochabamba bloquean la carretera que conduce hacia el departamento de Chuquisaca para exigir que el Parlamento apruebe el proyecto de ley de hidrocarburos que establece el 50% de regalías para el Estado. Con idénticas reivindicaciones, campesinos de la localidad santacruceña de San Julián bloquean la ruta que conduce al departamento de Beni. Con estas protestas ya son más de 70 los puntos bloqueados en 7 de los 9 departamentos del país.</p>	16		
<p>Campesinos y trabajadores de todo el país declaran un cuarto intermedio en las medidas de protesta para lograr la aprobación del 50% de regalías, en la nueva ley de hidrocarburos; por tal motivo, levantan los bloqueos de rutas y caminos en todo el territorio nacional.</p> <p>Representantes de diversas organizaciones sociales expresan que la suspensión de las medidas de presión se mantendrá al menos hasta que la Cámara de Senadores comience a tratar el cuerpo de la ley.</p>	16		

<p>La Cámara de Senadores comienza el tratamiento de la ley de hidrocarburos aprobada por los diputados. Así, la normativa es remitida a la Comisión de Desarrollo Económico para ser analizada en todos sus artículos. Dirigentes del MAS, del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y de Nueva Fuerza Republicana (NFR) expresan que no aceptarán modificaciones tanto en su forma particular como general.</p>	22	Marzo	2005
<p>El Poder Ejecutivo envía al Congreso Nacional los 76 contratos que el estado boliviano tiene con empresas petroleras para su revisión y consideración en función de la nueva normativa, sobre hidrocarburos que está siendo tratada por el Senado de la Nación.</p>	18	Abril	
<p>La Cámara de Senadores aprueba, con el apoyo de los representantes de todos los partidos excepto el MAS, el artículo de la nueva ley de hidrocarburos por el cual se fija en un 18% de regalías y un 32% del IDPH la ganancia del estado por la explotación de los hidrocarburos realizada por las empresas transnacionales.</p>	28		
<p>La Cámara de Diputados aprueba por 59 votos a 48, las modificaciones realizadas por el Senado a la ley de hidrocarburos. La misma, que consta de 142 artículos, fija el pago de regalías sobre la producción en un 18% más impuestos directos no deducibles por un 32%. En el mismo sentido, establece la prioridad del estado sobre los recursos energéticos en boca de pozo y obliga a las empresas petroleras a pasar los contratos a las actuales reglas de juego. El presidente Carlos Mesa deberá, en un plazo máximo de 10 días, vetar o promulgar la normativa.</p>	5		
<p>La CSUTCB, el CONAMAQ, la Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Central de Pueblos Mojeños de Beni (CPEMB) y el MSTB, crean el denominado Pacto por la Unidad. En el acto lanzan la convocatoria a una marcha nacional hacia La Paz para el lunes 16 de mayo, donde exigirán la modificación de la ley de hidrocarburos aprobada por el Congreso.</p>	9		
<p>El presidente Carlos Mesa observa la ley de hidrocarburos recibida del Congreso Nacional, por lo que la normativa retorna a la instancia parlamentaria para su revisión.</p> <p>Cientos de trabajadores, entre cooperativistas mineros y docentes primarios y universitarios, bloquean diversos puntos del departamento de Potosí en la jornada de paro cívico convocada por la Central Obrera Departamental, para exigir la definitiva nacionalización de los hidrocarburos, la inmediata convocatoria a la Asamblea Constituyente, y en repudio al referéndum autonómico pretendido por el Comité Cívico de Santa Cruz.</p>	10	Mayo	
<p>El Congreso Nacional rechaza las observaciones conceptuales realizadas por el presidente Carlos Mesa a la ley de hidrocarburos, por considerar que tal figura no está contemplada en la constitución. Por tal motivo, el primer mandatario tiene hasta el martes 17 de mayo para formular observaciones concretas a la normativa, caso contrario, la misma se considerará promulgada por el poder ejecutivo.</p>	11		
<p>Trabajadores de diversas organizaciones, afiliadas a la COD de Oruro, marchan por el centro de la ciudad en rechazo a la ley de hidrocarburos aprobada por el Congreso Nacional, por considerar que la misma no recupera los recursos naturales para el pueblo boliviano.</p>	12		



<p>Miles de personas se movilizan por distintas ciudades del país y bloquean calles y rutas en el inicio de la jornada de protesta, convocada por diversas organizaciones sociales, con el objetivo de modificar la ley de hidrocarburos aprobada por el Congreso Nacional. Cientos de afiliados a la COD de La Paz arriban a la ciudad capital para exigir al gobierno la definitiva nacionalización de los hidrocarburos.</p> <p>Con la misma demanda, cientos de vecinos de la ciudad de El Alto, integrantes de la FEJUVE local, y un numeroso grupo de trabajadores convocados por la COB, marchan hacia la Casa Presidencial. Decenas de personas intentan ingresar a la Plaza Murillo y son reprimidas por la policía por medio de gases lacrimógenos y balas de goma, lo que deja un saldo de 8 heridos. Por su parte, las organizaciones firmantes del Pacto de Unidad inician una marcha desde la localidad de Caracollo, departamento de Oruro, hacia el centro paceño, para exigir que la ley del gas incluya el pago del 50% de regalías por parte de las empresas petroleras.</p> <p>Alrededor de 200 mineros cooperativistas bloquean, a unos 40 km de la ciudad de La Paz, la carretera que une Cochabamba con el occidente del país para exigir la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. En Potosí, cientos de cooperativistas mineros bloquean los accesos a la ciudad para exigir la recuperación de los recursos naturales y la entrega de los bienes de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).</p> <p>Integrantes de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz y de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa inician una huelga de hambre en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y la renuncia del presidente Carlos Mesa.</p>	16	Mayo	2005
<p>Con la firma del presidente de la Cámara de Senadores se promulga la ley de hidrocarburos, luego de vencido el plazo para que el Poder Ejecutivo realice las observaciones pertinentes. La nueva normativa establece el pago del 18% de regalías y el 32% en concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la migración obligatoria de los contratos firmados bajo la antigua ley, la recuperación de los hidrocarburos en boca de pozo y la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).</p> <p>Los dirigentes de las principales organizaciones sociales del país rechazan la ley y anuncian la continuidad de las medidas de fuerza en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos.</p>	17		
<p>Los mineros cooperativistas levantan los diversos bloqueos de rutas organizados en los departamentos de La Paz y Potosí para exigir la nacionalización de los hidrocarburos, luego de firmar un acuerdo con el gobierno por medio del cual éste se compromete a ejecutar políticas que apunten a la reactivación del sector.</p>	18		
<p>Trabajadores mineros y campesinos del departamento de Potosí inician, con una marcha por el centro de la ciudad, la primera jornada de un paro por 48 horas convocado por la COD local y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios de Potosí (FSUTCOP) en demanda de la definitiva nacionalización de los hidrocarburos.</p>	19		

<p>Cerca de 10 mil personas, entre campesinos de los Yungas, cocalleros de Cochabamba, colonizadores, maestros y trabajadores mineros, se movilizan por la ciudad de La Paz para exigir la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente.</p> <p>Al promediar la actividad, tropas antimotines del Grupo Especial de Seguridad (GES) disparan gases lacrimógenos y balas de goma y logran dispersar a los manifestantes en las puertas de la Plaza Murillo, quienes se reagrupan en otra zona de la ciudad y continúan con la protesta.</p> <p>Por su parte, afiliados a la FEJUVE de El Alto y miembros de la Central Obrera Regional (COR) de la misma ciudad, bloquean diversas rutas en la región del altiplano y la autopista que conduce hacia el centro de La Paz en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos.</p>	24	Mayo	2005
<p>Los trabajadores de la Administración Autónoma de Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) inician un paro por 24 horas para exigir la nacionalización de los hidrocarburos y el cumplimiento de un conjunto de demandas sectoriales.</p>	25		
<p>Vecinos de la ciudad de El Alto, convocados por la FEJUVE local, bloquean la carretera que conduce al aeropuerto internacional para exigir que el Congreso Nacional apruebe la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente.</p> <p>Alrededor de 1000 maestros rurales del departamento de Oruro bloquean el acceso a la ciudad de Caracollo, en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y para exigir que el gobierno cumpla con una serie de reclamos sectoriales.</p> <p>Por su parte, cientos de docentes rurales del departamento de Sucre bloquean calles en el centro de la ciudad exigiendo un aumento salarial.</p>	30		
<p>Miles de personas, entre afiliados a la FEJUVE y la COR de El Alto, estudiantes de la Universidad Pública del Alto (UPEA) y padres de familia, marchan desde El Alto hacia La Paz y bloquean todos los accesos al centro paceño, cortan calles y avenidas para exigir que el Congreso Nacional apruebe la definitiva nacionalización de los hidrocarburos.</p> <p>Con las mismas reivindicaciones, cientos de personas, integrantes del Comité de Coordinación para la Nacionalización de los Hidrocarburos y las Empresas Capitalizadas, se movilizan por la ciudad de Oruro.</p>	31		

<p>Miles de personas, entre maestros urbanos y rurales, integrantes de juntas vecinales, trabajadores fabriles, estudiantes y jubilados, marchan por el centro de la ciudad de Cochabamba hacia la plaza 14 de Septiembre, en respuesta a la convocatoria realizada por diversas organizaciones sociales, para demandar la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la renuncia de los presidentes de ambas cámaras parlamentarias (Hormando Vaca Díez y Mario Cossío) y el cierre del Congreso Nacional.</p> <p>Integrantes de diversos sectores, entre maestros urbanos y rurales, desocupados, trabajadores fabriles y estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), se movilizan por distintas calles del centro de La Paz, para confluir en los alrededores de la Plaza Murillo, en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente.</p> <p>Con las mismas reivindicaciones, algunos manifestantes bloquean caminos en el departamento paceño y las rutas que conducen hacia Oruro, Copacabana y Desaguadero.</p>	1	<b>Junio</b>	<b>2005</b>
<p>Choferes de micros urbanos de La Paz, integrantes de la Asociación de Transporte Libre (ATL) inician un paro de actividades por 24 horas para exigir la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a la Asamblea Constituyente y mayor seguridad para circular por la ciudad.</p> <p>Por su parte, los afiliados a la Federación de Choferes de La Paz inician una huelga por 48 horas con las mismas reivindicaciones.</p>	2		
<p>Miles de personas, entre campesinos de los Yungas, estudiantes universitarios, maestros, trabajadores de la salud, comerciantes y desocupados, marchan por el centro de La Paz en el duodécimo día de paro departamental para repudiar el decreto gubernamental que convoca a la realización conjunta de la elección de delegados a la Asamblea Constituyente y al referéndum autonómico para el próximo 16 de octubre.</p>	5		

<p>En horas de la noche, y a través de un mensaje transmitido por cadena nacional, Carlos Mesa renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. En los argumentos señalados, por el primer mandatario, se destacan tanto la crisis social y el bloqueo nacional de caminos como la imposibilidad de alcanzar acuerdos con los diversos bloques parlamentarios, y las presiones sostenidas por las organizaciones cívicas del departamento de Santa Cruz, en torno a la demanda de autonomía regional.</p> <p>El Congreso Nacional deberá aprobar o rechazar la renuncia y nombrar a un nuevo presidente de la República. Representantes de diversos sectores sociales exigen la renuncia de los presidentes de ambas cámaras parlamentarias y la designación del presidente de la Corte Suprema de Justicia como primer mandatario.</p> <p>Miles de personas, entre campesinos, mineros, maestros urbanos y rurales, estudiantes de la UPEA y de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), trabajadores de la COR y vecinos de la FEJUVE de El Alto, marchan por el centro de La Paz para exigir la nacionalización de los hidrocarburos. Se producen enfrentamientos con comerciantes; las fachadas de la Corte Superior de Justicia, de la Casa de la Cultura y del Hotel Presidente resultan apedreadas.</p> <p>Los manifestantes realizan un cabildo abierto en la plaza Murillo en donde el principal dirigente de la FEJUVE alteña, Abel Mamani, expresa su repudio a la renuncia de Carlos Mesa y a la posible sucesión presidencial a favor de Hormando Vaca Díez, presidente del Senado. Al terminar el acto, un grupo de manifestantes intenta traspasar las vallas policiales y es reprimido con gases lacrimógenos; mientras que un total de 26 personas acusadas de dañar propiedad privada resultan detenidas por la Policía Técnica Judicial (PTJ).</p>	6	Junio	2005
<p>Miles de personas, entre mineros cooperativistas, campesinos de diversas provincias del departamento de La Paz, estudiantes de la UMSA, maestros rurales y miembros de la FEJUVE de El Alto, marchan por el centro de la ciudad y ocupan la plaza Murillo para exigir la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a la Asamblea Constituyente y rechazar la sucesión constitucional a favor tanto del presidente del Senado como del de la Cámara de Diputados.</p> <p>Ante el intento de los manifestantes de traspasar las vallas policiales que resguardan la Casa de Gobierno, agentes del GES disparan gases lacrimógenos y despejan la zona. Como resultado de la represión, son detenidas 54 personas mientras que otras 12 resultan heridas.</p> <p>Con las mismas reivindicaciones, diversas movilizaciones se realizan en las ciudades de Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosí y Santa Cruz.</p>	7		

<p>En horas de la noche y con el apoyo de las bancadas del MAS, el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), Nueva Fuerza Republicana (NFR) y una fracción del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Eduardo Rodríguez Veltzé es ungido como tercer presidente del actual período constitucional. El flamante primer mandatario expresa que su principal objetivo es lograr un acuerdo nacional que permita, a corto plazo, convocar a elecciones presidenciales.</p> <p>Integrantes de diversas organizaciones sociales realizan manifestaciones en los alrededores del recinto legislativo en repudio a los representantes de los partidos tradicionales. Las movilizaciones son reprimidas por efectivos policiales, lo que causa la muerte de un trabajador minero.</p>	9	Junio	2005
<p>Diversas organizaciones sociales, entre maestros urbanos y rurales, trabajadores de la salud, campesinos y mineros, anuncian una tregua en las medidas de presión luego de la asunción de Eduardo Rodríguez Veltzé como primer mandatario. De esta manera se levantan la mayoría de los bloqueos de rutas y caminos del país, a excepción de los de la región del altiplano, la ciudad de El Alto y los Yungas paceños. Por su parte, los líderes de la FEJUVE y la COR de El Alto, así como de la COB, manifiestan su decisión de mantener las medidas de presión hasta que las conquistas se hagan efectivas.</p>	10		
<p>El presidente, Eduardo Rodríguez Veltzé, se reúne en la ciudad de El Alto con los dirigentes de la COR y FEJUVE locales. El primer mandatario expresa la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan realizar las elecciones nacionales a finales del año. Los líderes sociales anuncian la suspensión de las medidas de fuerza mantenidas durante tres semanas a condición de que se conformen diversas comisiones multilaterales en las que se presenten y resuelvan las demandas de la población.</p>	12		
<p>Representantes de la Confederación de Maestros Rurales y de la Confederación de Maestros Urbanos anuncian la suspensión de la huelga indefinida y de las movilizaciones, en torno a la nacionalización de los hidrocarburos, que mantienen desde el pasado 16 de mayo. Los dirigentes gremiales expresan que no se reanudarán las clases hasta que no se abone el sueldo correspondiente al mes de mayo y el bono institucional.</p>	14		
<p>Alrededor de 70 organizaciones vecinales, sociales, cívicas, campesinas y sindicales de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Sucre resuelven, en la ciudad de Cochabamba, la suspensión de las movilizaciones en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente, y acuerdan encausar estas y otras reivindicaciones a través del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.</p>	18		
<p>El presidente Eduardo Rodríguez Veltzé firma el decreto 28.228 por el que se convoca para el próximo 4 de diciembre a elecciones generales en todo el territorio nacional para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados, por un período constitucional de 5 años. Acto seguido, el primer mandatario emite el decreto 28.229 por medio del cual se establece, para la misma fecha, la realización de las elecciones de prefectos departamentales, por un período de 3 años.</p> <p>El Congreso Nacional debe ratificar o rechazar lo establecido por el Poder Ejecutivo. Esta resolución, se suma a la aprobada días atrás en donde los senadores y diputados convocan a la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente y la realización del referéndum autonómico en todo el territorio nacional para el 2 de julio de 2006.</p>	6		

El alcalde de Cochabamba, Gonzalo Terceros, y un grupo de 8 concejales se suman a la huelga de hambre iniciada en las últimas horas por la Asociación de Municipios del Departamento de Cochabamba (AMDECO), para reclamar al gobierno la asignación para los gobiernos locales del 20% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Con las mismas demandas, estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se declaran en huelga de hambre en las oficinas del Vice Rectorado de la institución.	7	Septiembre	2005
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra y un grupo de personas conformado por el presidente del Consejo Municipal, autoridades de municipios locales, consejeros departamentales y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) inician una huelga de hambre para exigir al gobierno nacional el 20% de los ingresos provenientes del IDH.	8		
Estudiantes de la UAGRM y vecinos de la ciudad de Santa Cruz, afiliados a la Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE), ocupan el edificio del Servicio de Impuestos Internos (SIN) para exigir al gobierno la entrega del 20% de los recursos provenientes del IDH.	11		
Los representantes de los partidos MAS, Poder Democrático Social (PODEMOS) y Unidad Nacional (UN) expresan su apoyo al presidente de la Nación y a la necesidad impostergable de realizar las elecciones el domingo 4 de diciembre.	2	Octubre	
Por su parte, representantes de la COB y de la CSUTCB se declaran en estado de emergencia y anuncian el inicio de movilizaciones en todo el país, en caso de que el Congreso Nacional postergue el proceso electoral. En horas de la noche, el presidente de la Nación, Eduardo Rodríguez Veltzé, expresa en un mensaje televisivo a todo el país que en caso de que la Corte Nacional Electoral (CNE) declare la imposibilidad material de realizar las elecciones nacionales el día 4 de diciembre, se retirará del ejercicio de la primera magistratura y volverá a sus funciones como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).			
Vecinos de diversos barrios de La Paz y El Alto bloquean calles y avenidas en el centro de ambas ciudades para exigir la provisión de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP).	9		
Miles de personas, entre las que se encuentran familiares de las víctimas de la represión estatal en octubre de 2003, rechazaron la exportación de gas por un puerto chileno, junto a afiliados a la COR y a la FEJUVE de El Alto, UPEA, COB y Federación de Campesinos, se movilizan desde la localidad de Patacamaya hacia el centro de La Paz para exigir juicio y castigo a los responsables de la represión. En este sentido demandan la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada quien se encuentra en EE.UU.	17		
Habitantes de la ciudad de La Paz se manifiestan en las puertas del Congreso Nacional para reclamar que los legisladores lleguen a un acuerdo sobre la cantidad de escaños que le corresponde a cada departamento, y se aseguren así la realización de las elecciones nacionales para el domingo 4 de diciembre próximo.	25		

<p>La CNE anuncia que, en vista de la imposibilidad del Congreso Nacional de lograr un acuerdo sobre la distribución de escaños parlamentarios, entre las regiones del país, no está en condiciones de garantizar la realización de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 4 de diciembre. En este sentido, es el Poder Ejecutivo el que debe definir la nueva fecha. Representantes de diversas organizaciones sociales y políticas repudian la medida y anuncian protestas para asegurar el desarrollo del proceso electoral.</p>	28	Octubre	2005	
<p>El presidente de la Nación, Eduardo Rodríguez Veltzé, firma el decreto supremo N° 28.429, por el que se convoca a elecciones nacionales para el próximo 18 de diciembre. Asimismo, el primer mandatario aprueba una nueva distribución de los escaños parlamentarios por la que se reducen 2 bancas al departamento de La Paz, 1 al de Oruro y otra al de Potosí y se reasignan 3 representantes para Santa Cruz y 1 para Cochabamba. En la misma operación se establece un lapso de 48 horas para que los partidos políticos hagan las pertinentes modificaciones en las listas.</p> <p>El decreto pasará al Congreso para que el Parlamento rechace o refrende la normativa. Representantes del Comité Cívico de Santa Cruz rechazan el decreto y mantienen su demanda de aumentar su representación en 4 escaños. Por su parte, tanto Evo Morales del MAS, como Jorge Quiroga de PODEMOS manifiestan su conformidad con lo actuado por el primer mandatario.</p>	1	Noviembre		
<p>El Congreso Nacional decide por 76 votos contra 32, no iniciar el juicio político al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio por los sucesos de febrero de 2003. Este resultado es consecuencia del apoyo brindado al ex mandatario por los partidos MNR, MIR, ADN y Unión Cívica Solidaridad (UCS).</p>	8	Diciembre		

<p>Se realizan las elecciones presidenciales, legislativas y prefecturales en todo el país. El candidato del MAS, Evo Morales, se convierte en el nuevo presidente electo de Bolivia, al lograr el 53,7% de los 2.963.152 votos emitidos.</p> <p>Este porcentaje, el más alto desde la apertura democrática en la década de 1980, le permite asumir la primera magistratura sin necesidad de pasar por el colegio electoral. El segundo lugar lo ocupa la agrupación PODEMOS de Jorge Quiroga al obtener el 28,6% de los sufragios, mientras que la tercera y cuarta ubicación corresponden a los partidos UN de Samuel Doria Medina con el 7,8% y MNR de Michiaki Nagatani con el 6,4%, respectivamente.</p> <p>Respecto a la conformación del Congreso, el MAS logra alrededor de la mitad de los diputados y 12 senadores al ganar en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca, y obtiene el segundo lugar en Tarija y Santa Cruz. La agrupación PODEMOS suma un total de 13 senadores al triunfar en Tarija, Pando, Santa Cruz y Beni y alcanzar la segunda posición en el resto de los departamentos.</p> <p>En cuanto a las elecciones prefecturales, en Cochabamba, Manfred Reyes Villa de Alianza Unidad Cochabambina logra el 47,6% de los votos, mientras que el MAS llega al 43%. En Potosí, el candidato del MAS suma el 40,27% de los sufragios, seguido por PODEMOS con el 30,2%. En La Paz, el ex alcalde José Luis Paredes se impone con el 38% sobre el candidato del MAS que obtiene el 33,7% de los mismos.</p> <p>Dentro de las principales propuestas realizadas por el presidente electo, quien asumirá su cargo el próximo 22 de enero de 2006, se destacan la nacionalización de los hidrocarburos, la industrialización del gas, la convocatoria a la Asamblea Constituyente, el combate a la corrupción y a la impunidad, la reducción de los gastos políticos y el desarrollo del aparato productivo del país.</p>	18	Diciembre	2005
<p>Representantes de diversas organizaciones sociales, entre las que se cuentan la CSUTCB, la COB, la FEJUVE de El Alto, CONMERB y los comités cívicos de Santa Cruz y Potosí, expresan su respaldo al nuevo gobierno y plantean que, en un plazo no mayor a 90 días este debe empezar a brindar respuestas a las demandas planteadas durante años por el pueblo boliviano. Por su parte, el comandante de la Fuerzas Armadas expresa que la institución reconoce el triunfo de Evo Morales y que velará por el respeto al régimen democrático imperante en el país.</p>	19		

Elaboración propia con base en los siguientes textos: Raquel Gutiérrez Aguilar, *Los ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005)*, México, Sísifo ediciones/Bajo Tierra Ediciones/ICSH/BUAP, 2009, pp. 231-276; 277-341.

Suárez, Hugo José, *Bolivia. País rebelde (2000-2006)*, México, El Colegio de Michoacán, 2007, 156 pp  
 Cronología realizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), a partir del Observatorio Social de América Latina. Disponible en: <http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php?idioma=port>.



## Bibliografía

Acosta, Alberto, “Sólo imaginando otros mundos, se cambiará éste. Reflexiones sobre el Buen Vivir”, en Farah, Ivonne; Vasapollo, Luciano (coord.), *Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?*, Bolivia, CIDES-UMSA, Sapienza Università di Roma, OXFAM, 2011, pp. 185-208.

Álbo, Xavier, “Bolivia”, en *Movimientos y poder indígena en Bolivia, Ecuador y Perú*, La Paz, CIPCA, 2009, pp. 19-113.

Anderson, Perry, “Neoliberalismo: un balance provisorio”, en Sader, Emir; Gentili, Pablo (comp.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*, Argentina, Eudeba/Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1999, pp. 15-27.

Anderson, Perry; Boron, Atilio; Sader, Emir; Salama Pierre; Therborn, Göran, “La trama del neoliberalismo: mercado, crisis y exclusión social”, en Sader, Emir; Gentili, Pablo (comp.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*, Argentina, Eudeba/Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1999, pp. 91-128.

Arroyo Pichardo, Graciela, “La diversidad cultural: viejo/nuevo paradigma para el estudio de las relaciones internacionales”, en Cid Capetillo, Ileana, *Diversidad cultural, económica y política en el mundo global*, México, FCPyS-UNAM, 2001, pp. 21-26.

Balanyá, Belén; Brennan, Brid; Hoedeman, Oliver; Kishimoto, Satoko; Terhorst, Philipp (Editores), *Por un modelo de agua. Triunfos, luchas y sueños*, España, Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo, 2005, 301 pp.

Banco Interamericano de Desarrollo, “Privatización e inversión extranjera directa”, en *Inversión Extranjera Directa en América Latina en los años 90*, Madrid, 1996, pp. 47-55.

Bedregal, Guillermo, *Víctor Paz Estenssoro, el político. Una semblanza crítica*, México, FCE, 1999, 713 pp.

Bengoa, José, *La emergencia indígena en América Latina*, Chile, FCE, 2007, 343 pp.

Bonfil Batalla, Guillermo, *Pensar nuestra cultura*, México, Alianza Editorial, 1991, 172 pp.

Borón, Atilio, “La sociedad civil después del diluvio neoliberal”, en Sader, Emir; Gentili, Pablo (comp.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*, Argentina, Eudeba/Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1999, pp. 45-87.

Calcagno, Alfredo F., “El ajuste estructural, costo social y modalidades de desarrollo en América Latina”, en Sader, Emir (comp.), *El ajuste estructural en América Latina costos sociales y alternativas*, Buenos Aires, CLACSO, 2001, pp. 75- 98.

Ceceña, Ana Esther, *La guerra por el agua y por la vida. Cochabamba: una experiencia de construcción comunitaria frente al neoliberalismo*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Asoc. Madre de Plaza de Mayo, 2005, 208 pp.

Chávez, Marx, “Sobre los ‘movimientos sociales’ en Bolivia: Autonomía/Autoorganización y su relación con el Estado”, en Vega Camacho, Oscar (comp.), *Sujetos y formas de la transformación política en Bolivia*, La Paz, Bolivia, Ed. Tercera Piel, 2006, pp. 11-60

Chávez, Patricia; Mokrani, Dunia, “Los movimientos sociales en la Asamblea Constituyente. Hacia la reconfiguración de la política”, en Svampa, Maristella; Stefanoni, Pablo, *Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales*, Buenos Aires, El Colectivo, CLACSO, 2007, pp. 55-66.

Chávez L., Patricia, “Los indígenas en el poder”, en Vega Camacho, Oscar (comp.), *Sujetos y formas de la transformación política en Bolivia*, La Paz, Bolivia, Editorial Tercera Piel, 2006, pp. 107-130

Dangl, Benjamin, *El precio del fuego. Las luchas por los recursos naturales y los movimientos sociales en Bolivia*, Bolivia, Plural Editores, 2009, 322 pp.

Delgado Ramos, Gian Carlo, *Agua y seguridad nacional. El recurso natural frente a las guerra del futuro*, México, Random House Mondadori, 2005, 202 pp.

-----, *Imperialismo tecnológico y desarrollo en América Latina*, Panamá, Ruth Casa Editorial, Editorial Científico-Técnica, 2011, 226 pp.

Dos Santos, Theotonio, *Imperialismo y dependencia*, México, Ediciones Era, 1978, 491 pp.

Fornet-Betancourt, Raúl, *Transformación del marxismo. Historia del marxismo en América Latina*, México, Universidad Autónoma de Nuevo León, Plaza y Valdés, 2001, 417 pp.

Flores Olea, Víctor, “La Globalización y sus estragos”, en *Tiempos violentos de abandono y esperanza*, México, Siglo XXI Editores, CEIICH-UNAM, 2004, pp. 72-118.

Gambia, Julio (comp.), *La globalización económico-financiera. Su impacto en América Latina*, CLACSO, Buenos Aires, Argentina, 2002, 394 pp.

García Linera, Álvaro (coord.); Chávez León, Marxa; Costas Moje, Patricia, “Coordinadora del Agua y el Gas y Federación Departamental de Regantes de Cochabamba FEDECOR”, en *Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política*, Bolivia, Plural Editores, 2008, pp. 621-662.

García Linera, Álvaro (coord.); Chávez León, Marxa; Costas Moje, Patricia, *Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política*, Bolivia, Plural Editores, 2008, pp. 11-26.

García Linera, Álvaro; Gutiérrez Aguilar, Raquel; Prada, Raúl; Tapia, Luis, *El retorno de la Bolivia plebeya*, Bolivia, Muela del Diablo, 2007, pp.15-22.

García Linera, Álvaro, “La muerte de la condición obrera del siglo XX: la marcha minera por la vida”, *El retorno de la Bolivia plebeya*, Bolivia, Muela del Diablo, 2007, pp. 25-59.

-----, “Crisis del Estado y sublevaciones indígena-plebeyas en Bolivia”, en *La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*, Bogotá, Siglo del Hombre/CLACSO, 2009, pp. 423-446.

-----, “La lucha por el poder en Bolivia”, en *La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*, Bogotá, Siglo del Hombre/CLACSO, 2009, pp. 447-475.

-----, “El papel del Estado en el Modelo Nacional Productivo”, ponencia presentada en el Seminario *Organización Económica en la Nueva Constitución Política del Estado*, organizado por el Viceministerio de Presupuesto y Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el auditorio del Banco Central de Bolivia, La Paz, 20 de enero de 2009.

-----, “Del liberalismo al Modelo Nacional Productivo”, en *Revista de Análisis. Reflexiones sobre la coyuntura*, Bolivia, Presidencia del H. Congreso Nacional, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Año 2, Núm. 3.

Garza Toledo, Enrique de la (coord.), *Democracia y política económica alternativa*, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades/UNAM, La Jornada Ediciones, 1994, 325 pp.

Gilly, Adolfo, *Historias clandestinas*, México, La Jornada Ediciones, 2009, 307 pp.

González, Alexandra Pita; Salinas, Carlos Marichal (coord.), *Pensar el Antiimperialismo. Ensayos de historia intelectual latinoamericana, 1990-1930*, México, D.F., El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, Universidad de Colima, 2012, pp. 352.

Grebe López, Horst, “Las relaciones económicas externas de Bolivia en la globalización financiera”, en Gambia, Julio (comp.), *La globalización económico-financiera. Su impacto en América Latina*, CLACSO, Buenos Aires, Argentina, 2002, pp. 49-55.

Gudynas, Eduardo, “Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión ambiental del Buen Vivir”, en Farah, Ivonne; Vasapollo, Luciano (coord.), *Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?*, Bolivia, CIDES-UMSA, Sapienza Università di Roma, OXFAM, 2011, pp. 231-246.

Gutiérrez Aguilar, Raquel, *Los Ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005)*, México, Sísifo ediciones/Bajo Tierra Ediciones/ICSH/BUAP, 2009, 382 pp.

Gutiérrez Aguilar, Raquel; García Linera, Álvaro; Tapia, Luis, “La forma multitud de la política de las necesidades vitales”, en *El retorno de la Bolivia plebeya*, Bolivia, Muela del Diablo, 2007, pp. 143-195.

Hoffmann, Sabine; Rozo, Bernardo; Tapia, Luis; Viaña, Jorge, *La re construcción de público. Movimiento social, ciudadanía y gestión de agua en Cochabamba*, Bolivia, Muela del Diablo Editores/AOS-IUED, 2006, 289 pp.

Jordán Pozo, Rolando, “Colapso de la minería tradicional y surgimiento de la nueva minería”, en *Bolivia en la hora de su modernización*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, pp. 63-79.

Kruse, Thomas, “La ‘Guerra del Agua’ en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas”, Garza Toledo, Enrique de la (comp.), *Sindicatos y nuevos movimientos en América Latina*, Buenos Aires, Argentina, Colección de Grupo de Trabajo de CLACSO, 2008, p. 121-161.

Laserna, Roberto, “Bolivia: consumidores de democracia”, en *Bolivia: movimientos sociales y problemas de gobernabilidad*, Bolivia, Fundación Konrad Adenauer, 2005, pp. 25-46.

-----, La democracia en Bolivia: problemas y perspectivas, en González Casanova, Pablo; Roitman Rosenmann, Marcos (coord.), *La democracia en América Latina. Actualidad y perspectivas*, México, CEIICH-UNAM, 1995, pp.229-259.

-----, “Reforma del Estado y políticas sociales en Bolivia: los desafíos del desarrollo humano sostenible”, en Vilas, Carlos M. (coord.), *Estado y políticas sociales después del ajuste*, Nueva Sociedad, UNAM, 1995, pp. 47-71.

Leff, Enrique, *Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable*, México, Siglo XXI Editores/UNAM, 2007, 437 pp.

León, Rosario, “La cultura política del nacionalismo revolucionario y la cultura como política en Bolivia”, en Zemelman, Hugo (coord.), *Cultura y política en América Latina*, México, Siglo Veintiuno Editores, Universidad de las Naciones Unidas, 1990, pp. 141-161.

Levy, Bettina (comp.), *Conflicto y crisis en el capitalismo latinoamericano: lecturas políticas*, Buenos Aires, CLACSO, 2002, 355 pp.

Makaran, Gaya, *Identidades confrontadas. Conflictos identitarios en Bolivia*, México, CIALC-UNAM, 2012.

Mamani Ramírez, Pablo, “Gobiernos barriales y su poder: GUERRA DEL GAS EN EL ALTO-BOLIVIA”, en Vega Camacho, Oscar (comp.), *Sujetos y formas de la transformación política en Bolivia*, La Paz, Bolivia, Editorial Tercera Piel, 2006, pp. 87-106.

-----, “Qamir qamaña: dureza de ‘estar estando’ y dulzura de ‘ser siendo’”, en Farah, Ivonne, Vasapollo, Luciano (coord.), *Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?*, Bolivia, CIDES-UMSA, Sapienza Università di Roma, OXFAM, 2011, pp. 65-75.

Marini, Ruy Mauro, *Dialéctica de la dependencia*, México, Ediciones Era, 1991, 101 pp.

Miranda Pacheco, Mario *Bolivia en la hora de su modernización*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, 438 pp.

Martínez, Paola; Linsalata, Lucía, “Las asimetrías del mandar obedeciendo en Bolivia”, en *¿Ahora es cuando? Bolivia: cambios y contradicciones*, México, Colectivo Katär Uta, 2001, pp. 15-35.

Mesa Gisbert, Carlos D. (coord.), *Un gobierno de ciudadanos*, Bolivia, Plural Editores/Fundación Comunidad, 2008, 312 pp.

-----, “Política de gobierno 2003-2005”, *Un gobierno de ciudadanos*, Bolivia, Plural Editores/Fundación Comunidad, 2008.

Monsiváis, Carlos, “La pasión de la historia”, en *Historia ¿para qué?*, México, Siglo XXI, 2007, pp. 169-193.

Orozco Ramírez, Shirley; García Linera, Álvaro; Stefanoni, Pablo, *No somos juguete de nadie: análisis de la relación de movimientos sociales, recursos naturales, Estado y descentralización*, Cochabamba, Bolivia, Swiss National Centre of Competence North-

South, JACS-Sud America, Agroecología Universidad Cochabamba, Plural Editores, 2006, 419 pp.

Petras, James, “Los fundamentos del neoliberalismo”, en Petras, James, *Neoliberalismo en América Latina. La izquierda devuelve el golpe*, Argentina, Homo Sapiens Ediciones, 1997, pp. 9-28.

-----, “El rol de las corporaciones multinacionales y del Estado nacional en el proceso de globalización”, en Petras, James, *Neoliberalismo en América Latina. La izquierda devuelve el golpe*, Argentina, Homo Sapiens Ediciones, 1997, pp. 65-76.

Petras, James; Morley, Morris, “Ciclos políticos neoliberales: los ‘ajustes’ latinoamericanos a la pobreza y la riqueza en la era del libre mercado”, en Petras, James, *Neoliberalismo en América Latina. La izquierda devuelve el golpe*, Argentina, Homo Sapiens Ediciones, 1997, pp. 143-170.

Petras, James; Veltmeyer, Henry, “Estructura social y cambio en Latinoamérica”, en Petras, James, *Neoliberalismo en América Latina. La izquierda devuelve el golpe*, Argentina, Homo Sapiens Ediciones, 1997, pp. 77-105.

Petras, James; Vieux, Steve, “Los peligros de la privatización”, en Petras, James, *Neoliberalismo en América Latina. La izquierda devuelve el golpe*, Argentina, Homo Sapiens Ediciones, 1997, pp. 125-142.

Porto Gonçalves, Carlos Walter, “De los movimientos sociales y de la invención de derechos”, en *Geografías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad*, México, Editores Siglo XXI, 2001, pp. 81-84.

Prada Alcoreza, Raúl, “Hermanéutica de la violencia”, *El retorno de la Bolivia plebeya*, Bolivia, Muela del Diablo, 2007, pp. 93-141.



Rodríguez Saldaña, Roberto, “Los pueblos indígenas y el uso de sus recursos naturales”, en *Los Derechos de la Naturaleza (Un mundo sin insectos)*, México, Universidad Autónoma de Guerrero, Editora Laguna, H. Congreso del Estado de Guerrero-LIX Legislatura, 2012, pp. 255-266.

Salazar Ortuño, Fernando B., *De la coca al poder. Políticas públicas de sustitución de la economía de la coca y pobreza en Bolivia (1975-2004)*, Buenos Aires, CLACSO, 2008, 338 pp.

Sánchez Gómez, Luis; Terhorst, Philipp, “Cochabamba, Bolivia: asociaciones públicas y colectivas tras la Guerra del Agua”, en Balanyá, Belén; Brennan, Brid; Hoedeman, Oliver; Kishimoto, Satoko; Terhorst, Philipp (Editores), *Por un modelo de agua. Triunfos, luchas y sueños*, España, Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo, 2005, pp. 131-139.

Saxe-Fernández, John, “Globalización e imperialismo”, en Saxe-Fernández, John (coord.), *Globalización: una crítica a un paradigma*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Económicas/Dirección General de Apoyo al personal académico, Plaza y Janés Editores, 1999, pp. 9-68.

Sousa Santos, Boaventura de, “La reinención del Estado y el Estado Plurinacional”, en *Pensar el Estado y la sociedad: desafíos actuales*, Buenos Aires, Waldhuter Editores, CLACSO, 2009, pp. 189-224.

-----, *Una epistemología del Sur*, México, Siglo XXI Editores, CLACSO, 2009, 365 pp.

Svampa, Maristella; Stefanoni, Pablo, *Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales*, Buenos Aires, CLACSO, 2007, 270 pp.

Tapia, Luis, “La densidad de las síntesis”, *El retorno de la Bolivia plebeya*, Bolivia, Muela del Diablo, 2007, pp. 63-90.

Therborn, Göran, “La trama del neoliberalismo: mercado, crisis y exclusión social”, en Sader, Emir; Gentili, Pablo (comp.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*, Argentina, Eudeba/Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1999, pp. 51-75.

Torrico Terán, Mario Alejandro, *La economía política del periodo democrático y neoliberal en Bolivia en el orden mundial*, Tesis de Maestría, FLACSO, México, 2006, pp. 48-64.

Urioste Fernández de Córdoba, Miguel, “Inmolación forzada”, en Mesa Gisbert, Carlos D. (coord.), *Un gobierno de ciudadanos*, Bolivia, Plural Editores/Fundación Comunidad, 2008.

Urrengo Ardilla, Miguel Ángel; Torres Parés, Javier (editores), *La Nación en América Latina. De su invención a la globalización*, México, Instituto de Investigaciones Históricas/Universidad de Michoacan de San Nicolas de Hidalgo, 2006, 381 pp.

Vargas R., Humberto Córdoba, E., Eduardo, “Bolivia: un país de re-configuraciones por una cultura de pactos políticos y de conflictos”, en Seoane, José (comp.), *Movimientos sociales y conflicto en América Latina*, Buenos Aires, Argentina, CLACSO, ASDI, 2003, pp. 85-101.

Vilas, Carlos M., “Seis ideas falsas sobre la globalización. Argumentos desde América Latina para refutar una ideología”, en Saxe-Fernández, John (coord.), *Globalización: una crítica a un paradigma*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Económicas/Dirección General de Apoyo al personal académico, Plaza y Janés Editores, 1999, pp. 69-101.

-----, “¿Hacia atrás o hacia adelante? La revalorización del Estado después del ‘Consenso de Washington’”, en *Estado, democracia y populismo en América Latina*, Colombia, CLACSO, 2008, pp. 47-81.

Villaruel Nikitenko, Miguel, “La acción colectiva en Bolivia. Cambio y transformación de los conflictos sociales 1970-1998”, en Levy, Bettina (comp.), *Conflicto y crisis en el capitalismo latinoamericano: lecturas políticas*, Buenos Aires, CLACSO, 2002, pp. 137-167.

Villegas Quiroga, Carlos, *Privatización de la industria petrolera en Bolivia. Trayectoria y efectos tributarios*, 2da. Edición, Bolivia, CIDES-UMSA, CEDLA, FOBOMADE, DIAKONIA, 2004, 297 pp.

Vuskovic, Pedro, “¿En lugar del neoliberalismo?”, en Garza Toledo, Enrique de la, *Democracia y política económica alternativa*, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades/UNAM, La Jornada Ediciones, 1994, pp. 325-345.

Wallerstein, Immanuel, *Análisis de sistemas-mundo: una introducción*, México, Siglo XXI Editores, 2005, 153 pp.

Zavaleta, René, “La formación de las clases nacionales”, en *La autodeterminación de las masas*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, CLACSO, 2009, pp. 35-47.

-----, “Las masas en noviembre”, en *La autodeterminación de las masas*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, CLACSO, 2009, pp. 207-262.

## Fuentes electrónicas

Aillón Gómez, Tania, “La fisura del estado como expresión de la crisis política de la burguesía en Bolivia”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *OSAL*, Año IV, núm. 10, enero-abril, 2003, pp. 37-52. Dirección URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar//ar/libros/osal/osal10/agomez.pdf>, [consulta: 16 de mayo de 2013].

Albó, Xavier, “¿...y de kataristas a mnristas? La sorprendente y audaz alianza entre aymaras y neoliberales en Bolivia”, en *Boletín de Antropología Americana*, No. 25, Pan American Institute of Geography and History, julio de 1992, pp. 53-92. Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/40977964>, [consulta: 17 de agosto de 2012].

-----, “25 años de democracia, participación, participación campesino-indígena y cambios reales en la sociedad, en *25 años construyendo democracia*, La Paz, Vicepresidencia de la República, AECID, 2008, pp. 38-58. Dirección URL: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/06275.pdf>, [consulta: 17 de agosto de 2013].

Assies, Willem, “David vs. Goliat en Cochabamba: los derechos del agua, el neoliberalismo y la renovación de la protesta social en Bolivia”, [en línea], La Paz, *T'inkazos. Revista Boliviana de Ciencias Sociales*, Fundación PIEB, No. 8, 2001. Dirección URL: <http://www.iglom.iteso.mx/PDF/Documentos/assies.PDF>, [consulta: 22 de junio de 2012].

Casilda, Ramón, “América Latina: del Consenso de Washington a la agenda del Desarrollo de Barcelona”, [en línea], *Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos*, 2005. Dirección URL: <http://www.cibera.de/fultext/7/7325/Casilda%20pdf.pdf>, [consulta: 27 de febrero de 2011].

Ceppi, Natalia, “Hidrocarburos y procesos autonómicos en Bolivia. Factores intervinientes en su fragmentación social”, en *Ciencia, docencia y tecnología*, Año XXI, No. 41, noviembre de 2010, pp. 73-99. Dirección URL: <http://www.scielo.org.ar/pdf/cdyt/n41/n41a04.pdf>, [consulta: 29 de marzo de 2012].

Conaghan, Catherine M.; Malloy, James M.; Wolfson, Leandro, “Democracia y neoliberalismo en Perú, Ecuador y Bolivia”, en *Desarrollo Económico*, No, 144, Vol. 36, Instituto de Desarrollo Económico y Social, enero-marzo de 1997, pp. 867-890. Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/3467130>, [consulta: 17 de agosto de 2012].

Contreras Baspineiro, Alex, “Bolivia. El retorno de las movilizaciones sociales”, [en línea], México, *Memoria*, No. 189, noviembre de 2004, pp. 51-53. Dirección URL: <http://es.scribd.com/doc/98066028/Memoria-Revista-de-politica-y-cultura-num-189>, [consulta: 17 de agosto de 2013].

Crespo F., Carlos, “Continuidad y Ruptura: la ‘Guerra del Agua’ y los nuevos movimientos sociales en Bolivia”, [en línea] Buenos Aires, Argentina, *Observatorio Social de América Latina*, Año 2, septiembre 2000. Dirección URL: <http://www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal2/bolivia.pdf>, [consulta: 05 de mayo de 2012].

-----, “La guerra del agua en Cochabamba: movimientos sociales y crisis de dispositivos del poder”, [en línea] *Ecología Política*, No. 20, 10 Años de Ecología Política en América Latina y España (1991-2000), Icaria Editorial, 2000. Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/20743108>, [consulta: 18 de junio de 2012].

Dávalos, Pablo, “Movimientos sociales y la razón liberal: los límites de la historia”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *Observatorio Social de América Latina*, Año VII, No. 20, 2006. Dirección URL: <http://www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal20/davalos.pdf>, [consulta: 16 de julio de 2012].

Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial, “Gestión del agua en Bolivia: Historia de tres ciudades”, [en línea], *Banco Mundial*, 2001. Dirección URL: [http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoelib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/4AAC162CB3E46A2885256BCF00552CFD/\\$file/Precis\\_222\\_Spanish.pdf](http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoelib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/4AAC162CB3E46A2885256BCF00552CFD/$file/Precis_222_Spanish.pdf), [consulta: 16 de enero de 2013].

Demanda de participación pública. Aguas del Tunari S.A. (Bechtel) vs. República de Bolivia Case No. ARB/02/3), [en línea], *The democracy center*, 29 de agosto de 2002. Dirección URL: <http://democracyctr.org/bolivia/investigations/bolivia-investigations-the-water-revolt/international-citizens-petition-to-the-world-bank/peticion-internacional/>, [consulta: 16 de enero de 2013].

Espinoza, Claudia; Gonzalez, Gonzalo, “Bolivia arrinconada en la azotea de su historia”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *OSAL*, Año IV, núm. 10, enero-abril, 2003, pp. 29-36. Dirección URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar//ar/libros/osal/osal10/espinozaetal.pdf>, [consulta: 15 de mayo de 2013].

Fajardo Pozo, Erick, “De la resistencia a la construcción de poder. Tareas pendientes del movimiento popular en Bolivia”, [en línea], México, *Memoria*, No. 198, agosto de 2005, pp. 39-41. Dirección URL: <http://es.scribd.com/doc/98069376/Memoria-Revista-de-politica-y-cultura-num-198>, [consulta: 17 de agosto de 2013].

García Linera, Álvaro, “Crisis estatal y muchedumbre”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *OSAL*, Año IV, núm. 10, enero-abril, 2003, pp. 53-59. Dirección URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar//ar/libros/osal/osal10/linera.pdf>, [consulta: 16 de mayo de 2013].

-----, “Empate catastrófico y punto de bifurcación”, [en línea], Buenos Aires, *Crítica y Emancipación. Revista latinoamericana de Ciencias Sociales*, Año 1, No. 1, junio de 2008. Dirección

URL: <http://http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/CyE/cye2S1a.pdf>, [consulta: 01 de mayo de 2013].

-----, “El desencuentro de dos razones revolucionarias. Indianismo y Marxismo”, [en línea], Buenos Aires, *Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano*, CLACSO, No. 3, diciembre de 2007.  
URL: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/cuadernos/garcia/garcia.pdf>, [consulta: 19 de noviembre de 2011].

Gavalda, Marc, “Repsol, la Guerra del Gas de Bolivia”, en *Ecología Política*, No. 26, Icaria Editorial, 2003, pp. 125-133. Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/20743317>, [consulta: 29 de marzo de 2012].

Gilly, Adolfo, “Bolivia, una revolución del siglo XXI”, [en línea], México, *La Jornada*, 02 de marzo de 2004. Dirección URL: <http://www.jornada.unam.mx/2004/03/02/per-bolivia.html>, [consulta: 01 de mayo de 2013].

Grandidier, Abraham, “La lucha por el agua en Cochabamba”, en Gutiérrez Aguilar, Raquel; Escárzaga, Fabiola (coord.), *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, vol. II, México, 2006, Casa Juan Pablos, Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos, Gobiernos del Distrito Federal, UAM, BUAP, Diakonia, Centro de Investigación en Desarrollo-Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Pública de El Alto, UNAM. Dirección URL: [http://www.jornadas-andesmesoamerica.org/pdf/movimiento\\_indigena\\_vol2.pdf](http://www.jornadas-andesmesoamerica.org/pdf/movimiento_indigena_vol2.pdf), [consulta: 23 de enero de 2013].

Gutiérrez Aguilar, Raquel; Escárzaga, Fabiola (coord.), *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, vol. II, México, 2006, Casa Juan Pablos, Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos, Gobiernos del Distrito Federal, UAM, BUAP, Diakonia, Centro de Investigación en Desarrollo-Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Pública de El Alto, UNAM. Dirección URL: <http://www.jornadas->

[andesmesoamerica.org/pdf/movimiento\\_indigena\\_vol2.pdf](http://andesmesoamerica.org/pdf/movimiento_indigena_vol2.pdf), [consulta: 23 de enero de 2013].

Harvey, David, “El neoliberalismo como destrucción creativa”, [en línea], *Rebelión*, 08 de abril de 2008. Dirección URL: <http://www.rebellion.org/noticias/2008/4/65709.pdf>, [consulta: 17 de julio de 2012].

Huerta Moreno, Ma. Guadalupe, “La política económica del Consenso de Washington y las reformas del Estado y administración pública en México: entre el límite y la contradicción”, [en línea], *IC Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública*, España, 2-5 de noviembre de 2004. Dirección URL: <http://www.ijj.derecho.ucr.ar.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/CLAD/CLAD%20IX/documentos/huerta.pdf>, [consulta: 27 de febrero de 2011].

Koehler Zanella, Cristine; Marconatto Marques, Pâmela; Silva Seitenfus, Ricardo Antônio, “Bolivia en el péndulo de la historia”, en *Nueva Sociedad*, No. 209, mayo-junio de 2007, pp. 130-141. Dirección URL: [www.nuso.org](http://www.nuso.org), [consulta: 11 de septiembre de 2012].

Lavaud, Jean.-Pierre, “Bolivia: ¿un futuro político hipotecado?”, en *Nueva Sociedad*, No. 209, mayo-junio de 2007, pp. 142-159. Dirección URL: [www.nuso.org](http://www.nuso.org), [consulta: 11 de septiembre de 2012].

Laserna, Roberto, “Cochabamba: la Guerra del Agua”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *Observatorio Social de América Latina*, Año 2, septiembre 2000. Dirección URL: <http://www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal2/bolivia.pdf>, [consulta: 05 de mayo de 2012].

Mamani Ramírez, Pablo, “El rugir de la multitud: levantamiento de la ciudad aymara de El Alto y caída del gobierno de Sánchez de Lozada”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *OSAL*, Año IV, N° 12, septiembre-diciembre 2003, pp. 15-26. Dirección



URL: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal12/d1mamani.pdf>, [consulta: 13 de agosto de 2013].

-----, “Dominación étnica, de clase y territorialización del poder indígena en Bolivia”, en Gutiérrez Aguilar, Raquel; Escárzaga, Fabiola (coord.), *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, vol. II, México, 2006, Casa Juan Pablos, Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos, Gobiernos del Distrito Federal, UAM, BUAP, Diakonia, Centro de Investigación en Desarrollo-Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Pública de El Alto, UNAM. Dirección URL: [http://www.jornadas-andesmesoamerica.org/pdf/movimiento\\_indigena\\_vol2.pdf](http://www.jornadas-andesmesoamerica.org/pdf/movimiento_indigena_vol2.pdf), [consulta: 23 de enero de 2013].

Oliver, Lucio, “Discutir la coyuntura en América Latina”, *Política y cultura*, núm. 37, Distrito Federal, 2012, pp. 113-131. Dirección URL: <http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=26723182006>, [consulta: 08 de febrero de 2013].

Oliver, Lucio, Savoia, Francesca, “El 2010 en América Latina. La compleja y difícil lucha por una nueva hegemonía”, [en línea], *OSAL*, Año XII, No. 29, Buenos Aires, mayo de 2011. Dirección URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal29/osal29.pdf>, [consulta: 09 de enero de 2013].

Palermo, Vicente, “Programas de ajuste y estrategias políticas: Las experiencias recientes de la Argentina y Bolivia”, en *Desarrollo Económico*, No. 199, Vol. 30, Instituto de Desarrollo Económico y Social, octubre-diciembre de 1990, pp. 333-366. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/3466770>, [consulta: 17 de agosto de 2012].

Prada Alcoreza, Raúl, “Bolivia. Los movimientos moleculares de la multitud”, [en línea], Argentina, *Revista Herramienta*, No. 30, octubre de 2005. Dirección URL: <http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-30/bolivia-los-movimientos-moleculares-de-la-multitud>, [consulta: 24 de julio de 2013].

-----, “Perfiles del movimiento social contemporáneo. El conflicto social y político en Bolivia” [en línea], Buenos Aires, Argentina, *OSAL*, Año IV, N° 12, septiembre-diciembre 2003, pp. 35-46. Dirección URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal12/d1prada.pdf>, [consulta: 16 de agosto de 2013].

Ribera Arismendi, Marco Octavio, “Análisis general del Caso Uyuni-Litio”, [en línea], junio de 2011. Disponible en: <http://www.lidema.org.bo/documentosPIMA/ECASO%20COCOON%20NEBE%20PROYECTO%20LITIO.pdf>, [consulta: 18 de enero de 2014].

Sader, Emir, “América Latina ¿El eslabón más débil? El neoliberalismo en América Latina, *Rebelión*. Dirección URL: <http://www.rebelion.org/docs/78055.pdf>, [consulta 16 de mayo de 2013]

Solón, Pablo, “Radiografía de un febrero”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *OSAL*, Año IV, núm. 10, enero-abril, 2003, pp. 15-27. Dirección URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/osal/osal10/solon.pdf>, [consulta: 15 de mayo de 2013].

Tapia, Luis “La crisis política de abril”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *Observatorio Social de América Latina*, Año 2, septiembre 2000. Dirección URL: <http://www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal2/bolivia.pdf>, [consulta: 05 de mayo de 2012].

-----, “Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano*, febrero de 2009. Dirección URL: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/cuadernos/17/17tapia.pdf>, [consulta: 01 de mayo de 2013].

-----, “Las olas de expansión y contracción de la democracia en 25 años *construyendo democracia*, La Paz, Vicepresidencia de la República, AECID, 2008, pp. 38-58. Dirección URL: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/06275.pdf>, [consulta: 17 de agosto de 2013].

-----, “Las estrategias políticas de los movimientos indígenas y los Estados latinoamericanos frente a la insurgencia indígena. Movimientos comunitarios y campesinos y crisis de Estado”, en Gutiérrez Aguilar, Raquel; Escárzaga, Fabiola (coord.), *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, vol. II, México, 2006, Casa Juan Pablos, Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos, Gobiernos del Distrito Federal, UAM, BUAP, Diakonia, Centro de Investigación en Desarrollo-Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Pública de El Alto, UNAM. Dirección URL: [http://www.jornadas-andesmesoamerica.org/pdf/movimiento\\_indigena\\_vol2.pdf](http://www.jornadas-andesmesoamerica.org/pdf/movimiento_indigena_vol2.pdf), [consulta: 23 de enero de 2013].

The Democracy center, “Bechtel vs. Bolivia”, [en línea], *The democracy center*. Dirección URL: <http://www.democracctr.org/espanol/bolivia/bechtelversusbolivia.htm>, [consulta: 16 de enero de 2013].

UNASUR; OLADE, *Potencial de Recursos Energéticos y Minerales en América del Sur: Coincidencias Jurídicas hacia una Estrategia Regional*, [en línea], octubre 2013. Disponible: <http://www.unasur.org/uploads/3c/c7/3cc78ee394cd00b8b28a8f4c6df5e567/Potencial-Recursos-Energeticos-y-Minerales-en-AS.pdf>, [consulta: 22 de enero de 2014].

Vargas, Humberto; Kruse, Thomas, “Las victorias de abril: una historia que aún no concluye”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *Observatorio Social de América Latina*, Año 2, septiembre 2000. Dirección URL: <http://www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal2/bolivia.pdf>, [consulta: 05 de mayo de 2012].

Villegas Quiroga, Carlos, “Rebelión popular y los derechos de propiedad de los hidrocarburos”, [en línea], Buenos Aires, Argentina, *OSAL*, Año IV, núm. 12, septiembre-diciembre, pp. 27-34. Dirección URL: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal12/dIquiroga.pdf>, [consulta: 01 de junio de 2011].

Vittor, Luis, “La inspiración latinoamericana: El movimiento indígena y sus alternativas”, [en línea], *América Latina en movimiento*, No. 450-451, Quito, Ecuador, diciembre de 2009. Dirección URL: <http://alainet.org/publica/alai450-1w.pdf>, [consulta: 09 de enero de 2013].

Zagada C., María Teresa, “La democracia ante el desafío de su profundización”, en *Bolivia, 25 años construyendo Democracia. Visiones sobre el proceso democrático en Bolivia 1982-2007*, La Paz, Vicepresidencia de la República de Bolivia, 2008. Dirección URL: [http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/libro\\_25\\_anos.pdf](http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/libro_25_anos.pdf), [consulta: 17 de agosto de 2013].